

alerta 2020!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz



Alerta 2020! Informe sobre conflictos,
derechos humanos y construcción de paz

Alerta 2020!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz

Elaborado por:

Iván Navarro Milián
Josep Maria Royo Aspa
Jordi Urgell García
Pamela Urrutia Arestizábal
Ana Villellas Ariño
María Villellas Ariño

Este libro ha sido impreso en papel libre de cloro
Informe finalizado en febrero de 2020.
Imprenta: Ulzama
Edición: Icaria Editorial / Escola de Cultura de Pau, UAB
Diseño: Lucas Wainer Mattosso

ISBN: 978-84-9888-969-7
Depósito legal: B 10421-2003

El presente informe ha sido elaborado por:

Iván Navarro Milián, Josep Maria Royo Aspa,
Jordi Urgell García, Pamela Urrutia Arestizábal,
Ana Villellas Ariño y María Villellas Ariño.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja necesariamente la opinión de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ni del Ayuntamiento de Barcelona.

Para citar este informe:

Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2020! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.*
Barcelona: Icaria, 2020.

Esta obra forma parte de la serie *Alerta 2020! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.* que anualmente publica la Escola de Cultura de Pau y está sujeta a una licencia internacional de Creative Commons



Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con finalidades comerciales y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

Escola de Cultura de Pau

Parc de Recerca, Edifici MRA,
Plaça del Coneixement,
Universitat Autònoma de Barcelona,
08193 Bellaterra (Espanya)
Tel: +34 93 586 88 48
Email: pr.conflict.escolapau@uab.cat
Web: <http://escolapau.uab.cat>

Índice

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas	7	- Asia Meridional	113
Resumen Ejecutivo	9	- Asia Oriental	117
Resumen de la conflictividad global en 2019	19	- Sudeste Asiático y Oceanía	119
		2.3.4. Europa	120
		- Europa occidental	120
		- Rusia y Cáucaso	123
		- Sudeste de Europa	125
		2.3.5. Oriente Medio	126
		- Golfo	126
		- Mashreq	130
Capítulos			
1. Conflictos armados	21	3. Género, paz y seguridad	137
1.1. Conflictos armados: definición	21	3.1. Desigualdades de género	137
1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2019	25	3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género	139
1.2.1. Tendencias globales y regionales	25	3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones	139
1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil	28	3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados	141
1.3. Conflictos armados: evolución anual	31	3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado	142
1.3.1. África	31	3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género	146
- África Austral	31	3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad	146
- África Occidental	32	3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz	147
- Cuerno de África	38	3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil	149
- Grandes Lagos y África Central	40		
- Magreb - Norte de África	49	4. Oportunidades de paz para 2020	153
1.3.2. América	52	4.1. Las negociaciones entre talibanes y EEUU, ¿una oportunidad para la paz en Afganistán?	154
1.3.3. Asia y Pacífico	53	4.2. Perspectivas de transición en Sudán y Sudán del Sur	156
- Asia Meridional	53	4.3. El nuevo proceso de negociación entre el Gobierno tailandés y el BRN, principal grupo armado del sur del país	158
- Sudeste Asiático y Oceanía	57	4.4. El impulso de la sociedad civil a la justicia transicional en la ex Yugoslavia frente a los bloqueos políticos: hacia un registro regional de víctimas	160
1.3.4. Europa	63		
- Europa Oriental	63	5. Escenarios de riesgo para 2020	163
- Sudeste de Europa	64	5.1. Retos y riesgos de la transición etíope ante un 2020 convulso	164
1.3.5. Oriente Medio	66	5.2. El incremento de la violencia en Mozambique y los riesgos para el nuevo acuerdo de paz	166
- Golfo	66		
- Mashreq	69		
2. Tensiones	77		
2.1. Tensiones: definición	77		
2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2019	83		
2.2.1. Tendencias globales	83		
2.2.2. Tendencias regionales	85		
2.3. Tensiones: evolución anual	88		
2.3.1. África	88		
- África Occidental	88		
- Cuerno de África	89		
- Grandes Lagos y África Central	93		
- Magreb - Norte de África	101		
2.3.2. América	102		
- América del Norte, Centroamérica y Caribe	102		
- América del Sur	107		
2.3.3. Asia y Pacífico	112		
- Asia Central	112		

Yemen en el abismo: cinco años de escalada de violencia y frágiles iniciativas de paz _____	168
5.4. El desplazamiento forzado en el contexto global: riesgos específicos para la población LGTBI _____	170
Glosario _____	173
Escola de Cultura de Pau _____	179

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas

Mapa 1.1.	Conflictos armados _____	20	Mapa 3.1.	Género, paz y seguridad _____	136
Tabla 1.1.	Resumen de los conflictos armados en 2019 _____	22	Tabla 3.1.	Países en conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos _____	138
Gráfico 1.1.	Distribución regional del número de conflictos armados en 2019 ____	25	Cuadro 3.1.	Actores armados y violencia sexual en conflictos _____	140
Gráfico 1.2.	Intensidad de los conflictos armados _____	27	Mapa 3.2.	Países en conflicto armado y con legislación discriminatoria contra la población LGTBI _____	143
Gráfico 1.3.	Intensidad de los conflictos por regiones _____	27	Tabla 3.2.	Conflictos armados en 2019 en países con legislación discriminatoria contra la población LGTBI _____	143
Cuadro 1.1.	Tendencias regionales en materia de conflictividad armada _____	28	Mapa 4.1.	Oportunidades de paz para 2020 _	153
Mapa 1.2.	Número de personas desplazadas internas al finalizar 2018 _____	30	Mapa 5.1.	Escenarios de riesgo para 2020 ____	163
Mapa. 2.1.	Tensiones _____	76			
Tabla 2.1.	Resumen de las tensiones en 2019 _	78			
Gráfico 2.1.	Distribución regional del número de tensiones en 2019 _____	84			
Gráfico 2.2.	Intensidad de las tensiones por regiones _____	85			

Resumen ejecutivo

Alerta 2020! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones, y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2019 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.

En cuanto a la metodología, los contenidos de este informe se nutren principalmente del análisis cualitativo de estudios e informaciones facilitados por numerosas fuentes –Naciones Unidas, organismos internacionales, centros de investigación, medios de comunicación u ONG, entre otras–, así como de la experiencia adquirida en investigaciones sobre el terreno.

Algunas de las conclusiones e informaciones más relevantes del informe *Alerta 2020!* son las siguientes:

- Durante 2019 se registraron 34 conflictos armados, de los cuales 32 seguían activos al finalizar el año. La mayoría se concentró en África (16) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno). La cifra total de conflictos armados ha permanecido bastante estable y sin oscilaciones significativas en el último lustro.
- En 2019 los casos de Argelia y RD Congo (Kasai) dejaron de ser considerados conflicto armado por la reducción significativa de la violencia. Por otra parte, un nuevo caso –Mozambique (norte)– fue analizado como un conflicto armado por el drástico incremento de las hostilidades en la provincia de Cabo Delgado entre la organización yihadista Ahlu Sunnah Wa-Jamo (ASWJ) y las fuerzas de seguridad.
- Con respecto a la intensidad de la violencia, en un 38% de los conflictos fue baja (13 casos), en un 32% elevada (11 casos) y en otro 30% media (10 casos).
- Los once conflictos de mayor gravedad en 2019 fueron Camerún (Ambazonia / North West y South West), Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).
- Algunos de estos casos superaron ampliamente el millar de fallecidos en un año, como Afganistán – con 24.000 muertes en los primeros diez meses de

2019–; Yemen (al-houthistas) –alrededor de 23.000 muertes–; Siria –entre 11.200 y 15.000 víctimas–; la Región Sahel Occidental –donde la letalidad se quintuplicó con respecto a 2016, con más de 4.000 víctimas mortales–; o Somalia –más de 4.000 muertes.

- Un 36% de los conflictos armados experimentaron una escalada de la violencia: Burundi, Camerún (Ambazonia/North West y South West), Libia, Malí, Mozambique (norte), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), Colombia, Afganistán, India (Jammu y Cachemira) y Turquía (sudeste)
- Un 32% de los conflictos experimentaron un descenso de las hostilidades y los niveles de violencia con respecto al año anterior, mientras que en otro 32% de los casos no afrontaron cambios significativos
- Más allá de la naturaleza multicausal de la conflictividad armada, el 73% de los conflictos (25 de los 34 casos) tuvo entre sus motivaciones principales la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, social o ideológico del Estado. Asimismo, las demandas identitarias y/o de autogobierno fueron una de las causas principales en un 59% de los casos (20 conflictos).
- Un 82% de los conflictos armados fueron internos internacionalizados, en los que alguna de las partes era foránea, los actores armados del conflicto tenían bases o lanzaban ataques desde el extranjero y/o la disputa se extendía a países vecinos.
- El 12% de los conflictos armados (cuatro casos) tenía carácter interno, es decir, se trataba de conflictos entre actores armados de un mismo Estado y que operan exclusivamente en y desde las fronteras del mismo. Únicamente dos casos –la Región Sahel Occidental e Israel-Palestina– fueron conflictos internacionales.
- OCHA alertó de que en 2019 muchas más personas de lo previsto necesitaron asistencia humanitaria a causa de los conflictos y de fenómenos climáticos extremos. Según sus datos prospectivos a diciembre de 2019, en 2020 casi 168 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria y protección, la cifra más elevada en décadas.
- Yemen continuó siendo en 2019 la peor crisis humanitaria a nivel mundial, con 24 millones de sus ciudadanos en necesidad de asistencia, lo que suponía el 80% de su población.
- El informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados, que analiza el año 2018, identificó un incremento alarmante de violaciones graves de los derechos humanos de niños y niñas por parte de agentes estatales y fuerzas internacionales con respecto al año anterior, mientras las atribuidas a actores no estatales se mantuvo estable.
- En Afganistán, por ejemplo, los casos verificados de niños y niñas fallecidos y mutilados en 2018 ascendieron a 3.062. El balance de fallecidos (927) fue señalado como el más elevado registrado nunca en el país.
- El informe de 2019 del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos contenía información verificable relativa a 19 países,

que implicaba a más de 50 actores. La mayor parte de los perpetradores de la violencia sexual en esos casos eran actores no estatales, pero también se verificó que habían perpetrado violencia sexual fuerzas armadas nacionales, policía u otros actores de seguridad de Myanmar, Siria, RDC, Somalia, Sudán y Sudán del Sur.

- Según ACNUR, a finales de 2018 había en el mundo 70,8 millones de personas desplazadas forzosamente. De ese total, 41,3 millones eran personas desplazadas internas, 25,9 millones eran refugiadas (20,4 bajo mandato de la ONU y otras 5,5 bajo mandato de la UNRWA) y 3,5 millones eran solicitantes de asilo.
- Del total de población desplazada forzada, 13,6 millones eran nuevos desplazados –10,8 nuevos desplazados internos y 2,8 nuevos refugiados y solicitantes de asilo.
- El 57% de la población refugiada procedía de tres países, principalmente de Siria (6,7 millones), Afganistán (2,7) y Sudán del Sur (2,3). Les seguían Myanmar (1,1) y Somalia (900.000).
- Había 41,3 millones de personas desplazadas internas a finales de 2018. El balance lo encabezaba Siria (6,1 millones), seguido de Colombia (5,8), RDC (3,1), Somalia (2,6), Afganistán (2,6), Yemen (2,3), Nigeria (2,2), Etiopía (2,1), Sudán (2,1) e Iraq (2).
- Durante 2019 se identificaron 94 escenarios de tensión a nivel mundial. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas se concentró en África, con 36 casos, seguida de Asia (23), Oriente Medio y América Latina (12 casos en cada región) y Europa (11).
- Casi la mitad de las tensiones presentaron una intensidad baja (49%), un tercio registró una intensidad media (34%) y solo el 18% de los casos tuvo altos niveles de tensión (17 casos).
- Algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (51 casos o un 54%), más de una cuarta parte fueron internas internacionalizadas (25 situaciones o casi un 27%) y una sexta parte de las tensiones fueron internacionales (18 casos o casi un 19%).
- En cuanto a la evolución de las tensiones, la mayoría de los contextos (37%) no experimentó cambios significativos, en un 19% de los casos se produjo una cierta mejoría y en el 44% restante de las crisis se registró un deterioro con respecto a 2017.
- Un 71% de las tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos y un 40% tuvieron como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias. Además, en alrededor de una tercera parte de las tensiones (31%) las disputas por el control de territorios y/o recursos fueron un elemento especialmente relevante, si bien se trata de un factor que alimenta

numerosas situaciones de tensión en grados diversos.

- El 83% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos.
- El Consejo de Seguridad de la ONU reconoció los vínculos entre desplazamiento forzado y violencia sexual en los conflictos. Según ACNUR, las mujeres y las niñas representan la mitad aproximadamente de la población desplazada a nivel internacional.
- Con respecto a los planes de acción nacional sobre la 1325, durante 2019 cuatro países aprobaron nuevos planes: Bangladesh, Namibia, Líbano y Armenia. Así pues, un total de 83 países contaba con un plan al finalizar el año 2019, lo que representa el 43% de los países miembro de la ONU.
- El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución sobre violencia sexual en conflictos armados en medio de la polémica por haber excluido los derechos sexuales y reproductivos de las supervivientes de esta violencia.
- El informe *Alerta 2020!* identifica cuatro oportunidades de paz en Afganistán, sur de Tailandia, Sudán y Sudán del Sur y la antigua Yugoslavia.
- El informe destaca cuatro escenarios de alerta en Etiopía, Yemen, Mozambique y en relación a la población LGBTI en contextos de desplazamiento forzado.

Estructura

El informe consta de cinco capítulos. En los dos primeros se analiza la conflictividad a escala global –causas, tipología, dinámicas, evolución y actores de las situaciones de conflicto armado o de tensión. El tercer capítulo analiza los impactos de género de conflictos y tensiones así como iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. El cuarto capítulo identifica oportunidades de paz, escenarios en los que existe una coyuntura favorable para la resolución de conflictos o para el avance o consolidación de iniciativas de paz. El último capítulo analiza escenarios de riesgo de cara al futuro. Además de los cinco capítulos, el informe también incluye un mapa desplegable en el que se identifican los escenarios de conflicto armado y tensión sociopolítica.

Conflictos armados

En el primer capítulo (Conflictos armados)¹ se describe

1. En este informe, se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:
- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o al control de los recursos o del territorio.

Conflictos armados en 2019*

ÁFRICA (16)	ASIA (9)	ORIENTE MEDIO (6)
<i>Argelia (AQMI) -1992-</i> Burundi -2015- Camerún (Ambazonia/North West y South West) -2018- Libia -2011- Malí (norte) -2012- Mozambique (norte) -2019- Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011- RCA -2006- RDC (este) -1998- RDC (este-ADF) -2014- <i>RDC (Kasai) -2017-</i> Región Sahel Occidental -2018- Somalia -1988- Sudán (Darfur) -2003- Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011- Sudán del Sur -2009-	Afganistán -2001- Filipinas (NPA) -1969- Filipinas (Mindanao) -1991- India (Jammu y Cachemira) -1989- India (CPI-M) -1967- Myanmar -1948- Pakistán -2001- Pakistán (Baluchistán) -2005- Tailandia (sur) -2004-	Egipto (Sinaí) -2014- Iraq -2003- Israel-Palestina -2000- Siria -2011- Yemen (al-houthistas) -2004- Yemen (AQPA) -2011-
		EUROPA (2)
		Turquía (sudeste) -1984- Ucrania -2014-
		AMÉRICA (1)
		Colombia -1964-

*Se incluye entre guiones la fecha de inicio del conflicto armado. En cursiva, los conflictos finalizados durante 2019

la evolución, la tipología, las causas y las dinámicas de los conflictos armados activos durante el año, se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados en 2019, así como los impactos de los conflictos en la población civil.

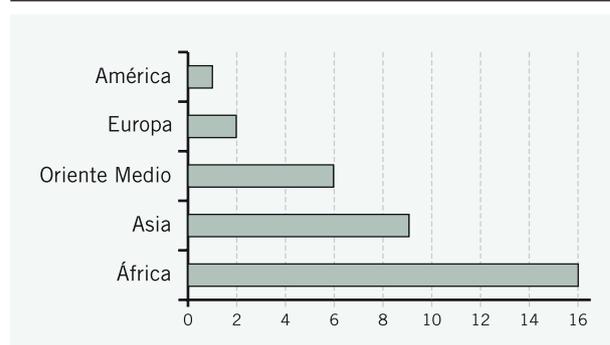
Durante el año 2019 se registraron 34 conflictos armados, una cifra en línea con la tendencia de años anteriores (34 casos en 2018, 33 en 2016 y 2017, 35 en 2015, 36 en 2014, 35 en 2013). De los 34 conflictos armados en 2019, 32 continuaban activos al finalizar el año, ya que el caso de Argelia dejó de considerarse como conflicto armado porque en los últimos años hubo un descenso de las hostilidades entre grupos armados yihadistas –principalmente AQMI. El otro caso considerado finalizado en 2019 fue el que afectaba a la región de Kasai en RDC, conflicto entre las fuerzas de seguridad del Estado y diversas milicias, también enfrentadas entre ellas y contra la población civil. Las rendiciones a gran escala en 2019, principalmente del grupo Kamwina Nsapu, desembocaron en el fin del conflicto. En comparación con 2018 se registró un nuevo conflicto armado, considerado escenario de tensión en años anteriores. Se trató de Mozambique (norte), que afecta a la provincia de Cabo Delgado, donde la organización armada de carácter yihadista Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ) se enfrenta a las fuerzas de seguridad, en un contexto de marginación y agravios de la minoría musulmana en el país y de pobreza extrema en dicha provincia.

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, en línea con años anteriores, la mayor parte se concentró en África (16) y Asia (nueve). Del resto de casos, seis tuvieron lugar en Oriente Medio, dos en Europa y uno en América. El 12% de los conflictos

armados (cuatro casos) tuvieron carácter interno, es decir, se trataba de conflictos entre actores armados de un mismo Estado y que operan exclusivamente en y desde las fronteras del mismo: RDC (Kasai), Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). El 6% era considerado internacional: el conflicto en la Región Sahel Occidental y la disputa entre Israel y Palestina. El resto, un 82%, eran conflictos internos internacionalizados, en los que alguna de las partes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos.

En relación a las causas de los conflictos armados, la gran mayoría de conflictos tuvo entre sus motivaciones principales la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, económico, social o ideológico de un determinado Estado, que derivaron en luchas por acceder al poder o erosionarlo. Uno u otro elemento estuvieron presentes en el 73% de los casos en 2019 (25 de los 34 casos), en línea con el año anterior

Distribución regional del número de conflictos armados en 2019



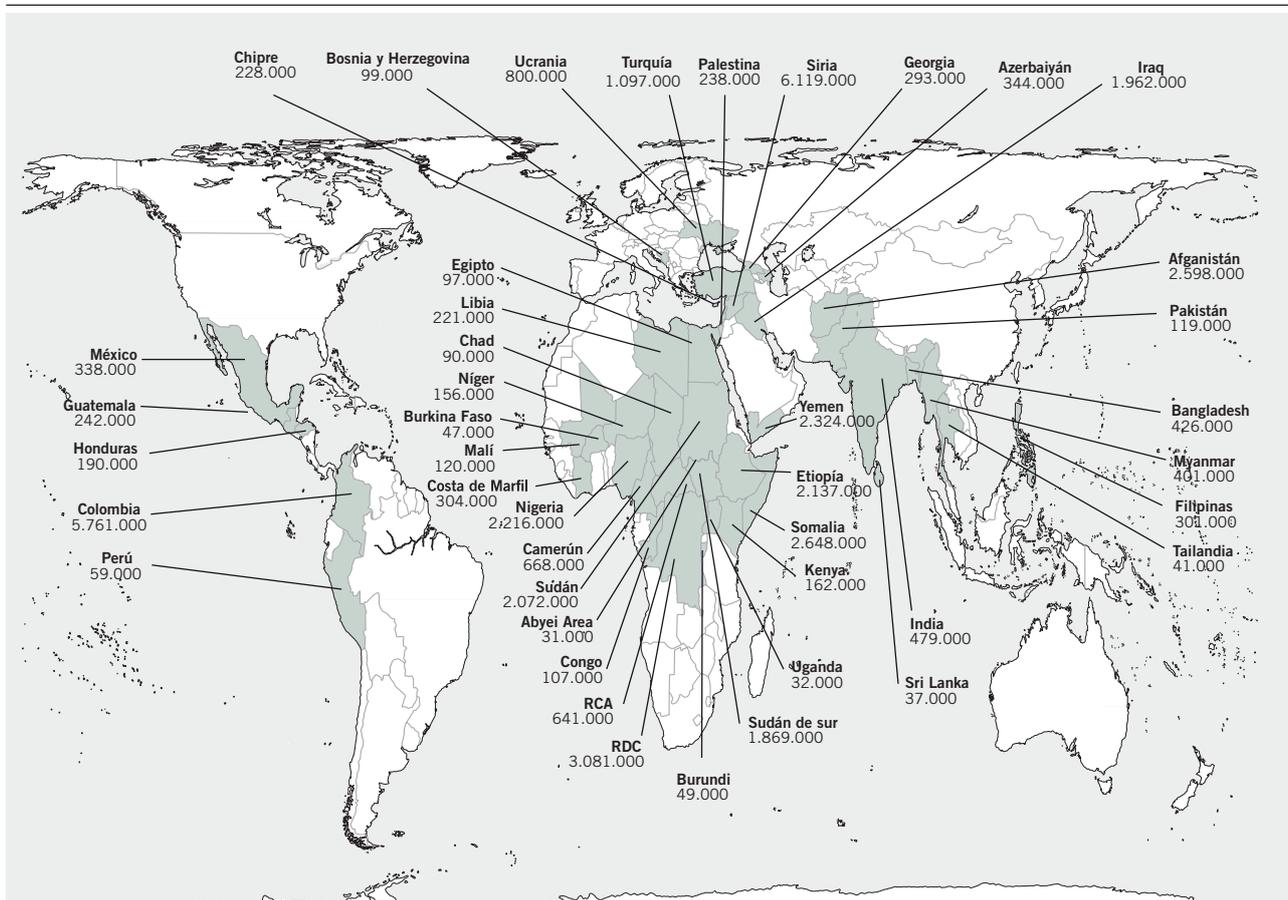
(presente en el 71% de los casos en 2018). Entre estos 25 casos, en 19 contextos había actores armados que aspiraban a un cambio de sistema, mayoritariamente por parte de organizaciones que se atribuyen una agenda yihadista y que tratan de imponer su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos últimos grupos cabe mencionar ejemplos como el autodenominado Estado Islámico y sus filiales y organizaciones afines en distintos continentes –ISIS estuvo presente en países como Argelia, Libia, Nigeria, Somalia, Afganistán, Pakistán, Filipinas, Iraq, Siria, Yemen, entre otros–; las diversas ramas de al-Qaeda que operan en el norte de África y Oriente Medio –entre ellas AQMI (Argelia y Sahel) y AQPA (Yemen)–; las milicias talibán que operan en Afganistán y Pakistán o el grupo al-Shabaab en Somalia. Asimismo, otro factor destacado entre las causas principales fueron las disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, presentes en el 59% de los conflictos (20 casos). Finalmente, las disputas en torno al control de recursos y del territorio fue una de las causas principales en casi un tercio de los conflictos (11 casos), si bien es un factor que de manera indirecta estuvo presente en numerosos contextos, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra.

Los 11 casos de mayor gravedad en 2019 fueron: Camerún (Ambazonia / North West y South West), Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)

Respecto a la evolución de los conflictos en 2019, alrededor de un tercio de los conflictos experimentaron un descenso de las hostilidades y los niveles de violencia con respecto al año anterior (11 casos), mientras que en otro 32% (11 casos) no afrontaron cambios significativos, y el 36% restante sufrió una escalada de la violencia. Los casos en que en 2019 se incrementó la violencia fueron: Burundi, Camerún (Ambazonia/North West y South West), Libia, Malí, Mozambique (norte), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), Colombia, Afganistán, India (Jammu y Cachemira) y Turquía (sudeste).

Con respecto a la intensidad de la violencia, en un 38% de los conflictos fue baja (13 casos), en un 30% media (10 casos) y en otro 32% elevada (11 casos). Los 11 casos de mayor gravedad en 2019 fueron: Camerún (Ambazonia / North West y South West), Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). Algunos de estos casos superaron ampliamente el millar de fallecidos en un año, como Afganistán –con 24.000 muertes en los primeros diez meses de 2019–; Yemen (al-houthistas) –alrededor de 23.000 muertes–; Siria –entre 11.200 y

Número de personas desplazadas internas al finalizar 2018



Fuente: IDMC, *GRID 2019: Global Report on Internal Displacement*, mayo de 2019.

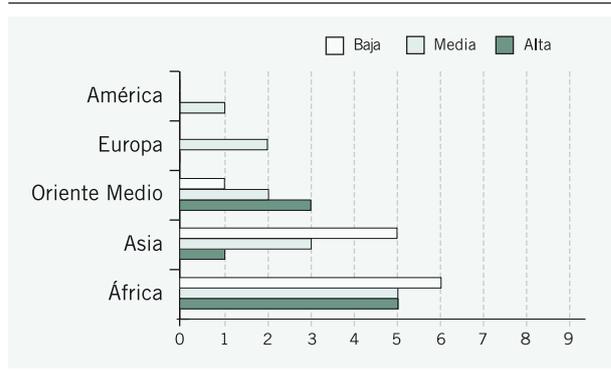
15.000 víctimas–; la Región Sahel Occidental –donde la letalidad se quintuplicó con respecto a 2016, con más de 4.000 víctimas mortales–; o Somalia –más de 4.000 muertes.

Como en años anteriores, los conflictos armados en 2019 tuvieron graves impactos en la población civil y en los territorios en que transcurrían. En el año en que se cumplía el vigésimo aniversario del primer debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, así como el 70º aniversario de los cuatro Convenios de Ginebra, el informe del secretario general de la ONU sobre la protección de los civiles subrayó que la situación era trágicamente similar a la de hacía 20 años y que los civiles continuaban constituyendo la gran mayoría de las bajas en situaciones de conflicto, y que seguían afrontando impactos a corto y largo plazo a causa del desplazamiento forzado, el uso del hambre como estrategia de guerra, la denegación del acceso a la ayuda humanitaria, los ataques contra el personal médico y humanitario, los ataques y daños a instalaciones médicas y a otras infraestructuras civiles, el uso de la violencia sexual y de género, entre otros.

Los conflictos armados continuaron provocando y/o agudizando situaciones de crisis humanitaria. OCHA alertó de que en 2019 muchas más personas de lo previsto necesitaron asistencia humanitaria a causa de los conflictos y de fenómenos climáticos extremos. Según sus datos prospectivos a diciembre de 2019, en 2020 casi 168 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria y protección, la cifra más elevada en décadas. Yemen continuó siendo en 2019 la peor crisis humanitaria a nivel mundial, con 24 millones de sus ciudadanos en necesidad de asistencia, lo que suponía el 80% de su población, según señaló OCHA.

Por otra parte, los conflictos armados siguieron teniendo impactos específicos en grupos de población determinados, como los niños y niñas. El informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados, publicado en 2019 y que analiza el año 2018, identificó un incremento alarmante de violaciones graves de los derechos humanos de niños y niñas por parte de agentes estatales y fuerzas internacionales con respecto al año anterior, mientras las atribuidas a actores no estatales se mantuvo estable. Asimismo, verificó un umbral de muertes y mutilación de menores en 2018 sin precedentes desde que la ONU se dotó de un mecanismo de vigilancia y de elaboración de informes sobre menores y conflictos tras la Resolución 1612 (2005). En Afganistán los casos verificados de niños y niñas fallecidos y mutilados en 2018 ascendieron a 3.062. El balance de fallecidos (927) fue señalado como el más elevado registrado nunca en el país. El informe también verificó otras violaciones de derechos humanos a menores, como el reclutamiento forzado y

Intensidad de los conflictos por regiones



utilización de niños y niñas –Somalia fue el país con mayor número de casos, 2.300, seguido de Nigeria, con 1.947–; ataques contra escuelas y hospitales; violencia sexual contra menores; y secuestros –sobresaliendo también Somalia, con 2.493 casos verificados.

El informe de 2019 del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos, que analiza el año 2018, contenía información verificable relativa a 19 países, que implicaba a más de 50 actores. La mayor parte de los perpetradores de la violencia sexual en esos casos eran actores no estatales, pero también se verificó que habían perpetrado violencia sexual fuerzas armadas nacionales, policía u otros actores de seguridad de Myanmar, Siria, RDC, Somalia, Sudán y Sudán del Sur.

Los conflictos armados siguieron siendo causa de desplazamiento forzado de población. Según las cifras del informe anual de ACNUR publicado a mediados de 2019, a finales de 2018 había en el mundo 70,8 millones de personas desplazadas forzosamente. De ese total, 41,3 millones eran personas desplazadas internas, 25,9 millones eran refugiadas (20,4 bajo mandato de la ONU y otras 5,5 bajo mandato de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA) y 3,5 millones eran solicitantes de asilo. Del total de población desplazada forzosa, 13,6 millones eran nuevos desplazados –10,8 nuevos desplazados internos y 2,8 nuevos refugiados y solicitantes de asilo. El 57% de la población refugiada procedía de tres países, principalmente de Siria (6,7 millones), Afganistán (2,7) y Sudán del Sur (2,3). Les seguían Myanmar (1,1) y Somalia (900.000). En términos absolutos, los principales países de acogida eran Turquía (3,7 millones, frente a los 3,5 de 2017), Pakistán (1,4, como el año anterior), Uganda (1,2, con cierto descenso respecto a los 1,4 de 2017), Sudán (1,1, frente a los algo más de 900.000 del año anterior) y Alemania (1,1 millones, por encima de los 970.400 de 2017). Asimismo, la organización International Displacement Monitoring Centre (IDMC) señaló en su informe global, publicado en 2019, que las 41,3 millones de personas desplazadas internas a finales de

2018 suponían un incremento de 1,4 millones respecto a 2017. El balance lo encabezaba Siria (6,1 millones), seguido de Colombia (5,8), RDC (3,1), Somalia (2,6), Afganistán (2,6), Yemen (2,3), Nigeria (2,2), Etiopía (2,1), Sudán (2,1) e Iraq (2).

Tensiones

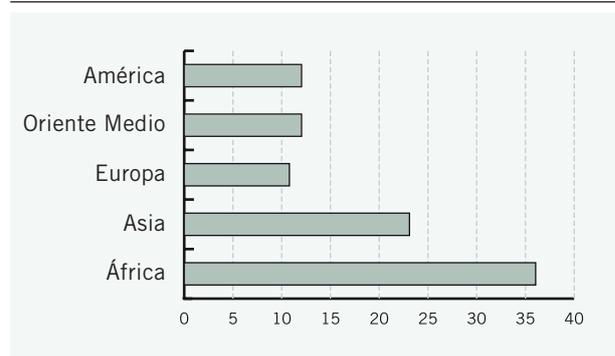
En el segundo capítulo (Tensiones)² se analizan los acontecimientos más relevantes referidos a las tensiones sociopolíticas registradas durante el año y se realiza una mirada comparativa de las tendencias globales y regionales. Durante 2019 se registraron 94 escenarios de tensión a nivel global. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas tuvo lugar en África, con 36 casos, y Asia (23 casos), seguidas de América Latina y Oriente Medio (12 casos cada una) y Europa (11 casos).

Las situaciones de tensión tuvieron causas múltiples, con más de un factor principal en la gran mayoría de los casos. En línea con los datos observados en años precedentes, a nivel global un 71% de las tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos (Gobierno) –lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder– u oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados (Sistema). A su vez, un 40% de las tensiones tuvieron como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias. Cabe destacar que en alrededor de una tercera parte de las tensiones (31%) las disputas por el control de territorios y/o recursos fueron un elemento especialmente relevante, si bien se trata de un factor que alimenta numerosas situaciones de tensión en grados diversos.

África y Asia fueron los continentes con mayor número de crisis sociopolíticas en 2019 (36 y 23, respectivamente)

En línea con años anteriores, algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (51 casos o un 54%), más de una cuarta parte fueron internas internacionalizadas (25 situaciones o casi un 27%), y alrededor de una quinta parte de las tensiones fueron internacionales (18 casos o un 19%). En cuanto a la evolución de las tensiones, un 37% (35 casos) no experimentó cambios significativos, en un 19% (18 casos) hubo una cierta mejoría y en el 44% restante de las crisis (41 casos) se registró un deterioro

Distribución regional del número de tensiones en 2019



con respecto a 2018. Respecto de la intensidad de las crisis sociopolíticas, durante 2019 la mitad de las mismas presentaron una intensidad baja, un tercio registró una intensidad media y solo el 18% de los casos tuvo altos niveles de tensión (17 casos).

Dimensión de género en la construcción de paz

En el tercer capítulo (Género, paz y seguridad) se analizan los impactos de género de conflictos y tensiones, así como las diversas iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género.³ Esta perspectiva permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI, por sus siglas en inglés); en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos

2. Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

3. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.

Países en conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos

	Niveles medios de discriminación	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación	Sin datos
Conflictos armados	Burkina Faso India (2) Tailandia RDC (3)	Chad Malí Myanmar Nigeria RCA	Afganistán Camerún Iraq Níger Pakistán (2) Yemen (2)	Argelia Burundi Egipto Israel Libia Níger Palestina Siria Somalia Sudán (2) Sudán del Sur
Tensiones	Haití India (4) Kenya Lesotho RDC (4) Senegal Tailandia Tayikistán Zimbabwe	Chad Côte d'Ivoire Indonesia Iraq Madagascar Marruecos Nigeria (2) Sri Lanka Togo Túnez Uganda	Bangladesh Guinea Irán (4) Líbano (2) Pakistán (2)	Angola Arabia Saudita Bahrein China Congo, Rep. del Djibouti Egipto Eritrea Gambia Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Israel (2) Palestina Siria Somalia Sudán (2) Sudán del Sur (2) Uzbekistán Venezuela

* Entre paréntesis el número de conflictos armados o tensiones en dicho país.

Tabla elaborada a partir de los niveles de la discriminación de género del SIGI (OCDE) señaladas en el último informe disponible (2019) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escola de Cultura de Pau. El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.

países con graves desigualdades de género según el Índice de Instituciones Sociales y Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

De acuerdo con el SIGI, los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 29 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este índice con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que 14 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2019 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación, seis en países con niveles medios de discriminación y que 10 conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto –Argelia, Burundi, Egipto, Israel, Libia, Níger, Palestina, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur–. Así, el 58% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con niveles de discriminación de género altos o muy altos. Esta cifra

El 83% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos

asciende al 83% si se incluyen los contextos con niveles medios de discriminación. Asimismo, en otros cuatro países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles bajos (Mozambique, Ucrania y Turquía) o muy bajos (Colombia) de acuerdo con el SIGI.

En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, al menos 42 de las 94 tensiones activas durante el año 2019 transcurrieron en países en los que existían graves desigualdades de género (niveles medios, altos o muy altos según el SIGI), lo que supone un 57% de las tensiones para las que existían datos. 21 tensiones transcurrían en países sobre los que no hay datos disponibles (Angola, Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Burundi, China, República del Congo, Egipto, Eritrea, Gambia, Gaza y Cisjordania, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Israel, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Taiwán, Uzbekistán y Venezuela).

Al igual que en años anteriores, durante 2019 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos. Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales. En abril tuvo lugar en el Consejo de

Seguridad de la ONU el debate abierto sobre violencia sexual en conflictos armados. El secretario general presentó su informe anual de seguimiento y evaluación sobre esta materia. El informe del secretario general abarcó el año 2018 y, como en años anteriores, analizó la situación de 19 países, 13 de ellos en situación de conflicto armado: Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Siria y Yemen, a lo que se añade el conflicto en la región del Lago Chad, que incluye a Nigeria. El informe identificó actores en conflicto responsables de la utilización de violencia sexual, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

El centro de investigación ACLED también presentó un balance sobre el impacto de la violencia sexual en los conflictos, señalando que entre inicios de 2018 y junio de 2019 se habían registrado globalmente 400 eventos de violencia sexual en contextos de conflicto, de los que 140 se habían producido en 2019. La violencia sexual constituía más de una cuarta parte de la violencia política dirigida específicamente contra las mujeres. Según ACLED, las mujeres y las niñas representaban el 95% de las víctimas de la violencia sexual en contextos de conflicto. En lo que respecta a los contextos de conflicto, durante 2018 los países más afectados fueron RDC, Sudán del Sur, Burundi, India y Sudán y durante los primeros meses de 2019 RDC, India, Sudán del Sur, Burundi, Mozambique y Zimbabwe.

A lo largo del año se produjeron diferentes iniciativas de respuesta frente a la violencia sexual en el marco de los conflictos armados. En relación a la respuesta de Naciones Unidas frente la explotación y abusos sexuales por personal que desempeña servicio bajo su mando, continuó desplegándose la estrategia impulsada por el secretario general de la ONU, António Guterres, si bien continuaron recibéndose denuncias. Según el informe de 2019 del secretario general, se avanzó en el fortalecimiento del enfoque centrado en las víctimas, con nuevas herramientas para evitar la contratación de personal con antecedentes de explotación o abusos sexuales; se aumentó la colaboración con la sociedad civil y expertos externos, incluyendo a través de la puesta en marcha en 2019 de una Junta Consultiva de la Sociedad Civil, que tiene mandato de plantear propuestas para intensificar la lucha contra la explotación y los abusos sexuales. No obstante, seguían existiendo numerosos obstáculos, como las dificultades de seguimiento de los Estados miembros en los casos de denuncias de fuerzas ajenas a Naciones Unidas. El secretario general identificó en su informe progresos y compromiso en los sectores de mantenimiento de la paz y humanitario, e instó a intensificar los esfuerzos en los programas de desarrollo.

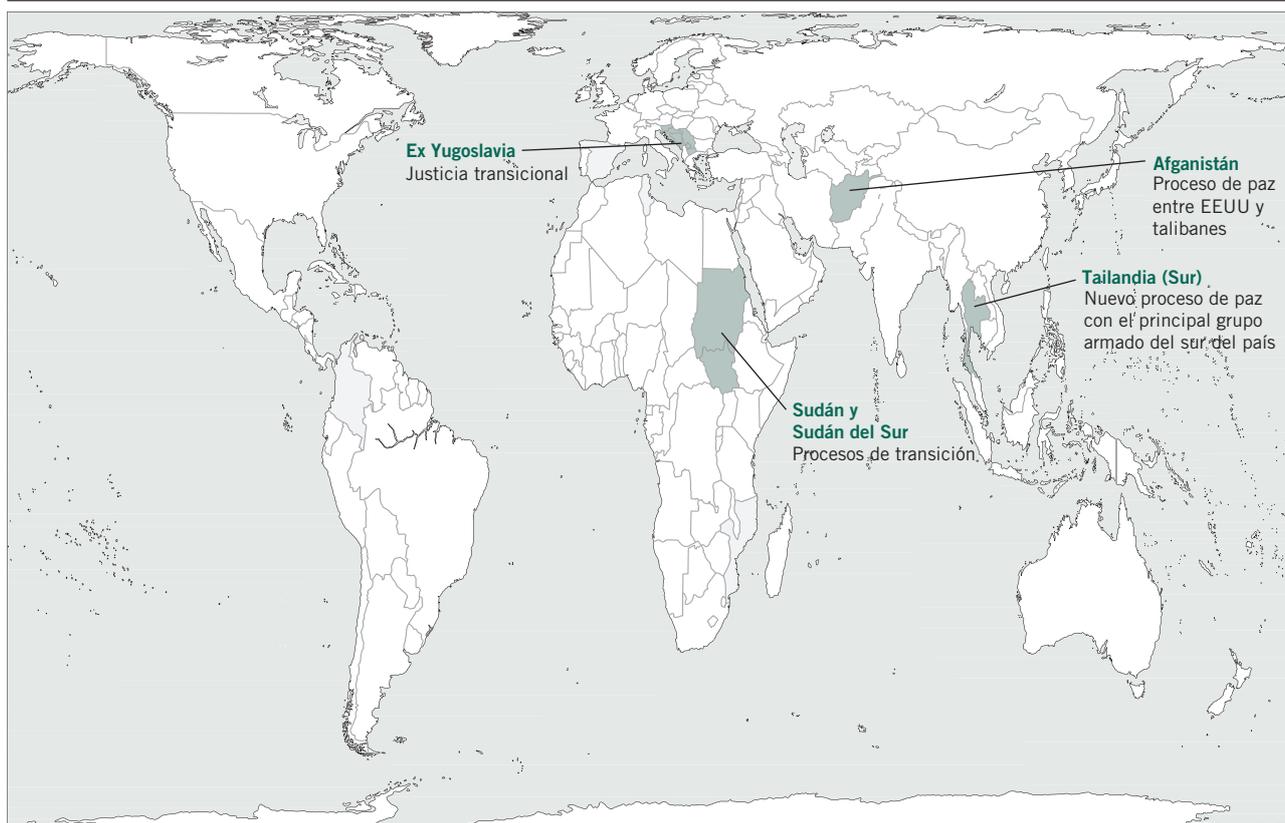
Además de la violencia sexual, países en conflicto armado y/o tensión sociopolítica siguieron afrontado

otras violencia de género. El informe del relator especial sobre la situación de derechos humanos publicado en julio de 2019 analizó la persistencia de la impunidad en las violaciones de derechos humanos que se comenten contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo mujeres defensoras y personas defensoras de los derechos de la población LGTBI. Examinó los principales obstáculos, recogió buenas prácticas y planteó líneas a seguir y recomendaciones. En clave interseccional, el informe subraya los riesgos específicos de violencia que afrontan personas, grupos o movimientos en función del tipo de derecho que defienden y también de los intereses económicos o políticos que confrontan. En relación a la violencia contra la población LGTBI a nivel global, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, realizó un llamamiento en julio a los Estados y otros actores involucrados en la protección de la población solicitante de asilo y refugiada LGTBI a reconocer su situación de vulnerabilidad específica y de necesidades diferenciadas, e identificó el acceso al asilo como un elemento básico

de protección frente a los niveles desproporcionados de detención arbitraria, abusos policiales, violencia y asesinatos extrajudiciales por parte de actores estatales y no estatales a los que se ve expuesta la población LGTBI. Esta también afronta vulneraciones de derechos en forma de esterilizaciones forzadas, las llamadas “terapias de conversión” y las restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación. Por eso, el Experto Independiente instó a los Estados a garantizar que los temores fundados de ser perseguido a causa de la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y/o las características sexuales sea aceptado como base para el reconocimiento del estatuto de refugiado. Según sus datos, solo 37 Estados otorgaban asilo en base a esas circunstancias.

La implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad estuvo marcada por los dos debates monográficos en el Consejo de Seguridad. El primero de ellos, en abril, trató sobre la violencia sexual y los conflictos armados. El secretario general presentó su informe anual sobre esta materia. La sociedad civil resaltó nuevamente la importancia de entender la violencia sexual en los conflictos armados en un marco más amplio de violencias de género perpetradas tanto por actores militares como por civiles en un contexto de profundas desigualdades internacionales entre hombres y mujeres, agravadas por el armamentismo y el militarismo. En el mes de octubre tuvo lugar el debate anual sobre mujeres, paz y seguridad en el Consejo de Seguridad de la ONU coincidiendo con la presentación del informe de evaluación de la implementación de la agenda sobre esta temática por parte del secretario general de la ONU. El informe del sec-

En 2019, solo el 34% de los planes de acción nacional sobre la Resolución 1325 contaba con un presupuesto específico asignado a la implementación del plan y solo el 30% de los planes vigentes incluía referencias a la cuestión del desarme



retario general recogió los resultados de la evaluación independiente promovida por ONU Mujeres sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2015 por Naciones Unidas durante la revisión de alto nivel la agenda mujeres, paz y seguridad; de las operaciones de mantenimiento de la paz; y de la estructura para la consolidación de la paz. La evaluación independiente del cumplimiento de los compromisos con respecto a la agenda mujeres, paz y seguridad, señaló que el 50% se había logrado o estaba en vías de lograrse, el 40% se estaba cumpliendo de forma irregular y el 10% había sufrido retrocesos o no había experimentado ningún tipo de avance. Cabe destacar que entre los compromisos y recomendaciones establecidos en 2015 que no han avanzado en los últimos años está el de incluir el enfoque de género en los acuerdos de paz.

Con respecto a los planes de acción nacional sobre la 1325, durante 2019 cuatro países aprobaron nuevos planes: Bangladesh, Namibia, Líbano y Armenia. Así pues, un total de 83 países contaba con un plan al finalizar el año 2019, lo que representa el 43% de los países miembro de la ONU. De acuerdo con el análisis de estos planes llevado a cabo por la organización internacional WILPF, de los 83 planes existentes solo el 34% de ellos contaba con un presupuesto específico asignado a la implementación del plan y solo el 30% de los planes vigentes incluía referencias a la cuestión del desarme. Durante 2019, nueve países se comprometieron a elaborar su primer plan de acción nacional de cara a la re-

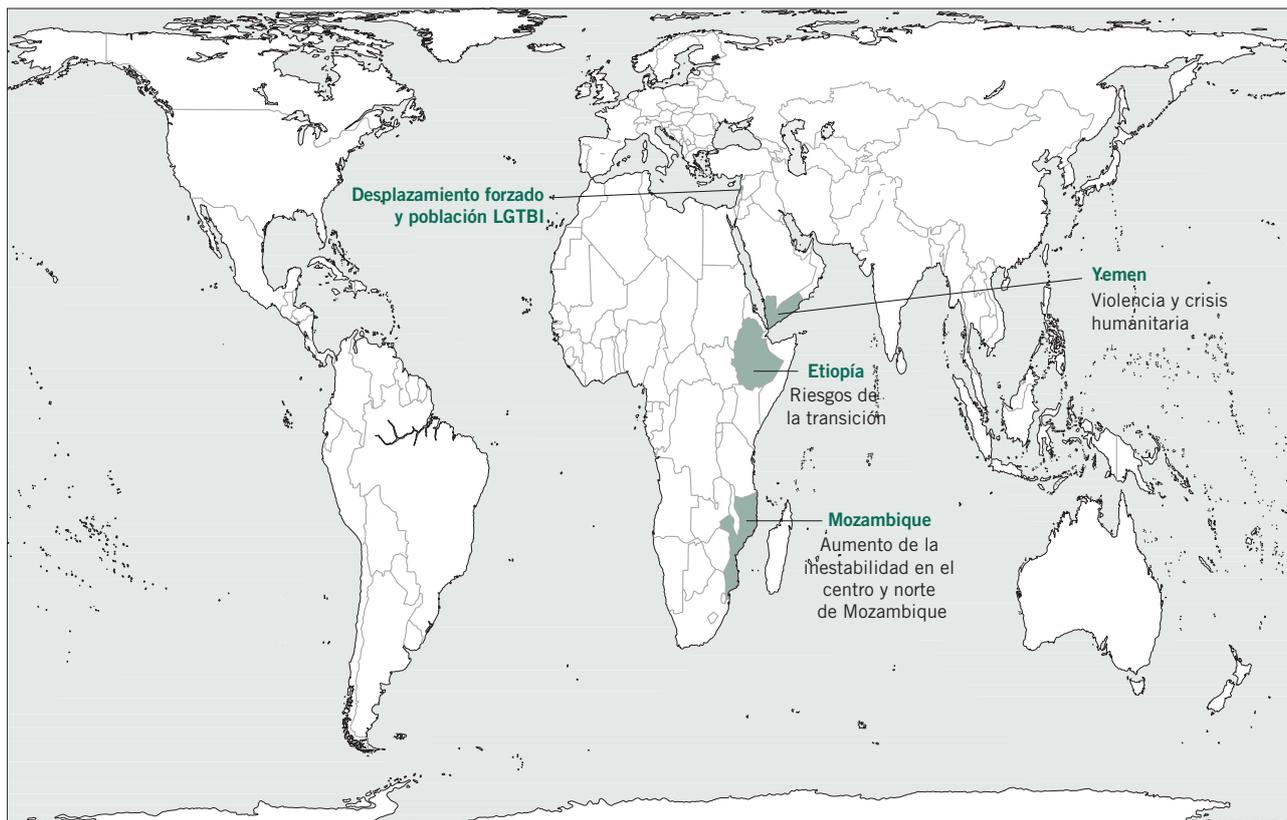
visión de 2020: Uruguay, Chipre, Malta, Egipto, Etiopía, Bulgaria, Letonia, Sri Lanka y Sudáfrica.

Oportunidades de paz y escenarios de riesgo para 2020

En el cuarto capítulo (Oportunidades de Paz para 2020), el informe identifica y analiza cuatro escenarios propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz en el año 2020. Las oportunidades identificadas durante 2019 hacen referencia a diferentes regiones y temas.

- El impulso de la sociedad civil a la justicia transicional en la ex Yugoslavia frente a los bloqueos políticos: hacia un registro regional de víctimas.
- El nuevo proceso de negociación entre el Gobierno tailandés y el BRN, principal grupo armado del sur del país.
- Las negociaciones entre talibanes y EEUU, ¿una oportunidad para la paz en Afganistán?
- Perspectivas de transición en Sudán y Sudán del Sur.

En el sexto capítulo (Escenarios de riesgo para 2020), el informe identifica y analiza cuatro escenarios de



conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante el año 2020.

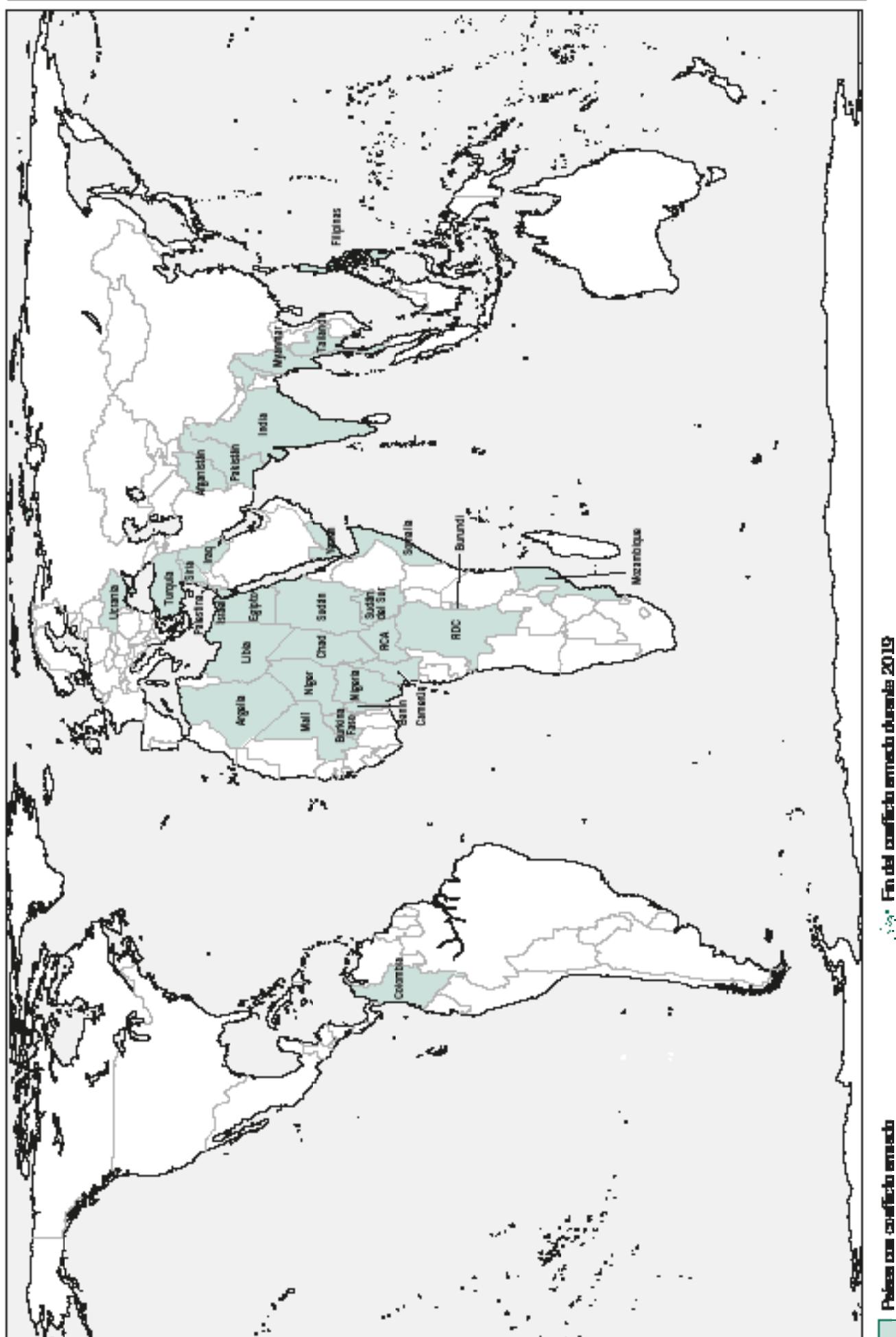
- Retos y riesgos de la transición etíope ante un 2020 convulso.
- El desplazamiento forzado en el contexto global: riesgos específicos para la población LGTBI.
- Yemen en el abismo: cinco años de escalada de violencia y frágiles iniciativas de paz.
- El incremento de la violencia en Mozambique y los riesgos para el nuevo acuerdo de paz.

Resumen de la conflictividad global en 2019

Continente	Conflicto armado			Tensión			TOTAL
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	
África	<i>Camerún (Ambazonia/ North West y South West) Libia Malí Región Lago Chad (Boko Haram) Región Sahel Occidental Somalia Sudán del Sur</i>	Mozambique (norte) RCA RDC (este) RDC (este-ADF)	<i>Argelia* Burundi RDC (Kasai)* Sudán (Darfur) Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)</i>	Chad Etiopía Etiopía (Oromiya) Kenia Nigeria Sudán	Argelia Eritrea Guinea Mozambique Nigeria (Delta Níger) RDC Rwanda Rwanda – Burundi Rwanda – Uganda Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Africa Central (LRA) Angola (Cabinda) Benin Congo, Rep. De Côte d'Ivoire Eritrea – Etiopía Gambia Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Madagascar Malawi Marruecos – Sáhara Occ. RDC – Rwanda RDC – Uganda Senegal (Casamance) Sudán – Sudán del Sur Togo Túnez Uganda Zimbabwe	
SUBTOTAL	7	4	5	6	10	20	52
América			<i>Colombia</i>	<i>Haití México Venezuela</i>	Bolivia Chile Colombia Ecuador El Salvador Honduras Nicaragua	Guatemala Perú	
SUBTOTAL			1	3	7	2	13
Asia y Pacífico	<i>Afganistán</i>	<i>Filipinas (Mindanao) India (Jammu y Cachemira) Pakistán</i>	<i>Filipinas (NPA) India (CPI-M) Myanmar Pakistán (Baluchistán) Tailandia (sur)</i>	India – Pakistán Indonesia (Papúa Occ.) Sri Lanka	Bangladesh China (Hong Kong) Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea India India (Assam) Pakistán Tayikistán	<i>China (Tíbet) China – Japón China – Taiwán China (Xinjiang) Corea, RPD – Rep. de Corea India (Manipur) India (Nagalandia) Kazajstán Kirguistán Lao, RPD Mar de la China Meridional Tailandia Uzbekistán</i>	
SUBTOTAL	1	3	5	3	7	13	32
Europa		Turquía (sudeste) Ucrania (este)			<i>Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) Serbia – Kosovo</i> Turquía	Belarús Bosnia y Herzegovina Chipre España (Cataluña) Georgia (Abjasia) Georgia (Osetia del Sur) Moldova, Rep. de (Transdniestria) Rusia (norte del Cáucaso)	
SUBTOTAL		2			3	8	13
Oriente Medio	<i>Iraq Siria Yemen (al-houthistas)</i>	Egipto (Sinaí)	<i>Israel – Palestina Yemen (AQPA)</i>	Egipto Irán Irán – EEUU, Israel Iraq Israel – Siria – Líbano	<i>Irán (noroeste) Irán (Sistán) Baluchistán) Líbano</i>	Arabia Saudita Bahrein Iraq (Kurdistán) Palestina	
SUBTOTAL	3	1	2	5	3	4	18
TOTAL	11	10	13	17	30	47	128

Se señalan en cursiva los conflictos armados y tensiones con negociaciones de paz, ya sean exploratorias o estén formalizadas. Con asterisco, los conflictos armados finalizados durante 2019.

Mapa 1.1 Conflictos armados



1. Conflictos armados

- Durante 2019 se registraron 34 conflictos armados, de los cuales 32 seguían activos al finalizar el año. La mayoría se concentró en África (16) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno).
- Se intensificó la represión por parte del Gobierno de Burundi y del ala juvenil del partido gubernamental CNDD-FDD, los Imbonerakure, previo a las elecciones de 2020.
- La reducción generalizada de la violencia y el inicio de la desmovilización de los grupos armados comportó el fin del conflicto armado en la región congoleesa de Kasai.
- Se produjo una escalada de la violencia por parte de las ADF en el este de RDC como consecuencia de una operación militar de las Fuerzas Armadas congoleesas en el último trimestre.
- Diversos análisis destacaron que ISIS estaría buscando mayor protagonismo en el conflicto en la región del Lago Chad, que afecta principalmente el noreste de Nigeria así como las regiones colindantes de Chad, Camerún y Níger, ante el incremento de acciones del grupo.
- La violencia en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, se incrementó debido a la presencia de grupos armados autodenominados yihadistas.
- Sudán del Sur, con 2,21 millones de personas refugiadas, se situó como la mayor crisis de personas refugiadas en África y la tercera más grande del mundo, por detrás de Siria y Afganistán.
- La violencia en la región de Liptako-Gourma (Sahel Occidental) se ha multiplicado por cinco desde el año 2016, registrando en 2019 alrededor de 4.000 personas asesinadas.
- El conflicto armado en Libia se agravó en 2019, con enfrentamientos y ataques aéreos en diversas zonas del país alentados por continuas vulneraciones al embargo de armas.
- Con un balance de 42.000 personas muertas según ACLED, Afganistán se convirtió en el conflicto armado con mayor número de víctimas mortales en 2019.
- En consonancia con la tendencia de los últimos años, la violencia en el sur de Tailandia volvió a reducirse y se situó en sus niveles más bajos desde el inicio del conflicto en 2004.
- El Estado turco multiplicó su presión contra el PKK en Iraq y Siria, mientras dentro de Turquía continuó la represión contra los actores políticos kurdos.
- El conflicto armado en Iraq estuvo marcado por la persistencia de las hostilidades entre las fuerzas de seguridad e ISIS y por la creciente proyección en el país de la disputa entre Irán y EEUU.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2019. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2019, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2019.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2019

Conflicto ² -inicio-	Tipología ³	Actores principales ⁴	Intensidad ⁵
			Evolución ⁶
África			
Argelia -1992-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel	1
	Sistema		Fin
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL	1
	Gobierno		↑
Camerún (Ambazonia/ North West y South West) -2018-	Interno Internacionalizado	Gobierno de Camerún, autoproclamado Gobierno Interino de Ambazonia, grupos armados ADF, SCACUF, SOCADEF y SCDF y decenas de milicias menores	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA), milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, mercenarios, EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Qatar, Rusia, entre otros países	3
	Gobierno, Recursos, Sistema		↑
Malí -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso)	3
	Sistema, Autogobierno, Identidad		↑

- En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
- Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
- En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
- La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
- En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2019 con la del 2018, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2019 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.
- En pasadas ediciones de *Alerta!* este caso era identificado como "Malí (norte)", pero se ha cambiado la denominación por la ampliación de las dinámicas de violencia a otras áreas del país.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Mozambique (Norte) -2019-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ), mercenarios rusos (Grupo Wagner)	2
	Sistema, Identidad		↑
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, Boko Haram-ISWAP, Boko Haram-Abubakar Shekau, milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		↑
Región Sahel Occidental -2018-	Internacional	Burkina Faso, Malí, Níger, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), Macina Liberation Front (FML), Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas	3
	Sistema, Identidad, Recursos		↑
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, RPRC, MPC, UPC, MLCJ), milicias anti balaka, milicia 3R, grupo armado ugandés LRA, otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, EUFOR	2
	Gobierno, Recursos		↓
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	2
	Sistema, Recursos		↑
RDC (Kasai) -2016-	Interno	Gobierno, diversas milicias de adscripción étnica (Bana Mura, Kamwina Nsapu)	1
	Gobierno, Identidad		Fin
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab	3
	Gobierno, Sistema		=
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNAMID	1
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↓
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur	1
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↓
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		↓
América			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares	1
	Sistema		↑
Asia			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS (EI-KP)	3
	Sistema		↑
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		=
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, facciones del MILF y el MNLF	2
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, All Parties Hurriyat Conference, JKLF	2
	Autogobierno, Identidad		↑
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		=
Myanmar -1948-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP)	1
	Autogobierno, Identidad		=
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU	2
	Sistema		↓
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↓
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Europa			
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Ucrania (este) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia	2
	Gobierno, Identidad, Autogobierno		↓
Oriente Medio			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasm), Israel	2
	Sistema		=
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chifes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía, Israel	3
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos		=
Israel-Palestina -2000-	Internacional	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		=
Yemen (al-houthistas) -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		=
Yemen (AQPA) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA/Ansar Sharia), ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), milicias tribales, milicias al-houthistas/Ansar Allah	1
	Sistema		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2019

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2019, incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores implicados y el escenario de la disputa, las principales causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas el desplazamiento forzado a causa de situaciones de conflicto y violencia.

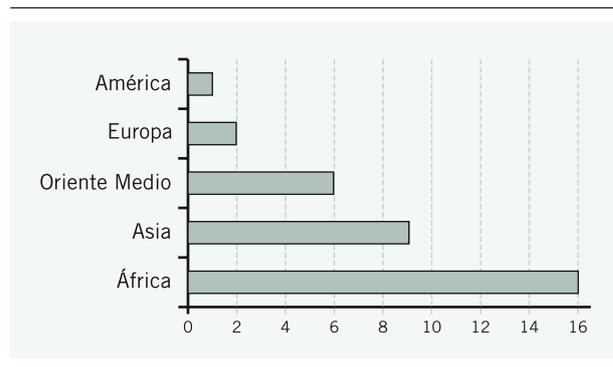
1.2.1 Tendencias globales y regionales

En 2019 se mantuvo la tendencia de años anteriores respecto al número de conflictos armados, **con 34 casos, el mismo número que en 2018 y uno más que en 2017 y 2016** (y similar a períodos previos: 35 en 2015, 36 en 2014, 35 en 2013). De los 34 casos contabilizados en 2019, 32 permanecían activos al finalizar el año y otros dos dejaron de ser considerados conflictos armados. Es el caso de Argelia, donde se asistió a un descenso en los últimos años de las hostilidades entre grupos armados yihadistas –principalmente AQMI– y de la mortalidad asociada al conflicto, si bien AQMI incrementó su actividad armada en el conflicto armado del Sahel Occidental. El otro caso considerado finalizado en 2019 fue el que afectaba a la región de Kasai en RDC, conflicto entre las fuerzas de seguridad del Estado y diversas milicias, también enfrentadas entre ellas y contra la población civil. Las rendiciones a gran escala en 2019, principalmente del grupo Kamwina Nsapu, desembocaron en el fin del conflicto. En comparación con 2018 se registró un nuevo conflicto armado, considerado escenario de tensión en años anteriores. Se trató de Mozambique (norte), que afecta a la provincia de Cabo Delgado, donde la organización armada de carácter yihadista Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ) se enfrenta a las fuerzas de seguridad, en un contexto de marginación y agravios de la minoría musulmana en el país y de pobreza extrema en dicha provincia.

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados a nivel mundial, la mayor parte de los casos se produjeron en África, que concentraba el 47% de los conflictos armados (16 casos) y Asia, con el 26% de las disputas bélicas (nueve casos), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno).

En lo referente a la relación entre los actores involucrados en el conflicto y el escenario de la disputa, se identificaron conflictos internos, internacionales y, mayoritariamente,

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2019



internos internacionalizados. Como en 2018, en el año 2019 el 12% de los conflictos armados (cuatro casos) tenía carácter interno, es decir, se trataba de conflictos entre actores armados de un mismo Estado y que operan exclusivamente en y desde las fronteras del mismo: RDC (Kasai) –que finalizó ese año–, Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). El 6% era considerado internacional: el conflicto en la Región Sahel Occidental y la disputa entre Israel y Palestina. El resto, un 82%, eran conflictos internos internacionalizados, en los que alguna de las partes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. **En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados y grupos armados de acción transfronteriza, entre otros.**

En relación al papel de terceros Estados, en 2019 entre otros casos sobresalió un año más Siria, donde Rusia y el régimen sirio intensificaron su ofensiva en Idlib, con graves impactos de desplazamiento forzado de población. Otro desarrollo destacado en Siria fue la retirada de las tropas estadounidenses del noreste del país, lo que a su vez abrió la puerta a que Turquía lanzase una ofensiva aérea y terrestre en el norte contra fuerzas kurdas, con graves impactos en la población civil. En el caso de Yemen (al-houthistas), el conflicto se vio influido por el incremento de las tensiones entre, por un lado, EEUU y Arabia Saudita, y, por otro, Irán. A su vez, el Gobierno de Hadi acusó a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de dar apoyo a la campaña militar de actores secesionistas del sur de Yemen, en el marco de una escalada de tensiones en el bando anti al-houthista. En relación a Iraq, otro caso destacado de internacionalización, en 2019 el incremento de la tensión entre Washington y Teherán y una serie de hechos de violencia que afectaron tanto a intereses de EEUU como de Irán en territorio iraquí agravaron la situación. También Israel incrementó sus ofensivas armadas en Iraq, que fueron calificadas de declaración de guerra por parte del bloque parlamentario

proiraní de Iraq. En relación al conflicto en la Región Sahel Occidental, Francia anunció el despliegue de tropas terrestres en el marco de la operación Bourgou IV, liderada por la propia operación francesa Barkhane, y que también contará con tropas del Sahel G5 (Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger).

Algunos de estos Estados y otros países intervenían militarmente a través de diversas vías, individualmente y como parte de coaliciones regionales e internacionales. Entre ellas, la Fuerza Conjunta Sahel G5, involucrada en el norte de Malí y en el conflicto que afecta a la región Sahel Occidental, en la zona conocida como Liptako-Gourma. En relación a esta última, el G5-Sahel solicitó a la ONU mayor cooperación bajo el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, mientras también tenía previsto ampliar su despliegue militar. Otros casos de coaliciones incluían la Fuerza Militar Conjunta Regional MNJTF (Benín, Nigeria, Níger, Chad y Camerún), que combatía a Boko Haram en la Región Lago Chad; el conglomerado de fuerzas militares liderado por Arabia Saudita e integrado por una decena de países que combate en Yemen; y las coaliciones internacionales anti-Estado Islámico (ISIS) lideradas por EEUU involucradas militarmente en Iraq y Siria; así como la coalición liderada también por EEUU que combatía a la insurgencia talibán en Afganistán.

En relación a las misiones, continuó la implicación militar de misiones de la ONU, particularmente en conflictos en África, entre ellas, la MINUSMA en los conflictos en Malí y en la Región Sahel Occidental, la MINUSCA en RCA, la MONUSCO en el RDC (este), la AMISOM en Somalia, la UNAMID (misión híbrida de la ONU y UA) en Sudán y la UNMISS en Sudán del Sur. Cabe señalar que en relación a Malí, la MINUSMA sufrió en 2019 uno de los peores ataques padecidos por la misión, reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM). La AMISOM, que apoyó al Ejército somalí en ofensivas para recuperar territorio controlado por al-Shabaab, también fue objeto de numerosos ataques durante el año. A su vez, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió reducir la AMISOM, siguiendo el plan de 2017 para que el Ejército somalí progresivamente asumiera sus responsabilidades, si bien la UA alertó de riesgos de deterioro de la situación en 2020 por la celebración de elecciones. En relación al conflicto en Darfur (Sudán), la ONU siguió adelante con su hoja de ruta para la reconfiguración y reducción de la misión en el país cuya finalización se debía completar en 2020, mientras ONG internacionales de derechos humanos cuestionaron ese plan por la continuación de la violencia en el país. Además, organizaciones regionales siguieron involucradas militarmente en diversos conflictos a través

De los 34 conflictos armados en 2019, 32 seguían activos a final de año, tras la reducción de la violencia entre grupos yihadistas y fuerzas de seguridad en Argelia y las rendiciones masivas de la insurgencia en la región congoleña de Kasai

El 73% de los conflictos armados tenía entre sus causas principales la búsqueda de un cambio de gobierno o de sistema

de misiones u operaciones, como la UA (AMISOM en Somalia), la UE (EUFOR RCA, EUNAVFOR en Somalia) y la OTAN (misión Rolute Support en Afganistán). Se suman también misiones híbridas, como Operation Ocean Shield, operación militar en aguas del Cuerno de África y Océano Índico, liderada por EEUU y en la que participan la UE, la OTAN y otros países como Japón, India y Rusia.

En relación a las causas de los conflictos armados, la gran mayoría de conflictos tuvo entre sus motivaciones principales **la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, económico, social o ideológico de un determinado Estado, que derivaron en luchas por acceder al poder o erosionarlo**. Uno u otro elemento estuvieron presentes en el 73% de los casos en 2019 (25 de los 34 casos), en línea con los años anteriores (71% en 2018, 73% en 2017). Entre estos 25 casos, en 19 contextos había actores armados que aspiraban a un cambio de sistema, mayoritariamente por parte de organizaciones que se atribuyen una agenda yihadista y que tratan de imponer su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos últimos grupos cabe mencionar ejemplos como el autodenominado Estado Islámico y sus filiales y organizaciones afines en distintos continentes –ISIS estuvo presente en países como Argelia, Libia, Región Lago Chad, Región Sahel Occidental, Somalia, Afganistán, Pakistán, Filipinas, Turquía, Egipto, Iraq, Siria, Yemen, entre otros–; las diversas ramas de al-Qaeda que operan en el norte de África y Oriente Medio –entre ellas AQMI (Argelia, Sahel y Libia) y AQPA (Yemen)–; las milicias talibán que operan en Afganistán y Pakistán o el grupo al-Shabaab en Somalia, entre otros.

En 2019 se acentuó en algunos casos la tendencia de proliferación de grupos armados que presentan agendas yihadistas, según su propia autodenominación. Así, el incremento de la violencia en el norte de Mozambique protagonizado por combatientes yihadistas, principalmente del grupo Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ), y fuerzas de seguridad llevó a considerar esa situación como de conflicto armado. Además, en ese país por vez primera ISIS anunció su presencia, si bien analistas y fuerzas de seguridad negaron que hubiera evidencias sobre su presencia efectiva. Por otra parte, en Malí se produjo en 2019 la primera aparición formal del grupo Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), mientras el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes GSIM reivindicó uno de los ataques más graves sufridos por la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país, la MINUSMA, en el que murieron diez efectivos y resultaron heridos otros 25. En la Región Lago Chad

algunos análisis apuntaron a que ISIS estaría haciendo un llamamiento global a sumarse a su filial ISWAP y, en octubre, ISIS reivindicó su primera acción letal en el noroeste de Nigeria. Asimismo, medios de comunicación señalaron que Afganistán era el país en el que durante 2018 y 2019 ISIS habría estado más activo, exceptuando Iraq y Siria. A su vez, en el conflicto Egipto (Sinaí), la filial de ISIS anunció planes de expansión de sus acciones hacia la zona sur de la provincia, incluyendo el área del Mar Rojo.

Asimismo, otro factor destacado entre las causas principales fueron las disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, presentes en el 59% de los conflictos (20 casos), mismo porcentaje que en 2018. Entre estos, sobresalieron en 2019 casos como el del conflicto armado en el estado de Jammu y Cachemira en India. Ese estado fue escenario del atentado más grave en años contra las fuerzas de seguridad india y que causó la muerte de 45 efectivos, y se dio paso al despliegue de 40.000 fuerzas de seguridad adicionales y a la suspensión del estatuto especial de autonomía del estado y de su estatus de estado, dividiéndolo en dos y rebajando su rango administrativo. El conflicto en torno al estatus de las regiones de mayoría anglófona de Camerún también afrontó una grave escalada en 2019. En el caso de Filipinas (Mindanao), se estableció una nueva región autónoma en Mindanao –ratificada en plebiscito en 2019–, como parte del proceso de paz, mientras la región también hizo frente a dinámicas de violencia asociada a grupos yihadistas. Finalmente, las disputas en torno al control de recursos y del territorio fue una de las causas principales en un 32% de los conflictos (11 casos), si bien es un factor que de manera indirecta estuvo presente en numerosos contextos, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra.

Respecto a la evolución de los conflictos en 2019, el 36% de los casos sufrieron un deterioro de la situación con respecto al año anterior (12 casos). El 66% de los casos con incremento de la violencia en 2019 eran

conflictos del continente africano (ocho de las 12 crisis). Los casos en que en 2019 se incrementó la violencia fueron: Burundi, Camerún (Ambazonia/North West y South West), Libia, Malí, Mozambique (norte), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), Colombia, Afganistán, India (Jammu y Cachemira) y Turquía (sudeste). Otro 32% (11 casos) no afrontó cambios significativos. El 32% experimentó un descenso de las hostilidades y de los niveles de violencia (11 casos). De este último grupo, dos de los casos a final de año se consideraron finalizados: Argelia y en RDC (Kasai).

Con respecto a la intensidad de la violencia, en un 38% de los conflictos fue baja (13 casos), en un 32% alta (11 casos) y en otro 30% fue media (diez casos). Los casos de intensidad elevada se caracterizaron por niveles de letalidad superiores al millar de víctimas mortales anuales, así como por graves impactos en la población, incluyendo en términos de desplazamiento forzado a gran escala, y en el territorio. En 2019 se incrementaron los casos de intensidad elevada con respecto al año anterior (27% o nueve casos en 2018), a causa del incremento de la violencia en Camerún y en la Región Sahel Occidental. Los 11 casos de mayor gravedad en 2019 fueron: Camerún (Ambazonia / North West y South West), Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). Algunos de estos casos superaron ampliamente el millar de fallecidos en un año, como la Región Sahel Occidental, donde la letalidad se quintuplicó con respecto a 2016, con más de 4.000 víctimas mortales en 2019 –según balances de la ONU–; en Somalia, con más de 4.000 muertes en ese año –según el centro de investigación ACLED–; y a mucha mayor escala, los casos de Afganistán, con 24.000 muertes en los primeros diez meses de 2019 –según Uppsala Conflict Data Program–; Yemen (al-houthistas), con balances que situaban la letalidad en 2019 en 23.000 víctimas –según ACLED–; y Siria, con balances dispares, incluyendo 11.200 víctimas mortales en 2019 según el Observatorio Sirio para los

El 32% de los conflictos armados en 2019 fueron de intensidad elevada: Camerún (Ambazonia / North West y South West), Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados

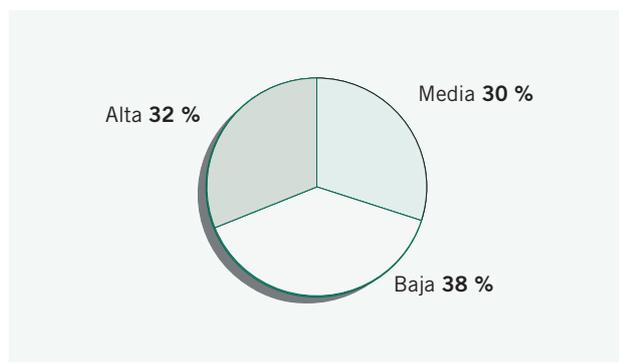
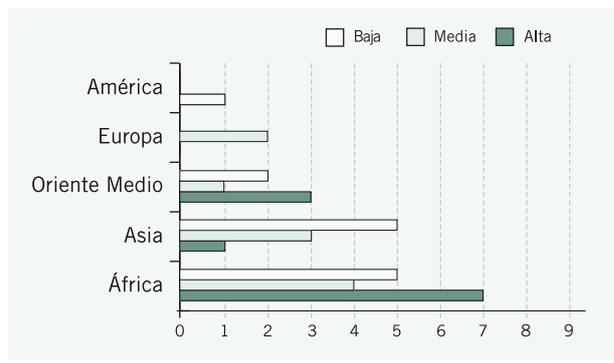


Gráfico 1.3. Intensidad de los conflictos por regiones



Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada

<p>ÁFRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente registró el mayor número de casos de conflictos armados en el mundo, con 16 de los 34 (equivalentes a un 47%). Son las mismas cifras que en 2018, si bien hubo cambios respecto a los contextos. Mientras en 2018 había finalizado el conflicto armado de Etiopía (Ogadén), en 2019 la situación de violencia en Mozambique (norte) pasó a ser considerada como conflicto armado. En Argelia y RDC (Kasai) la reducción de la violencia llevó a considerarlos como conflictos finalizados al acabar el año. • El 44% de los conflictos en África fueron de alta intensidad (siete de los 16 casos): Camerún (Ambazonia/North West y South West) –que subió de intensidad respecto a 2018–, Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Somalia y Sudán del Sur. • La mitad de los conflictos armados en el continente africano sufrieron un deterioro en 2019 con respecto al 2018 (frente al empeoramiento de la situación de una cuarta parte en 2018 respecto a 2017). Asimismo, 38% de los conflictos (seis casos) asistieron a una reducción de las hostilidades, incluyendo dos conflictos considerados finalizados al acabar el año, y en un 12% (dos casos) no se produjeron cambios significativos. • Los conflictos armados africanos se caracterizaron por su alto nivel de internacionalización. El 88% de los casos fueron internos internacionalizados, con implicación de actores externos y/o extensión de las dinámicas bélicas a países vecinos. • Los conflictos armados en África tuvieron causas múltiples y simultáneas, entre las que destaca la aspiración a un cambio de gobierno o de sistema, presente en un 81% de los casos. En un 56% había demandas identitarias y/o de autogobierno y en un 50% había factores relativos al control de recursos.
<p>AMÉRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente fue escenario de un único conflicto armado, el de Colombia. América concentró, por tanto, un 3% de los casos de conflicto armado en 2019 a nivel mundial. • El único caso de conflicto armado en América (Colombia) afrontó un deterioro en 2019. Las conversaciones de paz entre el Gobierno y el ELN se cancelaron a principios de año después del atentado más mortífero en la capital en los últimos 15 años, reivindicado por este grupo armado. • Si bien el continente era escenario de un único conflicto armado, era el más afectado por la violencia vinculada a homicidios.
<p>ASIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La región ocupó el segundo lugar en número de conflictos armados después de África, con el 26% de los conflictos (nueve casos). • Más de la mitad de los conflictos armados en Asia fueron de baja intensidad (cinco de los nueve). Un tercio (tres casos) fueron de intensidad media, y un caso afrontó violencia de alta intensidad: Afganistán. El 44% de los casos se mantuvo sin cambios relevantes, un tercio registró una reducción de las hostilidades y un 22% afrontó un deterioro. Estos últimos fueron Afganistán e India (Jammu y Cachemira). • Un tercio de los conflictos en Asia eran de carácter interno, lo que representaba a su vez un 75% de los conflictos armados internos a nivel mundial. • En términos de causalidad, cinco casos tenían entre sus principales motivaciones cuestiones relativas a demandas identitarias y de autogobierno, el mismo número de casos con causas relacionadas con disputas en torno al control del gobierno e intentos de cambio de sistema político, económico o social.
<p>EUROPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente europeo albergó dos casos –Turquía (sudeste) y Ucrania (este)–, que representaron el 6% de los conflictos armados a nivel mundial, en línea con el año anterior. • Los conflictos en Europa presentaron una intensidad de violencia media, si bien el conflicto armado en Turquía afrontó un deterioro durante 2019, mientras que en Ucrania continuó reduciéndose la mortalidad vinculada al conflicto. • Europa continuó caracterizándose por conflictos armados con prevalencia de los factores identitarios y de autogobierno. Asimismo, los dos conflictos en Europa eran de carácter interno internacionalizado.
<p>ORIENTE MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oriente Medio fue escenario en 2019 del 18% de los conflictos en el mundo, con seis de los 34 casos, como en 2018. Era la tercera región geográfica con más conflictos armados activos. • El 27% de los conflictos armados de alta intensidad en el mundo tenían lugar en Oriente Medio. Eran los casos de Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). Aunque en los tres se redujo parcialmente la mortalidad con respecto a 2018, continuaron generando gravísimos impactos de letalidad, desplazamiento forzado y otras consecuencias en la población y el territorio. • El 83% de los conflictos (cinco casos) se mantuvo en niveles de violencia y hostilidades similares a las del año anterior, mientras en un contexto se asistió a una reducción. Fue el caso de Israel-Palestina, que en 2018 había asistido a los incidentes más graves desde 2014 y en 2019 la letalidad se redujo a algo más de la mitad que el año anterior. • En relación a las causas, un 83% tenían entre sus motivaciones principales las disputas en torno al control del Gobierno o los intentos de cambio de sistema –en este último caso, mayoritariamente por parte de actores yihadistas–, mientras en un 67% entre las causas sobresalían las disputas en torno a demandas identitarias y/o de autogobierno.

Derechos Humanos o 15.000 según ACLED. Todos ellos fueron escenario de importantes desplazamientos de población, tanto internos como internacionales.

1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil

Como en años anteriores, los conflictos armados en 2019 tuvieron graves impactos en la población civil y en los territorios en que transcurrían. En el año en que se cumplía el vigésimo aniversario del primer debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, así como el 70º aniversario de los cuatro Convenios de

Ginebra, el informe del secretario general de la ONU sobre la protección de los civiles subrayó que la situación era trágicamente similar a la de hacía 20 años y que los civiles continuaban constituyendo la gran mayoría de las bajas en situaciones de conflicto, y que seguían afrontando impactos a corto y largo plazo a causa del desplazamiento forzado, el uso del hambre como estrategia de guerra, la denegación del acceso a la ayuda humanitaria, los ataques contra el personal médico y humanitario, los ataques y daños a instalaciones médicas y a otras infraestructuras civiles, el uso de la violencia sexual y de género, entre otros. Al mismo tiempo planteó la urgencia de avanzar en la protección de civiles en el contexto de conflictos contemporáneos, caracterizados por la proliferación y fragmentación de

grupos armados no estatales, en conflictos cada vez más asimétricos y escenarios crecientemente urbanos. El informe también señaló la necesidad de prestar mayor atención a la cuestión de los conflictos armados y el hambre; a los impactos específicos de los conflictos en las personas con diversidad funcional; así como al impacto ambiental de los conflictos.

El análisis sobre la evolución de la treintena de conflictos armados en 2019 recogido en *Alerta 2020* constata la continuación de las tendencias señaladas por el secretario general. Los conflictos armados en 2019 continuaron causando numerosas víctimas mortales y heridos en la población civil. Durante el año se produjeron numerosos ataques contra objetivos civiles o que tuvieron graves impactos sobre estos, incluyendo viviendas, lugares de culto, mercados, campamentos de población desplazada, personal y centros de atención médica, profesorado y colegios, áreas agrícolas, hoteles, entre otros. Este tipo de ataques se registró en lugares y conflictos como Camerún, Nigeria en el marco del conflicto de la región de Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Pakistán, Libia, Afganistán, Pakistán (Baluchistán), Tailandia (sur), Ucrania, Iraq y Siria. Se perpetraron secuestros y civiles continuaron desaparecidos, como en el conflicto en la Región Lago Chad, con 22.000 personas que seguían desaparecidas en 2019, según CICR, la mayor cifra registrada por la organización a nivel global. Respecto a otros impactos o estrategias de guerra, continuó vulnerándose el DIH en numerosos contextos. Entre ellos, en Siria se denunció el uso de armas como el gas cloro. En relación a Libia, se denunciaron numerosas violaciones al embargo de armas y el creciente uso de arsenales aéreos y en 2019 se registró un 25% más de víctimas civiles que en 2018, según datos de la ONU. En Yemen se denunciaron hechos de violencia constitutivos de crímenes de guerra, incluyendo ataques aéreos indiscriminados, asedios y torturas.

Los conflictos armados continuaron provocando y/o agudizando situaciones de crisis humanitaria. OCHA alertó de que en 2019 muchas más personas de lo previsto necesitaron asistencia humanitaria a causa de los conflictos y de fenómenos climáticos extremos. Según sus datos prospectivos a diciembre de 2019, **en 2020 casi 168 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria y protección**, la cifra más elevada en décadas. Yemen continuó siendo en 2019 la peor crisis humanitaria a nivel mundial, con 24 millones de sus ciudadanos en necesidad de asistencia, lo que suponía el 80% de su población, según señaló OCHA. En su informe de finales de 2019, OCHA también alertó de las crisis en Siria, RDC, Somalia y Sudán del Sur; así como de un incremento de la inseguridad alimentaria en Sudán a causa de la crisis

La ONU advirtió de la necesidad de avanzar en la protección de la población civil en un contexto de conflictos caracterizados por la fragmentación de grupos armados en escenarios crecientemente urbanos

La OCHA alertó a finales de 2019 de que en 2020 casi 168 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria y protección

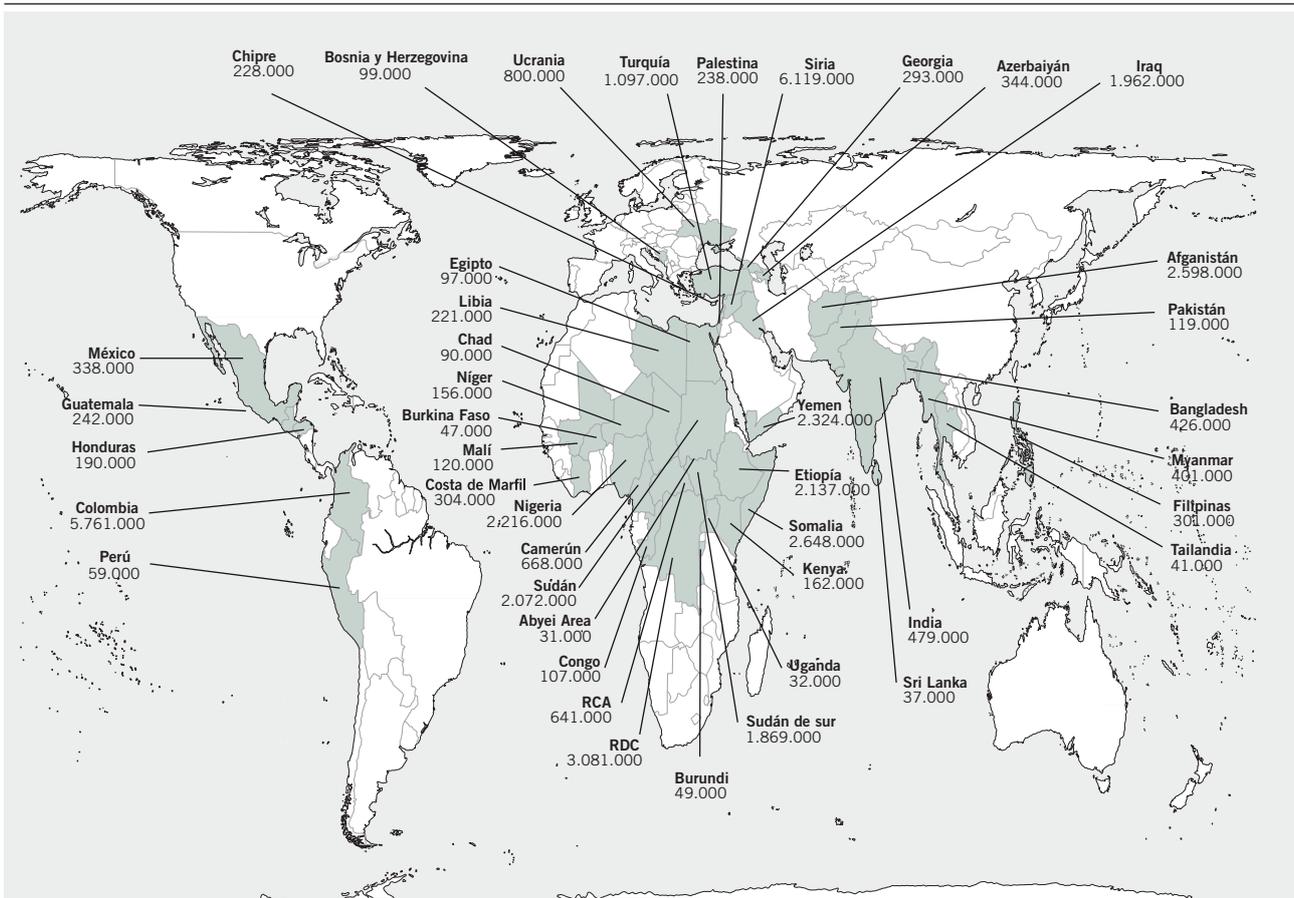
económica; del aumento de desplazamiento forzado en la Región Sahel; y de la continuación de la crisis humanitaria en la región de Lago Chad. Además de las crisis africanas, OCHA advirtió sobre el incremento de necesidades humanitarias en Afganistán y otros países; el deterioro de la crisis en Venezuela; y la profundización

de la crisis política y socioeconómica en Haití, con graves impactos para la seguridad alimentaria de su población. Por otra parte, según se recoge en *Alerta 2020*, 4,3 millones de personas estaban en situación de necesidad de ayuda humanitaria en 2019 en Camerún, lo que suponía un incremento del 30% con respecto a 2018. En RDC, 15,9 millones de personas se enfrentaban en 2019 a una grave inseguridad alimentaria, mientras en relación a la epidemia de ébola en el este del país, la OMS la declaró en julio como epidemia de salud pública global. En algunos casos disminuyó la población en necesidad de asistencia humanitaria, como Burundi, de 3,6 millones en 2018 a 1,8 en 2019.

Por otra parte, **los conflictos armados siguieron teniendo impactos específicos en grupos de población determinados, como los niños y niñas.** El informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados, publicado en 2019 y que analiza el año 2018, identificó un incremento alarmante de violaciones graves de los derechos humanos de niños y niñas por parte de agentes estatales y fuerzas internacionales con respecto al año anterior, mientras las atribuidas a actores no estatales se mantuvo estable. Asimismo, verificó un umbral de muertes y mutilación de menores en 2018 sin precedentes desde que la ONU se dotó de un mecanismo de vigilancia y de elaboración de informes sobre menores y conflictos tras la Resolución 1612(2005). En Afganistán los casos verificados de niños y niñas fallecidos y mutilados en 2018 ascendieron a 3.062. El balance de fallecidos (927) fue señalado como el más elevado registrado nunca en el país. En Siria se verificaron en 2018 un total de 1.106 muertes de niños y niñas y 748 casos de mutilaciones de menores. En Yemen, el balance de muertes verificadas de menores ascendió a 576 y las de mutilaciones a 1.113 niños y niñas. El informe también verificó otras violaciones de derechos humanos a menores, como el reclutamiento forzado y utilización de niños y niñas –Somalia fue el país con mayor número de casos, 2.300, seguido de Nigeria, con 1.947–; ataques contra escuelas y hospitales; violencia sexual contra menores; y secuestros –sobresaliendo también Somalia, con 2.493 casos verificados.

Asimismo, actores armados estatales y no estatales continuaron perpetrando violencia sexual y de género contra población civil, mujeres y niñas de manera

Mapa 1.2. Número de personas desplazadas internas al finalizar 2018



Fuente: IDMC, *GRID 2019: Global Report on Internal Displacement*, mayo de 2019.

significativa. En 2019 la ONU confirmaba un año más que seguía siendo difícil determinar la prevalencia exacta de la violencia sexual relacionada con los conflictos, pero que los datos de 2018 mostraban que su uso continuaba siendo parte de las estrategias más generales en los conflictos, y que afectaba especialmente a las mujeres y las niñas. El informe de 2019 del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos, que cubría el periodo de 2018, contenía información verificable relativa a 19 países, que implicaba a más de 50 actores. La mayor parte de los perpetradores de la violencia sexual en esos casos eran actores no estatales, pero también se verificó que habían perpetrado violencia sexual fuerzas armadas nacionales, policía u otros actores de seguridad de Myanmar, Siria, RDC, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. El informe identificaba varias claves relativas a la violencia sexual y la conflictividad. Entre ellas, los nexos entre violencia sexual, trata de personas y terrorismo; así como la interrelación entre violencia sexual vinculada a conflictos, asesinatos y explotación de recursos naturales como motor y resultado de desplazamiento forzado; y la prevalencia de la violencia sexual en contextos de violencia política y electoral. Por otra parte, hombres y niños también fueron víctimas de violencia sexual en países en conflicto como Burundi,

Actores armados estatales y no estatales continuaron perpetrando violencia sexual y de género contra población civil en contextos de conflicto

Siria, RDC, RCA y Sudán del Sur, principalmente en aldeas y centros de detención. Asimismo, según el informe sobre mujeres, paz y seguridad del secretario general de la ONU, presentado en octubre de 2019, una quinta parte de las mujeres refugiadas o desplazadas sufría violencia sexual. El análisis sobre las dinámicas de violencia en 2019 recogido en *Alerta 2020* puso de manifiesto la continuación de esta vulneración de derechos humanos. Entre otros casos, activistas somalíes denunciaron que la violencia sexual y de género continuaba siendo generalizada y silenciada en el país. En otros países, como Burundi, RDC o Yemen, también se denunciaron en 2019 casos de violencia sexual.

Los conflictos armados siguieron siendo causa de desplazamiento forzado de población. Según las cifras del informe anual de ACNUR publicado a mediados de 2019, a finales de 2018 había en el mundo 70,8 millones de personas desplazadas forzosamente. De ese total, 41,3 millones eran personas desplazadas internas, 25,9 millones eran refugiadas (20,4 bajo mandato de la ONU y otras 5,5 bajo mandato de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA) y 3,5 millones eran solicitantes de asilo. Del total de población desplazada forzosa, 13,6 millones eran nuevos desplazados –10,8

nuevos desplazados internos y 2,8 nuevos refugiados y solicitantes de asilo. **El 57% de la población refugiada procedía de tres países, principalmente de Siria (6,7 millones), Afganistán (2,7) y Sudán del Sur (2,3). Les seguían Myanmar (1,1) y Somalia (900.000).** Además, aproximadamente la mitad de la población refugiada tenía menos de 18 años. Líbano fue un año más el país con mayor porcentaje de población refugiada respecto a la población total del país (uno de cada seis habitantes, igual que en 2017). En términos absolutos, los principales países de acogida eran Turquía (3,7 millones, frente a los 3,5 de 2017), Pakistán (1,4, como el año anterior), Uganda (1,2, con cierto descenso respecto a los 1,4 de 2017), Sudán (1,1, frente a los algo más de 900.000 del año anterior) y Alemania (1,1 millones, por encima de los 970.400 de 2017). Asimismo, la organización International Displacement Monitoring Centre (IDMC) señaló en su informe global, publicado en 2019, que **las 41,3 millones de personas desplazadas internas a finales de 2018 suponían un incremento de 1,4 millones respecto a 2017. El balance lo encabezaba Siria (6,1 millones), seguido de Colombia (5,8), RDC (3,1), Somalia (2,6), Afganistán (2,6), Yemen (2,3), Nigeria (2,2), Etiopía (2,1), Sudán (2,1) e Iraq (2).** Asimismo, según las cifras de mitad de 2019 del IDMC, entre enero y junio de 2019 hubo 3,8 millones de nuevos desplazados internos a causa de los conflictos y la violencia (cifra que se elevaba a 10,8 millones si se suman las causas de conflictos y de desastres). De los 3,8 millones en la primera mitad del año, la mayor cifra correspondía a Siria, con 804.000 nuevas personas desplazadas internas, seguida de RDC (718.000), Etiopía (522.000), Yemen (282.000) y Afganistán (213.000).

Según la ONU, una quinta parte de las mujeres refugiadas o desplazadas sufría violencia sexual

El análisis de la evolución de los conflictos en 2019 puso de manifiesto la continuación de las tendencias sobre el impacto de la conflictividad armada en términos de desplazamiento forzado, tanto interno como externo. Entre ellos, en Camerún más de medio millón había huido de sus hogares a causa de la violencia, según cifras de la ONU. La ONG humanitaria Norwegian Refugee Council la calificó como la principal crisis olvidada de desplazamiento, después de RDC y RCA. Asimismo, al finalizar 2019, más de 200.000 estaban en situación de desplazamiento interno y más de 138.000 se habían refugiado en países vecinos. Además, en torno a 900.000 personas se habían desplazado forzosamente a causa del conflicto en la Región Sahel Occidental. En Somalia, entre enero y noviembre, la sequía y la conflictividad desplazó a más 300.000 personas, que se sumaban a los 2,6 millones de desplazados internos. En RDC, en 2019 la cifra acumulada de desplazamiento interno se elevaba a los 4,8 millones de personas. A su vez, Sudán del Sur constituía en 2019 la mayor crisis de personas refugiadas en África –con 2,21 millones de personas refugiadas en países vecinos, el 62% de los cuales niños y niñas– y la tercera en el mundo, por detrás de Siria

y Afganistán. En Libia se alertó de desplazamientos de entre 120.000 y 200.000 personas desde abril. En Afganistán, en 2019, casi 350.000 personas se desplazaron internamente por el conflicto, según señaló la ONU. En Myanmar, alrededor de 100.000 personas se desplazaron en el estado de Rakhine entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019. En 2019, Siria continuaba a la cabeza de los países con mayor población desplazada del mundo, tanto interna como fuera de sus fronteras. Al finalizar el año, la ofensiva de Rusia y el régimen sirio sobre el feudo opositor de Idlib había provocado el desplazamiento forzado de 200.000 personas en tan solo dos semanas.

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Austral

Mozambique (Norte)	
Inicio:	2019
Tipología:	Sistema, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ), mercenarios rusos (Grupo Wagner)
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, padece desde finales de 2017 un conflicto armado protagonizado por el autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ). La organización armada de carácter yihadista hizo su primera aparición en octubre de 2017 atacando tres puestos policiales en el distrito de Mocimboa de Praia, provincia de Cabo Delgado. Desde ese momento, Cabo Delgado ha sido el epicentro de un aumento en la actividad violenta en el país. Si bien algunos informes aseguran que combatientes de ASWJ han recibido capacitación en Tanzania y Somalia, lo cual ha dado lugar a que se les apode localmente como al-Shabaab, en alusión al grupo yihadista somalí, no se han acreditado vínculos significativos con las redes yihadistas internacionales. Las causas de la eclosión de la violencia remiten más bien a factores vinculados con los agravios y la marginación de la minoría musulmana de Mozambique (22 % de la población), así como a la extrema pobreza de la que es la provincia más subdesarrollada del país. Los índices de pobreza en Cabo Delgado contrastan con su enorme potencial económico debido a sus importantes reservas de gas natural, lo cual ha generado importantes inversiones en la zona que no han contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza de su población. Desde finales de 2017, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas han desarrollado una política de seguridad que ha incrementado la represión y represalias en la zona, incluyendo en nuevos factores detonantes de la violencia. En 2018, el grupo intensificó su uso de la violencia contra civiles y amplió el alcance de sus operaciones.

Durante el año, la violencia en la provincia norteña de Cabo Delgado se acentuó debido a las acciones armadas de combatientes presuntamente yihadistas, vinculados con la organización Ahlu Sunnah Wa -Jama (ASWJ). Según los datos facilitados por ACLED, durante el 2019 (hasta el 6 de diciembre) se produjeron en la provincia de Cabo Delgado 689 muertes producidas por la violencia, superando con creces las 126 registradas durante el 2018 o las 119 en 2017, año del estallido de la insurgencia. Si bien desde el inicio de la rebelión no se habían registrado ataques dirigidos contra infraestructuras de gas natural o contra empresas extractivas vinculadas al sector, 2019 se inició con una emboscada a un convoy de la empresa de gas estadounidense Anadarko, y diferentes ataques que costaron la vida al menos a 11 personas, resultando heridas otra veintena. En el mes de junio, por primera vez desde que se inició la violencia en la región, el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) anunció públicamente su presencia en el área, aunque los analistas y las fuerzas de seguridad mozambiqueñas negaron evidencias de la presencia efectiva del grupo en la región. Tras el anuncio, durante el mes de julio se produjeron diferentes ataques dirigidos contra destacamentos militares en la región que fueron reivindicados bajo el nombre de ISIS. Felipe Nyusi, presidente de Mozambique, se reunió con su homólogo Vladimir Putin en Rusia, firmando ambos países acuerdos de energía y seguridad. Tras dichos acuerdos, diferentes informes señalaron la presencia en el país de unos 200 mercenarios rusos del Grupo Wagner, quienes se habrían unido a las fuerzas de seguridad mozambiqueñas en el combate a la insurgencia en Cabo Delgado. Si bien Rusia negó la presencia de militares rusos en el terreno, ISIS se atribuyó la muerte de al menos 20 miembros de las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique (FADM) así como de cinco mercenarios rusos en una emboscada realizada en la región de Namala, Cabo Delgado, en octubre. Posteriormente, ISIS volvió a atribuirse un nuevo ataque realizado en noviembre contra tropas mozambiqueñas y mercenarios rusos. El año concluyó con el mantenimiento de la violencia en la provincia de Cabo Delgado, registrándose en el último mes más de una docena de ataques contra la población civil y las fuerzas de seguridad mozambiqueñas que dejaron un balance estimado de unos 50 civiles y combatientes muertos. La violencia no sólo se concentró en el norte de Mozambique, sino que también se registraron episodios en el sur de Tanzania, como el que se produjo a mediados de noviembre en donde al menos seis personas fueron asesinadas y otras siete resultaron heridas en un ataque registrado en la aldea de Ngongo, presuntamente por miembros de ASWJ. A raíz de dicho episodio los Ministerios de Defensa mozambiqueño y tanzano iniciaron conversaciones para mejorar la seguridad en sus áreas fronterizas.

Se incrementó notablemente la violencia en el norte de Mozambique debido a la presencia de grupos armados autodenominados yihadistas

África Occidental

Camerún (Ambazonia/North West y South West)	
Inicio:	2018
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Camerún, autoproclamado Gobierno Interino de Ambazonia, grupos armados ADF, SCACUF, SOCADEF y SCDF y decenas de milicias menores
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico (territorio que actualmente corresponde a las provincias de North West y South West) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una re-unificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. El Gobierno arrestó las principales figuras del movimiento federalista en 2017, lo que dio alas a sectores favorables a la lucha armada para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglófonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se produjo una escalada de las actividades insurgentes.

El conflicto armado que padecen las regiones de mayoría anglófona del país se agravó durante el año, y organizaciones como el think tank International Crisis Group (ICG) destacaron la muerte de al menos 1.850 personas desde el inicio del conflicto en octubre de 2017, aunque otras fuentes elevaron esa cifra a más de 3.000 personas. A su vez, la ONU señaló que al menos 530.000 personas habían

huido de sus lugares de origen como consecuencia de la violencia, y que al menos 4,3 millones de personas se encontraban en necesidad de ayuda humanitaria,

cifra que se había incrementado en un 30% respecto el 2018. Se produjo una escalada de secuestros en la región anglófona, focalizados en políticos locales opositores, activistas de movimientos separatistas, soldados, policías y población civil en general. El líder del partido opositor Social Democratic Front (SDF), Ni John Fru Ndi, fue secuestrado dos veces durante el año. En las elecciones presidenciales de octubre de 2018, boicoteadas por parte de la oposición y por el movimiento separatista, Paul Biya revalidó su mandato y en enero anunció su Gobierno, promocionando sectores considerados “duros”, y nombró como nuevo primer ministro al anglófono Dion Ngute. La organización Norwegian Refugee Council (NRC) denunció que la crisis de Camerún era la principal crisis de desplazamiento olvidada del momento, tras RDC y RCA. Human Rights Watch (HRW) señaló en un informe⁷ en marzo que entre octubre de 2018 y febrero de 2019, al menos 170 civiles habrían muerto en 220 incidentes en las dos regiones anglófonas como consecuencia de los enfrentamientos entre los grupos separatistas y el Gobierno, y otros 81 miembros de los cuerpos de seguridad habrían muerto en el transcurso de las operaciones. El informe detalló abusos cometidos por las Fuerzas Armadas camerunesas, que fueron desmentidas por el Gobierno. Además, destacó el aumento de las acciones violentas de las fuerzas de seguridad en torno a los centros de salud y contra el personal médico, generando ello una reducción drástica de la afluencia de civiles debido a la inseguridad. En este sentido, el Gobierno acusó a la insurgencia de ocupar los colegios para usos bélicos y la insurgencia acusó al Gobierno de haber incendiado más de 120 escuelas. En los dos últimos años la insurgencia ha atacado numerosos colegios, en algunos casos incluso secuestrando a estudiantes y profesorado. En julio HRW y AI condenaron los graves crímenes cometidos por ambas partes en el conflicto, como ejecuciones extrajudiciales y torturas contra políticos, miembros de partidos separatistas y civiles. Además, en julio centenares de presos (separatistas y opositores políticos) se amotinaron en la prisión central de Yaoundé (a los que se sumaron presos comunes alcanzando a más de 1.500 personas amotinadas) exigiendo mejoras de las condiciones carcelarias, poner fin a los juicios arbitrarios, a las torturas y al hacinamiento. Posteriormente también se produjo un motín de presos separatistas en la prisión de Buea, la capital de la provincia de South West. HRW confirmó el 20 de agosto la detención y tortura de más de 100 presos, tras el motín en la prisión de Yaoundé. Analistas han señalado que las prisiones se han convertido en “incubadoras políticas” por la detención de opositores del partido MRC y de combatientes de Boko Haram. Más de 350 activistas políticos del MRC se encuentran detenidos en las cárceles camerunesas, señaló el MRC en junio. Los motines han sido recurrentes en los últimos

El conflicto armado que padecen las regiones de mayoría anglófona de Camerún ha causado entre 1.850 y 3.000 víctimas mortales desde el inicio del conflicto de 2017

años. El 20 de agosto un tribunal militar sentenció a cadena perpetua a uno de los principales líderes del movimiento separatista en el país, Julius Sisiku Ayuk Tabe, junto a otras nueve personas, decisión que analistas consideraron que podía inflamar todavía más la rebelión. Hubo movilizaciones y huelgas en regiones de mayoría anglófona de rechazo a la sentencia. Considerado un moderado, Ayuk Tabe se autoproclamó primer presidente de Ambazonia el 1 de octubre de 2017, y fue detenido junto a otros 46 partidarios en enero de 2018 en la capital nigeriana, Abuja, y transferido a Camerún. Un tribunal nigeriano en marzo de 2019 consideró ilegal la extradición y ordenó al Gobierno federal nigeriano que exigiera el retorno de los deportados y su indemnización. Sin embargo, no se tuvo noticia de que Nigeria diera cumplimiento a la decisión judicial.

Conforme la situación se ha ido deteriorando en las regiones anglófonas, se ha producido una creciente presión de la comunidad internacional. EEUU y la UE solicitaron la

liberación del líder opositor Maurice Kamto (detenido en enero) y la de otros 150 partidarios del partido opositor MRC, e hicieron un llamamiento a las autoridades a incrementar los esfuerzos para poner fin a la violencia y promover la negociación en las regiones separatistas anglófonas. El Gobierno manifestó su indignación por la injerencia en sus asuntos internos. En paralelo, se registraron protestas progubernamentales durante la visita en marzo del secretario de Estado adjunto para asuntos africanos de EEUU, Tibor Nagy. La alta representante de la política exterior de la UE, Federica Mogherini, el 18 de abril hizo un llamamiento a las partes a iniciar conversaciones como la única vía para alcanzar una solución sostenible. El 13 de mayo se discutió por primera vez en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU explícitamente sobre el conflicto, aunque países como Guinea Ecuatorial (en nombre de los tres países africanos presentes en el Consejo), Rusia y China alertaron sobre la intromisión en los asuntos internos cameruneses y sobre la politización de la situación humanitaria. En este sentido, el presidente Paul Biya inició en la segunda parte del año una serie de concesiones de cara a apaciguar la presión interna e internacional. En septiembre anunció su intención de celebrar un diálogo nacional para poner fin al conflicto, que tuvo lugar entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre pero que fue boicoteado por los movimientos separatistas. Paul Biya anunció al término del diálogo nacional la liberación de 333 presos, entre los cuales, Maurice Kamto, nueve meses después de su encarcelamiento por boicotear y cuestionar las elecciones presidenciales de octubre de 2018, en las que Paul Biya revalidó su mandato. En diciembre el Parlamento camerunés aprobó algunas de las recomendaciones del diálogo nacional, relativas a cambios en el estatus político de las dos regiones de mayoría anglófona, consideradas insuficientes por numerosos sectores.

7. HRW, “Cameroon: New Attacks on Civilians By Troops, Separatists”, 28 de marzo de 2019.

Malí ⁸	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuareg designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país.

La violencia se incrementó y extendió en gran parte del territorio maliense debido al mantenimiento de las acciones armadas perpetradas por grupos de corte yihadista en el norte del país, así como por el incremento de enfrentamientos entre milicias comunitarias de las comunidades fulani, dogon y bambara en la región central de Mopti y algunas partes de la región sur del país.

Según datos del centro de investigación ACLED, durante 2019 se registraron un total de 1.702 muertes producto de la violencia armada en el país. Asimismo, en materia de desplazamiento forzoso, según datos de la ACNUR, al finalizar el año 138.659 personas se encontraban refugiadas en países vecinos, mientras que otras 201.429 se hallaban en situación de desplazamiento interno. El año comenzó con diferentes ataques contra fuerzas de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país, la MINUSMA, resultando muertos dos

efectivos de Sri Lanka en un ataque registrado en Mopti, así como otros diez soldados chadianos en un ataque a un campamento de la ONU en Aguelhok, en el norte de Malí, resultando heridos al menos otros 25. Este último ataque representa una de las peores agresiones padecida por la MINUSMA, y fue reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM) – presuntamente vinculado con la red de al-Qaeda– en respuesta al reinicio de las relaciones diplomáticas de Chad con Israel. A su vez, en Mopti, región central del país, se registró otro ataque cometido por presuntos miembros de la comunidad dogon contra miembros de la comunidad fulani a los que acusan de apoyar a los grupos yihadistas, dejando un balance de 37 civiles asesinados. En febrero prosiguieron las acciones armadas reivindicadas por el GSIM contra diferentes objetivos militares, dejando un balance de cinco soldados franceses asesinados en una emboscada a una patrulla gala en Tombuctú, otros cinco soldados malienses fallecidos en otra emboscada registrada en Mopti, y otros cinco combatientes de las fuerzas rebeldes de Azawad (MSA y GATIA) muertos en Menaka. A su vez, a finales de febrero, una operación conjunta del Ejército maliense y la misión francesa Barkhane, causó la muerte de 15 presuntos miembros del grupo yihadista Katiba Macina cerca de Dialloubé. En el mes de marzo la violencia se incrementó sustancialmente después de un ataque a principios de mes contra miembros de la comunidad fulani en el centro del país que dejó un balance de al menos 100 personas asesinadas. Semanas después, como respuesta a dicho evento, el GSIM atacó una base del Ejército maliense en el centro del país, con un saldo de al menos 23 soldados muertos. El incremento de la inseguridad dio pie a importantes movilizaciones de protesta en el país que generaron la dimisión del primer ministro maliense, Soumeylou Boubeye Maiga, así como de todo el Ejecutivo nacional, forzando al Gobierno presidido por Ibrahim Boubacar Keïta a nombrar un nuevo Ejecutivo bajo el nuevo primer ministro Boubou Cissé, anteriormente ministro de Economía y Finanzas. Posteriormente, el 23 de marzo, una comunidad de pastores fulani en la región de Mopti volvió a sufrir un ataque por miembros del grupo dogon, dejando un balance de unas 160 personas asesinadas. Hasta ese momento, y desde el inicio del estallido de la violencia en el país en el año 2012, se habían registrado unas 600 personas fulanis asesinadas debido a las disputas intercomunitarias con las comunidades dogon, según datos de la MINUSMA. De ellos, al menos 488 muertes de miembros de las comunidades fulani se habrían producido desde enero de 2018, siendo 63 las muertes ocasionadas por miembros de dicha comunidad en el mismo periodo. El incremento de la inestabilidad y la violencia en la región central del país en los primeros meses de 2019 habría producido, según datos del Consejo Noruego para los Refugiados, el desplazamiento forzado interno de 133.000 personas a finales de abril.

8. En pasadas ediciones de *Alerta!* este caso era identificado como “Malí (norte)”, pero se ha cambiado la denominación por la ampliación de las dinámicas de violencia a otras áreas del país.

La intensidad de la violencia en el país se mantuvo en el segundo trimestre del año, en donde sobresalieron algunos episodios. **El 11 abril se produjo la primera aparición formal en el país del grupo vinculado al Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)**, quien se atribuyó un ataque contra el Movimiento para la Salvación de Azawad (MSA) en el noreste de Malí. El 16 de abril el presidente Keita anunció un incremento de tropas malienses, así como de la MINUSMA y de la operación Barkhane en el centro del país. Más tarde, y debido al incremento de la inestabilidad en la región central de Mopti, traducido en una nueva masacre el 10 junio en una aldea que dejó un balance de entre 35 y 95 personas asesinadas –muchos de ellos niños y niñas–, el Gobierno maliense anunció la destitución del gobernador de la región. Días después, el 17 de junio se volvió a registrar otra masacre contra pueblos dogon en la región, con un nuevo balance de 41 personas asesinadas. Asimismo, otras 23 personas perdieron la vida en diferentes ataques producidos en las comunidades de Bidi, Sankoro y Saran en el centro de Malí el 30 de junio. De forma paralela, el Gobierno puso en marcha un proceso de desarme de las milicias comunitarias de autodefensa, y activó un proceso de diálogo intercomunitario entre miembros de las comunidades dogon y fulani para poner fin a la escalada de violencia. Como resultado, el 1 de julio ambos grupos firmaron un acuerdo para poner fin a la violencia y trabajar por la paz. A su vez, la ONU anunció la renovación del mandato de la MINUSMA en el país, que ampliará su presencia en la región central.

Si bien la apertura de diferentes espacios e iniciativas de negociación de paz en el centro del país redujo la incidencia de los enfrentamientos intercomunitarios en el tercer trimestre del año, se siguieron registrando algunos de ellos. A su vez, también se mantuvieron las acciones armadas de los grupos de orientación yihadista en el país, así como en diferentes puntos de Burkina Faso y Níger. En dos ataques a bases militares de la fuerza militar conjunta Sahel G5 en Boulkessy y Mondoro en el centro de Malí, registrados entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre, un total de 40 soldados malienses fueron asesinados según datos del Gobierno, cifras que el grupo GSIM ascendía a al menos 85. Posteriormente el Ejército maliense anunció la muerte de medio centenar de combatientes yihadistas en diferentes ataques aéreos. En el mes de noviembre, durante diferentes ataques atribuidos al GSIM, alrededor de 100 soldados malienses perdieron la vida, así como unos 17 combatientes yihadistas. Nuevamente el incremento de la violencia generó importantes protestas ciudadanas en el país que denunciaron la incapacidad de las Fuerzas Armadas para contener la violencia, así como demandaron la retirada del país de las fuerzas extranjeras, en particular de la misión Barkhane y las fuerzas de la MINUSMA. El 4 de noviembre el presidente Keita anunció un cambio de estrategia de las

Malí padeció un incremento de la violencia debido al accionar de grupos de corte yihadista en el norte del país y a enfrentamientos intercomunitarios en la región central de Mopti

fuerzas de seguridad, asegurando que pasarían de una estrategia defensiva a una ofensiva. El año acabó con la continuación de los enfrentamientos intercomunitarios en la región de Mopti, así como con una intervención francesa en la zona el 21 de diciembre que dejó un saldo oficial de 40 muertos, presuntamente miembros del grupo yihadista Katiba Macina.

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Boko Haram-ISWAP, Boko Haram-Abubakar Shekau, milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se regionalizó, afectando también a los países fronterizos con el Lago Chad: Chad, Níger y Camerún.

El conflicto en el nordeste de Nigeria y en las zonas colindantes de la región del Lago Chad persistió con virulencia a pesar de las operaciones militares en marcha, e incluso algunas fuentes destacaron un **incremento de las acciones de Boko Haram (BH)**. La violencia durante 2019 continuó afectando principalmente a Nigeria y, en concreto, al estado de Borno, y en menor medida, los estados de Yobe y Adamawa, con incidentes que incluyeron ataques y atentados de las facciones de BH contra objetivos civiles, como mercados y campos de desplazados; ataques contra bases militares; y enfrentamientos que causaron víctimas mortales y desplazamiento forzado. Se habría producido un incremento de las acciones de las facciones de BH Islamic State West Africa Province (ISWAP, creada en 2016) y también, aunque en menor medida, por la facción de Abubakar Shekau, ambas aliadas a ISIS. **Diversos análisis a raíz de la propaganda de ISIS en marzo sugirieron que el grupo estaría buscando un mayor protagonismo**

y ampliación de sus actividades en Nigeria tras las pérdidas de Siria e Iraq, y estaría haciendo un llamamiento global a apoyar y sumarse a la Provincia de África Occidental.

Fuentes periodísticas señalaron que ISIS habría también reemplazado a su líder Abu Musab al-Barnawi sin dar detalles de la sucesión, derivados de una crisis en el seno de ISWAP en la que comandantes de ISWAP le habrían acusado de tener vínculos con sectores moderados de Malí, aunque era improbable que fuera ejecutado ya que al-Barnawi es el hijo del fundador de BH Muhammad Yusuf, venerado por todas las facciones de BH, incluida la de su antiguo lugarteniente, Abubakar Shekau. El ICG señaló un incremento de atentados cometidos mediante ataques suicidas y minas terrestres perpetrados por la facción de Shekau. Las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo por la Fuerza Multinacional (MNJTF), incluyendo bombardeos aéreos de supuestas bases de BH, también causaron la muerte de centenares de combatientes. El balance de las acciones de BH, así como en el marco de enfrentamientos entre el grupo y las fuerzas de seguridad desde el inicio del conflicto en 2011 es de 36.222 víctimas mortales, según la base de datos de Nigeria Security Tracker (NST). El número de víctimas mortales en los estados de Borno, Yobe y Adamawa en 2019 aumentó a 2.607, frente a los 2.243 en 2018 y 1.907 en 2017. CICR afirmó en septiembre que 22.000 personas, en su mayoría menores, se encuentran desaparecidas como consecuencia del conflicto, la mayor cifra que CICR tiene registrada a nivel global. En octubre ISIS reivindicó su primera acción letal en el noroeste de Nigeria, cuando sus militantes procedentes de Níger penetraron en el estado noroccidental de Sokoto y atacaron a miembros del Ejército, causando un número indeterminado de víctimas mortales y heridos.

Camerún siguió siendo el segundo entre los países más afectados por la crisis de la cuenca del Lago Chad, después de Nigeria: 1,9 millones de personas o una de cada dos de las personas que vivían en la región de Extreme Nord necesitaron asistencia humanitaria, lo que representa más de un tercio del total de casos del país en 2019. Según la ONU, la violencia ha desplazado a más de 270.850 personas desde el comienzo de la crisis. En esa región también había más de 108.600 refugiados nigerianos. En Chad, hubo un resurgimiento de los ataques armados y la inseguridad en la cuenca del lago Chad que llevó a miles de civiles a huir y buscar refugio. Se cree que, desde principios de 2019, más de 47.000 personas habían sido desplazadas en la región chadiana de Lac. Esa cifra incluye a refugiados que llegaron de Nigeria, repatriados de Níger y población chadiana que había sido desplazada y procuraba obtener seguridad y asistencia. En la provincia de Lac se cerraron temporalmente 49 escuelas en 2019 debido a la inseguridad, lo que afectó a más de 12.000

menores. Cabe también destacar el incremento de la gravedad de la situación humanitaria y de seguridad en la región nigerina de Diffa, según remarcó OCHA, donde el aumento de ataques a civiles puede poner de manifiesto un cambio de táctica por parte de los grupos armados, ya que su principal objetivo sería la población más vulnerable. En Níger, solo en marzo murieron 88 civiles como consecuencia de las acciones de Boko Haram, y más de 18.000 personas se vieron obligadas a huir.

Por otra parte, en el marco de iniciativas de construcción de paz para revertir la situación, en junio el gobernador del estado de Borno instó al Gobierno federal a complementar la campaña militar contra BH con estrategias no militares. El 20 de junio aseguró la liberación de civiles secuestrados por BH en enero; el Gobierno afirmó que la liberación estaba en línea con los esfuerzos para mantener vías de comunicación abiertas con la insurgencia. En este sentido, los gobernadores de los seis estados del noreste se reunieron el 5 de noviembre en Maiduguri por primera vez e instaron al Gobierno federal a implicarse en un proceso de diálogo con la insurgencia para facilitar su rendición.⁹ En la reunión también participaron miembros de la Asamblea Nacional, de los parlamentos estatales, altos cargos del Ejército y de otros cuerpos de seguridad. Además, también solicitaron al Gobierno un incremento de recursos para combatir la insurgencia, que la North East Development Commission asista a los gobernadores y los cuerpos de seguridad de los estados de la zona con más logística y apoyo, así como el dragado del canal del Lago Chad para permitir que los cuerpos de seguridad marítimos puedan actuar con agilidad, entre otras cuestiones.

Región Sahel Occidental	
Inicio:	2018
Tipología:	Sistema, Identidad, Recursos Internacional
Actores:	Burkina Faso, Malí, Níger, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), Macina Liberation Front (FML), Ansarul Islam, otros grupos yihadistas
Intensidad:	3
Evolución:	↑

9. Sahara Reporters, "Boko Haram: North-East Governors Urge Buhari Regime To Dialogue With Terrorists", 6 de noviembre de 2019, <http://saharareporters.com/2019/11/06/boko-haram-north-east-governors-urge-buhari-regime-dialogue-terrorists>

Síntesis:

La región occidental del Sahel (norte de Malí, norte de Burkina Faso y noroeste de Níger) se ve afectada por una situación de inestabilidad creciente que tiene un origen multicausal. Se combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel y la marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la región, entre otros factores. Esta marginación se manifestó en las rebeliones tuareg que tuvieron lugar en los años sesenta, en los años noventa y, más recientemente, entre 2007 y 2009, cuando se configuraron sendas rebeliones contra los respectivos Gobiernos de Níger y Malí que pretendían alcanzar un mayor grado de autonomía en ambos países y revertir la pobreza y el subdesarrollo de la región. En el caso de Malí se produjo un resurgimiento de estas demandas en 2012, espoloadas por la caída del régimen de Gaddafi en Libia en 2011¹⁰. A todo esto se une la expansión de las actividades de los grupos armados de Malí a la región fronteriza con Níger y Burkina Faso conocida como Liptako-Gourma, relacionada con la situación de inestabilidad derivada de la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, su fragmentación y configuración en otros grupos armados de corte similar, algunos alineados a al-Qaeda y otros a ISIS, que en la actualidad operan y se han expandido por la región. Esta expansión ha contribuido a una mayor desestabilización de la zona y a la configuración de diferentes iniciativas militares transfronterizas regionales e internacionales para intentar controlar esta situación, que también han contribuido a internacionalizarla. A todo este panorama se suman las vinculaciones del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de la expansión de las actividades del grupo Boko Haram a raíz de la intervención militar transfronteriza.

Durante el 2019 la violencia en la zona del Sahel Occidental se extendió debido a las acciones armadas de diferentes grupos que presentan agendas de corte yihadista, vinculados con las redes de al-Qaeda e ISIS, así como a diferentes milicias comunitarias, afectando especialmente las regiones fronterizas del este de Malí, el noreste de Burkina Faso y el oeste de Níger –conocida como la región de Liptako-Gourma. La escalada de la violencia e inestabilidad, principalmente generada a partir de las acciones de los grupos armados Frente de Liberación de Macina (FML), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Ansaroul Islam y Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), según denunció Mohamed Ibn Chambas, Representante Especial de la ONU y Jefe de la Oficina de la ONU para África Occidental y el Sahel (UNOWAS), tuvo durante el 2019 un aumento sin precedentes en la región, generando más de 4.000 muertes durante el año. Ello indica que la violencia se habría multiplicado por cinco desde el año 2016, cuando se registraron 770 muertes vinculadas al conflicto en la zona.¹¹ A su vez, la violencia ha incidido en el desplazamiento forzoso de personas, con alrededor de 900.000 hasta finales de año, de las cuales medio millón se registraron en

La violencia en la región de Liptako-Gourma, en la zona de Sahel Occidental, se multiplicó por cinco desde el año 2016, registrando en 2019 alrededor de 4.000 víctimas mortales

Burkina Faso solo en el año 2019 (quintuplicando los datos de enero del 2019). A principios de año la OCHA alertó además de que **1,2 millones de personas en Burkina Faso se encontraban en situación de necesidad de ayuda humanitaria**. El deterioro de la situación de seguridad en la región generó que en diciembre de 2018 el Gobierno burkinés decretase el estado de emergencia en varias provincias del norte del país, extendiéndose posteriormente durante todo el año 2019. Una situación similar se registró en Níger, cuyos 10 departamentos fronterizos con Malí y Burkina Faso se encontraban en estado de emergencia.

En lo que respecta a los episodios de violencia más significativos registrados durante el año, a principios de febrero el Ejército burkinés anunció la muerte de 146 yihadistas en el norte del país, aunque las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y el Movimiento Burkinabe por los Derechos del Hombre y del Pueblo (MBDHP) denunciaron que muchas de las muertes se corresponden a civiles de la zona. En mayo, el ISGS se atribuyó la muerte de 28 soldados nigerinos en una emboscada en la región occidental de Tillaberi, cerca de la frontera con Malí. A principios de julio, el ISWAP se atribuyó el ataque realizado contra un campamento del Ejército en Inates, en el cual 18 soldados nigerinos fueron asesinados. El 20 de agosto, en otro ataque a una base militar burkinesa en Koutougou, cerca de la frontera con Malí, **24 soldados resultaron muertos en lo que representó el asalto más mortífero registrado contra las Fuerzas Armadas de Burkina Faso**. En el mes de octubre se registraron en Burkina Faso múltiples episodios de violencia que dejaron un balance aproximado de al menos 151 personas asesinadas. El 6 de noviembre, un ataque producido en la provincia burkinesa de Gourma contra un convoy que escoltaba cinco autobuses de trabajadores locales de la empresa canadiense Semafo, dedicada a la extracción minera de oro, dejó un balance de 39 personas asesinadas. También, el 3 de noviembre, cuatro personas, entre ellas Oumarou Dicko, miembro del Parlamento de Burkina Faso, fueron asesinados en una emboscada en el área de Gaskinde, representando la **primera vez que un parlamentario ha sido asesinado en el**

conflicto. Durante el mes de noviembre, JNIM, grupo vinculado a Al Qaeda, anunció la captura de un cuartel militar en Kaya y otro en Kelbo, en territorio burkinés. Y en diciembre, militantes del ISGS atacaron un complejo militar en Ates, Níger, en donde al menos 128 personas perdieron la vida, entre ellos **71 soldados nigerinos, en lo que representa la pérdida más grande padecida por el Ejército de ese país en su historia**. A su vez, en otro ataque registrado en el norte de Burkina Faso vinculado con grupos yihadistas, al menos 42

10. Véase síntesis y resumen de Malí en este capítulo.

11. UN News, “‘Unprecedented terrorist violence’ in West Africa, Sahel region”. 8 de enero de 2020. Disponible en:

personas perdieron la vida, declarando el Gobierno tres días de luto nacional.

Como respuesta al incremento de la violencia, durante el año los gobiernos de los llamados **países del Sahel G5 (Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger)** mantuvieron diversos encuentros con el fin de hacer frente a la situación de inseguridad. El 5 de febrero, en una reunión en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, el Sahel G5 solicitó una cooperación de seguridad más estrecha entre el Sahel G5 y la ONU bajo el amparo del Capítulo 7 de la Carta de la ONU. A su vez, los líderes regionales del África Occidental anunciaron al final de la Cumbre de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), celebrada en el mes de septiembre en Burkina Faso –la cual contó con la participación extraordinaria de Mauritania y Chad– un plan de mil millones de dólares para combatir la violencia yihadista en la región. El plan, previsto para financiarse entre 2020 y 2024, contempla medidas para reforzar las operaciones militares de las naciones involucradas y las de las operaciones militares conjuntas en la región; contener las fuentes de financiación de los grupos yihadistas; un programa de inversión de desarrollo en las regiones frágiles; entre otras. La CEDEAO solicitó el apoyo financiero de la comunidad internacional, a quien responsabilizó de la crisis en la región debido a su intervención militar en Libia, la cual, desde su punto de vista, acabó por desestabilizar toda la región del Sahel. El 4 de noviembre el Gobierno francés anunció el despliegue de tropas terrestres en el área de las “tres fronteras” bajo la denominada operación “Bourgou IV”, que estará liderada por la operación “Barkhane” y contará también con tropas del Sahel G5. A finales de 2019, el Gobierno galo tenía desplegados en la región 4.500 soldados, mientras que la ONU, a través de la MINUSMA contaba con 13.000 efectivos de mantenimiento de paz en Malí, y la alianza regional Sahel G5 tenía aprobación para desplegar unas cinco mil tropas provenientes de Burkina Faso, Malí, Chad, Mauritania y Níger. El Gobierno alemán también reaccionó anunciando la posibilidad de incrementar la presencia de sus tropas en la región, en la actualidad compuestas por 1.100 soldados desplegados como parte de la misión de la ONU y la UE en Malí. Sin embargo, la presencia de las diferentes coaliciones internacionales militares (así como la presencia de EEUU a través del AFRICOM) no había dado muchos resultados en relación a la reducción de la violencia, siendo cuestionada por las poblaciones locales. El año acabó con el anuncio de cambio de la reunión prevista entre el Ejecutivo francés presidido por Emmanuel Macron y los líderes del Sahel G5 para valorar la implicación francesa en el apoyo a la lucha antiterrorista en la región, inicialmente planificada para celebrarse en París el 16 de diciembre, reagendada para el 13 de enero de 2020.

Durante el año las Fuerzas Armadas de Burkina Faso y Níger sufrieron los ataques más mortíferos registrados contra sus instituciones castrenses en el conflicto, que se saldaron con 24 y 71 soldados fallecidos respectivamente

Cuerno de África

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y kenianas presentes en el país), las tropas gubernamentales y EEUU (principalmente a través de operaciones aéreas) se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

Durante el año persistieron las acciones del grupo armado al-Shabaab, así como las tensiones entre el Gobierno Federal y los estados federados, en especial con Jubaland y Galmudug, relativas a la autonomía de decisión de las regiones respecto al Gobierno Federal. Esta injerencia del Gobierno Federal en los asuntos internos de los estados federales en formación escaló hasta el punto de que en noviembre los cuerpos de seguridad federales tomaron el control de las localidades de Guriel y Mataban (Galmudug) de la milicia sufí Ahlu Sunna wal Jama'a (ASWJ), grupo que acusaba al Gobierno de intentar manipular las

elecciones presidenciales. El Gobierno Federal desplegó tropas adicionales en la capital estatal Dhusamareb y el 25 de noviembre presentó el calendario electoral presidencial para el 17-23 de diciembre.

Al-Shabaab siguió siendo el principal responsable de los ataques contra instalaciones y funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad y restaurantes y hoteles. ACLED destacó que la cifra global de víctimas mortales como consecuencia de la violencia política en Somalia se elevó a 4.038 en el conjunto de 2019. En marzo y abril se registró un importante aumento de los ataques en Mogadiscio, donde casi todos los días hubo incidentes con artefactos explosivos improvisados, así como ataques con mortero y asesinatos selectivos. Solo en marzo hubo 77 ataques con este tipo de artefactos en todo el país. Se trató del mayor número registrado en un mes desde 2016. En lo concerniente al creciente uso de estas bombas, según el informe del secretario general de la ONU sobre el país de noviembre, entre el 1 de mayo y el 12 de octubre, en el país se registraron 99 ataques de este tipo contra el Ejército Nacional Somalí, frente a 83 en el mismo período de 2018. Esos ataques dejaron un saldo de 66 muertos y 110 heridos. A su vez, en ese mismo período, la AMISOM fue blanco de 73 ataques, que causaron 21 muertos y 34 heridos. Los ataques con morteros aumentaron durante el año, lo que puso de manifiesto la mayor capacidad de al-Shabaab para atacar blancos estratégicos con precisión y exactitud. Por otra parte, las actividades de las escisiones de al-Shabaab vinculadas a ISIS disminuyeron y prácticamente no se registraron incidentes en todo el año, ya que ISIS sufrió muchos de los ataques aéreos perpetrados por EEUU. En mayo el Consejo de Seguridad de la ONU decidió reducir AMISOM en 1.000 soldados, siguiendo el plan trazado en 2017 para que el Ejército somalí progresivamente asuma sus responsabilidades, pero la UA alertó de un previsible agravamiento de la situación en 2020 por la celebración de elecciones.

El aumento en 2019 del número de ataques aéreos de EEUU contra objetivos de al-Shabaab, en particular en las regiones de Lower Shabeelle y Lower Juba, provocó su dispersión, y el traslado de sus miembros de las zonas más remotas a los centros urbanos. Al afirmó que existían evidencias creíbles de al menos una veintena de víctimas mortales civiles como consecuencia de los ataques aéreos perpetrados por EEUU en los últimos dos años, y que el Pentágono no había llevado a cabo una investigación adecuada de estos casos. AFRICOM cuestionó la credibilidad de las evidencias. Las ofensivas de los cuerpos de seguridad en Lower Shabeelle permitieron recuperar ciudades que antes se encontraban en manos de al-Shabaab. Aunque al-Shabaab ha trasladado su presencia a

ACLED elevó a 4.038 las víctimas mortales en Somalia en 2019

Se produjo un incremento del uso de artefactos explosivos improvisados por parte de al-Shabaab que causaron decenas de víctimas mortales durante el año

otros lugares, ha seguido manteniendo una capacidad considerable para atacar las zonas recuperadas por el Gobierno. Si bien Mogadiscio siguió siendo el centro de acciones insurgentes, al-Shabaab siguió llevando a cabo operaciones en las regiones de Lower Shabeelle y Middle Shabeelle. Entre el 5 de mayo y el 3 de junio se produjeron un total de 228 incidentes durante el Ramadán; más que durante el Ramadán de 2017 y 2018. El Ramadán es un periodo en el que se ha constatado una escalada de la violencia recurrente en los últimos años, que se reduce en los meses posteriores de junio y julio, tal y como pasó en 2019. Un 35 % de los incidentes violentos se produjeron en la región de Banaadir, y el 34 % en el sur de Somalia, lo que pone de manifiesto la implantación geográfica de al-Shabaab.

Entre los hechos más destacados, cabe señalar que el 30 de septiembre, en Mogadiscio, una patrulla de la Misión de Formación para Somalia de la UE fue blanco de un ataque con un coche bomba, que causó un número no confirmado de víctimas civiles. El 4 de septiembre, en Middle Shabeelle, varios efectivos burundeses de la AMISOM perdieron la vida en enfrentamientos con al-Shabaab. Asimismo, en ataques lanzados por al-Shabaab los días 8 de septiembre y 14 de octubre, dos vicegobernadores murieron. El 14 de agosto, al-Shabaab lanzó un ataque terrestre a gran escala contra la base de operaciones de avanzada de Awdheegle, que se prolongó por varias horas y en el que utilizó morteros y dos coches bombas. Las fuerzas somalíes y de la AMISOM sufrieron numerosas bajas, pero mantuvieron su posición y rechazaron a los combatientes de al-Shabaab. En Mogadiscio, en mayo se produjeron dos atentados suicidas con coche bomba, el primero en el distrito de Warta Nabada, en el que cuatro personas murieron y diez resultaron heridas, y el segundo en el distrito de Boondheere, donde un militante utilizó un vehículo para atacar un puesto de control en una cárcel del Organismo Nacional de Inteligencia y Seguridad, en el que al menos 17 personas murieron en la explosión, mientras que otras 20 resultaron heridas. El 15 de junio se produjo otro incidente con un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo en un puesto de control cerca del Parlamento Federal, en el que nueve personas resultaron muertas y otras 20 heridas. En agosto el informe de la ONU sobre la situación en Somalia remarcó que el aumento de los ataques a gran escala dentro y fuera de Mogadiscio ponía de relieve la capacidad de resiliencia y la sólida capacidad operacional del grupo, a pesar de la intensificación de las medidas de seguridad en curso, incluidos los ataques aéreos contra el grupo y las operaciones conjuntas del Ejército Nacional y la AMISOM en Lower Shabeelle, que están concebidas específicamente para contrarrestar las amenazas a

Mogadiscio. En Lower Shabeelle, el Ejército Nacional continuó las operaciones ofensivas para capturar territorio, con el apoyo de efectivos de la AMISOM y otros actores internacionales. Tras la pérdida de las ciudades de Bariira y Sabiid, al-Shabaab hizo esfuerzos para recuperarlas, pero el Ejército Nacional permaneció en su posición y sigue controlando esas localidades estratégicas. El 12 de julio, al-Shabaab llevó a cabo un ataque contra el Hotel Medina en Kismaayo, que causó 33 víctimas mortales, entre ellas un candidato presidencial estatal y un contratista de la OIM, así como otras 56 personas heridas. Uno de los atentados más graves del año tuvo lugar el 30 de diciembre, cuando se produjo la explosión de una bomba en un puesto de control en Mogadiscio que causó la muerte de 81 personas.

Según la ONU, las consecuencias de la sequía de 2016 y 2017, agravadas por el prolongado conflicto armado y los obstáculos al acceso humanitario, acentuaron los problemas de protección, en particular para las mujeres, los niños y las niñas. Entre enero y noviembre de 2019, la sequía y los conflictos habían desplazado a más de 300.000 personas, que se suman a los 2,6 millones de desplazados internos que siguen sufriendo graves riesgos de desalojo, marginación y exclusión en todo el país. En agosto de 2019, la activista y constructora de paz Amina Arale, directora ejecutiva de la organización Somali Women Development Center (SWDC), fue invitada a proporcionar la perspectiva de la sociedad civil y recomendaciones en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir sobre la situación en Somalia. En relación a los impactos de género del conflicto en Somalia, Arale destacó que la violencia sexual y de género seguía siendo generalizada y silenciada y que existían minorías que ocultaban cómo afecta la violencia sexual y de género a sus comunidades para evitar la estigmatización y la exclusión social. En este sentido, celebró algunas medidas concretas adoptadas por el Gobierno para abordar la violencia sexual y de género, incluida la redacción de un proyecto de ley sobre delitos sexuales (Sexual Offences Bill), y los esfuerzos para que los responsables rindieran cuentas. El proceso de consulta en torno a la redacción del proyecto de ley, que incluyó aportaciones de la sociedad civil, fue un ejemplo positivo de inclusividad. Sin embargo, lamentó que Somalia todavía no había firmado, adoptado o implementado la CEDAW, y aunque se había comprometido, no había desarrollado hasta la fecha un Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325. Solicitó que se acelerara el establecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Finalmente, se inició en septiembre la elaboración del Plan de acción nacional para promover la aplicación efectiva de la resolución 1325.

Se intensificó el clima de hostigamiento y represión y el silenciamiento de la oposición política por parte del Gobierno de Burundi y de los Imbonerakure, previo a las elecciones de 2020

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país.

Durante el año 2019 se intensificó el clima de represión hacia la oposición política y la sociedad civil por parte del Gobierno y del ala juvenil del partido gubernamental CNDD-FDD, los Imbonerakure, en vísperas de las elecciones de 2020. El estancamiento del diálogo interburundés y los preparativos para las elecciones generales siguieron afectando a la evolución política del país. A la vez, continuaron los enfrentamientos entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra los grupos armados RED-TABARA, FOREBU (actualmente Forces Populaires de Burundi, FPB) y las FNL, y entre los Imbonerakure y miembros del principal partido opositor, el Congrès National por la Liberté (CNL, antiguo partido FNL liderado por Agathon Rwaswa) en todo el país y en especial en las provincias occidentales de Cibitoke, Bubanza, Rumonge y Bujumbura Rural, fronterizas con la RDC. **La base de datos ACLED identificó 297 víctimas mortales como consecuencia de la violencia política en el país.** Otras provincias también se vieron afectadas por la violencia, la represión y el clima de

intimidación reinante, tolerada o incentivada por las autoridades locales y los cuerpos de seguridad. Fuentes diplomáticas, no obstante, señalaron en octubre que se había producido una ligera reducción de la violencia. La inseguridad fue constante en las fronteras de Burundi con Rwanda y con RDC. Las acciones más destacadas del año tuvieron lugar en enero, cuando las Fuerzas Armadas burundesas apoyadas por jóvenes Imbonerakure se enfrentaron a grupos insurgentes burundeses en el territorio de Uvira, en Kivu Sur (RDC) causando decenas de víctimas mortales; en abril, cuando las Fuerzas Armadas congoleñas anunciaron haber ejecutado a 36 miembros de las FNL y de fpb en Uvira; y a finales de octubre en Musigati, en la provincia de Bubanza, en la que murieron una decena miembros de los cuerpos de seguridad y otra decena de milicianos del grupo RED-TABARA. Las Fuerzas Armadas burundesas iniciaron su retirada de RDC en febrero. Las Fuerzas Armadas congoleñas se enfrentaron a grupos armados burundeses en diversos momentos del año en la provincia congoleña de Kivu Sur.

El clima de hostigamiento y represión y el silenciamiento de la oposición política y de la sociedad civil organizada fue constante, con continuos informes de torturas, decenas de arrestos arbitrarios, abusos y violaciones de los derechos humanos de diversas fuentes, como organizaciones de la sociedad civil en el exilio, entre las que destaca la Liga Iteka o el Observatorio de Lucha contra la Corrupción. En junio el Gobierno suspendió a PARCEM, una de las pocas organizaciones de defensa de los derechos humanos locales independientes que quedaban en el país, acusándola de dar una imagen distorsionada del país y de sus líderes. En esos mismos informes se señaló que la mayoría de las víctimas de violaciones de los derechos humanos fueron predominantemente miembros de partidos políticos o coaliciones de la oposición al partido gobernante, los miembros de la sociedad civil y los que se opusieron al tercer mandato del presidente y votaron en contra de la enmienda de la Constitución en el referéndum de junio de 2018. Los principales responsables fueron el Servicio Nacional de Inteligencia, la Policía, los funcionarios administrativos locales e Imbonerakure. En enero el Gobierno anunció que 84 de las 130 ONG internacionales que operaban en el país se habían registrado antes del 31 de diciembre cumpliendo las nuevas condiciones impuestas (como incluir la cuota étnica en su personal) pero que otras habían rechazado las nuevas condiciones y habían abandonado el país. En febrero el Gobierno cerró la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en marzo retiró la licencia para operar desde el país a la BBC. En junio HRW¹² manifestó su preocupación ante las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el país, evidenciadas en un estudio realizado con organizaciones de derechos humanos exiliadas y con la Comisión de Investigación de la ONU, a la que el Gobierno también bloqueó el

acceso. Además, el Gobierno amenazó con romper las relaciones con el enviado especial de secretario general de la ONU. En agosto el CNL denunció que se habían incendiado o dañado más de diez oficinas del partido en los últimos meses y concluyó que esos actos formaban parte de la estrategia del partido gobernante para intimidar a la oposición. Los enfrentamientos tuvieron lugar durante gran parte del año, causando hasta finales de noviembre cerca de 300 víctimas mortales según ACLED. No obstante, se redujo el número de personas que necesitan asistencia humanitaria de 3,6 millones en 2018 a 1,8 millones en 2019. También cabe destacar que Francia reanudó la ayuda al país desde finales de 2018 en los sectores de defensa y educación con el objetivo de poder contribuir a crear una dinámica positiva de cara a las elecciones de 2020, decisión criticada por la UE por romper el consenso en torno a la política de sanciones europea.

Según destacó el informe anual del secretario general de la ONU sobre Burundi, entre enero de 2019 y septiembre de 2019, el Centro Humura, uno de los centros que prestan servicios a supervivientes de la violencia sexual y de género, informó de 875 casos nuevos. El informe destacó que se negaban a las mujeres los derechos a la sucesión y la herencia y siguen estando muy politizados, ya que las mujeres representan solo el 17% de los propietarios de tierras con títulos de propiedad.

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, RPRC, MPC, UPC, MLCJ), milicias anti balaka, milicia 3R, grupo armado ugandés LRA, otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, EUFOR
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos

12. HRW, "Burundi: Rampant Abuses Against Opposition", 12 de junio de 2019.

de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los últimos 10 años había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Djotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana (“anti balaka”). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada.

Durante el año 2019 se produjo una reducción general de la violencia y los enfrentamientos entre grupos armados y las Fuerzas Armadas gubernamentales así como contra las tropas internacionales de la MINUSCA por la firma e inicio de la implementación del acuerdo de paz de febrero, aunque persistió durante todo el año un clima de inseguridad y de acciones esporádicas de violencia contra la población civil. La violencia entre grupos armados y entre grupos y milicias de autodefensa y contra la población civil continuó en numerosas partes del país. En este sentido, **el 6 de febrero el Gobierno liderado por Faustin Touadéra y los 14 grupos armados principales firmaron en Bangui el Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación en la República Centroafricana** tras haber llevado a cabo conversaciones de paz desde finales de enero en Jartum (Sudán) con la facilitación de la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación en RCA de la UA y de Naciones Unidas. Diversas fuentes destacaron el papel decisivo de Rusia en conseguir el compromiso de diversos grupos ex-Séléka, así como la creciente influencia de Moscú sobre el país centroafricano, que se inscribe en la estrategia geopolítica y económica de Rusia de aumentar su presencia en el continente africano. El acuerdo incluye la integración de los grupos armados en el Gobierno y en los cuerpos de seguridad, avanzar en la descentralización y en la gestión responsable de los recursos naturales. Según el informe del secretario general de la ONU sobre la situación en el país, las violaciones del acuerdo disminuyeron de 230 en abril a 104 en septiembre. Sin embargo, el informe destacó que los grupos armados siguieron realizando actividades contrarias al acuerdo de paz, como la violencia contra la población civil, el cobro de impuestos ilegales y la obstrucción de la autoridad del Estado, así como el uso de la violencia para obtener concesiones en el proceso de paz. A pesar de los anuncios de ceses definitivos de las hostilidades, los grupos siguieron acosando a la población civil, estableciendo controles de carreteras y

Se produjo una reducción general de los enfrentamientos entre grupos armados y las Fuerzas Armadas gubernamentales así como de los ataques contra las tropas internacionales de la MINUSCA por la firma e inicio de la implementación del acuerdo de paz en febrero

la milicia Retorno, Reclamación y Rehabilitación (3R) reforzó su posición alrededor de algunas explotaciones mineras. El 12 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU levantó parcialmente el embargo de armas sobre el país.

Después de disminuir en junio y julio, la violencia se reanudó en agosto y septiembre, incluso en zonas que antes no se habían visto afectadas por el conflicto. Según ACLED, el balance de víctimas mortales a finales de 2019 era de 594, cifra sensiblemente inferior a las 1.187 de 2018 y a las 2.011 de 2017. La milicia 3R y el Frente Popular para el Renacimiento de la RCA (FPRC) fueron responsables de la mayoría de las violaciones denunciadas contra civiles, seguido de los grupos anti balaka signatarios y no signatarios. Las acciones armadas más graves del año tuvieron lugar en mayo, cuando combatientes de 3R causaron la muerte de 42 personas, en su mayoría civiles, en varias aldeas cerca de Paoua (prefectura de Ouham Pendé, noroeste). El Gobierno y la comunidad internacional condenaron los ataques y exigieron que el dirigente de 3R Sidiki entregara a los autores, y tras la presión local e internacional, el 3R confirmó la participación en el mencionado ataque de sus combatientes, de los cuales tres fueron entregados al Gobierno el 23 de mayo para iniciar actuaciones judiciales. El grupo 3R condenó públicamente el atentado y reiteró su compromiso con la paz y la reconciliación. Posteriormente, los enfrentamientos más importantes desde junio tuvieron lugar en la prefectura de Vakaga (extremo norte) entre el Movimiento de Libertadores Centroafricanos para la Justicia (MLCJ) y el FPRC. El 14 de julio, ambos grupos se enfrentaron en Am-Dafock y murieron nueve combatientes. El 31 de agosto, el FPRC mató al hijo del sultán de Birao, lo que provocó dos días de enfrentamientos. Como consecuencia, un civil y 24 combatientes resultaron muertos. Posteriormente, el FPRC atacó las posiciones del MLCJ el 14 de septiembre y murieron 39 combatientes, lo que provocó el desplazamiento hasta principios de octubre de 24.000 civiles. Estos enfrentamientos se reprodujeron en diciembre en Am-Dafock.

La situación humanitaria mejoró durante el año, en particular se registró un aumento de los retornos y un mayor acceso. El número de personas que necesitaron asistencia humanitaria disminuyó de 2,9 millones a 2,6 millones. Una quinta parte de la población sigue desplazada, con 581.000 desplazados internos y más de 605.000 refugiados registrados al 31 de agosto, aunque se produjeron movimientos de retorno de alrededor de 355.000 personas desplazadas y más de 90.000 personas refugiadas retornaron de forma espontánea. Los grupos anti balaka, FPRC y MPRC atacaron a organizaciones humanitarias en diversas ocasiones durante el año. La violencia sexual relacionada con el conflicto continuó, y la mayoría de los incidentes de

violación de niñas y mujeres fueron presuntamente perpetrados por miembros de los grupos armados signatarios del acuerdo de paz, aunque también estuvieron implicados las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad. Según el informe del secretario general de la ONU de junio, la mayoría de las violaciones se atribuían a grupos ex-Séléka en las prefecturas de Ouham-Pendé y Nana-Gribizi (noroeste y centro-norte del país). Se recibieron denuncias de violaciones generalizadas en la subprefectura de Kaga Bandoro (Nana Gribizi) y en los corredores de trashumancia, zonas de difícil acceso.

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de éste en 1997. Posteriormente, en 1998, Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio rwandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Rwanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada. A pesar de ello persiste el clima de inestabilidad y violencia.

La RDC siguió afectada por un clima de violencia e inestabilidad derivada del proceso electoral,¹³ aunque mejoró con el transcurso del año, por la evolución de la epidemia de ébola y por la presencia de numerosos grupos armados en el este del país. Estos grupos continuaron llevando a cabo acciones armadas

entre ellos por el control del territorio, las vías de comunicación y el acceso a los recursos naturales, viéndose implicados en enfrentamientos con las FARDC, y cometiendo abusos contra la población civil, entre los que destacan actos de extorsión, reclutamiento forzado, violencia sexual y otras múltiples vulneraciones de los derechos humanos. Aunque se redujeron las actividades del grupo armado de origen ugandés LRA en Haut Uélé y Bas Uélé (noreste del país),¹⁴ la situación en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur (este) siguió marcada por la presencia y actividades de las diferentes milicias Mai Mai, las FDLR y sus escisiones (CNRD), por la extensión del conflicto armado de Burundi al interior de la RDC debido a la presencia de actores armados burundeses y por el conflicto armado derivado de las actividades del grupo de origen ugandés ADF que opera especialmente en la zona norte de la provincia de Kivu Norte.¹⁵ Cabe destacar la reducción significativa de la violencia en la región de Kasai¹⁶ y, por el contrario, el brote de violencia intercomunitario que tuvo lugar al calor de las elecciones presidenciales en diciembre de 2018 en Yumbi (Mai-Ndombe) que causó alrededor de 900 víctimas mortales. Las víctimas mortales como consecuencia de las diferentes acciones violentas derivadas del conflicto en el este del país (exceptuando las víctimas derivadas del conflicto con el ADF) ascendieron a más de 2.600 víctimas entre enero y finales de noviembre, según ACLED. En lo concerniente a la epidemia de ébola en el este, la OMS la declaró epidemia de salud pública global en julio. La organización señaló en noviembre que la enfermedad estaba empezando a remitir por la menor aparición de nuevos casos. Hasta la fecha, se habían reportado un total de 3.298 casos, de los cuales 2.197 habrían muerto (67%). Del total de casos, el 56% (1.859) eran mujeres, el 28% (931) eran menores de 18 años, y el 5% (163) era personal sanitario. Tal y como señaló el informe del secretario general de la ONU en noviembre de 2019, se estima que 15,9 millones de personas se enfrentan a una grave y aguda inseguridad alimentaria, especialmente en las provincias orientales. La situación es más crítica en Ituri, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Kivu Sur y Tanganica, donde entre el 12% y el 15 % de la población se encuentra en la más elevada fase de emergencia. Además de una cifra de personas desplazadas internas estimada de 4,8 millones de personas, a 31 de marzo la RDC acogía a unas 540.000 personas refugiadas (de Burundi, RCA, Rwanda y Sudán del Sur). El país también se enfrenta al peor brote de sarampión de su historia, que afecta a las 26 provincias. Hasta noviembre ha habido 209.211 casos, incluidas 4.189 muertes. Desde principios de 2019, se han registrado más de 22.931 casos de cólera y 407 muertes. La situación es particularmente preocupante en Kivu Sur, Alto Lomami, Kivu Norte y Tanganica.

13. Véase la síntesis y el resumen de RDC en el capítulo de Tensiones.

14. Véase el capítulo de Tensiones.

15. Véase la síntesis y el resumen de RDC (este-ADF) en este capítulo.

16. Véase la síntesis y el resumen de RDC (Kasai) en este capítulo.

En primer lugar, en lo concerniente al grupo armado hutu rwandés FDLR, su capacidad siguió disminuyendo, tras la repatriación de la mayor parte de sus excombatientes de los campamentos en el este de la RDC en 2018, a la que se sumó la realización de operaciones conjuntas sostenidas de las FARDC y la MONUSCO contra el grupo. La muerte del histórico líder de las FDLR, Ignace Murwanashyaka, en Alemania el 16 de abril, no tuvo efectos en la estructura operacional y la moral del grupo, según la ONU. Las FDLR permanecieron activas y siguieron constituyendo una amenaza en los Kivus por medio de redes locales y regionales. El número de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto presuntamente cometidos por combatientes de las FDLR aumentó en el territorio de Nyiragongo, donde la mayoría de las víctimas fueron atacadas mientras se dirigían a recoger leña y carbón en el Parque Nacional de Virunga. Siguieron registrándose casos de violencia sexual relacionada con el conflicto en el territorio de Rutshuru, en el contexto de los enfrentamientos entre las FDLR y el grupo Nyatura. En el territorio de Rutshuru (Kivu Norte), las FDLR continuaron cometiendo violaciones y abusos contra la población civil. El 10 de noviembre, las FARDC anunciaron que Musabimana Juvenal, líder del grupo rwandés RUD-Urunana, escindido de las FDLR, había sido asesinado en una operación. El 18 de septiembre, el líder militar de las FDLR, Sylvestre Mudacumura, que era buscado por la CPI, fue asesinado en la provincia de Kivu Norte. En paralelo, la coalición P5, un grupo armado compuesto por organizaciones políticas rwandesas de la oposición, quedó debilitada tras la detención, el 30 de abril, y la extradición desde las Comoras de Callixte “Sankara” Nsabimana, el líder del Frente de Liberación Nacional (FLN), el brazo militar del grupo político Movimiento Rwandés por el Cambio Democrático (RMDC, por sus siglas en inglés), fundado por Paul Rusesabagina.¹⁷ El 23 de mayo, Callixte Nsabimana fue acusado de 16 delitos, entre ellos terrorismo, secuestro, asesinato y negación de genocidio. Nsabimana se declaró culpable de todos los cargos. El FLN es también un actor aliado de las FDLR.

Por otra parte, cabe destacar la evolución de la situación relativa al grupo armado rwandés CNRD-Ubwiyunge, escisión de las FDLR. Dicho grupo, operativo en ambos Kivus, fue objeto de diversos ataques por grupos armados (NDC-R, milicias Mai Mai, Nyatura) desde diciembre de 2018 que le forzaron a abandonar su cuartel general en Faringa, territorio de Rutshuru (Kivu Norte) y desplazarse hacia Kivu Sur, en medio de enfrentamientos que causaron la muerte de 18 civiles y de 15 combatientes, según diversas

En lo concerniente a la epidemia de ébola en el este de RDC, que ya ha causado la muerte de 2.197 personas, la OMS la declaró epidemia de salud pública global en julio

Una de las facciones de las FDLR rwandesas, el CNRD-Ubwiyunge, se vio forzado a huir debido al acoso de diversos grupos armados, milicias y las Fuerzas Armadas congoleñas

fuentes. Al menos 4.000 personas vinculadas al grupo armado CNRD se movilizaron, entre las cuales unos 400 combatientes, y abandonaron también el territorio de Masisi para dirigirse a Kivu Sur y reagruparse con el resto del grupo armado. Durante el trayecto se enfrentaron a las FARDC y a otros grupos armados lo que provocó la muerte de un número indeterminado de personas. El Grupo de Expertos de la ONU para la RDC señaló que el grupo se habría instalado en el territorio de Kalehe (Kivu Sur), y que su líder, Wilson Irategeka, habría huido a Kivu Sur. También hubo informaciones sobre reuniones entre las FDLR y el CNRD. En paralelo, y a raíz también de las operaciones contra el CNRD y su expulsión de Kivu Norte, el grupo armado NDC-R, presente en el territorio de Masisi y los alrededores (Kivu Norte), amplió durante el año su zona de control, lo que dio lugar a un clima de impunidad como consecuencia de los abusos y violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia sexual. Los frecuentes enfrentamientos entre la NDC-R y la APCLS, el grupo armado rwandés FDLR y los grupos armados Nyatura, aumentaron aún más la inseguridad y provocaron la muerte de decenas de civiles y combatientes (más de 150 en el primer trimestre del año), violaciones de mujeres y el desplazamiento de civiles. Las FARDC en octubre iniciaron operaciones militares en el territorio de Masisi para intentar controlar la situación. Diversos informes señalaron una posible connivencia de las FARDC con el grupo NDC-R.

En la provincia de Kivu Sur, en los territorios de Fizi y Uvira, la incursión de grupos de milicianos de Burundi y las operaciones de las Fuerzas Armadas burundesas (no reconocidas ni permitidas oficialmente), de las juventudes Imbonerakure y de las FARDC contra esos grupos y sus aliados locales dieron lugar a enfrentamientos con víctimas mortales, saqueos, violencia sexual y desplazamiento de la población.

En estas mismas zonas, la violencia por motivos étnicos contra los civiles en los altiplanos y mesetas de los territorios de Fizi y Uvira siguió siendo motivo de gran preocupación, en particular en la zona de Minembwe (Uvira). Entre marzo y noviembre, grupos ngumino, twigwaneho y mai-mai ejecutaron alrededor de 50 civiles y destruyeron 89 aldeas. La ONU destacó que lo preocupante es que esos ataques contra civiles tuvieron como origen la presunta afiliación comunitaria de las víctimas, de las cuales han sido particularmente afectados los banyamulenge, por un lado, y, por el otro, los bafuliro, los babembe y los banyindu. Se estima que 125.000 civiles se desplazaron por los enfrentamientos. La situación se deterioró considerablemente desde

17. Paul Rusesabagina es un antiguo gestor hotelero de origen hutu, adjunto a la dirección del Hotel Mille Collines en Kigali, cuya conducta salvando a 1.268 personas de origen tutsi en su hotel durante el genocidio en 1994 dio origen al film Hotel Rwanda. En 1996 sus críticas al Gobierno de Paul Kagame le obligaron a exiliarse a Bélgica, donde también sufrió amenazas de muerte, por lo que se mudó a EEUU.

octubre y es cada vez mayor el riesgo de que la violencia se extienda a las provincias colindantes, según la ONU. El Gobierno congolés, con el apoyo de la MONUSCO, desplegó contingentes de las FARDC y puso en marcha iniciativas de mediación política, pero estos esfuerzos no lograron reducir el clima de violencia debido a la politización del conflicto y a la falta de imparcialidad atribuible a las autoridades involucradas, según destacó el informe del secretario general. En el territorio de Shabunda (oeste de Kivu Sur), el redespiegue de las FARDC a otras zonas aumentó la libertad de acción de las milicias Mai-Mai Raya Mutomboki, lo que llevó a un deterioro de la seguridad y un aumento de los abusos contra los civiles.

Por último, cabe destacar la persistencia del contrabando de oro artesanal congolés a través de países vecinos con Dubai como principal destino. La falta de un sistema de trazabilidad del oro artesanal seguía obstaculizando los esfuerzos por controlar el sector. El Grupo de Expertos de la ONU en la RDC también investigó y documentó varios casos de contrabando de minerales que contenían estaño (casiterita), tantalio (coltán) y tungsteno (wolframita). Así, el Grupo de Expertos documentó que algunos grupos armados continuaron financiando sus actividades mediante la minería ilegal, contaminando así la cadena de suministro, persisten mercados ilícitos y de redes de contrabando y la implicación en el comercio ilícito de funcionarios públicos encargados de la lucha contra el fraude, entre otras cuestiones.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congolese que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenia y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenia y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años

2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congolese, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil.

Persistieron durante todo el año las acciones armadas por parte de las fuerzas de origen ugandés ADF, asentadas en la región de Kivu Norte, principalmente en el territorio de Beni (Grand Nord), aunque también en el fronterizo territorio de Irumu (provincia de Ituri, al norte del territorio de Beni). Así, las ADF perpetraron numerosos ataques contra la población civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad congolese y la MONUSCO, así como recurrentes secuestros de civiles, que causaron varios centenares de víctimas mortales durante el año. Según ACLED, se alcanzó el medio millar víctimas. El grupo, dirigido por Seka Musa Baluku, se reagrupó y reconstruyó su capacidad después de las operaciones llevadas a cabo en 2014, según destacó el Grupo de Expertos de la ONU para la RDC, que remarcó la capacidad de reclutamiento del grupo en Uganda y en el este de la RDC. El Grupo de Expertos también constató que el grupo seguía reclutando menores y utilizándoles en acciones de combate, también constató que **las ADF habían cometido numerosos actos de violencia sexual relacionada con el conflicto**, en particular por medio del matrimonio forzado. La acción más grave tuvo lugar a finales de año, a raíz de una operación de las Fuerzas Armadas iniciada a finales de octubre contra las ADF en la zona situada al norte de Beni. Las FARDC concentraron más de 20.000 efectivos en la localidad y a lo largo de ejes viales clave durante las semanas anteriores. Si bien se observaron varios episodios de intensos combates y las FARDC indicaron que se habían apoderado de varias posiciones estratégicas, las ADF siguieron una táctica de ataques deliberados contra la población civil con el fin de socavar la ofensiva. En respuesta a la ofensiva del Ejército, las ADF mataron a unos 100 civiles en el mes de noviembre lo que desencadenó el desplazamiento forzado de miles de personas. Cabe señalar la operación militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas a finales de mayo que causó la muerte de 26 combatientes de las ADF en Ngite (Kivu Norte).

Según destacó el informe del secretario general de la ONU, la MONUSCO elaboró planes de contingencia para la protección de los civiles en el contexto de las operaciones de las FARDC contra las ADF, como el incremento de patrullas, con el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de ataques de represalia contra civiles. Tras el deterioro de la situación, la MONUSCO y las autoridades nacionales renovaron sus esfuerzos por cooperar más estrechamente en la protección de los civiles. La MONUSCO, además, continuó prestando apoyo logístico y médico a las FARDC para ayudar a sostener las últimas operaciones contra las ADF y debilitar su capacidad de causar daños a los civiles. No obstante, a pesar de esos esfuerzos, **el aumento de los**

ataques de las ADF desencadenó una serie de protestas ciudadanas cada vez más violentas a partir del 20 de noviembre contra la situación de la seguridad, en gran medida dirigidas contra la MONUSCO, y ante el fracaso del Gobierno congolés, las FARDC y la MONUSCO en garantizar la seguridad de la población civil, lo que derivó en el incendio del Ayuntamiento de Beni y los ataques a las instalaciones de la MONUSCO, que tuvo que trasladar su personal. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en Beni, Butembo y Oicha, causaron la muerte de dos policías y al menos siete manifestantes entre el 23 y el 26 de noviembre. En consecuencia, el presidente Tshisekedi decidió incrementar la presencia del Ejército en el territorio de Beni y acordó llevar a cabo operaciones conjuntas entre las FARDC y la MONUSCO contra las ADF.

Por otra parte, se especuló en torno a posibles vínculos entre las ADF e ISIS que despertaron grave preocupación en la región. El 18 de abril, ISIS reivindicó un ataque que se sospecha que fue cometido por las ADF en un campamento de las FARDC en Bovata, en Kivu Norte, realizado dos días antes. El ataque se cobró la vida de dos soldados y un civil. Desde entonces, ISIS ha reivindicado más ataques que también se atribuyen a las ADF. Sin embargo, las ADF seguían siendo, tal y como destacó el informe del Grupo de Expertos sobre la RDC, una organización hermética que no compartía públicamente sus objetivos ni reivindicaban ataques. El 29 de junio, en una aparición en los medios de comunicación, el presidente Tshisekedi se mostró preocupado por la adopción de tácticas terroristas relacionadas con ISIS por parte de las ADF. No obstante, en su último informe, el Grupo de Expertos sobre la RDC no confirmó ningún vínculo directo entre las ADF e ISIS aunque su interpretación radical del Islam y su reciente propaganda indicaban el deseo de aliarse con otros grupos islamistas.

RDC (Kasai)	
Inicio:	2017
Tipología:	Gobierno, Identidad Interno
Actores:	RDC, diversas milicias de adscripción étnica (Bana Mura, Kamwina Nsapu)
Intensidad:	1
Evolución:	Fin

Síntesis:

El conflicto en la región del Grand Kasai, que incluye cinco provincias del centro-sur del país (Kasai-Central, Kasai, Kasai-Oriental, Lomami y Sankuru), enfrenta a las fuerzas de seguridad del Estado congolés contra diversas milicias de la zona, organizaciones que también se enfrentan entre ellas y contra la población civil. En 2012, Jean-Pierre Pandi debía suceder a su difunto tío como el sexto “Kamwina Nsapu”, uno de los principales jefes consuetudinarios en el territorio de Dibaya en Kasai-Central. Tales jefes desempeñan un papel importante, ejerciendo el control sobre la tierra

y la administración en sus dominios. Supuestamente apolíticos y seleccionados de acuerdo con las tradiciones, deben ser reconocidos por el Estado central, requisito que alienta a los jefes a apoyar al régimen para que respalde a los solicitantes. En Grand Kasai, la interacción entre la autoridad consuetudinaria y la administración del presidente congolés Joseph Kabila ha sido particularmente compleja porque la región es un bastión de la oposición. Kinshasa se negó a reconocer oficialmente a Pandi lo que incrementó la tensión. En agosto de 2016, Pandi fue asesinado en su casa durante enfrentamientos entre sus combatientes y las fuerzas de seguridad en circunstancias controvertidas, lo que desencadenó una rebelión por parte de sus seguidores, que adoptaron el nombre de Kamwina Nsapu para vengar a su líder. El movimiento se convirtió en una insurrección generalizada al sumarse otros grupos de la zona. Los grupos han ganado notoriedad por su extensivo reclutamiento de menores. El conflicto, inicialmente en Kasai-Central, se extendió a otras localidades y hacia las provincias de Kasai, Kasai-Oriental, Sankuru y Lomami. La desproporcionada respuesta de las FARDC provocó la escalada de la situación, que ha tomado un cariz intercomunitario ya que Kamwina Nsapu, surgida de la comunidad luba, ha ampliado sus ataques a la población que no pertenece a esta etnia, y el Gobierno ha apoyado a la milicia Bana Mura, de la comunidad tchokwe.

La situación en la región de Kasai (que afecta a las provincias de Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Sankuru y Lomami) mejoró ostensiblemente durante el año tras las rendiciones espontáneas y a gran escala que tuvieron lugar a principios de 2019 principalmente del grupo Kamwina Nsapu, por lo que se puso fin al conflicto armado que ha afectado la región. Se produjeron hechos esporádicos de violencia que causaron alrededor de medio centenar de víctimas mortales, según ACLED. El hecho más destacado tuvo lugar el 24 de febrero, cuando se produjo un enfrentamiento entre las FARDC y Kamwina Nsapu en Kamako (Kasai) que provocó 19 víctimas mortales al intentar liberar a un líder de la comunidad tetela secuestrado en la casa de un líder de Kamwina Nsapu. Dicho grupo, uno de los principales responsables de la violencia en los últimos años, permaneció prácticamente inactivo tras la rendición de sus milicias y en muchos casos sus miembros se desmovilizaron y regresaron a sus zonas y comunidades de origen. También se produjo el retorno de miles de civiles a sus lugares de origen. Sin embargo, sigue pendiente la desmovilización de la milicia Bana Mura, de la comunidad tchokwe. Tras un aumento de las tensiones durante las elecciones a gobernador, la situación política y de la seguridad en la provincia de Sankuru también mejoró, en parte gracias a los esfuerzos de la MONUSCO por promover la reconciliación entre las comunidades y el desarme de los grupos de jóvenes a nivel local, según destacó la ONU. Sin embargo, persiste el riesgo de que se produzcan conflictos locales, ya que varios miles de personas, entre ellas miembros de las comunidades desplazadas lulúa y luba, cruzaron la frontera de Angola para regresar a sus lugares de origen, principalmente en Kasai Central, donde las milicias pende y tshokwe aún no habían sido desarmadas. La MONUSCO

apoyó el diálogo intercomunitario y los esfuerzos de reconciliación de las autoridades provinciales, así como la reintegración de los antiguos miembros de Kamwina Nsapu en sus comunidades.

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNAMID
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes *janjaweed*. La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario.

El conflicto armado en la región de Darfur, Sudán, se volvió a caracterizar por una menor intensidad de la violencia a lo largo del 2019, en la lógica de las dinámicas de los últimos años. Según los datos facilitados por ACLED, durante el año y hasta mediados de noviembre, se produjeron en la región de Darfur 268 muertes producidas por la violencia (casi la mitad de ellas, 132, registradas en la región de Darfur Central). Ello significa una reducción significativa de la violencia si se compara con las 859 muertes violentas registradas durante el 2018, las 996 en 2017 o las 2.286 en 2016. En gran parte el descenso de la violencia estuvo marcado por las negociaciones de paz, así como por las movilizaciones políticas vividas en el país durante el año, que conllevaron el derrocamiento del Gobierno presidido por Omar al-

Bashir en abril. La apertura de un nuevo proceso nacional de transición focalizó los esfuerzos de todas las partes –Gobierno, grupos opositores, movimientos rebeldes, entre otros– abriendo nuevas iniciativas de consolidación de la paz, logrando el compromiso de cese de las hostilidades por las partes y, en general, mejorando las condiciones de seguridad. Como parte de este escenario, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró en los primeros tres trimestres de 2019 un total de 14.500 nuevos desplazamientos forzados en todo el país (principalmente en Darfur Sur), mientras que el número de personas que pudieron retornar a sus hogares ascendió a 111.500 personas, registrándose en Darfur Norte el mayor número de retornos (44.500 personas). Sin embargo, al finalizar el año estallaron en El Geneina disputas de carácter intercomunitario entre miembros de los grupos masalit y maaliya, que habrían dejado un balance de más de 80 personas muertas, 190 heridas y alrededor de 47.000 personas desplazadas. La crisis se relacionó con la muerte de un pastor maaliya a manos de un joven masalit, que desencadenó una ola de venganzas entre familias y grupos. El primer ministro, Abdallah Hamdok, y el vicepresidente del Consejo Soberano, el teniente general Mohamed Hamdan “Hemeti”, encabezaron la delegación que el 1 de enero llegó a El Geneina para evaluar y contener la violencia.

En relación con la **misión híbrida de la ONU y la UA en Darfur (UNAMID)**, en 2018 el Consejo de Seguridad de la ONU inició la reconfiguración y reducción de la misión en el país, según lo acordado por el organismo en sus resoluciones 2363 (2017) y 2429 (2018), en las cuales se prevé, entre otros aspectos, la entrega de sus instalaciones a las fuerzas paramilitares de las Rapid Support Forces (RSF). Sin embargo, grupos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, cuestionaron la decisión de reducir la misión debido a la violencia aún presente por parte de las milicias janjaweed en Darfur, pero también en otras partes del país. Como parte de la hoja de ruta de salida, que prevé el fin de la misión para el año 2020, el Consejo de Seguridad había extendido el mandato de la UNAMID hasta el 30 de junio de 2019. A principios de junio, el Consejo de Seguridad volvió a extenderlo hasta el 31 de octubre de 2019. Como parte de la negociación de los acuerdos de paz entre el nuevo Gobierno de Transición de Sudán y los movimientos rebeldes, el primer ministro, Abdalla Hamdok, solicitó en octubre a la ONU la extensión por un año de la misión. Ello se debió a las preocupaciones de los grupos rebeldes armados darfuríes sobre la desprotección de la población civil que podría significar la retirada de la UNAMID antes de lograr la firma de la paz por el mantenimiento de la violencia por parte de las milicias janjaweed. El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el 31 de octubre el mandato de la UNAMID por un año, estableciendo que este se concentraría en áreas específicas: apoyo al proceso de paz; soporte a las actividades de consolidación de la paz; y protección de los civiles, seguimiento y presentación de informes

sobre los derechos humanos, incluida la violencia sexual y de género y violaciones graves contra niños y niñas, facilitación de asistencia humanitaria y apoyo al retorno voluntario de las personas desplazadas forzosamente por la violencia.

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción del ex presidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS.
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:

El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), desatando una nueva fase de violencia que se mantiene hasta el presente. En 2015 se logró la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el SPLA-IO (ratificándose en 2018), sin embargo, las resistencias de las partes signatarias a implementarlo, así como el surgimiento de otros grupos armados y milicias comunitarias, han mantenido la guerra en el país.

Si bien a lo largo del año la violencia continuó reduciéndose en gran medida en todo el país, las acciones armadas continuaron estando presentes

debido a disputas intercomunitarias, así como a los enfrentamientos entre tropas gubernamentales y el grupo rebelde no signatario del Acuerdo de paz, el Frente de Salvación Nacional (NAS) dirigido por Thomas Cirillo, en la región de Ecuatoria Central, particularmente alrededor de la ciudad de Yei. El número de víctimas mortales producidas a raíz de la violencia política armada en el país en 2019, según ACLED, ascendería a 1.499. Se trata de la cifra más baja desde que se inició la última fase del conflicto armado en diciembre de 2013, que según datos de la Misión de la ONU en el país (UNMISS) ha costado la vida a alrededor de 400.000 personas desde el inicio de la guerra. Sin embargo, si bien la violencia se redujo de forma comparativa, la emergencia humanitaria se mantenía en el país. Según datos facilitados por ACNUR, a finales de 2019 alrededor de 4,3 millones de personas se encontraban desplazadas forzosamente por la violencia, de las cuales 2,21 millones eran personas refugiadas en países vecinos (principalmente en Uganda y Sudán), de las cuales el 63% eran niños y niñas. Estos datos, según el organismo, sitúan a Sudán del Sur como la mayor crisis de personas refugiadas en África y la tercera más grande del mundo, por detrás de Siria y Afganistán.¹⁸

La ratificación del Acuerdo de Paz de 2015, con la firma en septiembre de 2018 del acuerdo denominado Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan (R-ARCSS), redujo significativamente durante el 2019 la violencia en el país entre las Fuerzas Armadas y el principal grupo rebelde, el SPLA-IO, encabezado por Riek Machar. El acuerdo ratificó el compromiso de las partes por el cese a la violencia, logrando al finalizar el 2019 el alto el fuego más largo entre los dos principales grupos que iniciaron el conflicto armado en diciembre de 2013. Si bien los avances en la hoja de ruta política descrita en el R-ARCSS fueron menores durante el año,¹⁹ en materia de contención de la violencia en el país se produjeron avances significativos que favorecieron la reducción de las hostilidades militares, la mejora de la situación de seguridad y el desplazamiento libre de personas. Asimismo, también favoreció la provisión de ayuda humanitaria, reduciéndose en un 30%, según información de la ONU, los incidentes contra trabajadores humanitarios en relación al año anterior.

Aun así, la violencia siguió estando presente en el país debido fundamentalmente a las acciones armadas de la rebelión del NAS, así como a disputas intercomunitarias. En relación a la primera, la negativa del grupo comandado por Thomas Cirillo a reconocer el acuerdo de paz convirtió a la insurgencia en uno de los mayores obstáculos en el país para afianzar la paz. Durante todo el año se registraron diferentes acciones armadas del NAS y enfrentamientos con el

18. UNHCR, "South Sudan Refugee Crisis", consultado el 14 de enero de 2020.

19. Véase el resumen sobre el proceso de paz en Sudán del Sur en Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2020.

Ejército sursudanés (ahora rebautizado como Fuerza de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur – SSPDF) así como con las fuerzas rebeldes del SPLA-IO en las regiones de Ecuatoria Central y Occidental, forzando el desplazamiento de alrededor de 13.000 personas solo durante el primer mes del año. La escalada de violencia generó una declaración conjunta de la Troika (EEUU, Noruega y Reino Unido) el 21 de febrero, instando a las partes a respetar el Acuerdo de Cesación de Hostilidades de diciembre de 2017 y el R-ARCSS de septiembre de 2018. Posteriormente, el 15 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la UNMISS, dando potestad a las fuerzas de paz para proteger y garantizar el retorno de las personas desplazadas. Más tarde, el 30 de mayo, el Consejo de Seguridad extendió por un año el embargo de armas, así como las sanciones a diferentes funcionarios gubernamentales y miembros de distintos grupos rebeldes identificados como un obstáculo para la paz. Naciones Unidas también acusó a las partes signatarias del acuerdo de paz de seguir reclutando combatientes. Mientras, las hostilidades se mantuvieron en la región de Ecuatoria. La UNMISS denunció el 3 de julio que al menos 104 personas habían perdido la vida –debido principalmente a la escalada de la violencia en la región de Ecuatoria– en el periodo transcurrido entre la firma de ratificación de la paz en septiembre de 2018 y abril de 2019. En octubre, un enfrentamiento entre tropas gubernamentales y miembros del NAS en Isebi, estado de Yei, dejó un balance de tres trabajadores humanitarios muertos, así como un número desconocido de soldados y rebeldes fallecidos. ACNUR denunció los ataques realizados contra personal humanitario en el país, solicitando respeto al derecho internacional humanitario. Según los datos proporcionados por el organismo, desde que se inició el conflicto armado a finales de 2013, al menos 115 trabajadores humanitarios habían sido asesinados.

Por otro lado, en cuanto a las disputas intercomunitarias entre diferentes tipos de milicias, durante el año también tuvieron lugar diferentes episodios violentos debido a diferentes causas, sobre todo relacionadas con el robo de ganado y disputas sobre lindes de tierras. Hubo incidentes en múltiples estados (Bieh, Tonj, Jonglei, Akobo, Western Lakes, entre otros.) del país. En los dos episodios más violentos, a mediados de enero, 105 personas murieron en el estado de Tonj a causa de incursiones de robo de ganado, mientras que a finales de noviembre al menos 80 personas resultaron muertas y otras 1.000 heridas en enfrentamientos registrados entre miembros de los grupos manuer y gak en el estado de Western Lakes. Este episodio generó el envío de 75 efectivos nepaleses de la UNMISS para tratar de poner fin al brote de violencia.

Sudán del Sur, con 2,21 millones de personas refugiadas, se situó como la mayor crisis de personas refugiadas en África y la tercera más grande del mundo, por detrás de Siria y Afganistán

Magreb - Norte de África

Argelia	
Inicio:	1992
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel
Intensidad:	1
Evolución:	FIN

Síntesis:

El conflicto armado ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a distintos grupos islamistas desde comienzos de los noventa, tras un ascenso del movimiento islamista en Argelia que respondió al descontento de la población, la crisis económica y la falta de espacios de participación política. La confrontación se inició después de la ilegalización del Frente Islámico de Salvación (FIS) en 1992 tras su triunfo electoral frente al partido histórico que había liderado la independencia del país, el Frente de Liberación Nacional. La lucha armada enfrentó a varios grupos (EIS, GIA y el GSPC, escindido del GIA y convertido en Al Qaeda en el Magreb Islámico en 2007) con el Ejército, apoyado por milicias de autodefensa. El conflicto provocó unas 150.000 muertes durante los noventa y continuó cobrándose víctimas, aunque los niveles de violencia han descendido desde 2002, después de que algunos grupos renunciaran a la lucha armada. En los últimos años el conflicto ha estado protagonizado principalmente por AQMI, que se convirtió en una organización transnacional, ampliando sus operaciones más allá del territorio argelino y afectando a países del Sahel. Argelia, junto a Malí, Libia, Mauritania y Níger, entre otros, se han enfrentado a AQMI y otros grupos armados que operan en la zona, entre ellos el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y las organizaciones al-Mourabitoun (Firmantes de Sangre), Jund al-Khilafa (filial de ISIS) e ISIS.

En línea con la tendencia observada en los últimos años, durante 2019 se registró una disminución en los hechos de violencia vinculados al conflicto armado de baja intensidad protagonizado principalmente por las fuerzas de seguridad y milicianos vinculados a al-Qaeda. **Esta evolución llevó a que la situación en Argelia dejara de ser considerada conflicto armado al finalizar el año.** Según el balance anual dado a conocer por el ministerio de Defensa argelino, a lo largo de 2019 se dio muerte a 15 personas acusadas de terrorismo. El Gobierno también informó de la detención de 25 personas y la rendición de otras 44 presuntamente vinculadas a actividades terroristas, el decomiso de 649 piezas de armamento y el descubrimiento y destrucción de 750 artefactos explosivos de fabricación artesanal. Adicionalmente, algunas informaciones de prensa indicaron que un ataque de ISIS habría causado la muerte a ocho soldados argelinos en noviembre, aunque no hubo confirmación de las bajas militares. La filial

que reivindicó la acción, “Provincia de Argelia”, había permanecido prácticamente inactiva desde su creación en 2014. En todo caso, en términos generales, la cifra total de letalidad a causa del conflicto sería la más baja de los últimos años, ya que en 2018 se contabilizaron entre 40 y 50 personas fallecidas, frente a un centenar en 2017 y alrededor de 150 en 2016. Los datos de ACLED apuntan una tendencia similar, con 22 víctimas mortales en 2019 y 66 en 2018, y en torno a 150 personas fallecidas anualmente en los tres años precedentes.

Recientemente, distintos análisis habían destacado el debilitamiento de AQMI en Argelia –incluyendo la muerte de unos 600 combatientes a manos de las fuerzas de seguridad entre 2013 y 2018–, frente a una mayor actividad de la organización en la zona del Sahel Occidental, en particular en países como Malí, Burkina Faso y Níger.²⁰ Pese a ello, AQMI ha continuado reivindicando Argelia como su ámbito de actuación y en los últimos años ha emitido una serie de comunicados urgiendo a sus seguidores y simpatizantes a no abandonar la causa argelina. Durante 2019, un alto dirigente de AQMI difundió un mensaje a través de los canales de comunicación de al-Qaeda con la intención de aprovechar la inestabilidad política en el país, en el marco de las protestas contra el Gobierno argelino tras el anuncio del presidente Abdelaziz Bouteflika de que se presentaría a un quinto mandato. En su alocución, Abu Ubaydah Yusuf al-Anabi criticó las condiciones socioeconómicas del país y sugirió que la población argelina debía derrocar al régimen para luego promover que Argelia fuera gobernada por una estricta interpretación de la sharia. Más tarde, al-Anabi emitió otro mensaje celebrando la decisión de Bouteflika de no presentarse a nuevas elecciones. En esta línea, **pese a la significativa merma de sus capacidades para actuar en Argelia en los últimos años, algunos análisis destacaron que el grupo estaría interesado en capitalizar el contexto de inestabilidad y un deterioro de la situación de seguridad.**

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA), milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, mercenarios, EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Qatar, Rusia, entre otros países
Intensidad:	3
Evolución:	↑

20. Véase el resumen sobre Malí y Región Sahel Occidental en este capítulo.

21. Véase el resumen sobre el proceso de paz en Libia en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2020.

Síntesis:

En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y una persistente fragmentación política. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto dificultados por este panorama y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano. Las dinámicas de violencia se han acentuado por la implicación de actores foráneos en apoyo de los diversos bandos en pugna, motivados por intereses geopolíticos y económicos, dada la ubicación estratégica de Libia en la cuenca del Mediterráneo y su gran riqueza en hidrocarburos.

El conflicto armado en Libia empeoró durante 2019 en comparación con el año anterior, en gran medida debido a las consecuencias de la ofensiva sobre Trípoli lanzada por el general Khalifa Hifter y su grupo armado, el Ejército Nacional de Libia (LNA, por sus siglas en inglés), y como resultado de una mayor implicación de actores foráneos en la contienda, que se reflejó entre otras cosas en numerosas violaciones al embargo de armas que rige sobre el país norteafricano y en el creciente uso de arsenales aéreos. Estas dinámicas determinaron un bloqueo de las iniciativas de paz para Libia y propiciaron un incremento de las víctimas mortales del conflicto.²¹ A mediados de año, informaciones de prensa destacaban que desde el inicio de la campaña sobre Trípoli a principios de abril y hasta junio habían fallecido más de 700 personas. Hasta finales de diciembre, la misión de la ONU en Libia, UNSMIL, y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos habían documentado la muerte de 287 civiles a causa de las hostilidades, mientras que otras 371 personas habían resultado heridas. Estas cifras representan un **25% más de víctimas civiles respecto a 2018, según los datos de la ONU.** ACLED, en tanto, contabilizó 2.064 personas muertas a causa de la violencia en 2019, casi el doble de las registradas en 2018 en el que se contaron 1.188 muertes. El think tank International Crisis Group, en tanto, advertía sobre la muerte de más de 3.000 personas en las hostilidades. Durante 2019 los enfrentamientos entre numerosos grupos armados de distinto signo en Libia afectaron diversas regiones del país. Los principales escenarios de la violencia fueron Sebha, Murzuq, Derna, Benghazi,

Jufra, Waddan, Misrata y, en especial, Trípoli y sus alrededores.

En los primeros meses del año los incidentes violentos se concentraron en el sur del país, tras la decisión de Hifter y el LNA de ampliar su control en esta zona. Los choques enfrentaron al LNA y milicias árabes próximas con grupos armados no árabes en localidades como Sebha y Murzuq, mientras en paralelo continuaban los choques entre el LNA y organizaciones de corte islamista en el este del país. **La escalada de hostilidades en Libia se produjo sobre todo a partir del 4 de abril, cuando Hifter lanzó una ofensiva con miras a asumir el control de la capital, Trípoli, ciudad que en los meses previos había sido objeto de varias violaciones al cese el fuego** alcanzado en septiembre de 2018. El inicio de la campaña del LNA en los alrededores de Trípoli coincidió con la visita del secretario general de la ONU al país, António Guterres, quien abandonó Libia en medio de llamamientos a las partes a evitar una confrontación sangrienta. El Gobierno internacionalmente reconocido del primer ministro Fayed Serraj promovió la creación de la llamada Fuerza de Protección de Trípoli. En los meses siguientes el GNA logró frenar la ofensiva de Hifter, pero no forzar un repliegue, por lo que los combates persistieron en los alrededores y dentro de la ciudad. Las partes no se mostraron dispuestas a un cese el fuego: Serraj presentó una propuesta de proceso político que excluía a Hifter y ese último sugirió que no podría haber negociaciones hasta que el LNA asumiera el control de Trípoli y se eliminaran algunas instituciones creadas por el acuerdo político de Skhirat (2015). En este escenario, a partir de julio los enfrentamientos se extendieron e intensificaron en otras zonas de país – así, por ejemplo, Misrata era junto a Trípoli uno de los principales escenarios de las hostilidades al finalizar el año. Los ataques incluyeron objetivos como aeropuertos, depósitos de armas, pero también zonas pobladas.

Esta dinámica se vio favorecida por los apoyos externos – técnico, logístico, militar– a los diferentes actores armados libios, en particular de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Rusia en el caso del LNA de Hifter y de Turquía y Qatar en el caso del GNA. Así, por ejemplo, en noviembre se informó sobre el refuerzo de las tropas de Hifter con asistentes militares rusos. En diciembre, en tanto, la decisión del GNA y Turquía de suscribir un pacto de seguridad y de jurisdicciones marítimas recíprocas alentó tensiones en el Mediterráneo –con una airada reacción de países como Egipto o Grecia– y derivó a principios de 2020 en una autorización del Parlamento turco a enviar tropas a Libia. EEUU, por su parte, mantuvo una posición errática respecto a la pugna entre los principales actores armados libios. El secretario de Estado de EEUU condenó primero la ofensiva de Hifter sobre Trípoli, pero días después el presidente estadounidense, Donald Trump, habló telefónicamente con el general libio y –según trascendió– valoró sus acciones como parte de una campaña contraterrorista y

El conflicto armado en Libia se agravó en 2019, con enfrentamientos y ataques aéreos en diversas zonas del país alentados por continuas vulneraciones al embargo de armas

de protección de los pozos petroleros. Hacia finales de año, después de una visita de representantes del GNA a Washington, EEUU volvió a condenar la ofensiva del LNA y acusó a Rusia de intentar explotar el conflicto. Paralelamente, Washington continuó actuando directamente en Libia a través de ataques a presuntos militantes de AQMI e ISIS, como los que causaron la muerte de 43 personas a finales de septiembre en el área de Murzuq (sur). La UE, en tanto, no consiguió promover una posición unitaria frente al conflicto en Libia. Francia siguió decantándose –incluso más abiertamente– por el bando de Hifter. Italia, por su parte, continuó intentando mantener el interés internacional sobre Libia y priorizando los acuerdos de control de la migración.

En este contexto, en el último trimestre del año **el enviado especial de la ONU para Libia, Ghassan Salame, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los peligros de la interferencia extranjera en el país eran evidentes, con una creciente presencia de mercenarios y combatientes de compañías militares privadas** –a finales de año, la prensa informaba sobre todo de la presencia de mercenarios rusos en apoyo a Hifter y de combatientes de Sudán llegados a Libia para apoyar al GNA. El diplomático también alertó sobre la expansión del fuego de artillería a zonas pobladas –con un aumento de las víctimas civiles– y aportó datos ilustrativos sobre el creciente uso del fuego aéreo en el conflicto. Según los datos de UNSMIL, desde abril y hasta mediados de noviembre se habían registrado unos 800 ataques aéreos con aviones no tripulados en apoyo al LNA y otros 240 en respaldo al GNA, operaciones que necesariamente requieren de apoyo externo. Las dinámicas de violencia se vieron favorecidas por la gran cantidad de arsenales de la era Gaddafi que circulan en el país, pero también por continuas vulneraciones al embargo de armas. En diciembre Salame denunció que el embargo se había transgredido en al menos 45 ocasiones desde la escalada de violencia en abril y subrayó que las divisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU habían impedido la aprobación de un cese el fuego pese a que el tema había sido discutido en al menos 15 oportunidades.

La intensificación de la violencia en Libia en 2019 supuso un mayor deterioro de la situación de la población afectada por años de conflicto armado. **Durante el año se alertó especialmente sobre los desplazamientos forzados de población –entre 120.000 y 200.000 personas desde abril, según estimaciones.** Un 51% de las personas desplazadas serían mujeres y enfrentaban riesgos desproporcionados de sufrir violencia y acoso, incluyendo de carácter sexual. También se denunciaron más de 60 ataques sobre hospitales o personal sanitario y un grave deterioro en la atención de salud, que –según un estudio dado a conocer en octubre de 2019– afectaba de manera especial a mujeres y niñas. Asimismo, a lo largo del año continuaron las denuncias

sobre los impactos del conflicto en la población migrante y refugiada en Libia. **En julio causó consternación el ataque a un centro de detención de inmigrantes y personas refugiadas en las afueras de Trípoli que dejó 53 víctimas mortales, en un incidente atribuido al LNA.** A fines de 2019 también trascendió un informe reservado del Consejo de la UE en el que se reconoce que más de 5.000 personas permanecían detenidas en entre 17 y 35 centros oficiales y no oficiales, de las cuales 3.700 en “zonas de conflicto”. El documento admite que el Gobierno libio continuaba sin mejorar la situación en estos centros –abarrotados, sin servicios básicos y escenario de múltiples abusos a los derechos humanos– y sin abordar las habituales desapariciones de personas capturadas por los guardacostas libios en su fallido viaje a Europa. El informe incluso plantea que el propio Gobierno y funcionarios estarían involucrados en estas prácticas como un modelo de negocio, en medio de denuncias de sobornos y chantajes a las familias de las personas detenidas. Pese a ello, el documento celebra como “progreso” la reducción en los arribos a Europa desde Libia. Pese a las demandas de organizaciones de derechos humanos para revocarlo, en noviembre Italia renovó un multimillonario acuerdo con el Gobierno de Serraj para frenar los flujos de personas migrantes y refugiadas en el Mediterráneo, que compromete a Roma y a la UE a dar formación a la guardia costera libia y financiar los centros de detención.²²

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Síntesis:	En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del <i>statu quo</i> mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia. En 2016, la firma de un acuerdo de paz con las FARC llevó a su desmovilización y transformación en partido político.

Continuó activo el conflicto armado en Colombia y a lo largo de todo el año se registraron enfrentamientos armados y diferentes actos de violencia. **El año se iniciaba con la cancelación definitiva de las conversaciones de paz entre el Gobierno y el ELN después de que un atentado reivindicado por el grupo armado contra la academia de Policía en Bogotá el 17 de enero causara la muerte de 21 policías e hiriera a más de 60. Se trataba del atentado más mortífero en la capital del país en los últimos 15 años.** El atentado fue condenado por el partido político FARC. En los meses siguientes se produjeron nuevos episodios de violencia, con enfrentamientos de los grupos insurgentes con las fuerzas de seguridad y también con grupos armados paramilitares y narcotraficantes como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El Gobierno de Colombia acusó a Venezuela de dar apoyo y alentar la insurgencia armada colombiana. Según los datos recogidos por la Fundación Ideas para la Paz, el ELN fue el grupo armado más activo durante el año 2019. En paralelo a la actividad armada del ELN, cabe destacar que en agosto, destacados dirigentes de las FARC anunciaron que retomaban la lucha armada y abandonaban el acuerdo de paz firmado en 2016 en La Habana. Entre quienes renunciaron a la implementación del acuerdo de paz se encontraban Iván Márquez –exjefe negociador de las FARC en La Habana–, Jesús Santrich, El Paisa o Romaña. Varios de estos dirigentes se encontraban en paradero desconocido y habían abandonado los diferentes procesos institucionales contemplados por el acuerdo de paz, como la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y fueron oficialmente expulsados de la JEP como consecuencia de su regreso a las armas. Además, señalaron que buscarían alianzas militares con el ELN. En los meses posteriores al anuncio de reinicio de la lucha armada nueve integrantes de la disidencia de las FARC murieron en la zona de San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá como consecuencia de una operación militar. En octubre, la Fiscalía acusó a esta misma disidencia de ser la responsable de una matanza de indígenas en el municipio de Toribio, en Cauca (sur), en la que murieron cinco personas y otras seis resultaron heridas. En este mismo mes se celebraron elecciones locales, que estuvieron precedidas de varios episodios de violencia en los que murieron diferentes candidatos. International Crisis Group señaló que un total de 22 candidatos a alcaldía habían muerto a lo largo del año. La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó de que entre enero y octubre se desplazaron 15.000 personas en ocho departamentos fruto de la violencia relacionada con el conflicto. El departamento más afectado por estos desplazamientos forzados fue Nariño, donde más de 5.000 personas tuvieron que huir de sus hogares. Además, durante todo el año se produjeron numerosos asesinatos de dirigentes sociales, defensores de derechos humanos e indígenas, con grupos paramilitares y delincuentes como responsables

22. Daniel Boffey, “Migrants detained in Libya for profit, leaked EU report reveals”, *The Guardian*, 20 de noviembre de 2019; Ylenia Gostoli, “Anti-migration deal between Italy and Libya renewed”, *al-Jazeera*, 2 de noviembre de 2019.

de gran parte de los asesinatos. Así, el Instituto de Medicina Legal señaló que entre enero y noviembre de 2019 al menos 83 indígenas habían sido asesinados. 42 de ellos en el departamento del Cauca. Por su parte, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia señaló que durante 2019 había documentado la muerte de 89 personas, 20 de ellos de personas desmovilizadas de las FARC.

El ELN fue el grupo armado más activo en Colombia durante 2019

constantes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad afganas con apoyo internacional y los grupos armados, especialmente las milicias talibán e ISIS – que opera con el nombre EI-KP (Estado Islámico-Provincia Khorasan) en el país asiático–. Miles de personas murieron como consecuencia de la violencia. Con respecto al impacto en la población civil, los registros de la misión de Naciones Unidas en el país, UNAMA señalaron que durante 2019 murieron 3.403 civiles y 6.989 resultaron heridos. Esta cifra representa la más baja desde 2013. Sin embargo, UNAMA destacó que 2019 representó un record en el número de civiles muertos como consecuencia de los bombardeos aéreos y de las operaciones de búsqueda. El centro de investigación ACLED señaló que la cifra de personas muertas en 2019 era de cerca de 42.000.²³ Un balance de fallecidos llevado a cabo por la BBC reveló una media de 74 personas muertas diariamente en Afganistán durante agosto como consecuencia de la violencia armada. Por su parte, el Uppsala Conflict Data Program señaló que durante los 10 primeros meses de 2019 murieron más personas en Afganistán como consecuencia del conflicto que durante todo 2018, con 24.000 muertes, lo que podría implicar que este fuera el conflicto más mortífero del año, lo que también coincidiría con el balance proporcionado por ACLED.²⁴ Además, Naciones Unidas denunció que durante 2019 casi 350.000 personas se desplazaron internamente como consecuencia del conflicto armado. Las negociaciones de paz entre la insurgencia talibán y el Gobierno de EEUU que se desarrollaron durante la primera mitad del año no sirvieron para reducir de forma significativa la violencia y, de hecho, los datos de UNAMA apuntaron a que julio fue el mes en el que se registró el mayor número de víctimas civiles desde que Naciones Unidas hace seguimiento. Además, gran parte de los atentados y ataques armados se produjeron coincidiendo con la celebración de las diferentes rondas de negociación, incluyendo ataques contra organizaciones humanitarias financiadas por EEUU.

En marzo, los talibanes lograron tomar el control de una base militar en la provincia de Badghis, matando a 21 soldados y haciendo prisioneros a otros 40, en el marco de una fuerte ofensiva armada talibán en el distrito de Bala Murghab que se prolongó durante el mes de abril, cuando centenares de talibanes atacaron el centro del distrito, matando al menos a 30 soldados. En mayo tuvo lugar otro grave atentado que causó la muerte a 20 policías en la provincia de Baghlan. En este mismo mes, un ataque estadounidense contra supuestos laboratorios talibanes de narcóticos, causó la muerte a 30 civiles según las investigaciones de Naciones Unidas, lo que fue negado por EEUU. Coincidiendo con el inicio de la ronda de negociaciones de finales de

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS (EI-KP)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión “Resolute Support”, con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión “Freedom Sentinel”.

El conflicto armado en Afganistán mantuvo elevados niveles de violencia a lo largo de todo el año, con

23. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), *Number of reported fatalities by country-year*. acleddata.com

24. Uppsala Conflict Data Program, Bulletin. “Afghanistan: The deadliest conflict in the world”, 2019.

junio, una serie de atentados y enfrentamientos en dos días causaron la muerte de 300 personas, entre insurgentes talibanes e integrantes de las fuerzas de seguridad. Especialmente grave fue el ataque en la provincia de Baghlan en el que murieron 25 miembros de una milicia gubernamental. En septiembre, coincidiendo con la celebración de las elecciones presidenciales se produjeron múltiples atentados de enorme gravedad. Dos atentados el 17 de septiembre, uno de ellos en un acto de campaña electoral del presidente Ashraf Ghani y otro en las inmediaciones de la embajada de EEUU en Kabul, causaron la muerte a 48 personas. Días después un ataque con un dron estadounidense, supuestamente dirigido contra ISIS, causó la muerte a 30 civiles en la provincia de Nangarhar, mientras que un atentado talibán contra un hospital en la provincia de Zabul causó la muerte a 22 personas e hirió a otras 90. Además, el Gobierno afgano admitió que una operación contrainsurgente con apoyo estadounidense en la provincia de Helmand había causado la muerte a 40 civiles. La Comisión Electoral Independiente anunció el 22 de diciembre que los resultados preliminares de las elecciones del 28 de septiembre otorgaban la victoria al presidente Ghani. El principal contrincante, Abdullah Abdullah anunció que disputaría estos resultados.

En lo que respecta a la violencia por parte de ISIS, cabe destacar que informaciones de la BBC señalaron que Afganistán era el país en el que durante 2018 y 2019 había estado más activo, exceptuando Iraq y Siria. El grupo actuó fundamentalmente en las provincias de Nangarhar y Kunar. En agosto, coincidiendo con los anuncios de un inminente acuerdo de paz entre los talibanes y EEUU, se produjo el atentado más grave hasta ese momento desde que esta organización empezó a operar en el país, en el que 63 personas que asistían a una boda, en su mayoría shiíes, murieron como consecuencia de un atentado suicida. En octubre tuvo lugar otro atentado de mayor gravedad que causó la muerte a 73 personas en una población de pocos centenares de habitantes en la provincia de Nangarhar, coincidiendo con los rezos del viernes en la mezquita.

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, All Parties Hurriyat Conference, JKLF
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

La situación se deterioró notablemente en el estado indio de Jammu y Cachemira, lo que tuvo repercusiones negativas en la relación entre India y Pakistán. En febrero se produjo el atentado más grave contra las fuerzas de seguridad indias en Jammu y Cachemira.

La explosión de un coche conducido por un suicida en el distrito de Pulwama el 14 de febrero al paso de un convoy de las fuerzas de seguridad indias causó la muerte de 45 miembros de estas fuerzas. El atentado fue reivindicado por el grupo armado con base en Pakistán Jaish-e-Muhammad y derivó en que el Gobierno iniciara el despliegue de miles de integrantes adicionales de las fuerzas de seguridad, la imposición de un toque de queda y la detención de más de 200 líderes de la oposición en los días inmediatamente posteriores, aunque las detenciones se prolongaron en los meses siguientes con casi 4.000 personas arrestadas, de las que más de 2.000 fueron puestas en libertad posteriormente. India acusó a Pakistán de haber orquestado el ataque, acusaciones que fueron negadas por el Ejecutivo pakistaní. El hecho de que la persona que perpetró el ataque fuera de una población cercana al lugar del

atentado puso de manifiesto la naturaleza cada vez más interna de los grupos armados cachemires, así como el menor control que Pakistán ejerce sobre estos. Las fuerzas de seguridad indias anunciaron haber matado a cinco dirigentes de Jaish-e-Muhammad en los días posteriores. Cinco días después del atentado, un nuevo ataque insurgente causó la muerte a un comandante de las Fuerzas Armadas indias, otros tres soldados y un civil. En los meses posteriores se repitieron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad indias y los grupos insurgentes cachemires, que causaron la muerte de centenares de personas. De acuerdo con las cifras del centro de investigación indio South Asia Terrorism Portal, durante 2019 murieron 283 personas, una cifra sensiblemente inferior a la de años anteriores (452 en 2018 y 357 en 2017). De las personas fallecidas, 42 eran civiles, 78 miembros de las fuerzas de seguridad y 163 integrantes de los grupos insurgentes. Por su parte, la Jammu and Kashmir Coalition of Civil

Society señaló una cifra de fallecimientos notablemente superior como consecuencia del conflicto armado. Esta organización destacó que durante 2019 murieron 368 personas, de las que 80 eran civiles, 159 insurgentes y 129 integrantes de las fuerzas armadas.

En agosto se incrementó notablemente la tensión en el estado cuando el Gobierno indio tomó la decisión de revocar el estatus especial de autonomía de Jammu y Cachemira, alegando la situación de inseguridad y la posibilidad de nuevos atentados perpetrados desde Pakistán. **Además, se le retiró el estatus de estado, dividiéndolo en dos (Jammu y Cachemira y Ladakh) y rebajando su calificación a Territorio de la Unión y perdiendo su constitución y banderas propias.** En paralelo a la suspensión de la autonomía, se llevó a cabo un despliegue de 40.000 soldados y miembros de las fuerzas de seguridad adicionales –habitualmente están desplegados en torno a 250.000 efectivos, lo que convierte a Cachemira en una de las zonas más militarizadas del mundo–, se cortaron los servicios de internet y telecomunicaciones y se restringió el derecho de reunión. A pesar de las prohibiciones se produjeron manifestaciones de protesta, que a su vez derivaron en detenciones, entre las que cabe destacar la del antiguo ministro jefe del estado, Farooq Abdullah, arrestado bajo la Ley de Seguridad Pública que permite detenciones sin cargos y juicio durante dos años. Numerosos líderes sociales y políticos fueron detenidos. La retirada de la autonomía tuvo un grave impacto en las relaciones con Pakistán, dado que Jammu y Cachemira es el asunto central en la disputa entre ambos Estados. En octubre, cinco civiles procedentes del estado de Bengala Occidental fueron tiroteados por insurgentes, en el marco de las represalias contra la población que acudiera a trabajar o abriera sus negocios durante los llamamientos a la huelga como respuesta por la retirada de la autonomía al estado. En semanas posteriores se produjeron nuevos asesinatos siguiendo este patrón. A finales de noviembre dos personas murieron como consecuencia de la explosión de granadas en el distrito de Anantnag.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial.

Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

El conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad indias con la insurgencia naxalita continuó activo durante todo el año, con una intensidad similar a la de 2018 y con cifras de mortalidad asociadas a la violencia ligeramente inferiores a las de años anteriores. Durante 2019 murieron un total de 302 personas como consecuencia del conflicto armado, de las que 99 eran civiles, 154 integrantes del grupo armado CPI-M y 49 eran miembros de las fuerzas de seguridad indias, de acuerdo con las cifras recogidas por el South Asia Terrorism Portal. Los estados afectados por el conflicto armado fueron fundamentalmente Chhattisgarh, en el que murieron 122 personas, Jharkhand (64 muertes), Maharashtra (51 muertes), Bihar (21 muertes), Odisha (19 muertes), Andra Pradesh (14 muertes), Kerala (5 muertes) y Telengana (2 muertes). Durante todo el año se repitieron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los insurgentes, con diferentes operaciones militares así como emboscadas y ataques por parte de los naxalitas. Cabe destacar que en mayo, coincidiendo con la celebración de las elecciones generales en el país, tuvo lugar el ataque más grave del año, cuando la explosión de una mina antipersonal en el distrito de Gadchiroli, estado de Maharashtra, causó la muerte a 15 policías y un civil. Según algunos analistas, se trató de un ataque en respuesta a los enfrentamientos de 2018 en los que murieron cerca de 40 insurgentes en este mismo distrito. Posteriormente se produjeron diversas detenciones en relación a este atentado. Durante la campaña electoral se habían producido diferentes incidentes de violencia en Chhattisgarh, Odisha y Jharkhand, como el ataque en el distrito de Kander (Chhattisgarh) el 4 de abril en el que murieron cuatro miembros de las fuerzas de seguridad. En julio el Gobierno indio anunció que llevaría a cabo más operaciones por parte de la Policía para combatir a la insurgencia, a la que consideraba debilitada. Además, en Kerala se anunció un plan de amnistía para los insurgentes maoístas a cambio de información y denuncias contra colaboradores. En julio la Policía afirmó haber ejecutado a siete insurgentes en el distrito de Bastar, en Chhattisgarh. En noviembre se produjo un repunte de la violencia, con varios incidentes en el estado de Jharkhand, cuando la insurgencia mató a cuatro policías y dos civiles, incluyendo un integrante del partido BJP, lo que llevó al Ministro de Defensa, Rajnath Singh, a amenazar con incrementar las acciones contra los naxalitas. Por otra parte, en diciembre se hizo público un informe llevado a cabo por una comisión de investigación judicial que reveló que 17 personas que murieron tiroteadas por las fuerzas de seguridad en Chhattisgarh en 2012 no eran insurgentes naxalitas, sino

población civil adivasi –término con el que se denomina a las distintas tribus indígenas que habitan varios estados de la India–, incluyendo varios menores. Esto llevó a diferentes organizaciones de derechos humanos a exigir acciones contra los responsables de los asesinatos, destacando que hay numerosos casos similares pendientes de resolución por parte de los tribunales. Las fuerzas de seguridad han sido acusadas repetidamente de graves violaciones de los derechos humanos de la población civil, especialmente la población adivasi, en los estados afectados por el conflicto armado.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación *Zarb-e Azb* para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

El conflicto armado en Pakistán continuó activo durante todo el año con niveles de intensidad inferiores a los de 2018. De acuerdo con los datos del Center for Research and Security Studies de Pakistán durante el año murieron 679 personas en el conjunto del país como consecuencia de la violencia armada y los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y los grupos insurgentes. Otras fuentes, como el South Asia Terrorism Portal recogieron un balance de 369 personas fallecidas como consecuencia

de la violencia armada, notablemente inferior a la del año anterior. **La provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que comprende los territorios anteriormente conocidos como Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA, por sus siglas en inglés), continuó concentrando una parte importante de los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con la insurgencia talibán, así como las operaciones de seguridad, lo que derivó en un grave impacto en términos de víctimas mortales, con 265 muertes como consecuencia de la violencia.** No obstante, la insurgencia talibán también estuvo operativa en otras zonas del país, llevando a cabo ataques en las provincias de Punjab y Baluchistán además de Khyber Pakhtunkhwa. La insurgencia talibán llevó atentados contra las fuerzas de seguridad, pero también contra la población civil, con atentados en mezquitas y mercados. Además, se repitieron los asesinatos de trabajadores sanitarios, especialmente de aquellos involucrados en las campañas de vacunación contra la polio. En mayo, la explosión de una bomba en un santuario sufí en Lahore, capital de la provincia de Punjab, causó la muerte de 10 personas, entre las que se incluían cinco agentes de Policía. En julio se produjo otro grave atentado suicida en el distrito de Dera Ismail Khan, en el noroeste del país, en el que murieron nueve personas y otras 30 resultaron heridas. El doble atentado, que fue reivindicado por los talibanes, tuvo lugar en un control de seguridad y posteriormente se atacó el hospital al que fueron trasladadas las personas heridas. Además, seis soldados que patrullaban en las inmediaciones de la frontera con Afganistán en Waziristán Norte murieron tras un ataque del grupo talibán TTP. En noviembre, un nuevo atentado con bomba en Waziristán Norte causó la muerte de tres soldados. En paralelo a los enfrentamientos entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad, cabe destacar la represión a las protestas sociales que tuvo lugar en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fundamentalmente en las antiguas FATA, donde al menos 13 personas murieron tras ser tiroteadas por las fuerzas de seguridad en el transcurso de una manifestación por la defensa de los derechos de la población pashtún. Tras la integración de las FATA en Khyber Pakhtunkhwa se han repetido las protestas sociales acusando a las Fuerzas Armadas de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamiento forzado de población en el marco de las operaciones militares. Entre los manifestantes se encontraban al menos dos parlamentarios.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (<i>shura</i> de Quetta), ISIS
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, si no miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

En la provincia de Baluchistán se repitieron los enfrentamientos armados y los atentados durante todo el año, tanto los llevados a cabo por los grupos insurgentes nacionalistas baluchis, como por la insurgencia talibán, con fuerte presencia en la provincia.

Según las cifras recopiladas por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, durante 2019 murieron 226 personas en la provincia en el marco del conflicto armado. Por su parte, el centro de investigación South Asia Terrorism Portal señaló que durante 2019, 180 personas murieron como consecuencia de la violencia en Baluchistán, una cifra notablemente inferior a la de años anteriores. En abril un atentado con bomba en un mercado de Quetta causó la muerte de al menos 16 personas y dejó numerosas personas heridas. El atentado tuvo lugar en una zona habitada mayoritariamente por población shíí. En este mismo mes, otras 14 personas murieron en una carretera en el distrito de Gwadar cuando varios hombres armados vestidos de militares pararon seis autobuses, separando a quienes llevaban identificaciones de las fuerzas de seguridad, tiroteándoles posteriormente. El atentado fue reivindicado por el grupo armado Baloch Raji Aojoi Sangar. Este grupo, conformado a finales de 2018, está integrado por el BLF, el BLG y una facción disidente del BLA. El grupo armado BLA reivindicó un atentado en mayo en el que murieron cinco personas cuando varios hombres armados tirotearon un hotel de lujo en el que suelen alojarse representantes del Gobierno chino y trabajadores de origen chino empleados en un proyecto portuario en la ciudad de Gwadar. La insurgencia nacionalista baluchi se opone a las inversiones económicas y los proyectos de infraestructuras desarrollados por el Gobierno y empresarios chinos en la provincia. En julio se produjeron varios episodios de violencia, entre los que cabe destacar una operación contra la insurgencia baluchi en la zona de Turbat en la que murieron cuatro soldados y un atentado contra una comisaría de Policía en Quetta. En este último atentado, reivindicado por el grupo armado talibán TTP, murieron cinco personas y cerca de 30 resultaron

heridas. En agosto cuatro personas murieron en Quetta cuando estalló una bomba en una mezquita durante los rezos de los viernes. Se trataba de una mezquita frecuentada por la insurgencia talibán, cuya *shura* – consejo de líderes– tiene sede en Quetta. El atentado no fue reivindicado y se produjo justo después de la octava ronda de negociaciones de paz entre los talibanes de Afganistán y el Gobierno de EEUU en Qatar. En octubre el estallido de una bomba en Quetta causó la muerte de un policía e hirió a otros cinco. En noviembre al menos siete miembros de las fuerzas de seguridad murieron en diferentes hechos de violencia, entre los que cabe destacar los enfrentamientos con la insurgencia baluchi en el distrito de Rajanpur en la provincia de Punjab y el estallido de una bomba el día 15 de noviembre.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

Aunque el Gobierno no ofreció cifras sobre la mortalidad asociada al conflicto, varios análisis apuntan a que, en términos generales, la intensidad de las hostilidades bélicas entre el Estado y el NPA fue similar a la del año anterior. Según datos de la base de datos Political Violence in the Southern Philippines Dataset, entre enero de 2017 y julio de 2018, 168 soldados, policías y civiles habrían muerto en el marco del conflicto armado, mientras que otras 266 personas habrían resultado heridas. Por la parte del NPA, el conflicto provocó la muerte a 185 combatientes y heridas a otros 109. A mediados del 2019, el Partido Comunista de Filipinas (PCF), sin embargo, declaró que 318 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado habrían muerto

durante 2018 por enfrentamientos con el NPA. A principios de 2019, tanto las Fuerzas Armadas como el propio presidente, Rodrigo Duterte, anunciaron su objetivo de haber derrotado militarmente al NPA para el año 2022. Para tal fin, el Gobierno mostró su satisfacción con los resultados que estaba arrojando la nueva estrategia contrainsurgente surgida de la Orden Ejecutiva 70 (emitida en diciembre de 2018), conocida popularmente como “Enfoque integral de toda la nación para alcanzar una paz inclusiva y duradera”, para cuya implementación se creó un Grupo de Trabajo Nacional para la Terminación del Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ECLAC), que durante el año se replicó a nivel provincial. Según el Gobierno, esta nueva estrategia pretende ir más allá de las operaciones de contrainsurgencia e incidir en el bienestar y desarrollo de las comunidades en las que el movimiento comunista históricamente ha tenido mayor arraigo. **Manila destacó especialmente el impacto que este nuevo enfoque estaba teniendo en las rendiciones y deserciones masivas de miembros regulares o de apoyo del NPA.**

Así, las Fuerzas Armadas declararon que solamente en Mindanao Oriental, entre enero de 2018 y febrero de 2019, más de 11.500 personas vinculadas al movimiento insurgente –918 miembros regulares del NPA, 1.217 milicias de apoyo, conocidas como Militia ng Bayan; 434 miembros de grupos de apoyo local y 8.932 miembros de organizaciones de apoyo clandestinas– se habían acogido a programas de reinserción y reintegración promovidos por el Gobierno. En la provincia de Agusán del Norte, por ejemplo, el mencionado Grupo de Trabajo Provincial para la Terminación del Conflicto, declaró que 898 miembros activos del NPA o de colectivos de apoyo a la insurgencia habían decidido acogerse a tales programas de reintegración entre enero y octubre de 2019. El Gobierno informó en varios momentos del año sobre deserciones masivas del NPA. Según Manila, solamente entre el 15 y el 22 de julio más de 200 miembros del NPA se habrían entregado a las autoridades en las provincias de Cotobato Norte, Bukidnon y Davao del Sur, todas ellas en Mindanao. En la misma línea, cabe destacar especialmente la entrega de armas y el inicio de un proceso de reintegración de 727 antiguos combatientes del Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa-Pilipinas/Revolutionary Proletarian Army/Alex Boncayao Brigade-Tabara-Paduan Group (RPM-P/RPA/ABB-TPG), también conocido como KAPATIRAN. Dicho grupo se escindió del PCF y del NPA a mediados de los años noventa y en el año 2000 firmó un acuerdo con el Gobierno. Desde entonces, los combatientes del grupo permanecían acantonados pero no desarmados. En julio de 2019 se firmó un Documento de Clarificación de la Implementación con cinco puntos que, de ser cumplidos, deberían permitir la firma de un Acuerdo de Cierre o Finalización para el año 2022. En noviembre de 2019, 266 de las 727 personas que entregaron sus armas finalizaron un programa de formación

para su integración en las Fuerzas Armadas. En los últimos años, se habían producido varios incidentes de violencia entre miembros del NPA y del RPM-P/RPA-ABB TPG, de modo que durante la ceremonia de entrega de armas en el mes de septiembre, Duterte se comprometió personalmente a garantizar la seguridad de los ex combatientes del grupo. En este sentido, cabe señalar que pocos días después de dicha ceremonia, un destacado líder del RPM-P/RPA-ABB TPG fue asesinado en Negros Occidental. En dicha región precisamente el Gobierno hizo pública la posibilidad de imponer la ley marcial después de que se produjeran repuntes de violencia política en varios momentos del año (21 personas fueron asesinadas en una sola semana a finales de julio, por ejemplo). El Gobierno señaló que el NPA estaba detrás de varios de estos incidentes y le acusó de sacar rédito de los conflictos de tierras en la región y de haber construido un cuasi-estado en la provincia.

El Gobierno filipino sostiene que su nuevo enfoque de gestión del conflicto está propiciando deserciones y rendiciones masivas en el seno del NPA

A pesar de las declaraciones de Manila sobre las deserciones masivas del NPA y sobre los impactos de su nueva estrategia contrainsurgente, el Gobierno también reconoció que el movimiento comunista seguía suponiendo una de las principales amenazas contra la seguridad. **Las propias Fuerzas Armadas reconocieron que si bien estiman en unos 5.000 los miembros activos del NPA, calculan que existen otras 50.000 personas en todo el país que podrían considerarse miembros no armados del grupo.** Por su parte, el fundador del NPA, Jose Maria Sison, señaló que actualmente el grupo tiene 120 frentes activos en 74 de las 81 provincias del país y que el PCF tiene más de 100.000 miembros en todo el país. Con motivo de la conmemoración del 50º aniversario de la fundación del NPA en 1969, el PCF ordenó al NPA un incremento de los ataques en todo el país y afirmó que el movimiento comunista estaba logrando avances significativos en todos los frentes. En cuanto a las dinámicas del conflicto, durante todo el año se registraron enfrentamientos regulares, principalmente en Mindanao y en algunas provincias de Visayas. Algunas de las acciones del NPA generaron reacciones políticas, como la que provocó la muerte de seis soldados (y heridas a otros 20) en noviembre en la ciudad de Borongan o bien la ofensiva en Samar en el mes de abril, en la que otros seis soldados perecieron. El 30 de marzo, en cambio, al día siguiente de la conmemoración del 50º aniversario de la fundación del grupo, 14 de sus combatientes murieron y otros tantos fueron detenidos en una operación del Ejército en la provincia de Negros Occidental. A finales de año, en paralelo a las declaraciones de ambas partes sobre su voluntad de reanudar las negociaciones de paz a principios de 2020, el NDF anunció un cese de hostilidades entre el 23 de diciembre y el 7 de enero con motivo de las fiestas navideñas, medida que fue replicada inmediatamente por el Gobierno, tal y como ha sido habitual en los últimos años. También a finales de diciembre, Manila anunció la reconstitución de

su panel negociador y la inclusión en el mismo de Salvador Medialdea, secretario ejecutivo del Gobierno y, según varios medios, persona muy cercana a Duterte. Finalmente, cabe señalar que el Gobierno acusó al NPA de cometer crímenes de guerra por el reclutamiento de menores. Según datos de las Fuerzas Armadas hechos públicos en agosto, entre 1999 y 2019 el Estado habría neutralizado a 513 menores reclutados por el NPA, de los que 362 se habrían entregado, 134 habrían sido capturados y 17 habrían sido abatidos.

Filipinas (Mindanao)	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por vez primera un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

Aunque no trascendieron las cifras de mortalidad vinculadas al conflicto armado entre el Estado y varios grupos –como el BIFF, Abu Sayyaf, el Grupo Maute o Ansarul Khilafah Mindanao– los niveles de violencia fueron parecidos o incluso inferiores a los del año anterior. En 2018, 173 combatientes del BIFF y 21 soldados habían muerto en 83 enfrentamientos en Mindanao (especialmente en Maguindanao, feudo principal del BIFF). Además, se registraron otros

36 enfrentamientos entre el Estado y otros grupos considerados yihadistas que obligaron a más de 91.000 personas a abandonar sus hogares. También en 2018, en Basilan, Sulu y Tawi-Tawi, 161 personas murieron y más de 5.000 se desplazaron forzosamente por los enfrentamientos (63) con Abu Sayyaf. Además del conflicto entre el Estado y los mencionados grupos, en 2019 también se produjeron enfrentamientos entre el MILF y el BIFF, un grupo escindido del primero. A modo de ejemplo, en octubre siete combatientes del MILF y cuatro del BIFF murieron en el marco de un intercambio de fuego entre el MILF y una de las tres facciones principales del BIFF liderada por Abu Toraife. Cabe señalar que, tras el establecimiento de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RABMM), gobernada interinamente por el líder histórico del MILF, el grupo se ha involucrado más activamente en la prevención del radicalismo en Mindanao y en la lucha contra grupos vinculados con ISIS. Según varias personas expertas, si bien la coordinación entre dichos grupos todavía es precaria y su capacidad militar permite solamente llevar a cabo ataques esporádicos, la derrota de ISIS en Iraq y Siria, donde perdió sus últimos bastiones en el mes de marzo, hace que el grupo esté modificando su estrategia global, abandonado la pretensión de controlar territorio y centrando sus esfuerzos en expandir y diversificar territorialmente sus llamamientos de corte yihadista. En este marco, según los mencionados analistas, **ISIS está concediendo una importancia creciente al Sudeste Asiático y muy en particular a Mindanao**. Así, en 2019 siguió consolidándose la tendencia ya observada en los dos años precedentes de una creciente articulación de ISIS en la región y de un incremento de combatientes foráneos, vídeos y propaganda, ataques suicidas o entrenamiento militares en Mindanao. A mediados de año, por ejemplo, las Fuerzas Armadas reconocieron haber detectado a más de un centenar de combatientes extranjeros en Mindanao, varios de los cuales en tareas de entrenamiento en artefactos explosivos y atentados suicidas. De hecho, algunos de los episodios de violencia más importantes del año fueron cometidos por personas que no tenían la ciudadanía filipina.

En cuanto a las dinámicas bélicas del año, cabe destacar el incremento de las hostilidades a principios de año, coincidiendo con el plebiscito sobre la ratificación de la Ley Orgánica de Bangsamoro, que se celebró en dos rondas a finales de enero y a principios de febrero. Si bien el 31 de diciembre de 2018 ya había habido un atentado en un centro comercial de Cotobato en el que dos personas murieron y más de 30 resultaron heridas, ISIS declaró, en su primer comunicado desde finales de 2017, que más de 30 soldados habían muerto en el marco de los enfrentamientos con varios grupos, especialmente con el Grupo Maute. **Dos días después de que se proclamaran los resultados de la primera vuelta del mencionado plebiscito, 22 personas murieron y otras 109 resultaron heridas tras el estallido simultáneo de dos artefactos explosivos en la catedral de Jolo**, capital de la provincia de Sulu. Tres

días más tarde, dos personas murieron y muchas otras resultaron heridas tras un atentado en una mezquita de Zamboanga. En los días posteriores al atentado en Jolo, el Gobierno señaló que la autoría material del ataque correspondió a dos personas de origen indonesio, que contaron con el apoyo de ISIS y de una de las facciones más activas de Abu Sayyaf, denominada Ajang Ajang. Dicha facción, cuyo feudo principal está en Sulu –la otra facción principal del grupo está liderada por Furuji Indama y se asienta principalmente en Basilan–, está liderada por Hatib Hajan Sawadjaan, de quien varios analistas han señalado que ha pasado a ser el referente principal de ISIS en el sur de Filipinas y a quien el departamento de Estado de EEUU llegó a identificar como emir de la región. A finales de enero y durante el mes de febrero, las Fuerzas Armadas intensificaron su campaña contrainsurgente en Sulu, incluyendo varios bombardeos aéreos. En este sentido, el Gobierno declaró su intención de derrotar a Abu Sayyaf para finales de 2019, y para ello desplegó tropas adicionales en el archipiélago de Sulu. Algunos analistas anticiparon un incremento de las hostilidades entre ambas partes por considerar que las Fuerzas Armadas ya habían neutralizado a algunos de los grupos que operan en otras latitudes de Mindanao, lo cual permitía al Ejército concentrar esfuerzos en la lucha contra Abu Sayyaf. Además, dichos analistas consideran que el hecho de que el grupo haya reducido drásticamente el número de secuestros facilita al Estado la puesta en marcha de operaciones militares a gran escala sin poner en riesgo la vida de los rehenes. Por otra parte, después de que ocho personas murieran en un doble atentado con artefactos explosivos atribuido a Abu Sayyaf en junio, el Gobierno advirtió de que, tal vez por la creciente articulación entre ISIS y Abu Sayyaf, el grupo estaba utilizando cada vez más los atentados suicidas. Finalmente, el hecho de que la provincia de Sulu, bastión de Abu Sayyaf, votara en contra de su incorporación a la nueva RABMM a principios de año dificultaría la participación del MILF en la neutralización del grupo. En este sentido, en varios momentos del año el Gobierno pidió ayuda en su lucha contra Abu Sayyaf a Nur Misuari, fundador del MNLF, grupo con una importante presencia en los principales bastiones de Abu Sayyaf. Cabe señalar que en el mes de marzo Nur Misuari amenazó con reanudar la guerra en Mindanao si el Gobierno no accedía a sus demandas y no avanzaba en el objetivo de Duterte de transformar Filipinas en un estado federal, pero el Ejecutivo señaló que actualmente el MNLF tiene la capacidad para llevar a cabo operaciones armadas de una cierta envergadura pero no para reanudar una guerra de alta intensidad contra el Estado.

En el marco de la ley marcial que se impuso en Mindanao a finales de 2017 y que volvió a renovarse

Poco después de la celebración del plebiscito sobre la nueva región autónoma en Mindanao, 22 personas murieron y otras 109 resultaron heridas tras el estallido simultáneo de dos artefactos explosivos en la catedral de Jolo

hasta finales de 2019, se registraron enfrentamientos frecuentes entre las Fuerzas Armadas y el BIFF y, en menor medida, con otros grupos como Ansar Khilafa o el Grupo Maute. Cabe destacar especialmente el incremento de las hostilidades en los meses de marzo y abril en Maguindanao (bastión del BIFF) y en Lanao del Sur (bastión del Grupo Maute), y que provocaron el desplazamiento de unas 50.000 personas en Maguindanao y otras 9.000 en Lanao del Sur. Se desconoce el número de víctimas mortales vinculadas a ambas campañas militares, que incluyeron bombardeos aéreos, pero a mediados de marzo el Gobierno declaró que más de 20 combatientes del BIFF habían fallecido. Los enfrentamientos con el BIFF fueron muy frecuentes a lo largo del año. A finales de julio, por ejemplo, diez combatientes de este grupo habrían muerto tras varios días de enfrentamientos en Maguindanao. **Cabe destacar la muerte a mediados de marzo del líder del Grupo Maute, Abu Dar, al que muchos consideraban el principal referente de ISIS en la región tras la muerte de Isnilon Hapilon y de los hermanos Maute durante el sitio de Marawi en 2017.** El Gobierno reconoció que, más de dos años después de tal sitio –el episodio de violencia más longevo e intenso del conflicto armado reciente en Mindanao–, todavía había más de 100.000 personas que no habían podido regresar a sus hogares, provocando ello una enorme frustración y resentimiento y facilitando a su vez el reclutamiento de nuevos miembros por parte de grupos islamistas. Finalmente, cabe destacar que en Mindanao también se registraron otros fenómenos de violencia, a menudo con algún tipo de relación con el conflicto armado en el sur del país, como el denominado rido (enfrentamientos clánicos o familiares por razones de honor o de tierras), la llamada guerra contra las drogas emprendida por el Gobierno o la violencia vinculada a las elecciones. Respecto de este último aspecto, la organización International Alert señaló a finales de mayo que en Mindanao se habían registrado 144 incidentes de violencia vinculados a las elecciones generales que se llevaron a cabo el 13 de mayo, pero la misma organización clarificó que tales cifras son sensiblemente inferiores a los comicios anteriores. La Policía señaló que 33 personas habían muerto a nivel nacional por hechos de violencia relacionados con las elecciones, confirmando una tendencia a la baja en este tipo de incidentes. En cuanto a la denominada guerra contra las drogas, el Gobierno reconoció en el mes de julio que 5.526 personas habían fallecido en el marco de las más de 134.500 operaciones antinarcóticas llevadas a cabo desde julio de 2016, poco después de la toma de posesión del cargo de Duterte. Sin embargo, grupos de derechos humanos sostienen que el número de víctimas mortales en el marco de esta campaña antidroga podría superar las 27.000, miles de las cuales en Mindanao.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados.

El conflicto armado en el país se mantuvo activo todo el año, afectando fundamentalmente al estado Rakhine, que fue escenario de la mayoría de los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia, especialmente el grupo armado de oposición Arakan Army (AA). Durante todo el año se registraron enfrentamientos periódicos, ataques y bombardeos que tuvieron un importante impacto y generaron desplazamientos forzados de población. El alto el fuego unilateral decretado en diciembre de 2018 por las Fuerzas Armadas en los estados Shan y Kachin se mantuvo vigente hasta el mes de octubre, lo que facilitó una reducción de la violencia en términos generales en el país, pero no tuvo impacto en la situación del estado de Rakhine, que fue escenario de constantes choques violentos. No obstante, a pesar del acuerdo de alto el fuego, se produjeron enfrentamientos esporádicos en los estados Shan, Kachin y Chin. En lo que respecta a la situación en Rakhine, alrededor de 100.000 personas se desplazaron en este estado entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, como consecuencia de los enfrentamientos con el AA, que ocasionaron la muerte a decenas de soldados e insurgentes. En agosto, un ataque contra una base militar en el norte del estado causó la muerte a 30 soldados y dos integrantes del AA. Además

de los enfrentamientos armados, el AA llevó a cabo secuestros de civiles y militares en diferentes momentos del año, destacando especialmente el secuestro en octubre de 50 policías, soldados y funcionarios del Gobierno, que dio lugar a una operación militar de rescate en la que murieron varias personas. En ese mismo mes el AA denunció que las fuerzas de seguridad estaban utilizando helicópteros en sus operaciones militares y que al menos 60 soldados habían muerto como consecuencia de los enfrentamientos que habían tenido lugar entre el 11 y el 16 de octubre. Desde su conformación en 2009, el AA ha crecido hasta contar en la actualidad con en torno a 10.000 integrantes. Por otra parte, cabe destacar los incidentes violentos protagonizados por el grupo armado ARSA, que en enero llevó a cabo una emboscada contra un convoy de Policía y en diciembre reanudó los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas birmanas. Tras los ataques en 2016 y 2017 que dieron lugar a una respuesta militar sin precedentes y la grave crisis de derechos humanos y humanitaria que sufrió la población rohinya, ARSA no había vuelto a estar activo desde enero de 2018.

El estado Shan fue escenario de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos armados TNLA y MNDAA fundamentalmente. En agosto varios ataques coordinados en el norte del estado y la región Mandalay por parte del TNLA causaron la muerte a 15 soldados. Los enfrentamientos se incrementaron después de que el 21 de septiembre expirara el alto el fuego unilateral de las Fuerzas Armadas. En septiembre, la coalición de los grupos armados AA, TNLA y MNDAA –conocidos como Alianza de la Fraternidad y que a su vez forman parte de la Alianza del Norte, que agrupa a insurgencias no adheridas al acuerdo de alto el fuego de alcance nacional, NCA por sus siglas en inglés– decretó también un alto el fuego por un periodo de un año, que fue incumplido por los propios grupos armados pocas horas después de haberlo anunciado. Esto llevó a las Fuerzas Armadas a señalar que no había interés por parte de los grupos armados en participar del NCA y a finalizar el alto el fuego iniciado en 2018. En octubre la organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció que las Fuerzas Armadas y los grupos insurgentes estarían cometiendo crímenes de guerra y la mayor parte de estos actos se habrían cometido durante el periodo de vigencia del alto el fuego.

En paralelo al desarrollo del conflicto armado, cabe destacar que prosiguieron las investigaciones internacionales sobre las graves violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el estado de Rakhine en 2017 en el marco de las operaciones de las Fuerzas Armadas contra el grupo insurgente ARSA y la población civil rohinya de este estado. La misión de investigación de Naciones Unidas presentó su informe en el que destacó que se había producido un patrón de ataques con el objetivo de borrar la identidad rohinya y expulsar a esta población de Myanmar y en el que se señalaba que la Comisión Independiente de

Investigación establecida por el Gobierno carecía de credibilidad. Además, la misión de Naciones Unidas hacía un llamamiento a imponer sanciones selectivas. A principios de noviembre, un total de 397 personas de las 750.000 que se refugiaron en 2017 en Bangladesh, habían regresado a Myanmar bajo el programa de retorno voluntario acordado por los dos Gobiernos. Por otra parte, en diciembre la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, compareció ante la Corte Internacional de Justicia por las acusaciones de genocidio contra Myanmar presentadas por Gambia en representación de la Organización para la Cooperación Islámica. La mandataria birmana negó las acusaciones de genocidio.

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Patani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

En consonancia con la tendencia de los últimos años, la violencia se redujo ligeramente respecto de los años anteriores. Así, según el centro de investigación Deep South Watch, entre enero y noviembre de 2019 habían muerto 180 personas y otras 243 habían resultado heridas en las cuatro provincias meridionales de mayoría musulmana, mientras que en 2018 el número total de víctimas mortales había sido de 218. En los años anteriores también se había producido un descenso paulatino del número de víctimas mortales (235 personas en 2017, 307 en 2016, 246 en 2015, 341 en 2014, mientras que en los cuatro años anteriores las víctimas mortales siempre fueron superiores a 450). Según Deep South Watch, **desde 2004 se han producido 20.485 incidentes violentos en los que 7.074 personas han muerto y otras 13.221 han resultado heridas.** A

pesar de tal descenso en la intensidad de la violencia, el Estado mostró en varias ocasiones su preocupación por la situación de seguridad en el sur del país y se negó a retirar tanto el llamado decreto de emergencia como la Ley de Seguridad Interna, que garantizan competencias especiales a la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que han sido criticadas de manera recurrente por congresistas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales por considerar que alientan la impunidad de las Fuerzas Armadas en la contención de la insurgencia. Tales críticas arreciaron en 2019 después de que, a finales de agosto, un presunto insurgente, Abdulloh Isomuso Abdulloh, muriera estando bajo custodia militar, trascendiendo que al día siguiente de haber sido detenido cayó en coma. Sin embargo, el Gobierno defendió en todo momento la idoneidad y proporcionalidad de las medidas especiales en el sur del país e incluso, a mediados de noviembre, tanto Bangkok como varios medios de comunicación estuvieron barajando la posibilidad (que finalmente no se concretó) de imponer el toque de queda en el sur del país.

En cuanto a las dinámicas de violencia durante el año, cabe destacar cuatro elementos. En primer lugar, en 2019 se produjo el episodio de violencia más grave de los últimos años. A principios de noviembre, **15 personas murieron y cuatro resultaron heridas tras un ataque presuntamente insurgente a un control militar en la provincia de Yala.** Aunque el ataque no fue reivindicado por ningún grupo en particular, las autoridades tailandesas lo atribuyeron al BRN, un grupo del que se estima está integrado por unos 8.000 miembros y que raramente reivindica ninguna acción armada. Este ataque confirió una enorme visibilidad mediática al conflicto y abrió un debate sobre el modelo de seguridad y su marco legislativo en el sur del país. Además, en tanto en cuanto la mayor parte de las víctimas eran civiles, el incidente arrojó dudas sobre la estrategia del Gobierno de traspasar determinadas competencias de seguridad y protección a grupos civiles armados, que en la mayoría de ocasiones cuentan con escaso entrenamiento. Según varios analistas, el movimiento insurgente trataba de demostrar su capacidad operativa en el sur del país. En este sentido, en otros momentos del año se produjeron ataques que denotaban un elevado nivel de coordinación, como el estallido simultáneo de varios artefactos en cuatro distritos de Yala a finales de agosto o en varias localizaciones de la provincia de Pattani a principios del mismo mes. Además, durante el Ramadán, a pesar de que el Estado suele reforzar las medidas de seguridad, se produjeron un elevado número de incidentes de violencia en las provincias sureñas de mayoría musulmana. El segundo elemento de preocupación para el Gobierno fue que, al contrario de lo que sucedió en años anteriores, en 2019 no hubo negociaciones de paz activas entre el Gobierno y MARA Patani –una organización paraguas que agrupa a los principales grupos insurgentes del sur del país– puesto que esta se retiró formalmente de las conversaciones en febrero de 2019. Según algunos analistas, esta circunstancia

no solamente obstaculiza una interlocución permanente entre ambas partes en conflicto, sino que dificulta al Gobierno su capacidad de presionar a MARA Patani para que las células operativas sobre el terreno reduzcan los niveles de violencia para demostrar su compromiso hacia las negociaciones de paz. El tercer elemento novedoso fue que en 2019 el movimiento insurgente llevó a cabo atentados en las provincias de Satun y Phatthalung, más al norte de su área habitual de actividad (las provincias de Yala, Pattani, Nrathiwat y parte de Songhka). A principios de agosto, coincidiendo con una cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN, cuatro personas resultaron heridas tras el estallido de seis artefactos explosivos simultáneos en varias zonas de la ciudad. La Policía atribuyó tales atentados al BRN y este lo negó. Dos semanas después de los atentados, trascendió que el Gobierno y el BRN se habían reunido en secreto. Finalmente, cabe destacar que en 2019, el movimiento insurgente llevó a cabo ataques contra monjes y templos budistas, después de varios años en los que parecía haber abandonado dicha práctica.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Ucrania (este)	
Inicio:	2014
Tipología:	Gobierno, Identidad, Autogobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

Ucrania, considerado un país en transición desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y territorio de gran importancia geoestratégica, afronta un conflicto armado en zonas del este del país y es escenario de la crisis más grave entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Precedido por un cúmulo de focos de tensión en el conjunto del país entre finales de 2013 y 2014 (protestas masivas pro-europeas y antigubernamentales; caída del presidente Víktor Yanukóvich y su régimen; anexión de Crimea por Rusia; protestas anti-Maidán y emergencia de actores armados en el este), la situación en el este de Ucrania derivó en conflicto armado en el segundo trimestre de 2014, enfrentando a milicias separatistas pro-rusas en las regiones de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, y a las Fuerzas Armadas estatales bajo las nuevas autoridades pro-europeas. Las áreas de Donetsk y Lugansk bajo control de las fuerzas rebeldes se declararon repúblicas independientes. A cuestiones como el estatus de esas provincias se añade de fondo la dimensión geoestratégica internacional (rivalidad política, económica y militar entre Occidente y Rusia en el este de Europa; demostración de fuerza de Rusia ante su propia opinión pública; entre otros elementos). La guerra ha tenido un grave impacto en la población civil, especialmente en términos de desplazamiento forzado. La guerra transcurre en paralelo a un proceso de paz con negociaciones en diversos niveles y formatos.

Se redujo de forma significativa la violencia asociada al conflicto armado en el este de Ucrania, con avances destacados en el proceso de paz y en un contexto de nueva presidencia en el país, si bien el conflicto continuó teniendo impactos en la seguridad humana. En 2019 murieron 391 personas, según la base de datos del centro de investigación ACLED, frente a las 848 de 2018. La Misión de Observación de la OSCE identificó numerosas violaciones del alto el fuego durante el año, que causaron víctimas y daños a infraestructura civil –como viviendas, colegios, instalaciones eléctricas– a causa de bombardeos y uso de armas ligeras en numerosas localidades a lo largo de la línea de contacto, así como presencia de armamento pesado en zonas no autorizadas según los acuerdos de paz de Minsk. En sus informes de 2019, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) expresó preocupación similar relativa a las nuevas víctimas civiles y a la presencia de personal militar, posiciones militares y armamento que observó en zonas residenciales o próximas a ellas. También alertó sobre la falta de acceso a servicios básicos, entre otros impactos. En torno a 3,4 millones de civiles necesitaban ayuda humanitaria (1,5 en áreas bajo control del Gobierno y 1,9 en zonas controladas por las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk). La precaria situación de los puntos de control para el cruce de la línea de contacto –escasos, en condiciones deficientes y con cierres temporales– afectó también a la población civil, con varias muertes durante el año de personas por complicaciones de salud mientras cruzaban la línea.

Durante 2019 hubo algunos meses de incremento de víctimas civiles, como en febrero y mayo. Entre las zonas afectadas por la violencia, destacaron Zolote, en la región de Lugansk y la zona entre Popasna, Pervomaisk y Zolote, en Lugansk, así como en zonas del centro de la región de Donetsk, entre otras. Asimismo, drones de la misión civil no armada de supervisión de la OSCE fueron atacados en varias ocasiones en 2019 y, como en períodos anteriores, la misión vio restringido su acceso a zonas bajo control rebelde. Pese a la continuación de las hostilidades, en su conjunto **fue un año de marcado descenso de víctimas mortales y heridos entre población civil.** Entre enero y finales de noviembre, 18 civiles murieron y 126 resultaron heridos (en 2018, 55 civiles murieron y 224 fueron heridos). A pesar de la continuación de violaciones del alto el fuego, las treguas resultaron más robustas. Las partes se comprometieron el 8 de marzo a un nuevo alto el fuego, tras un incremento de las hostilidades en febrero; y de nuevo, el 17 de julio, a otro alto el fuego, éste de carácter ilimitado, si bien las autoridades de Ucrania especificaron que la medida permitía el uso de fuego en respuesta a ataques. Aun así, fue considerado un avance significativo, por su mayor cobertura frente a treguas anteriores, y que tuvo reflejo práctico en el descenso de hostilidades. En diciembre, las partes se comprometieron a la implementación plena e integral

del alto el fuego y de reforzarlo con medidas de apoyo. Otras treguas locales puntuales permitieron llevar a cabo trabajos de reparación de infraestructura civil. Durante el año también **se avanzó en la retirada de fuerzas de Stanytsia Luhanska, Zolote y Petrivske**. Las medidas de retirada de fuerzas generaron algunas protestas en Ucrania por parte de sectores que denunciaron los acuerdos como una rendición.

En relación al contexto regional del conflicto, continuaron las tensiones entre Ucrania y Rusia en el mar de Azov, donde a finales de 2018 Rusia capturó tres barcos ucranianos, detuvo a sus 24 tripulantes, tres de ellos heridos, en un incidente precedido de otros en meses anteriores. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitió en mayo un dictamen que exigía como medida provisional la liberación de la tripulación, rechazado por Rusia. A su vez, en julio Ucrania detuvo un petrolero ruso alegando que había sido utilizado en la disputa de finales de 2018. En septiembre, los 24 marinos fueron liberados junto a otras personas en el marco de un intercambio entre Ucrania y Rusia de prisioneros relacionados con el conflicto armado. Por otra parte, **se mantuvo la tensión en torno al control de Crimea por Rusia. ACNUDH alertó en 2019 de la intensificación de registros domiciliarios y redadas por los servicios de seguridad rusos** con una afección desproporcionada sobre la minoría tártara, al amparo de legislación antiextremista rusa. Además, ACNUDH documentó y denunció otras violaciones de derechos humanos en la península. En clave interna, Ucrania fue escenario de elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta el 31 de marzo y el 21 de abril, con la victoria del cómico Volodimir Zelenski, con un 73% de votos y un 62% de participación, frente a su rival y presidente saliente Petro Poroshenko. También se llevaron a cabo elecciones parlamentarias anticipadas el 21 de julio, en las que ganó el partido de Zelenski (“Sluga Narodu”, Servidor del Pueblo), con el 42% del voto y cerca del 50% de participación, seguido de Plataforma de Oposición Por la Vida (13%), de Víctor Medvedchuk, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin. Ambos comicios transcurrieron en calma y de forma competitiva e inclusiva, según organismos internacionales.

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años 80 ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

El conflicto entre el Estado turco y el PKK se recrudeció, principalmente por la campaña militar de Turquía contra el grupo en el norte de Iraq y contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria, vinculadas al PKK, mientras también se mantuvo activo dentro de Turquía.

En 2019 también se mantuvo la represión masiva del Estado contra los actores no armados del movimiento nacionalista kurdo. Los balances de víctimas mortales dentro de Turquía difirieron. Según el *think tank* ICG, 468 personas murieron en 2019 por el conflicto, 355 de ellas combatientes del PKK. El centro de investigación ACLED elevó la cifra a 979 (1.966 de 2018, 2.940 en 2017 y 5.237 en 2016). Además, históricamente Ejército y PKK han tendido a ofrecer balances propios muy dispares entre ellos. En Turquía el conflicto armado se materializó principalmente en áreas rurales del sudeste. El Ejército llevó a cabo numerosos bombardeos –incluyendo con drones– y operaciones contra el PKK, con numerosas bajas insurgentes. Las fuerzas de seguridad anunciaron la destrucción de cuantiosa infraestructura de refugio del grupo e incautaron armamento. También impusieron medidas de excepción como “zonas de seguridad” en áreas de operaciones contrainsurgentes, prohibiendo la entrada sin autorización; y numerosos toques de queda indefinidos simultáneos a operaciones militares. El PKK llevó a cabo numerosas acciones bélicas, incluyendo ataques con bomba, artefactos explosivos improvisados y drones cargados de explosivos. El grupo atacó a objetivos como fuerzas del Ejército y la gendarmería, paramilitares de la llamada “guardia rural”, civiles acusados de ser informantes, puestos militares, estaciones de Policía y

vehículos militares, entre otros. Una parte significativa de los ataques del PKK fueron perpetrados por su rama de mujeres, las YJA Star.

Entre los recurrentes incidentes de violencia dentro de Turquía, 12 soldados habrían muerto en un ataque del PKK contra el Ejército junto a un puesto militar en la provincia de Iğdir en enero; el PKK reivindicó un ataque el 18 de marzo contra fuerzas de seguridad en el distrito de Dargeçit (Mardin) el 18 de marzo, y en el marco del cual dos combatientes se inmolaron, causando una veintena de víctimas mortales; operaciones aéreas de las fuerzas de seguridad en el distrito de Yuksekova (Hakkari) el 26 de julio causaron ocho víctimas del PKK; el grupo reivindicó un ataque en septiembre que mató a siete trabajadores e hirió a otros siete en la provincia de Diyarbakir, alegando que eran informantes. Un ataque del PKK contra un vehículo blindado del Ejército el 20 de octubre en un distrito de Mardin mató a 14 miembros del Ejército y a otros tres del PKK en choques posteriores. Diez soldados murieron y otros diez resultaron heridos el 9 noviembre en un ataque del PKK contra unidades del Ejército junto a un puesto militar en un distrito de Van. El Ministerio de Defensa cifró en agosto en 80.570 las operaciones contra el PKK en los primeros ocho meses del año, y en 635 los miembros del PKK “neutralizados” (término del Ejército para referirse a víctimas insurgentes, detenidos o entregados). En todo caso, los balances de víctimas de cada parte fueron cuestionados. El conflicto transcurrió principalmente en áreas rurales, pero también **fueron numerosos los ataques de pequeña escala en forma de guerrilla urbana contra objetivos civiles por parte de grupos vinculados a las YPS**, actor armado vinculado al PKK integrado principalmente por jóvenes y partícipe de la violencia urbana de 2015, con ataques contra domicilios particulares, vehículos y empresas, de civiles vinculados al partido en el gobierno, el AKP, y contra objetivos policiales. Los ataques causaron diversos heridos y daños materiales en diferentes localidades.

El conflicto también se materializó de forma intensa en el norte de Iraq, con operaciones aéreas y terrestres del Ejército turco contra el PKK en el país vecino durante todo el año.²⁵ Tras ataques del Ejército en enero que causaron víctimas civiles, un grupo de civiles kurdos de Iraq atacaron ese mes una base militar de Turquía. Dos manifestantes murieron y una quincena resultaron heridos por disparos de los soldados. **El Ejército turco lanzó en mayo y julio las operaciones Claw 1 y Claw 2 en la región de Hakurk del norte de Iraq, junto a las montañas de Qandil, donde el PKK tiene sus principales bases, con el objetivo de incrementar la presión contra el PKK** en esta zona. En agosto lanzó la operación Claw 3. Asimismo, Turquía mató a un alto cargo del PKK en Qandil en junio, identificado como Diyar Gharib Muhammed,

considerado responsable del PKK en Iraq y miembro del comité central del PKK. Algunos análisis señalaron que se trataría de la primera muerte de un dirigente del grupo por una acción ofensiva en Qandil desde 1984. A su vez, fue asesinado en Erbil, la capital kurda del norte de Iraq, Osman Kose, diplomático de Turquía en misión especial en la región. Su muerte fue atribuida al PKK. El grupo negó estar involucrado, mientras uno de sus líderes felicitó públicamente a los perpetradores.

Otro escenario del conflicto en 2019 fue el norte de Siria, donde Turquía intensificó su presión contra las milicias kurdas YPG,²⁶ vinculadas al PKK, a las que Turquía y algunos analistas consideran parte integral del PKK. Turquía lanzó en octubre una operación militar junto a sus aliadas milicias del Ejército Nacional Sirio, con luz verde de EEUU –que retiró sus tropas– para establecer una zona sin presencia de las YPG en parte de la frontera. Fruto del acuerdo entre Turquía, Rusia y Siria, así como del pacto entre Turquía y EEUU, la operación forzó la retirada de las YPG y de su armamento 30 kilómetros hacia el interior de Siria. Amnistía

Se redujo la mortalidad asociada al conflicto Turquía-PKK dentro del país, mientras el Estado turco multiplicó su presión contra el PKK en la región

Internacional y otras organizaciones denunciaron crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos por parte de Turquía y sus fuerzas aliadas en la operación, que desplazó inicialmente a unos 200.000 civiles. A su vez, las YPG, el régimen sirio y Rusia pactaron la vuelta de fuerzas sirias a zonas bajo control kurdo. Algunos análisis señalaron que las dinámicas de 2019 suponían el fin de la autoproclamada autonomía de mayoría kurda bajo control de las YPG. La autonomía política y control territorial por parte de las YPG en una zona que extendía al este del Éufrates había sido denunciada por Turquía como una línea roja para su seguridad de Estado, en el marco de su conflicto con el PKK. Medios de comunicación informaron del lanzamiento de proyectiles de mortero y cohetes desde la frontera siria por parte de las YPG contra objetivos de Turquía, con diversas víctimas mortales y varias decenas de heridos civiles en localidades de Turquía.

En varios momentos del año, y como en años anteriores, autoridades turcas amenazaron con destruir al PKK, mientras algunos análisis señalaron las dificultades de acabar por la vía militar con una fuerza de dimensión regional y capacidad de adaptación a nuevos métodos de guerra como el PKK. Por otra parte, **durante el año Turquía autorizó varias visitas al líder del PKK encarcelado, Abdullah Öcalan**, incluyendo por parte de un familiar, sus abogados –por primera vez en ocho años– y un académico. La medida fue interpretada de diversas maneras por analistas y medios periodísticos, incluyendo la posibilidad de que estuviera encaminada a favorecer nuevos intentos de negociaciones de paz; que respondiera a intereses electorales para capitalizar

25. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

26. Véase el resumen sobre de Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

voto kurdo en el contexto de las elecciones locales del 31 de marzo en Turquía; así como se enmarca en un intento de aplacar la huelga masiva de hambre de presos kurdos iniciada a finales de 2018. El partido prokurdo no presentó candidatos en diversas grandes ciudades, para favorecer la victoria de candidaturas opositoras al AKP, como en el caso de Estambul, donde el candidato del CHP, Ekrem İmamoğlu, ganó la repetición de los comicios en junio, tras ser anulados los resultados de marzo en esa ciudad. El HDP retuvo numerosas alcaldías del sudeste, si bien el Gobierno mantuvo su política de años anteriores e impuso **el cese forzado de numerosas alcaldías electas del HDP y su substitución por funcionarios estatales, bloqueando la acción política legal del partido prokurdo**. La medida fue denunciada por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, así como por la Presidencia del Congreso de autoridades locales y regionales del Consejo de Europa, entre otros. Además, fue acompañada de detenciones masivas bajo acusaciones de apoyo al PKK, como las 418 detenciones del 19 de agosto, la mayoría miembros del HDP. El movimiento kurdo calificó de golpe político el conjunto de medidas y se desencadenaron numerosas protestas en múltiples localidades, reprimidas por las fuerzas de seguridad.

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen (al-houthistas)	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shií, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto

a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se cobró miles de víctimas mortales y provocó también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis fracasaron y las treguas suscritas se rompieron sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. El conflicto ha ido adquiriendo una creciente dimensión regional e internacional y se ha visto influido por las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y entre Washington y Teherán.

Durante 2019 el conflicto armado en Yemen registró una tendencia similar a la del año anterior. Prácticamente todo el año se produjeron hechos de violencia que pusieron en entredicho los intentos por implementar el acuerdo de paz alcanzado en 2018 entre las fuerzas al-houthistas y las del Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi apoyadas por la coalición internacional encabezada por Riad.²⁷ Las dinámicas del conflicto también se vieron afectadas por el incremento de las tensiones en la región entre, por un lado, EEUU y Arabia Saudita, y, por otro, Irán, acusado de dar apoyo a los al-houthistas. Paralelamente, **se intensificaron de manera significativa las tensiones y enfrentamientos dentro del frente anti al-houthista, entre fuerzas leales a Hadi y sectores separatistas del sur**. Pese a la complejidad del escenario yemení, y al igual que en 2018, en los últimos meses del año se produjeron algunos hechos que favorecieron una desescalada de la violencia y que alimentaban expectativas limitadas sobre la configuración de un contexto más favorable a una salida negociada al conflicto. En términos generales, sin embargo, los niveles de violencia continuaron siendo muy elevados y el conflicto continuó siendo calificado como uno de los de mayor intensidad de todo el mundo. **Las cifras de letalidad siguieron siendo difíciles de contrastar, pero los datos proporcionados por centros de investigación como ACLED apuntaron a que durante 2019 habrían muerto unas 23.000 personas a causa de las hostilidades**. Esta cifra es relativamente inferior a la estimada para 2018, de unas 30.000 víctimas mortales, también según ACLED. De acuerdo a esta organización, el balance total de personas fallecidas por el conflicto armado yemení desde la escalada de violencia en 2015 superaría las 100.000. De este total, unas 12.000 serían víctimas civiles muertas en ataques directos, la mayoría cometidos por la coalición liderada por Riad. El comité de expertos de la ONU sobre Yemen que analiza la situación en el país desde 2014 constató en su informe de septiembre de 2019 la falta de colaboración de diversos actores

27. Véase el resumen sobre el proceso de paz en Yemen en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2020.

para investigar las violaciones a los derechos humanos perpetrados en el país. Pese a ello, las evidencias recopiladas ratificaron que todas las partes involucradas en la contienda han cometido abusos y vulneraciones al derecho internacional humanitario, incluyendo hechos constitutivos de crímenes de guerra. Entre los abusos se denunciaron ataques aéreos indiscriminados, uso de minas, bloqueos, asedios, arrestos arbitrarios, torturas, violencia sexual y reclutamiento de menores. La crisis humanitaria de Yemen siguió siendo considerada como la peor del mundo por Naciones Unidas.

Respecto a la evolución del conflicto, **en los primeros meses del año quedaron en evidencia las dificultades para poner en práctica el llamado Acuerdo de Estocolmo, que se firmó a finales de 2018 bajo los auspicios de la ONU.** Entre sus componentes, el pacto incluía un alto el fuego en el puerto de Hodeida y dio pie al establecimiento de una misión de supervisión de la tregua por parte de la ONU (UNMHA). Las fuerzas al-houthistas y pro-Hadi, sin embargo, se resistieron a replegarse de Hodeida por diferencias respecto a la composición de las fuerzas de seguridad que asumirían el control de la zona. **En paralelo, continuaron los enfrentamientos y otros hechos de violencia en el norte del país, en la zona fronteriza entre Yemen y Arabia Saudita y principalmente en las provincias de Saada, Hajjah y al-Jawf.** En esta última también se produjeron enfrentamientos entre los al-houthistas y grupos tribales de Hajour que dejaron decenas de víctimas mortales. Las fuerzas al-houthistas también lanzaron diversos ataques contra objetivos en Arabia Saudita, entre ellos aeropuertos y oleoductos. Algunos de ellos fueron interceptados por Riad, que también atacó territorio yemení. Según destacó ACLED, si bien se redujeron los ataques de la coalición liderada por los saudíes en Yemen, continuaron registrándose ofensivas con un alto número de bajas civiles. Uno de los incidentes más cruentos se produjo en septiembre, cuando un ataque saudí contra un edificio que los al-houthistas utilizaban como prisión causó la muerte a más de un centenar de personas. También en septiembre, **instalaciones de la compañía estatal saudí fueron atacadas con proyectiles en Abqaiq y Khurais (este de Arabia Saudita) en un incidente que fue reivindicado por los al-houthistas, pero del que EEUU, Riad y países europeos responsabilizaron a Irán.** Este hecho reflejó el escenario de tensiones regionales e internacionales en Oriente Medio y su particular proyección en Yemen. Adicionalmente, durante 2019 también se produjeron choques armados entre al-houthistas y grupos del sur, en especial en las provincias de Al-Dhalee, Abyan y Lahj.

En paralelo, **a lo largo del año se hicieron patentes las crecientes tensiones en el bando anti al-houthista, con enfrentamientos periódicos y cada vez más significativos entre fuerzas de Hadi y sectores secesionistas del sur**

vinculados al Southern Transitional Council (STC), apoyados por Emiratos Árabes Unidos (EAU). Los incidentes más graves se produjeron en Taiz y sobre todo en la localidad de Adén. Esta última ciudad fue escenario de los mayores niveles de violencia desde 2015. En agosto, un ataque con misiles contra combatientes del grupo armado sureño Security Belt causó decenas de víctimas mortales durante un desfile militar, entre ellos uno de sus comandantes más destacados, Munir “Abu al-Yamana” al-Yafei. Aunque la ofensiva fue reivindicada por los al-houthistas, sectores secesionistas acusaron a las fuerzas leales a Hadi, en particular al partido islamista Islah, de responsabilidad en el ataque. En este contexto, fuerzas sureñas intentaron consolidar el control sobre el territorio del antiguo Yemen del sur, independiente hasta 1990. El Gobierno de Hadi acusó a EAU de dar apoyo a esta campaña de los secesionistas del sur y lanzó una contraofensiva. La escalada de violencia dejó decenas de víctimas mortales y personas heridas, incluyendo civiles, además de serios daños a la infraestructura de Adén. Ante este escenario, Arabia Saudita llamó a las partes a mantener conversaciones en Jeddah para resolver sus diferencias. **Después de casi tres meses de confrontación, los contactos derivaron en el llamado Acuerdo de Riad, firmado por las partes el 5 de noviembre y considerado como una fórmula para evitar una nueva guerra dentro del conflicto armado en Yemen.** El acuerdo incluye la formación de un nuevo gobierno con el mismo número de representantes del norte y del sur, la integración de las fuerzas afiliadas al Consejo Transicional del Sur (STC) en las estructuras militares y de seguridad nacionales, el repliegue de combatientes y armas pesadas de las zonas urbanas del sur yemení y también que el STC deberá ser incluido en la delegación de gobierno en futuras negociaciones que se mantengan con los al-houthistas para poner fin al conflicto armado en el país, en el marco del proceso de paz auspiciado por la ONU.

En Yemen, durante todo el año se produjeron hechos de violencia que pusieron en entredicho los intentos por implementar el acuerdo de paz alcanzado en 2018 entre las fuerzas al-houthistas y las del Gobierno de Hadi

La firma de este acuerdo coincidió con una reducción de las hostilidades entre los al-houthistas y las fuerzas de Hadi y la coalición saudí en el último trimestre del año. En noviembre, el enviado especial de la ONU para Yemen informó que los ataques aéreos saudíes se habían reducido un 80%, tras la decisión de los al-houthistas de declarar un cese el fuego unilateral en septiembre. Según trascendió, hacia finales de año se mantenían contactos informales entre Riad y los al-houthistas para mantener la desescalada en la zona fronteriza. Pese a la tregua parcial, organizaciones humanitarias continuaron alertando sobre incidentes con víctimas civiles, incluyendo miles de migrantes y personas refugiadas –somalíes y etíopes en su mayoría– a lo largo de la frontera. Al finalizar el año, en el sur se mantenía la tregua en términos generales, pero en medio de brotes de violencia, fuertes tensiones entre las partes y bloqueos en la implementación del pacto.

Yemen (AQPA)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Al- Qaeda en la Península Árabe (AQPA/Ansar Sharia), ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, milicias tribales, milicias al-houthistas/Ansar Allah
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

Afectado por múltiples conflictos y desafíos internos, en los últimos años el Gobierno yemení ha enfrentado una fuerte presión internacional –sobre todo de EEUU y Arabia Saudita– para dedicar esfuerzos a la lucha contra al-Qaeda en el país, especialmente tras la fusión de la rama saudí y yemení de la organización que a comienzos de 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Árabe (AQPA). Si bien la presencia de al-Qaeda en Yemen se registra desde los noventa –con episodios de alta repercusión como el atentado suicida contra el barco de guerra estadounidense USS Cole en 2000–, se ha observado una escalada en sus acciones. En diciembre de 2009 el fallido atentado contra un avión que se dirigía a Detroit centró la atención internacional en AQPA, considerado por EEUU como una de las principales amenazas a su seguridad. Aprovechando el vacío de poder en Yemen en el marco de la revuelta contra el presidente Alí Abdullah Saleh (2011), AQPA amplió sus operaciones en el sur del país y las zonas bajo su control. El grupo comenzó a realizar algunas de sus acciones bajo la denominación Ansar Sharia (Partidarios de la Ley Islámica) y desde mediados de 2014 AQPA se vio crecientemente involucrada en enfrentamientos con milicias al-houthistas que avanzaron posiciones desde el norte de Yemen. AQPA ha aprovechado el clima de inestabilidad y la escalada de violencia en el país a partir de marzo de 2015 –en el marco del conflicto entre los al-houthistas y las fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi– y se ha enfrentado a ambos bandos. Este escenario también ha favorecido el ascenso de ISIS, que en los últimos años ha reivindicado diversas acciones en el país.

El conflicto armado protagonizado por AQPA y, más recientemente, por ISIS continuó viéndose parcialmente eclipsado por las dinámicas de la contienda entre los al-houthistas y el Gobierno de Abdo Rabo Mansour Hadi y en la que también participan sectores secesionistas del sur.²⁸ Pese a ello, **durante el año se informó de varios hechos de violencia protagonizados por las filiales de al Qaeda e ISIS en el país y diversos análisis apuntaron que estas organizaciones continuaban intentando aprovechar las hostilidades en el país para reforzar sus posiciones, principalmente en el sur.** El conflicto continuó siendo de baja intensidad, aunque el balance de víctimas resulta difícil de precisar. Uno de los incidentes más graves se habría producido en agosto, cuando milicianos de AQPA atacaron un campamento militar en la provincia de Abyan (sur) provocando la muerte de 20 personas, tras varias horas de enfrentamientos.

Los fallecidos formaban parte de un grupo que recibía entrenamiento de Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que integra la coalición militar internacional liderada por Arabia Saudita que desde 2015 enfrenta a los al-houthistas. La ofensiva de AQPA estuvo precedida por dos sangrientos ataques en Adén, uno de los cuales un ataque suicida reivindicado por ISIS que provocó la muerte a 11 personas. En julio, también se informó de otro ataque atribuido a AQPA contra un puesto de control militar que habría provocado la muerte de cinco soldados.

En un contexto inestabilidad agudizado por la creciente pugna entre fuerzas del Gobierno de Hadi y sectores separatistas del sur vinculados al Southern Transitional Council (STC), se intensificaron –sobre todo a partir de agosto– algunas operaciones contra al-Qaeda para evitar que capitalizara el clima de desestabilización. Así, se informó de ataques aéreos de EAU, aliado del STC, contra posiciones de AQPA ante informaciones que apuntaban a la movilización de combatientes de al-Qaeda en la zona de Abyan. Un número indeterminado de militantes de AQPA habrían fallecido en otros ataques de EAU en las afueras de Adén, según fuentes yemeníes citadas por la prensa. No obstante, representantes del Gobierno de Hadi reprobaron algunos de los ataques de EAU asegurando que habían causado bajas entre soldados yemeníes. **En septiembre informaciones de prensa aseguraron que milicianos de AQPA habían tomado control del distrito de Wadea, en Abyan, una provincia que ha estado de manera intermitente bajo control parcial de al-Qaeda en los últimos años.** En 2017 fuerzas vinculadas al STC habían expulsado a AQPA de esta zona. A lo largo de 2019 también se informó de algunos incidentes entre supuestos miembros de AQPA y del STC. Adicionalmente, EEUU continuó siendo un actor relevante en este conflicto. En mayo informaciones de prensa atribuyeron a fuerzas estadounidenses un ataque con dron que habría causado la muerte de cuatro presuntos milicianos de al-Qaeda en la provincia de Bayda. Según trascendió, otros dos habrían muerto en otra ofensiva de un avión tripulado estadounidense en la provincia de Maarib, en noviembre. Cabe destacar también que en octubre el presidente estadounidense también confirmó oficialmente la muerte del jefe de fabricación de explosivos de al-Qaeda Ibrahim al-Asiri durante una operación en Yemen realizada hace dos años y que en noviembre Washington ofreció recompensas por un valor de diez millones de dólares a quienes entregaran información conducente a la captura de dos altos cargos de AQPA: Saad bin Atef al Aulaki y Ibrahim Ahmed Mahmud al Qosi. Además, en junio se informó de la captura del líder de ISIS en Yemen, Abu Sulayman al Adnani, conocido como Abu Usaman al Muhajir. El dirigente fue interceptado en una operación de las fuerzas navales saudíes en colaboración con fuerzas especiales yemeníes.

28. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en este capítulo.

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasm), Israel
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

El conflicto armado que enfrenta principalmente a las fuerzas de seguridad egipcias y a la filial del grupo armado ISIS en el país continuó concentrándose en la provincia Norte del Sinaí, en especial en las localidades de Arish (capital), Sheikh Zuweid y Rafah (fronteriza con Gaza), y provocó la muerte de cientos de personas en 2019. Como en años previos, el balance de víctimas del conflicto fue difícil de precisar debido a las ambigüedades de los reportes oficiales –que a menudo omiten las bajas entre las fuerzas de seguridad y no especifican lugares de los incidentes o períodos a los que corresponden los recuentos de personas fallecidas–; las informaciones difundidas por el grupo armado en tono de propaganda y las restricciones a la prensa y ONG para verificar la situación en terreno. Pese a ello, **recuentos parciales a partir de informaciones de prensa indicarían que al menos 500 personas perdieron la vida a causa de este conflicto durante 2019. Balances**

de organizaciones como ACLED apuntan incluso a un número mayor de personas fallecidas, con un total de 1.233 hasta finalizar el año. En noviembre, la filial de ISIS hizo público su propio balance de operaciones en el Sinaí durante el año islámico 1444 (septiembre de 2018 a agosto de 2019), indicando que en ese período había perpetrado 227 ataques y provocado la muerte o heridas a 463 personas. Durante 2019 la filial de ISIS anunció planes de expansión de sus actividades hacia la zona sur de la provincia, incluyendo el área del Mar Rojo, que alberga numerosos activos turísticos, y también declaró su lealtad al nuevo líder de la organización, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, tras la muerte en Siria de Abu Bakr al-Baghdadi en un ataque de EEUU.

En línea con lo observado en años anteriores, la violencia se materializó en ataques de milicianos y ofensivas con explosivos por parte de ISIS en muchos casos contra instalaciones militares, en carreteras o puestos de control. En febrero el grupo perpetró un ataque –reconocido por el Ejército– cerca del aeropuerto de Arish en el que murieron una docena de soldados y que fue considerado como la ofensiva más cruenta de ISIS en varios meses. **El grupo autodenominado Provincia del Sinaí también reivindicó ataques contra civiles y en 2019 destacaron varios casos de secuestros y decapitaciones de personas acusadas de ser informantes o colaboradoras del Ejército egipcio.** Las fuerzas de seguridad, en tanto, continuaron con sus ofensivas militares en el marco de su campaña “Sinaí 2018” lanzada a principios del año anterior. Durante el año también se informó de diversas redadas que acabaron con la muerte de decenas de presuntos militantes, en repetidas ocasiones tan solo días después de ataques perpetrados o atribuidos a ISIS u otros grupos armados. Así, por ejemplo, tras un ataque explosivo en la zona turística de las pirámides Giza en mayo que hirió a 17 personas se informó de la ejecución de 12 presuntos miembros de Hasm, aunque oficialmente no se vincularon ambos hechos. En agosto otra ofensiva atribuida a Hasm en El Cairo provocó la muerte a 22 personas y derivó en días posteriores en la muerte de 17 presuntos integrantes del grupo, que negó tener responsabilidad en el ataque. El Gobierno acusa a Hasm de vínculos con los Hermanos Musulmanes, pero esta última organización desmiente cualquier conexión.

En este contexto, **organizaciones de derechos humanos acusaron tanto a las fuerzas de seguridad egipcias como a la filial de ISIS de abusos sistemáticos contra la población civil, algunos constitutivos de crímenes de guerra.** ONG locales e internacionales alertaron sobre las muertes en el marco de redadas de la Policía y el Ejército o tras períodos de detención arbitraria, que denunciaron como ejecuciones extrajudiciales. Un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado en mayo, centrado en los abusos de las fuerzas oficiales desde 2014, denunció torturas y también ejecuciones –al menos 20 documentadas en los últimos años– de personas detenidas de manera secreta en instalaciones de las fuerzas de seguridad en bases militares ubicadas en Norte del Sinaí

y en la vecina provincia de Ismailya.²⁹ El informe alertó también sobre el papel que estarían jugando milicias integradas por personas reclutadas por el Ejército en Norte del Sinaí, también involucradas en detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones. HRW también señaló las dificultades para identificar a las víctimas civiles del conflicto, debido a que las autoridades no proporcionan datos sobre la cuestión y a menudo las incluyen como milicianos en los balances de fallecidos. En materia de desplazamiento forzado, se estimaba que unas 100.000 personas residentes en Norte Sinaí –una quinta parte de la población de la zona– había sido expulsada de sus hogares y que el Ejército había demolido miles de viviendas. El centro de estudios Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), con sede en Washington, ha contabilizado al menos 12.000 residentes del Sinaí detenidos entre julio de 2013 –fecha de la escalada del conflicto– y diciembre de 2018, el doble de la cifra reconocida por las autoridades egipcias. Cabe destacar, además, que el conflicto se desarrolla en un contexto de estado de emergencia en el país, que ha sido renovado periódicamente desde un doble ataque a iglesias coptas en 2017, y de imposición de toque de queda nocturno vigente en el Sinaí desde 2014. A esto se suma el creciente autoritarismo, la consolidación del poder militar y persecución a la disidencia en Egipto. Durante 2019 estas tendencias se evidenciaron, entre otros hechos, en la aprobación de una reforma constitucional que amplía los mandatos presidenciales –abriendo la posibilidad a que el general y actual presidente Abdel Fatah al-Sisi permanezca en el cargo hasta 2030– y en los arrestos de más de 4.000 personas por su participación en manifestaciones contra el régimen.³⁰

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía, Israel
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores:

tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU. Los niveles de violencia se han reducido desde 2018, tras el anuncio de derrota de ISIS, aunque el grupo continúa operando con acciones de menor intensidad. El país también se ha visto afectado por la creciente disputa entre Washington y Teherán y su competencia por influir en los asuntos iraquíes.

En línea con la tendencia observada el año anterior, los niveles de violencia del conflicto armado en Iraq descendieron respecto al período 2014-2017 –en los que se llegaron a contabilizar entre 10.000 y hasta 20.000 víctimas mortales civiles anuales–, aunque el país continuó situándose entre los conflictos más graves a nivel mundial. Según el balance de la organización Iraq Body Count (IBC), al menos 2.392 civiles murieron producto de la violencia del conflicto, en comparación con las 3.319 muertes civiles en 2018. **La situación en el país estuvo marcada por la continuación de la campaña gubernamental contra el grupo armado ISIS – que, aunque debilitado, continuó perpetrando múltiples acciones en el país– y por el impacto en Iraq de la disputa y competencia estratégica entre EEUU e Irán –ambos actores interesados e implicados en el control los asuntos internos iraquíes–, con una creciente participación de Israel en ofensivas armadas en el país.** Paralelamente, durante 2019 Iraq fue escenario de masivas protestas populares que derivaron en una grave escalada de violencia con más de 400 víctimas mortales, en una crisis de gobierno y en un cuestionamiento al conjunto del sistema político iraquí.³¹

Respecto a ISIS, aunque el Gobierno iraquí proclamó el fin de la lucha contra el grupo a finales de 2017 tras infligirle varias derrotas, en 2019 la organización siguió reivindicando acciones armadas en diferentes zonas de Iraq. Entre ellas, las provincias de Salah-al-Din, Nineveh, Anbar, Suleimaniya, Diyala, Kirkuk, Najaf y el norte de Bagdad. Sus ofensivas se concretaron principalmente en la detonación de coches bomba; operaciones suicidas; colocación de explosivos en carreteras; tiroteos, emboscadas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad iraquíes y con milicias shiíes de las Unidades de Movilización Popular (UMP)

29. Human Rights Watch, “If You Are Afraid for Your Lives, Leave Sinai!” *Egyptian Security Forces and ISIS affiliate Abuses in North Sinai*, HRW, 31 de mayo de 2019.

30. Véase el resumen sobre Egipto en el capítulo 2 (Tensiones).

31. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 2 (Tensiones).

o Hashd al-Shaabi; ataques armados contra peregrinos shíites; secuestros y extorsiones a civiles; y ejecuciones de personas acusadas de ser “colaboradoras”, entre otras acciones. A mediados de año las fuerzas militares y antiterroristas iraquíes intensificaron su campaña contra el grupo, en el marco de operaciones como “Nuevo Amanecer”, en la provincia de Kirkuk o “Deseo de Victoria”, en Diyala. En este contexto, también se incrementaron los choques entre las UMP e ISIS. **Algunos análisis sobre ISIS destacaron que, si bien el grupo ha decaído significativamente en comparación con la fuerza que consiguió tener entre 2014 y 2015, en particular en Iraq y Siria, no es posible descartar que la organización intente resurgir aprovechando algunas dinámicas en Iraq.** Entre ellas, la inestabilidad o el impacto de interferencias externas que podrían favorecer su reactivación, más allá de las áreas montañosas y mayoritariamente desérticas en las que ha operado. Personas expertas también advirtieron sobre la necesidad de que las autoridades iraquíes prioricen la reconstrucción de las zonas que estuvieron bajo el dominio de ISIS, favorezcan un retorno sostenible de la población desplazada y eviten una estigmatización crónica de las familias de combatientes del grupo.

En cuanto a la proyección en Iraq de la disputa entre EEUU e Irán, que se intensificó en 2019,³² el país fue un escenario más para la confrontación estratégica entre ambas potencias. La competencia entre Washington y Teherán por influir y condicionar las decisiones del Gobierno iraquí se hizo evidente desde principios de año, como quedó patente en las visitas de alto nivel a Iraq, en las demandas y advertencias a sus dirigentes y en los intentos de Bagdad por mantenerse neutral. En el caso de EEUU, los últimos días de 2018 el presidente Donald Trump visitó sorpresivamente una base militar estadounidense en la provincia de Anbar y reafirmó la intención de mantener tropas en Iraq, mientras que en febrero señaló que la presencia militar en el país tenía como finalidad “vigilar a Irán”. Ante ello, parlamentarios iraquíes shíites de distintas formaciones políticas plantearon la necesidad de poner fin a esta presencia militar y a los acuerdos de cooperación en seguridad con EEUU. A lo largo del año, Washington también intentó presionar a Bagdad para que cesara las importaciones de gas iraní y aunque decretó sucesivos ultimátum a las autoridades iraquíes, continuó sin aplicar en este caso el régimen de sanciones. En el caso de Irán, el presidente Hassan Rouhani realizó su primera visita a Iraq en marzo y firmó diversos convenios de colaboración bilateral. Durante su viaje, también se reunió con el principal líder shií iraquí, el ayatollah Ali al-Sistani, quien le habría insistido en que las autoridades iraquíes debían asumir el control total de las milicias UMP, teniendo en cuenta que algunos de

sus grupos son considerados como leales a Teherán y a la Guardia Revolucionaria iraní.

En este trasfondo, **el incremento de la tensión entre Washington y Teherán y una serie de hechos de violencia que afectaron tanto a intereses de EEUU como de Irán en territorio iraquí agravaron la situación a partir de mayo.** Por un lado, se registraron diversos ataques contra objetivos estadounidenses, entre ellos disparos de proyectiles y cohetes contra la embajada en Bagdad y contra bases militares e instalaciones de empresas estadounidenses. EEUU retiró a parte de su personal diplomático y empresas estadounidenses como Exxon Mobil evacuaron a sus trabajadores no iraquíes. El secretario de Estado de EEUU subrayó la responsabilidad de Iraq en la protección de sus ciudadanos y sus tropas ante eventuales ataques de milicias pro-iraníes. En este contexto, el primer ministro iraquí aprobó, en julio, un decreto para integrar a las milicias respaldadas por Irán bajo su mando e integrarlas en las fuerzas de seguridad iraquíes. Paralelamente, se informó de un

El conflicto armado en Iraq se caracterizó en 2019 por la persistencia de las hostilidades entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado ISIS y por la creciente proyección en el país de la disputa entre Irán y EEUU

ataque desde un avión no tripulado contra una base militar en la provincia de Salah-al-Din en la que se encontraban miembros de la Guardia Revolucionaria –EEUU negó cualquier responsabilidad–, seguido días más tarde de varias ofensivas de aviones israelíes contra bases militares iraquíes que presuntamente albergaban armas y asesores iraníes, uno de los cuales murió. En agosto, nuevas ofensivas presuntamente israelíes contra instalaciones de milicias shíites respaldadas por Teherán causaron la muerte de otras tres personas, motivando que el bloque parlamentario pro-iraní (Alianza Fatah) denunciara la responsabilidad de EEUU e Israel, calificara estas acciones como una declaración de guerra a Iraq e insistiera en la retirada de las tropas estadounidenses del país. En septiembre, un ataque con dron no reivindicado provocó la muerte de 21 integrantes de las UMP en la provincia de Anbar. El primer ministro iraquí responsabilizó entonces a Israel de los ataques. La mayor escalada se produjo en diciembre: a lo largo del mes se produjeron diversos ataques contra bases militares y objetivos de EEUU y en uno de ellos, a finales de año, murió un contratista estadounidense en Kirkuk. En respuesta, Washington atacó bases de la milicia pro-iraní Kataib Hezbollah –parte de las UMP– causando 25 muertes. Esta ofensiva alentó protestas ante la embajada de EEUU en Bagdad, rodeada por manifestantes y milicias pro-iraníes que acabaron ingresando al complejo. En este contexto, **a principios de enero de 2020 EEUU lanzó un ataque en Bagdad en el que murió el alto general iraní Qassem Soleimani, jefe de las Brigadas al-Quds, y otros altos cargos de milicias pro-iraníes, en un hecho que incrementó significativamente la tensión Washington-Teherán** y con previsibles efectos desestabilizadores en la región.

32. Véase el resumen sobre Irán – EEUU, Israel en el capítulo 2 (Tensiones).

Cabe destacar que durante el último trimestre el conflicto armado en Iraq transcurrió en paralelo a crecientes manifestaciones populares que desembocaron en la renuncia del primer ministro en diciembre. Aunque se centraron en cuestiones domésticas, las protestas también tuvieron un componente anti-iraní, en parte por el papel de milicias pro-Teherán en la dura represión de las movilizaciones. Teherán subrayó entonces la coincidencia de las movilizaciones en Iraq, Líbano – ambos en su radio de influencia– y en el propio Irán y las atribuyó a un complot foráneo. Finalmente, cabe mencionar que durante el año se produjeron continuos ataques de Turquía contra posiciones del PKK en el norte del territorio iraquí que causaron la muerte a decenas de personas.³³

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ³⁴
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinicia en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU divide el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclama el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexiona Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasan a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupa Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

Después de la escalada registrada en 2018 –año de los incidentes más graves desde 2014, sobre todo debido a la represión israelí de las movilizaciones palestinas en el marco de la llamada Gran Marcha del Retorno en Gaza–, los niveles de violencia directa del conflicto palestino-israelí se redujeron durante 2019. **De acuerdo**

con los balances proporcionados por OCHA, durante el año un total de 144 personas murieron a causa de hechos de violencia vinculados al conflicto, menos de la mitad que el año anterior, en el que se contabilizaron 313 fallecimientos. Del total de víctimas mortales en 2019, 134 eran palestinas y 10 israelíes; mientras que el número de personas heridas en el mismo período fue de 15.479 palestinas y 121 israelíes. Al igual que en años anteriores, la mayor parte de los incidentes se concentraron en Gaza y en los alrededores de la barrera fronteriza entre la Franja e Israel. Los hechos de violencia se materializaron principalmente en la represión israelí de protestas palestinas, ataques israelíes contra objetivos de Hamas y la Yihad Islámica en Gaza, lanzamientos de cohetes y proyectiles por parte de estos grupos palestinos hacia Israel e incidentes con aviones no tripulados. Los hechos más graves se produjeron en mayo y noviembre. En mayo, el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas israelíes contra los manifestantes palestinos motivó que las facciones palestinas lanzaran más de 700 cohetes contra territorio israelí, a lo que Israel respondió con más de 300 ataques aéreos sobre la Franja. 24 palestinos y cuatro israelíes murieron en esta escalada de violencia. En noviembre, en tanto, cohetes lanzados desde Gaza alcanzaron la localidad de Sderot, motivando ataques aéreos israelíes en los días siguientes. En uno de ellos murió un alto cargo de la Yihad Islámica y su esposa, hecho que provocó una ofensiva de este grupo armado, que disparó cerca de 450 proyectiles hacia Israel, la mayoría de los cuales impactaron en campos o fueron interceptados por las fuerzas israelíes. La respuesta israelí fue una intensa ofensiva aérea en la que murieron 34 personas palestinas, entre ellas 16 civiles. Durante el año, y después de este tipo de escaladas de violencia, las autoridades egipcias y también el enviado especial de la ONU para Oriente Medio mediaron para asegurar el restablecimiento del cese del fuego entre Israel y los grupos palestinos de la Franja.³⁵ En el marco de estas dinámicas de violencia y treguas, durante el año Israel decretó sucesivos cierres y aperturas de pasos fronterizos, así como restricciones y ampliaciones del área de pesca en algunas zonas de Gaza. Durante 2019 también se produjeron algunos incidentes violentos en Cisjordania y en Jerusalén, entre ellos la represión israelí de protestas en las proximidades de Ramallah o en Hebrón y enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas israelíes en la zona de la Explanada de las Mezquitas. Asimismo, se produjeron incidentes entre palestinos y colonos israelíes en áreas próximas a asentamientos.

Durante el año, las dinámicas del conflicto se vieron influidas también por el clima electoral en Israel, que celebró comicios en abril y septiembre, sin que los

33. Véase resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

34. A pesar de que “Palestina” (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como “internacional” y no como “interno” por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

35. Véase el resumen sobre el proceso de paz palestino-israelí en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2020.

resultados permitieran al primer ministro conformar gobierno. En este contexto, **a lo largo de 2019 continuaron las políticas destinadas a profundizar la ocupación de los territorios palestinos, a través de medidas como la aprobación de demoliciones de edificios de viviendas palestinas en Jerusalén Oriental o los permisos para la construcción de más de 7.000 viviendas israelíes en el área C de Cisjordania.** En septiembre, en vísperas de las segundas elecciones israelíes en un año, Netanyahu prometió que de ser reelegido anexionaría a Israel el Valle del Jordán y los asentamientos israelíes de Hebrón y subrayó que pretendía hacerlo en máxima coordinación con el presidente de EEUU, Donald Trump. **El plan de Netanyahu para incorporar hasta un tercio de los territorios ocupados palestinos a Israel fue condenado por la Autoridad Palestina, los países árabes, la ONU y la UE.** No obstante, los posicionamientos del primer ministro y del Gobierno israelí se vieron reforzados por la política de Washington hacia Oriente Medio y su sesgo explícito en favor de los intereses de Israel. Tras el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén y la suspensión de la ayuda a la agencia de la ONU para las personas refugiadas palestinas (UNRWA) en 2018, **en noviembre de 2019 la Casa Blanca decretó que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos no eran ilegales. Previamente, en marzo, Washington había reconocido como israelíes los territorios de los Altos del Golán sirios ocupados por Israel desde la guerra de 1967.**³⁶

A esto se suma el plan de paz para Oriente Medio promovido por el yerno de Trump y Director de Innovaciones de la Casa Blanca, Jared Kushner, que siguió sin presentarse públicamente, y la iniciativa “Prosperidad para la Paz” que tuvo lugar en Bahrein, en junio, apostando por inversiones y recursos económicos para Palestina. Esta última iniciativa fue rechazada por la Autoridad Palestina y fue denunciada con protestas masivas de la población palestina durante los días de celebración del encuentro en Bahrein. En este contexto, durante 2019 las autoridades palestinas se mostraron favorables a retomar negociaciones con Israel, pero no con EEUU como valedor por su pérdida de credibilidad para la mediación, y expresaron su preferencia por un proceso bajo los auspicios de Rusia y de la comunidad internacional. En una línea contraria a los intereses israelíes, **al finalizar el año la Corte Penal Internacional anunció tras años de investigaciones preliminares que había evidencias suficientes para investigar las denuncias de crímenes de guerra en Cisjordania, Jerusalén y Gaza.** Aun así, estaba pendiente que la CPI confirmara su jurisdicción sobre los territorios ocupados palestinos. Finalmente, cabe mencionar que durante 2019 Israel expulsó al director para Israel y Palestina de la ONG de derechos humanos Human Rights Watch, Omar

Shakir, ciudadano estadounidense y la primera persona en ser expulsada tras la aprobación en 2017 de una polémica norma que permite al Gobierno israelí deportar a personas que apoyan el boicot a Israel o denuncian los asentamientos israelíes.

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio, a nivel internacional el régimen se ha caracterizado por sus políticas hostiles hacia Israel, y en el plano interno por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del *establishment*, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa ha adquirido una mayor complejidad y una creciente dimensión regional e internacional.

Los niveles de violencia del conflicto palestino-israelí se redujeron en 2019 en comparación con el año anterior, marcado por la represión a las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno en Gaza

Un año más, Siria continuó siendo escenario de elevados niveles de violencia en el marco de un conflicto armado caracterizado por la participación de numerosos actores armados; la significativa influencia de los intereses y estrategias de actores regionales e internacionales en la evolución de las hostilidades; enfrentamientos que afectaron diversas zonas del país, con dinámicas específicas en los diferentes frentes de batalla; y gravísimos impactos en la población civil. **Pese a las persistentes dificultades para establecer un balance general del impacto**

36. Véase el resumen sobre Israel – Siria, Líbano en el capítulo 2 (Tensiones).

de la violencia, la información disponible permite concluir que el número de personas fallecidas a causa del conflicto durante 2019 sería menor a la registrada en 2018. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR) con base en Reino Unido, al menos 11.200 personas habrían fallecido a causa del conflicto en 2019, entre ellas cerca de 3.500 civiles, mientras que en 2018 el balance de esta organización fue de 20.000 personas. De acuerdo a los datos de ACLED, en tanto, el balance de víctimas mortales por la violencia en Siria ascendería a más de 15.000 personas, frente a los 30.000 contabilizados por este centro en 2018.

Al igual que en años anteriores, el conflicto armado se libró en diversos frentes, cada uno con sus dinámicas y actores preeminentes. En términos generales, sin embargo, **al finalizar el año el régimen sirio con la ayuda de Rusia lograba el control de un 71% del territorio, según SOHR. Las zonas de operaciones más activas durante 2019 se concentraron en el norte, tanto en la banda noroeste como en la noreste.** En el frente noroccidental, pese al acuerdo entre Rusia y Turquía en septiembre de 2018 para establecer un área desmilitarizada en Idlib, durante 2019 la zona fue escenario de cruentos enfrentamientos principalmente entre fuerzas gubernamentales apoyadas por Rusia y grupos armados liderados por la organización de línea yihadista Hayat Tahir al-Sham (HTS) que no cesaron sus ataques al régimen. La dura campaña aérea y terrestre del Gobierno para derrotar y expulsar de esta región a HTS y grupos afines tuvo graves impactos en la población debido a la destrucción de infraestructuras esenciales –hospitales, escuelas, recursos agrícolas– y motivó denuncias de la ONU por la muerte de un gran número de civiles

–solo en mayo murieron más de 300–, el uso de armas como el gas cloro y los desplazamientos forzados de población. Hasta septiembre, medio millón de personas había huido a causa de la violencia. Las hostilidades en este frente también afectaron a otras zonas, como Aleppo, Latakia o Hama. A mediados de año se produjo una contraofensiva de HTS y de otros grupos opositores como NTS, con el apoyo de Turquía, mientras que Hezbollah se involucró en los enfrentamientos en apoyo al régimen sirio, a pesar de que había anunciado una reducción de su presencia en Siria. En este contexto, Ankara denunció el ataque a un convoy militar turco como una violación al acuerdo de Sochi alcanzado en 2018. Rusia y China, en tanto, vetaron una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pretendía establecer un cese del fuego en Idlib. Moscú justificó la decisión argumentando que la resolución no establecía una excepción para las operaciones militares contra grupos armados designados como terroristas por la ONU. **Así, al finalizar 2019 Moscú y el régimen intensificaron**

En 2019 Siria continuó siendo escenario de elevados niveles de violencia, en el marco de un conflicto caracterizado por la participación de numerosos actores armados, una gran influencia de actores regionales e internacionales y gravísimos impactos en la población civil

la ofensiva en Idlib provocando el desplazamiento forzado de unos 235.000 civiles en un período de dos semanas. Cabe destacar que EEUU también se involucró en esta área, al declarar como grupo terrorista a la filial de al-Qaeda presente en el territorio –Hurras al-Din– y también a través de una operación militar, en octubre, que causó la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, líder fundador de ISIS y promotor del califato del grupo en Iraq y Siria anunciado en Mosul (Iraq) en 2014. ISIS confirmó la muerte de su máximo dirigente y anunció el nombramiento de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi como su sucesor.

En el frente nororiental las dinámicas variaron entre el primer y el segundo semestre. La primera mitad del año estuvo marcada por las operaciones de la coalición Fuerzas Democráticas de Siria (SDF), liderada por fuerzas kurdas y con apoyo de EEUU, con la intención de erradicar las últimas posiciones de ISIS en la zona fronteriza con Iraq. Las hostilidades tuvieron entre

sus epicentros Deir al-Zawr y la localidad de Baghouz, bastión de ISIS. **Aunque las SDF anunciaron la eliminación total de ISIS en Siria en marzo, el grupo armado continuó reivindicando ataques en los meses siguientes,** en especial en las áreas de Hasaka y Qamishli. En la zona noroeste también se registraron episodios de contestación de poblaciones árabes contra las SDF. Paralelamente, Turquía continuó insistiendo en su propósito de crear un área de seguridad en el norte de Siria, reivindicando el acuerdo de Adana de 1998 entre Turquía y Siria.³⁷ Turquía y EEUU iniciaron patrullajes conjuntos en esta área, motivando la protesta del régimen de al-Assad. Sin embargo, la situación dio un giro en octubre, cuando el Gobierno de

Donald Trump decidió retirar sus tropas del noreste de Siria. La decisión fue interpretada como una traición de Washington a las fuerzas kurdas del YPG, que hasta entonces habían sido clave en el combate contra ISIS. Ante el repliegue de EEUU, Turquía inició una intensa ofensiva aérea y terrestre en la zona contra las fuerzas kurdas, en el marco de una operación que denominó “Primavera de paz”. La intensificación de la violencia en la zona tuvo graves impactos en la población civil. Las SDF acordaron con el régimen sirio un despliegue limitado en la zona para repeler la ofensiva turca. Las fuerzas de Ankara asumieron el control de una franja de 140 kilómetros entre Tel Abyad y Ras al-Ayn y dieron un ultimátum a las YPG para que se replegaran. Conversaciones entre EEUU y Turquía y entre Rusia y Turquía derivaron en ceses del fuego frágiles y en la puesta en marcha de patrullas conjuntas en la “zona de seguridad” supervisada ahora por Turquía y Rusia, que amplió su presencia en el noreste de Siria. EEUU, en tanto, anunció que mantendría tropas en Siria para

37. Véase el resumen sobre el proceso de paz en Siria en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2020.

proteger los campos petrolíferos controlados por las SDF. Hasta finales de año Turquía y las SDF se acusaban de vulneraciones al acuerdo, mientras organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch alertaban sobre abusos y crímenes contra la población local, de mayoría kurda. Paralelamente, **se denunciaron los planes de Turquía para repatriar a hasta dos millones de personas refugiadas sirias, en su mayoría árabes, a esta supuesta “zona de seguridad”, alterando así las realidades demográficas en la zona.**³⁸

Junto a las dinámicas en estos frentes, cabe considerar que a lo largo del año se produjeron múltiples incidentes de violencia en territorio sirio que involucraron a fuerzas israelíes, que atacaron presuntas posiciones de Hezbollah y de Irán principalmente en el sur, en los Altos del Golán, pero también en otras zonas, incluyendo Hama o Aleppo. Los enfrentamientos entre estos actores –influidos por las dinámicas de tensión regional– provocaron la muerte de un centenar de personas durante 2019.³⁹ Adicionalmente, la Comisión Independiente de Investigación sobre Siria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertó que en las zonas controladas por el Gobierno sirio se produjeron arrestos arbitrarios y torturas de civiles, incluyendo personas recientemente retornadas al país. En el sur la Policía secreta llevó a cabo numerosas detenciones de antiguos dirigentes opositores. La comisión también denunció que, en zonas como Duma, Deraa o Ghoutah –que fueron bastiones de la oposición–, la inefectiva provisión de servicios estaba privando a cientos de miles de personas de acceso adecuado a agua, electricidad o educación. Asimismo, la comisión llamó la atención sobre las condiciones de vida extremas en el campo de Al-Hol, en el que malvivían unas 70.000 personas, en su mayoría mujeres y menores de 12 años.⁴⁰ Entre ellos, familiares de combatientes de ISIS que huyeron de los bombardeos contra Baghouz. Asimismo, se denunciaron secuestros, torturas y detenciones de disidentes en las zonas controladas por

HTS. Ante la magnitud de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, secuestros, destrucción de infraestructuras y falta de servicios en el país, la comisión insistió en que no existían las condiciones para un retorno sostenible de las personas refugiadas y desplazadas internamente.

Cabe destacar que las dinámicas de violencia durante 2019 provocaron nuevos desplazamientos de población civil y que al finalizar el año Siria continuaba a la cabeza entre los países con mayor población desplazada forzosamente del mundo, tanto internamente como fuera de sus fronteras. Según los datos de ACNUR, el 90% de la población refugiada siria vivía en los países vecinos y el 50% eran menores de edad. En esta línea, la Comisión de Investigación sobre Siria también destacó los efectos del desplazamiento forzado en niños y niñas. Entre ellos, el trabajo infantil, el reclutamiento de menores y el matrimonio infantil. La comisión también subrayó los efectos desde una perspectiva de género. Ejemplo de ello son las mujeres obligadas a parir en sitios inadecuados y sin la necesaria asistencia prenatal ni postnatal dada la severa destrucción de infraestructuras hospitalarias o los problemas que enfrentan las mujeres sirias para probar y documentar las muertes de sus familiares –dificultando trámites de herencia o custodia– o registrar a sus hijos e hijas – dado que en Siria la nacionalidad se transmite por vía patrilineal. En un conflicto donde la violencia sexual ha tenido un rol prominente, la comisión informó de investigaciones sobre abusos y violaciones a mujeres, hombres y personas LGTBI, incluyendo personas retornadas, en las zonas controladas por el Gobierno. Al finalizar el año, **la Syrian Network for Human Rights (SNHR) destacó que la población siria era la que más había padecido ataques con armas químicas en la última década. Según sus datos, un total de 1.472 personas habían muerto y 9.989 habían resultado heridas en 222 ataques químicos, 217 de los cuales perpetrados por el régimen sirio.**

38. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

39. Véase el resumen sobre Israel-Siria-Líbano en el capítulo 2 (Tensiones).

40. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

2. Tensiones

- Durante 2019 se registraron 94 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (36) y Asia (23), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron en América (12), Oriente Medio (12) y Europa (11).
- Además del conflicto en la región del Lago Chad, en Nigeria se produjo un incremento de la violencia de grupos criminales en el noroeste, sumado al clima de violencia intercomunitaria del cinturón central y a la inestabilidad derivada del proceso electoral.
- Chad se vio afectado por una grave crisis económica y política, inestabilidad en el norte y este del país, ataques vinculados a violencia intercomunitaria, así como acciones de Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad.
- Durante el año se deterioró gravemente la relación entre Rwanda y Uganda así como entre Rwanda y Burundi y se produjeron acciones por parte de la insurgencia de origen rwandés FDLR, desde su feudo en RDC.
- Después de tres décadas en el poder el presidente Omar al-Bashir fue derrocado debido a las fuertes movilizaciones populares en el país, abriendo un nuevo escenario de transición en Sudán.
- En América Latina estallaron o se incrementaron protestas en varios países, como Bolivia, Chile, Colombia, Haití, Ecuador o Venezuela.
- La región indonesia de Papúa Occidental vivió el incremento de protestas y episodios de violencia más importante de las últimas décadas.
- Varios atentados simultáneos en iglesias cristianas y hoteles de lujo en Sri Lanka causaron la muerte de más de 320 personas el domingo de Pascua.
- Se agravó la situación en la India tras la aprobación de una nueva legislación de ciudadanía discriminatoria con la población musulmana que derivó en intensas protestas sociales en las que murieron más de 20 personas.
- Mejoró la situación en torno a la Línea de Contacto en Nagorno-Karabaj, con un descenso de las violaciones del alto el fuego y de las víctimas del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.
- Multitudinarias protestas en Irán a partir de noviembre motivaron una durísima represión por parte de las fuerzas de seguridad con un saldo de más de 300 personas fallecidas.
- Iraq fue escenario de masivas protestas contra la corrupción y el nepotismo de la clase dirigente que fueron duramente reprimidas, resultando en la muerte de más de 400 personas.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2019. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2019. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan Los países afectados por situaciones de tensión durante 2019.

2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2019

Tensión ²	Tipología ³	Actores principales	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
África⁵			
África Central (LRA)	Internacional	Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, grupos armados de RCA, grupo armado LRA	1
	Recursos		=
Angola (Cabinda)	Interna	Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo	1
	Autogobierno, Recursos		↑
Argelia	Interna	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak	2
	Gobierno		↑
Benin	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Chad	Interna	Gobierno, grupos armados (UFR, UFDD), oposición política y social, milicias comunitarias	3
	Gobierno, Recursos, Territorio		↑
Congo, Rep. del	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Costa de Marfil	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI	1
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↓
Eritrea – Etiopía ⁶	Internacional	Gobierno de Eritrea, Gobierno de Etiopía	1
	Territorio		↓
Etiopía	Interna	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados	3
	Gobierno		=
Etiopía (Oromiya)	Interna	Gobierno de Etiopía, gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO	3
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↓
Gambia	Interna	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política	1
	Gobierno		=
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	2
	Gobierno		↑
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, redes internacionales de narcotráfico	1
	Gobierno		=

1. En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
3. La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
4. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2019 con la del año 2018 apareciendo el símbolo ↑ si la situación general durante 2019 es más grave que la del año anterior, ↓ si es mejor y = si no ha experimentado cambios significativos.
5. Las situaciones de tensión relativas a Camerún, Chad y Níger presentes en 2016 debidas a la inestabilidad generada por el conflicto armado de Boko Haram se analizan en el capítulo 1 (Conflictos armados) en el caso Región Lago Chad (Boko Haram). A su vez, las situaciones de tensión relativas a Níger y Burkina Faso presentes en 2017 debidas a la inestabilidad generada por la presencia de insurgencia yihadista se analizan en el capítulo 1 (Conflictos armados) en el caso Región Sahel Occidental.
6. Véase el resumen sobre Eritrea-Etiopía en el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2020.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=
Kenia	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		↓
Malawi	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Madagascar	Interna	Alta Autoridad para la Transición, líderes de la oposición, fuerzas de seguridad del Estado, dahalos (ladrones de ganado), milicias de autodefensa, empresas de seguridad privadas	1
	Gobierno, Recursos		=
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional ⁷	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Mozambique	Interna	Gobierno, RENAMO	2
	Gobierno, sistema		=
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB	3
	Identidad, Recursos, Gobierno		↑
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, PANDEF, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	2
	Identidad, Recursos		=
RDC	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↓
RDC – Rwanda ⁸	Internacional	Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupos armados FDLR y M23 (ex CNDP)	1
	Identidad, Gobierno, Recursos		=
RDC – Uganda ⁹	Internacional	Gobierno de RDC, Gobierno de Uganda, grupos armados ADF, M23 (ex CNDP), LRA, grupos armados que operan en Ituri	1
	Identidad, Gobierno, Recursos, Territorio		=
Rwanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros países de África y en Occidente	2
	Gobierno, Identidad		↑
Rwanda - Burundi	Internacional	Gobierno de Rwanda, Gobierno de Burundi, grupos armados	2
	Gobierno		↑
Rwanda - Uganda	Internacional	Gobierno de Rwanda, Gobierno de Uganda	2
	Gobierno		↑
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, facciones del grupo armado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC)	1
	Autogobierno		=
Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Interna	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo	2
	Territorio		=
Sudán	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Gobierno de Sudán, Gobierno de Sudán del Sur	1
	Recursos, Identidad		↓

7. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

8. Esta denominación hace referencia a la tensión internacional RDC-Rwanda-Uganda aparecida en ediciones anteriores del informe *Alerta!* Aunque comparten características similares, a partir del informe *Alerta 2016* se analizan de forma separada RDC-Rwanda y RDC-Uganda.

9. Ibid.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Togo	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS	1
	Gobierno, Sistema		↓
Uganda	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
América			
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Chile	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Colombia	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
El Salvador	Interna	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	2
	Gobierno		↓
Ecuador	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Guatemala	Interna	Gobierno, oposición política y social, pandillas	1
	Gobierno		=
Haití	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, BINUH, bandas armadas	3
	Gobierno		↑
Honduras	Interna	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	2
	Gobierno		↓
México	Interna	Gobierno, oposición política y social, cárteles, grupos armados de oposición	3
	Gobierno, Recursos		↑
Nicaragua	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↓
Perú	Interna	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	1
	Gobierno, Recursos		=
Venezuela	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Asia			
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)	2
	Gobierno		↓
China (Xinjiang)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	1
	Autogobierno, Sistema, Identidad		=
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet	2
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
China (Hong Kong)	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↑
China – Japón	Internacional	China, Japón	1
	Territorio, Recursos		=
China – Taiwán	Internacional	China – Japón	1
	Territorio, Recursos		↑
Corea, RPD –EEUU, Japón, Rep. de Corea¹⁰	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	2
	Gobierno		↑
Corea, RPD – Rep. de Corea	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	1
	Sistema		=
India	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Sistema, Gobierno		↑
India (Assam)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(ICS), KPLT, NSLA, UPLA y KPLT	2
	Autogobierno, Identidad		=
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)	1
	Autogobierno, Identidad		↓
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		↓
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	3
	Identidad, Territorio		↑
Indonesia (Papúa Occidental)	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport	3
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Kazajstán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales	1
	Sistema, Gobierno		↑
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↑
Lao, RDP	Interna internacionalizada	Gobierno, organizaciones políticas y armadas de origen hmong	1
	Sistema, Identidad		=
Mar de la China Meridional	Internacional	China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Brunei Darussalam	1
	Territorio, Recursos		↑
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos	2
	Gobierno, Sistema		=
Sri Lanka	Interna	Gobierno, oposición política y social, partidos políticos y organizaciones sociales tamiles, grupo armado National Towheed Jamaat (NTJ)	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	2
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		=

10. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, territorio		↓
Europa			
Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj	2
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Belarús	Interna	Gobierno, oposición social y política	1
	Gobierno		=
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Chipre	Interna internacionalizada	Chipre, autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Grecia, Turquía	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
España (Cataluña)	Interna	Gobierno de España, Gobierno de Cataluña, partidos políticos independentistas y no independentistas, actores de la sociedad civil, poder judicial	1
	Autogobierno, Identidad		↑
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↑
Moldova, Rep. de (Transnistria)	Interna internacionalizada	Moldova, autoproclamada República de Transnistria, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		=
Rusia (norte del Cáucaso)¹¹	Interno	Gobierno federal ruso, gobiernos de las república de Daguestán, Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)	1
	Sistema, Identidad, Gobierno		↓
Serbia – Kosovo	Internacional ¹²	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX	2
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Turquía	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen	2
	Gobierno, Sistema		=
Oriente Medio¹³			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	1
	Gobierno, Identidad		=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Identidad		=
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		=
Irán	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG)	2
	Autogobierno, Identidad		↓

11. En anteriores ediciones de este informe se analizaban por separado las tensiones Rusia (Daguestán) y Rusia (Chechenia).

12. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

13. Respecto a Yemen (sur), los acontecimientos relativos a esta disputa han dejado de ser analizados como tensión –como en pasadas ediciones del informe– y el análisis se ha integrado en el caso de conflicto armado Yemen (al-houthistas).

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Irán – EEUU, Israel¹⁴	Internacional	Irán, EEUU, Israel	3
	Sistema, Gobierno		↑
Iraq	Interno internacionalizado	Gobierno, oposición política y social, Irán, EEUU	3
	Gobierno		↑
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG), Turquía, Irán, PKK	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Israel – Siria – Líbano	Internacional	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán	3
	Sistema, Recursos, Territorio		↑
Líbano	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahi al-Sham	2
	Gobierno, Sistema		↑
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.
 †: escalada de la tensión; ‡: reducción de la tensión; =: sin cambios.
 Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2019

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2019, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

Durante 2019 se identificaron 94 escenarios de tensión a nivel mundial, lo cual implica un incremento del 12% en relación al 2018, cuando se identificaron 83 escenarios. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas se concentró en África, con 36 casos, seguida de Asia (23), Oriente Medio y América Latina (12 casos en cada región) y Europa (11). Cabe destacar la identificación de 16 nuevos escenarios de tensión. Cinco de ellos se registraron en África: en Benín y Malawi debido al incremento de las protestas y movilizaciones ciudadanas contra los respectivos gobiernos en el marco de la celebración de elecciones; en Argelia, debido a las dinámicas de tensión que se manifestaron durante el año en masivas movilizaciones contra el régimen; y otros dos casos de tensión interestatal correspondientes al deterioro de las relaciones entre los

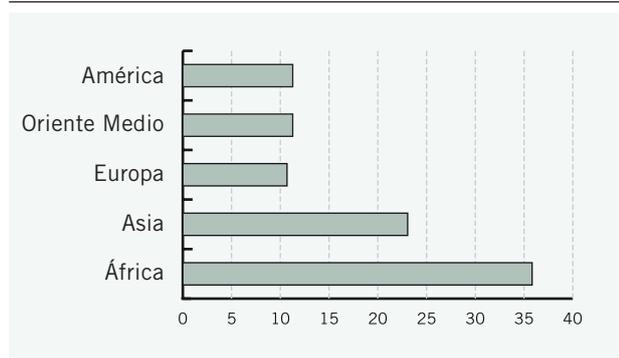
Durante 2019 se identificaron 94 escenarios de tensión, 36 en África, 23 en Asia, 12 en Oriente Medio, 12 en América Latina y 11 en Europa

Ejecutivos de Rwanda y Burundi y de Rwanda y Uganda. En América se identificaron tres nuevos casos –Chile, Colombia y Ecuador– donde se registraron las protestas populares más importantes de la última década contra los diferentes gobiernos así como significativas denuncias sobre violaciones de los derechos humanos respecto de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Cinco nuevos casos de crisis sociopolíticas se ubicaron en Asia, correspondientes a China-Taiwán, Kazajistán, Mar de China Meridional, China (Hong Kong) e India, estos dos últimos vinculados a fuertes protestas populares contra los respectivos gobiernos. En Europa destacó el incremento de la tensión en Cataluña (España) debido a las repercusiones de la sentencia judicial contra líderes políticos y sociales independentistas, mientras que en Oriente Medio destacó Iraq debido al deterioro de la situación política en el país. A su vez, durante el 2019, los casos de Rusia (Daguestán) y Rusia (Chechenia), analizados en anteriores ediciones de este informe por separado, pasaron a convertirse en una única tensión bajo la denominación de Rusia (Norte del Cáucaso). Por otra parte, tres casos considerados en años anteriores tensiones dejaron de serlo en 2019, debido a la mejora de la situación política en Yibuti, Lesotho y Armenia.

Si bien las situaciones de tensión pueden atribuirse a múltiples factores, el análisis del panorama de crisis

14. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en 2019



en 2019 permite identificar tendencias en lo referido a sus principales causas o motivaciones. En línea con los datos observados en años precedentes, **a nivel global un 71% de las tensiones tuvo entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos** (Gobierno)– lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder– u oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados (Sistema). En América Latina, por ejemplo, todas las tensiones identificadas estuvieron vinculadas a alguna de estas dos variables. A su vez, **el 40% de las tensiones a nivel mundial tuvo como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias, siendo este porcentaje claramente superior en Europa (más del 82%, nueve de los 11 casos registrados) o muy inferior en América (8%, uno de los 12 casos)**. Cabe destacar que en alrededor de una tercera parte de las tensiones (31%) las disputas por el control de territorios y/o recursos fueron un elemento especialmente relevante, si bien se trata de un factor que alimenta numerosas situaciones de tensión en grados diversos.

Un 71% de las tensiones tuvo entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos u oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados

En línea con años anteriores, **algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvo un carácter interno (51 casos o un 54%)**, siendo especialmente paradigmático el caso de América Latina, en el que nuevamente la práctica totalidad de los casos (excepto Haití) fueron de este tipo. Por otra parte, **casi una tercera parte de las tensiones a escala global fueron internas internacionalizadas (25 situaciones o casi un 27%)**, siendo este porcentaje claramente superior en regiones como Oriente Medio (la mitad de las crisis) o Europa (55%) y significativamente inferior en África (14%) y América Latina, únicamente con el caso de Haití. Finalmente, **una quinta parte de las tensiones fueron internacionales (18 casos o casi un 19%)**, concentrándose en Asia (26%) y África (22%). En cuanto a la **evolución de las tensiones**, en un 37% de los contextos (35 casos) no se experimentó cambios significativos, mientras que **en 41 casos (44%) se registró un deterioro con respecto a 2018**, y solo en un **19% de los escenarios se observó una cierta mejoría de las crisis** (18 casos). En América, el 58% de los

casos presentó un empeoramiento de la situación (siete de 12), mientras que África concentró casi la mitad de los casos de mejora a nivel global (ocho de los 18). Respecto de la **intensidad de las crisis sociopolíticas**, durante 2019 la mitad de las mismas presentaron una intensidad baja (49%, un porcentaje similar al 51% que se registró en 2018), un tercio registró una intensidad media (34%, equivalente a la cifra del año pasado) y solo el 18% de los casos tuvo altos niveles de tensión (17 casos), 11 de los cuales se produjeron en África (seis) y Oriente Medio (cinco).

En términos comparativos con años anteriores, **la cifra de tensiones graves siguió la tendencia a la baja** de los últimos años –aunque con un pequeño desvío en relación al 2018– representando un 18% en 2019, un 15% en 2018, un 20% en 2017 y un 24% en 2016. Varios contextos que en 2018 habían experimentado altos niveles de tensión desescalaron durante 2019 pasando a ser tensiones de media o baja intensidad. Fue el caso de RDC, Nicaragua o Irán (noroeste). Sin embargo, también hubo seis escenarios que habían registrado niveles medios o bajos de tensión en 2018 y años anteriores, cuyos niveles de conflictividad se incrementaron sustancialmente y fueron considerados de alta intensidad en 2019: Sudán, Haití, Indonesia (Papúa Occidental), Sri Lanka, Irán e Irán – EEUU, Israel. Cabe señalar que durante 2019, a diferencia de 2018 cuando tres escenarios de crisis sociopolíticas escalaron y pasaron a convertirse en conflicto armado –Camerún (Ambazonia/ North West y South West), norte de Níger y de Burkina Faso–, **tan solo el escenario de tensión en el norte de Mozambique**, provocado, en parte, por el accionar de grupos insurgentes que presentan agendas yihadistas, **evolucionó negativamente hasta llegar a considerarse conflicto armado**.

Oriente Medio concentró el mayor número de tensiones de alta intensidad por región, con cinco casos de los 12 registrados (42% de las tensiones de la zona), destacando la tensión en **Egipto** –donde por un año más se prolongó el clima de tensión interna caracterizado por la deriva autoritaria del Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi y la persistente persecución y represión a la disidencia, vulneraciones a los derechos humanos, abusos de las fuerzas de seguridad y la aplicación de medidas de excepción–; **Iraq** –como consecuencia de masivas protestas contra el sistema político, la corrupción y el nepotismo que fueron duramente reprimidas, así como por la escalada de hostilidades entre Washington y Teherán a finales de año que se materializó en una serie de hechos violentos en Iraq–; **Irán** –donde se registraron multitudinarias protestas populares contra el Gobierno que fueron duramente reprimidas por parte de las fuerzas de seguridad con un saldo de más de 300 personas fallecidas–; **Irán-EEUU, Israel** –tensión vinculada al programa nuclear iraní influida por una serie de inci-

dentes en Oriente Medio que propiciaron un escenario volátil y peligrosamente favorable a una escalada militar–; e **Israel-Siria-Líbano** –donde se mantuvo un año más la situación de tensión, en parte como consecuencia de dinámicas vinculadas al conflicto armado sirio.

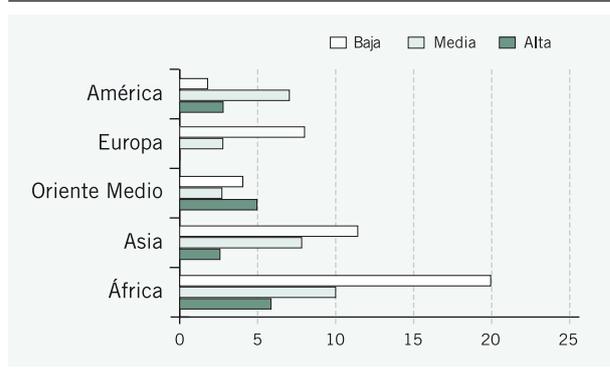
En África, las seis tensiones de mayor gravedad en 2019 fueron **Chad** –que mantuvo durante el año el clima de inestabilidad política y social y la escalada de la violencia debido diferentes escenarios de tensión presentes en el norte del país (región de Tibesti, vinculada, entre otras cuestiones, a la minería ilegal) y este (provincias de Ouaddai y Sila, debido a brotes de violencia intercomunitaria)–; **Etiopía y Etiopía (Oromiya)** –donde a pesar de los cambios acontecidos en el país con el Gobierno de Abiy Ahmed, persistió un elevado clima de violencia, principalmente en el noroeste (región Amhara), el noreste y el centro-sur (Oromiya), debido a numerosas tensiones intercomunitarias y agravios históricos que afloraron en el marco de las reformas políticas emprendidas por el Gobierno–; **Kenia** –donde un año más persistieron los actos de violencia intercomunitaria, así como las acciones del grupo armado somalí al-Shabaab en el norte y en el este, aunque estas con menor intensidad que el año 2018–; **Nigeria** –donde, además del conflicto armado presente en la región noreste (Boko Haram),¹⁵ se mantienen abiertos diferentes escenarios de tensión en el país que han repercutido en un incremento de la violencia y la inestabilidad: actividades de grupos criminales en el noroeste del país (Kaduna y Zamfara); violencia intercomunitaria en el cinturón central (Middle Belt); inestabilidad vinculada al proceso electoral nacional; y tensiones en la región sureña de Biafra y en el delta del Níger¹⁶–; y **Sudán** –que mantuvo durante el año un elevado clima de tensión producto de las importantes movilizaciones populares que fueron duramente reprimidas y lograron la caída del presidente Omar al-Bashir y la apertura de un proceso de transición que inicialmente fue usurpado por una Junta Militar.

En lo que respecta al resto de regiones las tensiones de máxima intensidad tuvieron lugar en **Haití** –que registró un empeoramiento de la crisis política, institucional, social, económica y humanitaria durante el año–; **México** –donde se volvieron a superar los registros de homicidios, convirtiéndose en el año más violento desde que se tienen registros públicos; feminicidios; secuestros; actos de extorsión o trata de personas en relación al año anterior–; **Venezuela** –país en donde se mantuvo el clima de inestabilidad, movilizaciones y protestas sociales, agudizado por la crisis institucional y la

La mitad de las tensiones en todo el mundo fueron de intensidad baja

Las crisis más graves del continente africano se localizaron en Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenia, Nigeria y Sudán

Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones



autoproclamación de Juan Guaidó como presidente nacional, que generó momentos de riesgo de confrontación militar–; **India-Pakistán** –donde se deterioraron gravemente las relaciones entre los Gobiernos como consecuencia de diferentes episodios de violencia en el estado indio de Jammu y Cachemira–; **Indonesia (Papúa Occidental)** –donde se incrementaron los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición OPM y las Fuerzas Armadas, así como debido a las protestas y disturbios en la región de Papúa–; y **Sri Lanka** –cuya situación de seguridad sufrió un grave deterioro debido a varios atentados simultáneos que costaron la vida a más de 320 personas y dejaron heridas a otras 500.

2.2.2. Tendencias regionales

Como en años previos, en 2019 **África** se mantuvo como principal escenario de las crisis socio-políticas a nivel global, albergando un 38% de los casos (36 de 94, una cifra relativamente similar a la de años anteriores (33 en 2018, 37 en 2017, 34 en 2016). Se incluyeron cinco nuevos casos respecto al año anterior (Argelia, Benín, Malawi, Rwanda-Burundi y Rwanda-Uganda) mientras que dos de ellos dejaron de ser considerados crisis sociopolíticas por la disminución de los niveles de tensión (Yibuti y Lesotho). Como se mencionó anteriormente, **el 35% de las crisis de alta intensidad en todo el mundo –seis sobre un total de 17– se concentraron en el continente africano en 2019: Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenia, Nigeria y Sudán.** Esta cifra es similar a la registrada el año anterior en el continente africano, con la única excepción de la reducción de la alta intensidad de la tensión en la RDC y el aumento de la misma en Sudán. En paralelo, se produjo un **incremento de la violencia en el norte de Mozambique**, provincia de Cabo Delgado, que pasó a

15. Véase el resumen de Región Lago Chad en el capítulo 1 (Conflictos armados).

16. La situación en la región del Delta del Níger, en Nigeria, corresponde a otro contexto de tensión. Véase la Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en el año 2019.

17. Véase el resumen de Mozambique (Norte) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

ser considerado conflicto armado,¹⁷ manteniéndose, en otras lógicas, la tensión entre el Gobierno de FRELIMO y el grupo opositor RENAMO en el país. Asimismo, cabe señalar que el 56% de las tensiones registradas en África (20 de 36 casos) fueron de **intensidad baja**. Por otro lado, el 39% de los casos de crisis sociopolíticas en el continente (14 casos) experimentó un deterioro, cifra que se amplió respecto al año 2018 (10 casos). En cambio, **se observó una mejora relativa en la situación de tensión en ocho casos**: Rep. del Congo, Eritrea, Eritrea-Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenia, RDC, Sudán-Sudán del Sur y Túnez. De todos ellos son reseñables los casos de Etiopía (Oromiya) y Kenia, ya que si bien se produjo un descenso de la situación de tensión en relación al año anterior, siguen siendo considerados casos de alta intensidad. Cabe destacar que en el 39% de los casos (14) **no se registraron cambios significativos**.

Por otra parte, la gran mayoría de las tensiones en África (23 casos) **fueron de carácter interno (64%)**, en líneas similares al año anterior (67% en 2018). Algo menos de una sexta parte de las crisis presentó **elementos de internacionalización** (14%, cifra similar al 2018), entre ellos la influencia de actores foráneos, ya fueran actores armados no estatales de diverso tipo –como la organización armada al-Shabaab (originaria de Somalia) en Kenia–, las acciones de grupos yihadistas regionales o globales –como las filiales de ISIS y AQMI en Túnez y Argelia–, la presencia de tropas internacionales –como la ONUCI en Costa de Marfil o la MONUSCO en RDC– o la influencia de sectores de la diáspora y grupos armados locales presentes en territorios vecinos –como por ejemplo en los casos de Eritrea o Rwanda. Solo **ocho de las 36 tensiones en África tuvieron un carácter internacional, la mayor parte de ellas en la región de Grandes Lagos**: África Central (LRA), Eritrea-Etiopía, Marruecos-Sáhara Occidental, RDC-Rwanda, RDC-Uganda, Rwanda-Burundi, Rwanda-Uganda y Sudán-Sudán del Sur. De entre estos, se constató un incremento de la tensión durante 2019 en los casos de Rwanda-Burundi y Rwanda-Uganda – que pasaron a ser considerados nuevos escenarios de tensión en el continente debido al deterioro de las relaciones entre los diversos ejecutivos y al clima de acusaciones y amenazas–, mientras que evolucionaron positivamente los casos de Eritrea-Etiopía y Sudán-Sudán del Sur debido a cambios en la conformación de gobierno de alguno de los Estados implicados.

En cuanto a las causas de fondo de las tensiones, las crisis tuvieron una dimensión multicausal, en consonancia con la tendencia a nivel global. **Dos tercios de las crisis sociopolíticas acontecidas en África (26 de los 36 casos, un 72%) estuvieron vinculadas a la oposición al gobierno** y en tres casos –Kenia,

En América Latina, el 58% de las tensiones registradas en 2019 padeció un empeoramiento de la situación

Asia registró cinco nuevos escenarios de tensión durante el 2019: China (Hong Kong), China-Taiwán, India, Kazajstán y Mar de China Meridional

Mozambique y Túnez– a la vez se observó la **oposición al sistema**. Por otra parte, el 33% de las tensiones en África tuvo como una de sus causas principales **demandas identitarias y/o de autogobierno**, confluyeron ambas variables en cuatro contextos –Kenia, Eritrea, Etiopía (Oromiya) y Marruecos-Sáhara Occidental.

Adicionalmente, cabe destacar que la lucha por el **control de los recursos y/o el territorio** también fue un elemento relevante en África en más de una tercera parte (concretamente un 39%, 14 casos) de las tensiones en el continente.

América padeció un incremento en el número de tensiones, pasando de las nueve registradas en 2018 a las 12 en 2019, representando un 13% del total a nivel mundial. Los **tres nuevos escenarios de tensión** se sitúan en **Chile, Colombia y Ecuador**, y se relacionan con el incremento de las movilizaciones populares y la grave represión de las protestas. **En Chile**, por ejemplo, **se experimentaron las protestas más virulentas y masivas de las últimas décadas, con un saldo de 26 personas fallecidas, 12.600 heridas y miles de personas detenidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)**. En relación a la intensidad de las crisis en el continente, en dos casos las tensiones fueron de baja intensidad – **Guatemala y Perú**–, mientras que tres de ellas –**Haití, México y Venezuela**– fueron de alta intensidad. En el resto de casos (57%) la intensidad registrada fue media. Sin embargo, como en años anteriores, aunque América Latina y el Caribe continuó siendo una de las regiones del mundo con menor número de tensiones y conflictos armados, de forma paralela, presenta las **tasas de homicidios más altas del mundo, registrando 11 de los 12 primeros países del ranking** (excepto Sudáfrica).

Por otra parte, todas las tensiones en América Latina fueron de carácter interno, con la excepción de Haití, por el papel que las misiones de Naciones Unidas han desempeñado en el país en los últimos años. En cuanto a **la evolución de las tensiones** en América, se registró un **empeoramiento de la situación en el 58% de los casos** (siete) –Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, México y Venezuela–, frente a los tres casos registrados en 2018. **Las 12 tensiones identificadas en América Latina tuvieron entre sus causas principales la oposición a políticas gubernamentales**, que se materializó en protestas de diversa intensidad y carácter y en la grave represión de estas en países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Haití o Venezuela. En algunos casos, ese factor se dio en combinación con otras causas, como las **demandas de autogobierno** –Bolivia– o las **disputas en torno al acceso o uso de recursos** –Bolivia, México y Perú.

En **Asia** se registraron 23 tensiones (24% del total), **cinco escenarios más que los observados en 2018** (18):

China (Hong Kong), China-Taiwán, India, Kazajstán y Mar de China Meridional. Entre ellas, **un 13% de los casos (tres) fueron de alta intensidad durante 2019 –India y Pakistán, Indonesia (Papúa Occidental) y Sri Lanka– mientras que en el 52% de los casos (12) la intensidad fue baja** –China (Xinjiang), China-Japón, RPD Corea-Rep. de Corea, India (Manipur y Nagalandia), Kazajstán, Kirguistán, RDP Lao, Mar de China Meridional, Tailandia y Uzbekistán. En relación a la evolución de las tensiones en el continente asiático, en el **43% de los casos (10) se observó un empeoramiento de la situación** que fue especialmente grave en los escenarios de mayor intensidad de la violencia, como lo representan los casos de las tensiones entre India y Pakistán, Indonesia (Papúa Occidental) y Sri Lanka. **A su vez, solamente en cuatro casos (17%) se produjo una mejora de la situación – Bangladesh, India (Manipur y Nagalandia) y Uzbekistán– frente a los siete casos (37%) observados durante el año anterior,** mientras que en nueve casos (39%) no hubo cambios significativos.

Al igual que en 2018, Asia continuó siendo el continente con un mayor porcentaje de tensiones internacionales, seis de las cuales se situaban en Asia Nororiental, concretamente en la zona comprendida entre el Mar Amarillo y el Mar de China Meridional: la disputa entre China y Japón (principalmente acerca de las islas Senkaku/Diaoyu), la tensión de Corea del Norte con su vecino del sur y también con varios países acerca de su programa armamentístico, la tensión entre China-Taiwán y la crisis en el Mar de la China Meridional que involucra a China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia y Brunei Darussalam. La otra tensión internacional fue la disputa histórica entre India y Pakistán. **Un 43% de las tensiones (10 casos) tuvieron un carácter interno, y un 30% (siete casos) presentaron una clara dimensión internacional,** ya sea por la presencia de grupos armados regionales y tensiones fronterizas, como en tres de los países de Asia Central –Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán– o bien los vínculos transnacionales de organizaciones armadas locales –como en la provincia china de Xinjiang o el estado indio de Assam, o bien por la presencia de organizaciones armadas en los países vecinos –como en el caso de RDP Lao.

En cuanto a las causas de fondo, **14 de las 23 tensiones de la región (61%) estuvieron vinculadas a la oposición al sistema o al gobierno.** En seis de ellas –India, Pakistán y las cuatro ex repúblicas soviéticas de Asia Central: Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán– coincidieron ambas variables, mientras que en otras cinco –las provincias de Tíbet y Xinjiang, en China, así como Hong Kong, la disputa entre Corea del Norte y Corea del Sur y la situación de la comunidad hmong en RDP Lao– se identificó la oposición al sistema como uno de los ejes fundamentales de la tensión, junto a otros ejes.

Por otra parte, las **aspiraciones identitarias y/o demandas de autogobierno** se observaron en 11 contextos (48%), mientras que la dimensión relativa al **control de los recursos y el territorio** también fue un factor presente en una tercera parte (35%) de las tensiones en Asia.

En Europa se registraron 11 casos de tensiones sociopolíticas, en donde resalta la inclusión de un nuevo escenario en 2019 relativo al deterioro del conflicto político entre Cataluña y España, así como el fin de la situación de crisis en Armenia, que dejó de considerarse escenario de tensión. Siguiendo la tendencia de años anteriores, **el conjunto de los casos de tensión registrados en Europa fue de baja intensidad (73%), no constatándose ningún caso de intensidad elevada.** Por otra parte, en lo concerniente a la **evolución de las crisis sociopolíticas,** cabe destacar

En Europa, cabe destacar que el conjunto de los casos de tensión registrados fue de baja intensidad (73%), no constatándose ningún caso de intensidad elevada

el incremento de la tensión en cuatro casos –Chipre, España (Cataluña) y en las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur–, la mejora de la situación en dos de los 11 casos –Rusia (Norte del Cáucaso) y Armenia–Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)– mientras que en el resto de casos (45%) no se percibieron cambios significativos. Entre los casos en los que se redujo la tensión, cabe destacar la **mejora de la situación en torno a la Línea de Contacto en Nagorno-Karabaj,** con un descenso de las violaciones del alto el fuego y de las víctimas del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Por el contrario, en las situaciones que registraron un deterioro, se destaca el **incremento la tensión en torno al conflicto sobre el estatus de Cataluña en España, principalmente como consecuencia de la sentencia dictada contra líderes sociales y políticos independentistas, entre otros elementos.**

En relación a las causas de fondo, cabe destacar que Europa siguió siendo la región a nivel mundial en la que tuvieron una mayor incidencia las disputas vinculadas con las **demandas identitarias y/o de autogobierno, con el 82% de los casos** vinculados a estos factores (nueve casos de 12), porcentaje similar a años anteriores. También cabe destacar que en el 55% de las tensiones que tuvieron lugar en Europa también se relacionan con causas vinculadas a la **oposición** de determinados colectivos a las políticas del Gobierno o bien al **sistema** en su conjunto. En paralelo, en la línea de años anteriores, el **control del territorio** fue un factor presente en dos de las tensiones más prolongadas de la región: la disputa entre el Gobierno de Chipre y la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre y el contencioso por la región de Nagorno-Karabakh entre Armenia y Azerbaiyán. Por último, en relación al ámbito geográfico de actuación e influencia de los actores presentes en la tensión, se mantiene la tendencia de años anteriores. La mitad de las crisis sociopolíticas que transcurrieron en Europa (55%) fueron **internas internacionalizadas, destacando el rol que gobiernos foráneos juegan en determinados**

contextos, en especial el papel que desempeña Rusia en algunas regiones autoproclamadas independientes en el marco de países que habían formado parte de la URSS: Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, Transdniestria en la República de Moldova. Casi un tercio de los casos (27%) fueron tensiones **internas**, mientras que dos casos fueron considerados tensiones **internacionales**: Armenia-Azerbaiján (Nagorno-Karabaj) y Serbia-Kosovo.

Por último, en **Oriente Medio** se registraron 12 tensiones, una más que la registrada en 2018. La nueva tensión se ubica en **Iraq**, que fue escenario de masivas protestas contra la corrupción y el nepotismo de la clase dirigente que fueron duramente reprimidas, resultando en la muerte de más de 400 personas. Cabe destacar que **Oriente Medio fue la región del mundo con mayor porcentaje de tensiones de alta intensidad** (cinco casos, que supone el 42%, cifra superior al año anterior cuando se registraron tres casos, un 27%). Las crisis sociopolíticas de mayor intensidad se registraron en Egipto, Irán, Irán-EEUU, Israel, Iraq y la crisis que afecta a Israel en relación con Siria y Líbano. Por otro lado, se observaron cuatro tensiones de intensidad baja (33%) y tres (25%) de intensidad media. En relación con la **evolución** de las crisis, **tan solo se identificó un caso en el que se constató una relativa mejora de la situación con respecto a 2018: Irán (noroeste)**. En cinco casos la situación no experimentó cambios destacables respecto el año anterior mientras que **en la mitad de las tensiones (seis casos) se produjo un deterioro de la tensión**, entre las que destaca la situación en **Iraq**, las multitudinarias protestas registradas en **Irán** a finales de año que motivaron una durísima represión por parte de las fuerzas de seguridad con un saldo de más de 300 personas fallecidas, o la escalada de la tensión entre **Irán y EEUU**, vinculada al programa nuclear iraní, en un contexto volátil y peligrosamente favorable a una escalada militar en Oriente Medio.

En lo concerniente a las causas de las disputas, el **75% de las tensiones** registradas en la región (nueve de 12 casos) **tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno o al sistema**. En casi la mitad de las crisis (cinco casos que representan el 42%) el factor de demandas identitarias y/o de autogobierno fue también una de las motivaciones destacadas. En paralelo, cuatro de las tensiones en la región fueron de **carácter interno**, cinco **internas internacionalizadas** y dos de carácter **internacional**: la disputa entre Irán y EEUU e Israel en torno al programa nuclear iraní y el caso de Israel-Siria-Líbano, vinculado a las dinámicas y consecuencias regionales del conflicto árabe-israelí y, más recientemente, influido también por la guerra en Siria.

La violencia criminal en los estados de Zamfara, Sokoto, Katsina y Kaduna en Nigeria se cobró 2.000 víctimas mortales en 2019

2.3. Tensiones: evolución anual

2.3.1. África

África Occidental

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB

Síntesis:

Desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas.

En Nigeria se produjo un incremento de la violencia y de la inestabilidad más allá del conflicto vinculado a las acciones de Boko Haram que afecta a las provincias del noreste del país y la cuenca del Lago Chad.¹⁸ Este aumento tuvo lugar en el noroeste del país, centrado en las actividades de grupos criminales, que se suma al clima permanente de violencia intercomunitaria del cinturón central y a la inestabilidad vinculada al proceso electoral. Así, en primer lugar, hubo un incremento de la violencia política vinculada al ciclo electoral en el país

que tuvo lugar durante el primer trimestre del año. El 23 de febrero se celebraron las elecciones presidenciales y legislativas federales y el 9 de marzo las elecciones a gobernador y las legislativas estatales. En la mayoría de estados se produjo un incremento de la violencia política entre partidarios de los diferentes partidos que se disputaban los gobiernos de estos estados y principalmente entre los seguidores del partido en el poder, el All Progressive Congress (APC) del presidente Muhammadu Buhari, y seguidores del principal partido rival, el People's Democratic Party (PDP) de Atiku Abubakar. El 27 de febrero la comisión electoral dio la victoria al candidato y actual presidente Buhari con el 56%, mientras que Atiku rechazó los resultados. La violencia política se cobró en febrero

18. Véase el resumen sobre la Región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

al menos 40 víctimas mortales y decenas de heridos, la mitad de ellos durante la jornada electoral en los estados de Rivers y Akwa Ibom. Se produjeron una decena de incidentes de gravedad en los que grupos de mercenarios y saboteadores a sueldo atacaron oficinas y vehículos de partidos, mítines y concentraciones. A la vez, algunos estados celebraron sus elecciones estatales en diferentes momentos, lo que prolongó el clima de violencia política durante todo el año en diferentes partes del país y las críticas de los observadores internacionales ante las condiciones de intimidación y violencia en que transcurrieron los comicios.

En segundo lugar, **se produjo un aumento de las acciones de grupos criminales en el noroeste del país desde 2018** que se prolongó durante todo el año, principalmente en los estados de Zamfara, Sokoto, Katsina y Kaduna, que ejecutaron a centenares de civiles, cometieron secuestros para obtener rescates, saquearon e incendiaron decenas de localidades, todo lo cual provocó el despliegue de operativos militares para hacer frente a las acciones de saqueo. **El balance anual solo en estos cuatro estados fue de más de 2.000 víctimas mortales como consecuencia de las acciones de los grupos criminales**, de los cuerpos de seguridad y también de las milicias de autodefensa de civiles. En los últimos años se han ido organizando grupos de autodefensa civil para intentar hacer frente a este incremento de la criminalidad. Las acciones de las milicias de autodefensa provocaron un agravamiento de la violencia por cometer ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de formar parte de los grupos criminales que a su vez provocaron nuevas espirales de represalia de unos y otros ante los ataques. **ACNUR alertó a finales de septiembre que la escalada de la violencia había provocado el desplazamiento de 40.000 personas que se vieron forzadas a huir a la vecina Níger** en los últimos 10 meses. Amnistía Internacional ya había publicado un informe sobre el estado de Zamfara en julio de 2018, el más afectado por la violencia de las bandas, afirmando que este estado se encontraba a merced de los grupos criminales que habían asesinado centenares de personas en los últimos dos años en localidades remotas y de difícil acceso para los cuerpos de seguridad. No obstante, cabe destacar que en julio, las autoridades del estado de Zamfara alcanzaron un acuerdo de paz con los grupos criminales para poner fin a la violencia, que incluía la entrega de sus armas a cambio de concederles la amnistía. El acuerdo iba a ser replicado en el vecino estado de Katsina donde el gobierno inició conversaciones de paz con los grupos criminales para frenar sus ataques. Estos procesos de diálogo redujeron la violencia en octubre, aunque persistió un clima de violencia de baja intensidad.

Esta oleada de crímenes se sumó a la histórica confrontación intercomunitaria **entre pastores nómadas procedentes del norte de Nigeria y las comunidades agrícolas del centro y sur del país** que se produce en los estados centrales del país conocidos como “middle belt”. Se constataron enfrentamientos comunales en

espirales de acción-reacción que exacerbaban el clima de violencia, incluyendo los saqueos e incendios de campos y robos y ejecuciones de cabezas de ganado. Los estados más afectados fueron Kaduna, Plateau, Benue, Taraba y Adamawa, con centenares de víctimas mortales como consecuencia de los enfrentamientos intercomunitarios. La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de la ACNUDH, Agnès Callamard, presentó un informe en el que acusaba al Gobierno nigeriano de pasividad y de no poner fin a la violencia entre agricultores y ganaderos que afecta al centro del país desde hace varios años así como a los secuestros y la criminalidad en el noroeste que se ha cobrado miles de víctimas mortales en el último año. El Gobierno rechazó el informe, que también señalaba las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad en el país. Organizaciones locales e internacionales como HRW y Amnistía Internacional también responsabilizaron a los cuerpos de seguridad del Estado de cometer numerosos abusos y ejecuciones extrajudiciales de sospechosos bajo custodia policial. Cabe añadir que en los estados del Delta del Níger, ricos en petróleo, se ha generalizado el secuestro para pedir rescates por los trabajadores expatriados vinculados a las corporaciones petroleras y de nigerianos ricos, situación que también se ha incrementado en el norte de Nigeria en los últimos años, donde localidades enteras se han desplazado para evitar secuestros y ataques por bandas criminales. Por último, en relación a la situación en Biafra, en 2019 se conmemoró el 50º aniversario de la guerra y el desastre humanitario que comportó, con estimaciones de entre uno y cinco millones de personas muertas por el bloqueo humanitario al que fue sometida la región para ahogar el movimiento de autodeterminación. Diversas organizaciones locales e internacionales de defensa de derechos humanos señalaron que durante 2019 persistió la violenta persecución de actores sociales y población civil sospechosa de ser simpatizante del movimiento independentista, considerado terrorista por el Estado nigeriano.

Cuerno de África

Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados

Síntesis:

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) está controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que rige el país con un

creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista. Los siguientes comicios (2010, 2015) limitaron todavía más la apertura democrática al incrementar la verticalidad del régimen y la represión de la oposición política. La Ley antiterrorista de 2009 contribuyó a diezmar a la oposición. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Abeba Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la capital, Addis Abeba, a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, y la organización del desarrollo de la ciudad generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya, lo que contribuyó a incrementar la tensión. La movilización social contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn a inicios de 2018 y la designación de Abiy Ahmed, que emprendió una serie de reformas dirigidas a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles.

El año 2019 se vio marcado por el proceso de reformas iniciado por el primer ministro Abiy Ahmed y el rechazo por parte de actores políticos y sectores de la sociedad civil a los cambios emprendidos por parte del Gobierno que tuvo su expresión en brotes de violencia intercomunitaria. Este clima de violencia se cobró centenares de víctimas mortales durante todo el año. Numerosas tensiones intercomunitarias y agravios ignorados por los gobiernos previos afloraron en el marco de las reformas políticas emprendidas por el Gobierno de Abiy Ahmed. **En mayo el fiscal general federal acusó in absentia al antiguo jefe del servicio de inteligencia NISS, Getachew Assefa, y otros 25 cargos del NISS de graves violaciones de derechos humanos cometidos durante su mandato.** El gobierno de la región de Tigray continuó ocultando a Getachew, que a su vez era consejero de presidencia y alto cargo del partido TPLF. También fue arrestado y deportado a Etiopía en mayo el comandante de la prisión de Jijiga (capital de la región de Ogadén) acusado de graves violaciones de los derechos humanos en dicha prisión.

Las zonas del país más afectadas por la violencia intercomunitaria fueron el noroeste (región Amhara), el noreste y el centro-sur (Oromiya). Entre las acciones más destacadas cabe remarcar la muerte a principios de mayo de 200 personas de la comunidad gumuz en la zona Agi Agew (Amhara) en represalia por ataques en la región Benishangul-Gumuz en los que murieron 18 personas entre el 26 y el 28 de abril. En junio se produjeron asesinatos de altos cargos del gobierno de la región de Amhara, lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado contra esta región, interviniendo el Gobierno federal para controlar la situación, llevando

a cabo acciones represivas contra la oposición política amhara. El 22 de junio fue asesinado el presidente de la región, Ambachew Mekonnen, y dos de sus asesores en la capital, Bahir Dar. Horas después fue asesinado en Addis Abeba el jefe del Estado Mayor, el general Seare Mekonnen, y un oficial retirado. El Gobierno afirmó que estos asesinatos estaban conectados y eran parte de un complot orquestrado por el brigadier general Asaminew Tsige, quien el 24 de junio fue localizado y ejecutado en un tiroteo cerca de Bahir Dar. Ese mismo día murieron 50 personas a manos de un grupo de asaltantes que podría estar vinculado al intento de golpe de Estado. Tras el ataque, la Policía arrestó a cerca de 250 sospechosos de haber participado en el complot, entre miembros de los cuerpos de seguridad, líderes opositores y seguidores del partido etno-nacionalista amhara National Movement of Amhara. Por último, cabe destacar la muerte de 86 personas durante las protestas que tuvieron lugar en octubre en Addis Abeba y otras partes del estado de Oromiya en protesta por la acusación de un activista, Jawar Mohammed, quien había sido uno de los artífices de las protestas que contribuyeron a encumbrar a Abiy al poder en 2018, y que posteriormente le acusó de volver a actuar autoritariamente como sus antecesores. La influyente Iglesia ortodoxa criticó la respuesta del primer ministro a los enfrentamientos el 27 de octubre, afirmando que había fracasado a la hora de proteger a los miembros de la congregación, debido a que la Iglesia ortodoxa Tewahedo, que se vincula a la comunidad amhara, sufrió diversos ataques en algunas de sus sedes. Por último la campaña de desarme forzoso emprendida por el Gobierno en el Lower Omo Valley (en el estado sureño Southern Nations, Nationalities and People's State, SNNPS) causó decenas de víctimas mortales por el rechazo de la población local. En noviembre la ONU alertó de la existencia de dos millones de personas desplazadas internas como consecuencia del clima de violencia intercomunitaria que sacudía al país.

En el ámbito político, cabe destacar la formación de un nuevo partido en mayo, el partido Ethiopian Citizens for Social Justice (ECSJ), que une a siete grupos opositores y que estará liderado por el veterano líder opositor Berhanu Nega. El 30 de julio el Parlamento decidió posponer las elecciones locales y de distrito para celebrarlas conjuntamente con las elecciones legislativas y regionales de 2020. En noviembre tuvieron lugar dos importantes cuestiones. En primer lugar, la coalición en el poder, formada por cuatro partidos de base étnica, el EPRDF, creada a finales de los ochenta para derrocar la dictadura de Mengistu y que ha gobernado el país desde 1991, decidió fundirse en un único partido de cara a competir con mejores garantías en las elecciones previstas para el 16 de agosto de 2020, a iniciativa del primer ministro Abiy Ahmed. El objetivo de la creación del partido también responde a un intento de reducir la tensión étnica y las divisiones étnicas que han contribuido a definir el país, buscando fomentar la unidad nacional y la integración de las etnias en un proyecto común. Tres de los cuatro partidos (el amhara ADP, el oromo ODP y el multiétnico SEPDM) acordaron

el 21 de noviembre fusionarse y crear el nuevo partido, que se llamará Prosperity Party (PP), mientras que el partido que ha dominado la coalición hasta la llegada al poder de Abiy Ahmed, el TPLF, de la minoría tigré, rechazó unirse al nuevo proyecto, temiendo ver limitada su influencia. Bajo el Gobierno de Abiy, el TPLF ha visto reducirse su poder, y diversos analistas han señalado que la enemistad entre el TPLF y el Gobierno de Abiy ha llevado a que la coalición exista solamente en el papel.

En segundo lugar, **la población de la comunidad sidama, en el sur del país, votó en referéndum el 20 de noviembre para decidir si la región se convertía en un estado federal semi autónomo.** La fecha del referéndum se pospuso durante el año, por lo que se produjo una escalada de movilizaciones en julio en demanda de mayor autonomía para la comunidad sidama que causaron decenas de víctimas mortales, ante el retraso en la celebración del referéndum. La comisión electoral dictaminó que el 98,5% de la gente que participó en el referéndum votó a favor de la creación del nuevo estado, en un proceso que transcurrió en un clima de libertad y normalidad democrática. La comunidad sidama representa el 4% de la población del país, siendo la quinta comunidad nacional más amplia, y la principal en el estado Southern Nations, Nationalities and People's State (SNNPS) del que se dividirá. Históricamente sectores de la comunidad sidama han reclamado disponer de un estado propio, lo que ha provocado tensiones en la región SNNPS, que acoge a 56 grupos étnicos. Diversos analistas señalaron que este paso, que convertirá la región sidama en el décimo estado, puede ser un acicate para que otras comunidades (wolayta, hadiya, gurage, keffa, entre otras) pretendan disponer de su propio estado en términos étnicos. Tras el referéndum se debía iniciar todo un complejo proceso de creación de la nueva administración estatal que tendrá capacidad impositiva, el control de escuelas, policía, salud y otros servicios. Se generó un clima de preocupación entre la población no sidama del nuevo estado, especialmente en la localidad de Hawassa.

Etiopía (Oromiya)	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno de Etiopía, gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO

Síntesis:

Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de rechazo del poder central desde los años setenta. El movimiento político-militar Oromo Liberation Front (OLF) surge entre 1973 y 1974 en la región etíope de Oromiya, en el centro y sur del país, en contra de la dictadura de Mengistu y con el objetivo de establecer un Estado independiente para la comunidad oromo. A pesar de sus diferencias, los movimientos políticos y armados de carácter nacionalista

oromo participan junto a otros movimientos insurgentes del país para derrocar el régimen de Mengistu en 1991. Sin embargo, el OLF se desmarca en 1992 del Gobierno de transición liderado por el partido TPLF de Meles Zenawi, que controla la coalición en el poder, el Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF), y desde entonces inicia la lucha armada contra el Gobierno central y contra otros movimientos políticos oromos progubernamentales exigiendo la independencia de la comunidad oromo. En paralelo, la región de Oromiya ha vivido un ciclo de protestas iniciadas por el movimiento estudiantil en 2014 contra el régimen etíope debido a reivindicaciones vinculadas a la percepción de marginación del pueblo oromo, que fueron fuertemente reprimidas. También cabe destacar la recurrencia de los brotes de violencia entre comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo a lo largo de la frontera entre las regiones de Oromiya y de Somalí por la competencia de recursos y por la demarcación entre los territorios de ambas comunidades y en zonas remotas de ambas regiones y la intervención represiva de la Policía Liyu, que contribuye a exacerbar la situación e incrementar la violencia. Por último, la movilización social contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn a inicios de 2018 y la designación de Abiy Ahmed, que emprendió una serie de reformas dirigidas a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles.

En la región de Oromiya se produjeron violentos enfrentamientos intercomunitarios y fuertes tensiones entre sectores oromo en competencia por el poder,

en paralelo al inicio de la desmovilización del OLF. Entre el 12 y el 13 de enero el Ejército llevó a cabo ataques aéreos en la zona occidental de Oromiya contra miembros del OLF que habían rechazado el acuerdo de paz, ejecutando a siete civiles. El Gobierno federal desmintió haber llevado a cabo ataques aéreos, pero afirmó que habían realizado una operación de estabilización tras una petición del gobierno regional.

El 24 de enero el gobierno regional y el grupo armado OLF firmaron un acuerdo de alto el fuego,

según el cual los combatientes del OLF se comprometieron a concentrarse en campos de acantonamiento para proceder a su desarme, desmovilización y reintegración (DDR). Sin embargo, posteriormente se produjo un ataque por parte del OLF el 28 de enero que causó la muerte de dos granjeros en el distrito Amaro. Tras esto, se produjeron nuevos enfrentamientos entre el OLF y los cuerpos de seguridad federales. El Gobierno anunció que 1.000 rebeldes del OLF entregaron sus armas y se acantonaron en campos de DDR. Algunos sectores del OLF cometieron hechos esporádicos de violencia, según informaron algunos medios que no pudieron ser confirmados, pero en general se redujo la violencia.

A finales de mayo el OLF liderado por Dawud Ibsa acordó trabajar conjuntamente con el principal partido oromo en el poder, el Oromo Democratic Party (ODP) y el gobierno de la región. El OLF se comprometió a dar apoyo a las iniciativas para que el gobierno regional recupere el control de la situación. En una declaración conjunta del presidente de la región de Oromiya, Shimeles Abdissa, Dawud Ibsa, y el jefe adjunto del

Estado Mayor, Berhanu Jula, el OLF anunció que nunca más dispondría de un grupo armado. Además, se formó un comité de reconciliación compuesto por ancianos líderes con el objetivo de mediar entre el OLF y el ODP. Este comité presentó un informe en el que se destacaba el trabajo realizado para acantonar a los milicianos del OLF con el objetivo de proceder a su rehabilitación y formación y promover su integración en la sociedad. En paralelo, también en mayo hubo noticias en torno a la fusión entre el OLF y el Oromo Federalist Congress (OFC), liderado por el profesor Merera Gudina.

Kenia	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenia, ISIS

Síntesis:

La política y la economía de Kenia han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. En 2002 el sucesor del autoritario y cleptócrata Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) fue derrotado por Mwai Kibaki. Sin embargo, las promesas incumplidas de Kibaki fomentaron un clima de frustración, por lo que el opositor Raila Odinga se convirtió en una amenaza a la hegemonía en el poder de Kibaki. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras esta situación se alcanzó un acuerdo entre ambos sectores a través de la creación de un frágil Gobierno de unidad nacional. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, enjuiciado por la CPI por su vinculación con los hechos de 2007 aunque el tribunal retiró los cargos en 2015. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, las actividades ilegales de la secta Mungiki, la intervención militar de Kenia en Somalia –que ha desencadenado ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenia y la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenia, suponen retos a la estabilidad del país. A esto se le sumó en 2012 la presión gubernamental contra el movimiento secesionista Mombasa Republican Council (MRC), que pretende la independencia de la región costera del país.

Persistieron los actos de violencia intercomunitaria durante el año, así como las acciones del grupo armado somalí al-Shabaab en el norte y en el este, aunque se constató una reducción del número de acciones y de su virulencia. Junio fue el periodo del año en el que al-Shabaab estuvo más activo, mes en el que atacaron puestos militares y de Policía y puestos de control fronterizo. El hecho más destacado del año fue el ataque a un hotel en el área de Westlands, en Nairobi, el 15 de enero, en el que tras 17 horas de asedio murieron 21 civiles, los seis miembros de al-Shabaab y se produjeron al menos 30 heridos. En segundo lugar, cabe destacar la muerte de entre ocho y diez policías, según las fuentes, por la detonación de un explosivo al paso del vehículo en el que circulaban por la zona fronteriza con Somalia, en el condado de Wajir, el 15 de junio. El 19 de junio un tribunal de Nairobi declaró culpables a tres personas por colaborar con el grupo armado para realizar el atentado que tuvo lugar en la universidad de Garissa en 2015 y que causó la muerte de 148 personas.

ACLED elevó a más de 200 las víctimas mortales vinculadas a acciones de al-Shabaab y a la violencia intercomunitaria, cifra sensiblemente inferior a los 406 registrados en 2018 y a los 730 de 2017. En este sentido, cabe destacar la reducción del número de muertes a manos de la Policía en el año 2019 según desveló Deadly Force en comparación con los años anteriores.¹⁹ En 2015 murieron 143 personas a manos de la Policía, pasando a 205 personas en 2016, 256 en 2017, 219 en 2018, cifra que se vio reducida a 105 personas en 2019 (hasta 30 de septiembre), lo que supone una reducción del 47% en un año. La escalada de la violencia policial en 2017 coincide con el ciclo electoral que vivió el país. Por último, cabe destacar los enfrentamientos entre milicias vinculadas a diferentes comunidades durante todo el año en la zona norte del país, por robo de ganado, demarcaciones fronterizas entre territorios de diferentes comunidades, represalias por ataques previos en torno a cuestiones vinculadas a la propiedad de la tierra, entre las principales cuestiones.

Por otra parte, cabe destacar el incremento de la tensión entre Kenia y Somalia a raíz del descubrimiento de yacimientos de hidrocarburos en una zona marítima en disputa entre ambos países. El Tribunal Internacional de Justicia de la Haya pospuso la audiencia sobre esta cuestión inicialmente establecida para septiembre a noviembre y, posteriormente, a junio de 2020. En noviembre los presidentes de ambos países se reunieron y decidieron normalizar las relaciones, tras una escalada de la tensión entre ambos durante gran parte del año, en la que se interrumpieron los vuelos directos entre ambos países y se llamaron a los embajadores a consultas, entre diversas medidas de presión.

19. Deadly Force es una base de datos de asesinatos cometidos por la Policía. El proyecto del rotativo keniano Daily Nation, Nation Newsplex, busca registrar todas las muertes resultantes de operaciones policiales en Kenia, basándose en informes públicos, incluyendo informaciones de individuos y organizaciones del sector público y privado. La base está configurada a partir de la recopilación de informaciones de los medios de comunicación, el Independent Policing Oversight Authority, otras agencias gubernamentales y recuentos realizados por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Somalia (Somalilandia – Puntlandia)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Territorio Interna
Actores:	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo

Síntesis:

Ambos Gobiernos mantienen una disputa por el control de las regiones fronterizas de Sool, Sanaag y Cayn desde 1998. Estas tres regiones, que forman la administración SSC (por sus iniciales) se encuentran geográficamente dentro de las fronteras de Somalilandia, aunque la mayoría de clanes de la región se encuentran asociados a los de Puntlandia. Desde entonces se han producido choques esporádicos e intentos de mediación. En 2012 estas regiones crearon el estado de Khatumo, lo que añadió más complejidad a la situación. En 2016 la administración de Khatumo y Somalilandia iniciaron conversaciones de paz, pero el presidente y el vicepresidente de Khatumo se enfrentaron y crearon dos administraciones separadas que reclamaban ser el legítimo gobierno. Una de ellas acabó negociando su inclusión en Somalilandia.

La tensa relación entre ambas administraciones enfrentadas en torno al control de la región de Sool, Sanaag y Cayn (SSC) persistió durante el año, produciéndose enfrentamientos esporádicos entre milicias y cuerpos de seguridad respectivos. Los intentos de negociación entre Somalilandia y Somalia con el objetivo de integrar a la primera en una Somalia federal fueron el telón de fondo de la tensión. En la región de Sanaag, milicias clánicas rivales se enfrentaron en Duud Arraale y en El Afweyn entre el 7 y el 8 de julio provocando la muerte de 25 personas. También en Sanaag, las fuerzas de Somalilandia se enfrentaron con las tropas del coronel Arre el 10 de julio, que había desertado de Somalilandia a Puntlandia en 2018, dejando un saldo de tres soldados de Somalilandia y uno de Arre muertos. Tras la toma de la localidad de Karin por parte de las tropas de Arre el 26 de julio, se desencadenaron enfrentamientos al día siguiente que causaron la muerte de dos soldados de Somalilandia. En agosto se reunieron ancianos líderes de la zona para mediar entre el Gobierno de Somalilandia y el coronel Arre, aliado de Puntlandia, y acordaron un cese de hostilidades y el inicio de negociaciones. El 6 de octubre el presidente de Somalilandia acordó frenar las hostilidades en Sanaag contra la milicia de Arre. No obstante, en noviembre, en las disputadas regiones fronterizas de Sool y Sanaag, entre Puntlandia y Somalilandia, continuaron las tensiones y se registraron varios enfrentamientos armados entre grupos afines a una parte o a la otra. En agosto y en octubre, dos líderes de milicias del clan warsangeli junto a sus tropas desertaron del Ejército de Somalilandia a Puntlandia. Esa fue la tercera desertión importante de militares de los cuerpos de seguridad de Somalilandia a Puntlandia en 2019. El 18 de septiembre, en Ceel Afwayn, en la

región de Sanaag, la violencia entre los subclanes habar yunis y habar jeclo del clan isaq volvió a estallar y dejó un saldo de diversas víctimas mortales.

Grandes Lagos y África Central

Chad	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Recursos, Territorio Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados (UFR, UFDD), oposición política y social, milicias comunitarias

Síntesis:

El golpe de Estado frustrado de 2004 y la reforma de la Constitución de 2005 boicoteada por la oposición fueron el germen de una insurgencia que intensificó su actividad durante el año 2006, con el objetivo de derrocar al Gobierno autoritario de Idriss Déby. Esta oposición estaba compuesta por diversos grupos y militares desafectos al régimen. A esto se añadió el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra que padece la vecina región sudanesa de Darfur, como consecuencia de las operaciones transfronterizas de los grupos armados sudaneses y las milicias árabes progubernamentales sudanesas janjaweed. Estas atacaron las poblaciones y campos de refugiados de Darfur situados en el este del Chad, lo que contribuyó a una escalada de la tensión entre Sudán y Chad, que se acusaron de apoyar cada uno de ellos a la insurgencia del otro país. La firma de un acuerdo entre ambos países en enero de 2010 desencadenó el paulatino retorno y desmovilización de los grupos armados chadianos, aunque todavía existen algunos focos de resistencia. En paralelo, Idriss Déby continuó controlando el país de forma autoritaria. Tras las elecciones de 2016, ganadas sin sorpresas por Idriss Déby, persistió el clima de inestabilidad social. Por último, cabe destacar las intervenciones militares en el norte contra grupos con base en Libia y contra la minería ilegal, y contra Boko Haram en la región del Lago Chad, así como periódicos enfrentamientos intercomunitarios por la propiedad y usos de la tierra.

Persistió la inestabilidad en el norte y este de Chad, los ataques y actos de represalia en otras partes del país vinculados a violencia intercomunitaria, así como las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad.²⁰ En el ámbito militar, cabe destacar la intervención militar aérea francesa entre el 3 y el 6 de febrero contra una columna rebelde de la coalición de grupos armados Union des Forces de la Résistance (UFR) formada por 50 vehículos procedentes del noreste, con origen en el sur de Libia, que se dirigía a N'Djamena. A petición del presidente Idriss Déby, los cazas franceses intervinieron en apoyo del Ejército chadiano y destruyeron alrededor de 20 vehículos. El UFR es un grupo liderado por Timan Erdimi, sobrino del presidente Idriss Déby y antiguo jefe del Estado Mayor con residencia actual en Qatar. El 9 de febrero el Ejército

20. Véase el resumen sobre la Región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

anunció que habían destruido unos 40 vehículos y arrestado a 250 rebeldes. La oposición y sectores de la sociedad civil criticaron la intervención francesa como una prueba más de su apoyo incondicional a Déby. Por otra parte, centenares de militantes desertaron o abandonaron la coalición rebelde Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (UFDD) en marzo.

En relación a los **brotes de violencia en las provincias del este (Ouaddai y Sila), el Gobierno estableció el estado de emergencia en agosto** y lo prolongó durante

el resto del año a raíz de la escalada de los enfrentamientos entre agricultores locales y ganaderos nómadas de origen árabe. Al estado de emergencia se añadió el toque de queda, con el objetivo de desarmar de forma forzosa a la población civil. Por otra parte, **el brote de violencia existente durante el último año en las zonas mineras de la región de Tibesti en el extremo norte del país causó decenas de víctimas mortales y diversos intentos de promover el diálogo entre las partes.** El Gobierno extendió a Tibesti el estado de emergencia establecido en agosto en el este del país. En agosto también anunció el despliegue de 5.000 soldados en las tres provincias para hacer frente a la situación de inestabilidad, y el cierre de las fronteras con Sudán, RCA y Libia. Finalmente, el 2 de noviembre, el Gobierno y la milicia de autodefensa responsable de la situación alcanzaron un preacuerdo que establecía un alto el fuego. El Gobierno debía levantar el bloqueo sobre la localidad de Miski y liberar a los milicianos del grupo, mientras que la milicia debía entregar sus armas. El 5 de noviembre el presidente reinstauró a los jefes de cantón que fueron expulsados por oponerse a la decisión gubernamental de agosto de 2018 de modificar las fronteras internas por la cual Miski dejó de formar parte de la región de Tibesti, y se integró en Borkou. El acuerdo definitivo se alcanzó el 11 de noviembre, cuando la milicia acordó un cese de hostilidades definitivo y el Gobierno aceptó establecer un mecanismo para gestionar la explotación de oro que comportará el retorno a nivel local de los beneficios derivados de la explotación.

En el ámbito político y social, el Gobierno restringió el espacio público prohibiendo actos de protesta contra los recortes en el suministro del gas butano y el uso del franco CFA. Por otra parte, el 23 de abril el Gobierno rechazó la petición del movimiento opositor Les Transformateurs, de convertirse en partido político –organización creada en 2018 que pretende irrumpir en el escenario político de la mano de Succès Masra, joven ex economista del Banco Africano de Desarrollo. Diferentes acciones organizadas por este movimiento fueron reprimidas durante el año. No obstante, ante la situación del vecino Sudán, donde las protestas por el alto coste de la vida derivaron en la caída de su presidente, Omar al-Bashir, el Gobierno el 10 de mayo

retiró las tasas a la importación de productos básicos como el arroz, la harina, el aceite de cocina y los dátiles para reducir el precio y apaciguar las protestas en el país para evitar una situación de tensión como la vivida en el país vecino. La renovación de los miembros del Cadre National de Dialogue Politique (CNDP), espacio de coordinación entre la mayoría presidencial, la oposición política y la sociedad civil, estuvo pendiente durante todo el año por divergencias en el seno de la oposición política para pactar sus representantes y finalmente fue

renovado en agosto. Este espacio, presidido por Mahamat Zene Bada, secretario general del partido en el poder, el MPS de Idriss Déby, mantuvo conversaciones durante todo el año para acordar el calendario electoral. En mayo, el CNDP decidió posponer las elecciones legislativas previstas para ese mes para finales de año, en una fecha por determinar. Déby celebró reuniones entre el 10 y el 16 de julio con los partidos políticos para discutir sobre las elecciones. Países de la comunidad internacional

presionaron al Gobierno para que acelerara el calendario, autorizara a los partidos políticos a poder desempeñar con libertad sus actividades y la organización de mítines. El presidente, Idriss Déby, presionó a los organismos electorales para acelerar la celebración de elecciones en enero de 2020, rechazando la propuesta de la comisión electoral de realizarlas en abril o noviembre de 2020, debido a la necesidad de revisar la ley electoral y organizar un nuevo censo, tal y como plantea la oposición, que denunció la interferencia del Gobierno y amenazó con boicotear el proceso electoral de no aceptar sus demandas. La muerte de un taxista el 4 de noviembre a manos de los guardaespaldas del presidente de la Asamblea Nacional cuando habilitaban el paso por las carreteras en N'Djamena provocó un fuerte rechazo social y la movilización de miles de personas el 23 de noviembre en el marco de su funeral, acción en la que los cuerpos de seguridad intervinieron causando la muerte de una persona.

El Gobierno chadiano restringió el espacio público prohibiendo actos de protesta contra los recortes en el suministro del gas butano y por el uso del franco CFA

RDC	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Entre 1998 y 2003 transcurrió en RDC la llamada “primera guerra mundial africana”.²¹ La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política, los grupos armados RCD-Goma, RCD-K-ML, RCD-N, MLC y las milicias Mai Mai. A

21. Véase la síntesis de RDC (este) y RDC (este - ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

partir de 2003 el GNT estuvo dirigido por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la antigua insurgencia. El GNT elaboró la Constitución, refrendada en diciembre de 2005. En 2006 se celebraron elecciones presidenciales para poner fin a la transición, en las que Kabila fue elegido presidente, en medio de un clima de alta tensión y acusaciones de fraude. La formación del nuevo Gobierno no frenó la inestabilidad y las disputas en el ámbito político. Las elecciones de noviembre de 2011, en las que se cometieron numerosas irregularidades, contribuyeron a avivar la inestabilidad. La prolongación del mandato del presidente Kabila, que debía expirar en las elecciones de 2016 que fueron pospuestas hasta finales de 2018, contribuyó a exacerbar la inestabilidad y la movilización política y social en contra de su permanencia en el poder, que fue reprimida con dureza.

La grave crisis política y social a nivel nacional que ha afectado al país como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016 y su prolongación hasta la celebración de las elecciones en diciembre de 2018, tal y como se había acordado en el acuerdo de San Silvestre de diciembre de 2016, **culminó con la celebración de las elecciones en un clima generalmente pacífico en la mayoría del país, que dieron la victoria a Félix Tshisekedi, en lo que supuso la primera transición pacífica de poder en la historia del país.** No obstante, cabe destacar que entre el 16 y el 17 de diciembre de 2018, en las vísperas de las elecciones, se había producido una masacre en cuatro localidades de Yumbi, en la provincia de Mai-Ndombe (oeste del país) que pasó desapercibida al coincidir con el proceso electoral, en la que murieron, según la ONU, hasta 535 civiles de la comunidad banunu a manos de milicias de la comunidad batende. En esta matanza estarían implicados cuerpos de seguridad y actores políticos locales, incentivada por actores políticos, cuerpos de seguridad y de la administración local del Estado en la zona. Otras fuentes elevaron esta cifra a más de 900 víctimas mortales. Dicha masacre se habría visto precedida por una disputa en torno al entierro de un líder comunitario de la comunidad banunu. La ONU llevó a cabo una investigación en la que determinó que podrían haberse producido crímenes contra la humanidad. El nuevo Gobierno abrió una investigación, colaboró con la ONU, inició procedimientos judiciales y sustituyó a numerosos cargos de los cuerpos de seguridad y de la administración local.

El 24 de enero de 2019 Félix Tshisekedi asumió el cargo de nuevo presidente del país, tras su victoria en las controvertidas elecciones presidenciales y legislativas nacionales y provinciales del 30 de diciembre, bajo la sospecha de irregularidades y supuesto fraude electoral. Además, durante el año se constató una apertura del espacio político y una mejora de la situación de seguridad, en comparación con el incremento de la violencia política y de acciones

La grave crisis política y social a nivel nacional que ha afectado a RDC en los últimos años culminó con la celebración de elecciones a finales de 2018 que dieron la victoria a Félix Tshisekedi, lo que supuso en 2019 la primera transición pacífica de poder en la historia del país

insurgentes en el este. La implementación del acuerdo de paz de diciembre de 2016 se vio afectada por la división de la oposición como consecuencia de la ausencia de liderazgo tras la muerte del histórico líder opositor Étienne Tshisekedi, líder del partido opositor UDPS, a principios de 2017.

Las elecciones presidenciales, legislativas nacionales y provinciales se llevaron a cabo el 30 de diciembre de 2018, una semana después de lo previsto (23 de diciembre) porque un incendio destruyó unas 8.000 máquinas electrónicas de recuento almacenadas en un local de la comisión electoral. En medio de acusaciones de fraude electoral por parte de Martin Fayulu y su coalición Lamuka, **el Tribunal Constitucional el 19 de enero confirmó la victoria de Félix Tshisekedi por un estrecho margen** sobre el segundo candidato, Martin Fayulu, quedando en tercera posición el candidato oficialista Emmanuel Ramazani Shadary. La SACD y diversos países africanos como Egipto –país que en febrero asumió la presidencia de la UA–, avalaron el anuncio celebrando el traspaso de poder. Tanto Tshisekedi como Kabila dieron por buenos los resultados (en lo que algunas fuentes especularon sobre un posible acuerdo entre ellos), pero Martin Fayulu presentó una petición ante el Tribunal Constitucional alegando fraude electoral y afirmando que él habría recibido el 62% de los votos y Tshisekedi un 18%, según sus estimaciones y las de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO). Esta, que desplegó a 40.000 observadores electorales, declaró públicamente que los resultados oficiales no coincidían con sus propias conclusiones. Algunos gobiernos y fuentes diplomáticas cuestionaron los resultados oficiales.

La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) también anunció los resultados de las elecciones legislativas sobre la base de los cuales la coalición oficialista Frente Común para el Congo (FCC) mantuvo una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, así como en las asambleas provinciales, en medio de duras acusaciones de fraude y protestas en diversas ciudades, en especial en Kikwit (provincia de Kwilu, feudo de Martin Fayulu), y de menor intensidad en Kisangani, Mbandaka, Goma y Kinshasa. La CENI aplazó la votación hasta marzo de 2019 en cuatro circunscripciones, el territorio de Beni, la ciudad de Beni, Butembo y Yumbi, debido al brote de ébola y a las preocupaciones relacionadas con la seguridad. Finalmente, el partido oficialista del presidente Kabila FCC consiguió 361 de los 485 escaños del Parlamento, mientras que la coalición en la que estaba el UDPS de Félix Tshisekedi, el Cap pour

le Changement (CACH), consiguió solo 49 diputados, frente a los 90 correspondientes a la coalición Lamuka. En consecuencia, Tshisekedi no logró apoyos suficientes para escoger un primer ministro ya que el FCC de Kabila bloqueó sus propuestas, lo que derivó en nuevas

negociaciones entre ambos bloques que acabaron con el anuncio el 6 de marzo de un acuerdo para la formación de un Gobierno de coalición y con un primer ministro del FCC. Sylvestre Ilunga Ilunkamba fue nombrado primer ministro el 20 de mayo. El nuevo primer ministro había ocupado diversos cargos de responsabilidad durante los gobiernos de Mobutu Sese Seko. Es miembro del Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia, uno de los principales partidos que conforman el FCC. El nuevo Gobierno está formando por 67 miembros: el primer ministro, cinco vice primeros ministros, 10 ministros de Estado, 31 ministros, tres ministros delegados y 17 viceministros. En el Consejo de Ministros, el CACH obtuvo 23 puestos, mientras que el FCC obtuvo 42. Más del 70% del Gobierno está formado por ministros que lo son por primera vez. La representación de las mujeres es del 17%, pero estas ocupan cargos ministeriales clave, como Relaciones Exteriores y Planificación. En conjunto, los escaños ocupados por el FCC en la Asamblea Nacional y en el Senado representan una mayoría de más de tres quintos y confieren a la coalición amplias facultades legislativas, por lo que tal y como señalaron diversas fuentes, la transición en el poder del país seguía en manos de Kabila y sus acólitos. En las provincias el FCC tenía mayoría en 25 de las 26 asambleas, mientras que en Kivu Norte la mayor parte de los escaños corresponde a Lamuka. Además, el FCC preside 24 asambleas, y 23 gobernadores proceden de sus filas. Lamuka preside dos asambleas provinciales y el CACH preside una. El 24 de abril, la Asamblea Nacional eligió a su Mesa, encabezada por primera vez por una mujer, Jeanine Mabunda, perteneciente a la coalición FCC. El 3 de septiembre, Ilunkamba presentó el programa del Gobierno a la Asamblea Nacional y se hizo efectiva la toma de posesión del Gobierno de coalición.

Tras una reunión de sus miembros fundadores celebrada en Bruselas a finales de marzo, la coalición electoral Lamuka se transformó en una plataforma política dentro de la cual se nombró a Moïse Katumbi primer coordinador, cargo rotativo cada tres meses. En medio de acusaciones de disensiones internas, el candidato presidencial de Lamuka en las elecciones, Martin Fayulu, siguió exigiendo que se respetara “la verdad de las urnas” y organizó multitudinarios actos públicos en Kisangani y Kinshasa. Una de las primeras medidas que puso en marcha el presidente Félix Tshisekedi, en el marco de su denominado “programa de emergencia de 100 días” y de conformidad con el acuerdo político del 31 de diciembre de 2016, fue la concesión del indulto en marzo a unos 700 presos políticos, entre ellos el abogado Firmin Yangambi y el líder de la oposición Franck Diongo. La mejora del clima político facilitó el regreso de líderes de la oposición a la RDC, hecho que contribuyó positivamente al incipiente equilibrio de poderes entre las fuerzas políticas del país. Entre mayo y junio regresaron tres históricos líderes políticos

integrados en Lamuka: Moïse Katumbi (dos años de exilio), Antipas Mbusa Nyamwisi (siete años de exilio) y Jean-Pierre Bemba. El regreso de Katumbi fue posible tras la anulación de una condena de tres años de encarcelamiento por fraude relacionado con la propiedad y la suspensión de todas las acciones judiciales pendientes emprendidas contra él. Katumbi celebró los logros alcanzados por el presidente Tshisekedi, en particular respecto de la apertura del espacio político, y prometió adoptar un enfoque pragmático, promover la cohesión nacional y trabajar de forma constructiva en calidad de miembro de la “oposición republicana”.

Rwanda	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros países de África y en Occidente

Síntesis:

La llegada del colonialismo belga en 1916 exacerbó las diferencias étnicas entre la comunidad mayoritaria hutu y la minoría tutsi. Esta última fue considerada superior y ocupó el poder político, económico y social en el país de la mano de Bélgica en detrimento de la mayoría de la población. Esta situación provocó un fuerte resentimiento y ya en 1959 se produjeron los primeros brotes de violencia etnopolítica contra la comunidad tutsi. Tras la independencia en 1962, la comunidad hutu tomó el poder. En 1990 se inició un conflicto armado entre el grupo armado RPF, liderado por la comunidad tutsi de Uganda, huidos en 1959, y el Gobierno hutu, que alcanzaron un acuerdo en 1993. Este acuerdo no fue respetado y sectores extremistas hutus llevaron a cabo un genocidio entre abril y junio de 1994 de cerca de un millón de personas en su mayoría tutsis pero también sectores hutus moderados, ante la inacción de la comunidad internacional, que retiró la misión de la ONU que debía supervisar el acuerdo. El RPF consiguió derrocar y expulsar al Gobierno genocida, cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. Incluso hay sectores que hablan de un segundo genocidio interno, además de los crímenes cometidos por el RPF en suelo congolés en persecución de los responsables del genocidio de 1994 –las antiguas Fuerzas Armadas rwandesas y las milicias Interahamwe, rebautizadas como FDLR– y de los dos millones de refugiados rwandeses huidos a RDC. Desde entonces el presidente Paul Kagame ha gobernado de forma autoritaria, reprimiendo la disidencia política.

Durante el año se deterioró gravemente la relación entre Rwanda y Uganda,²² así como entre Rwanda y Burundi²³ y se produjeron acciones por parte de la insurgencia de origen rwandés FDLR, desde su feudo en RDC. Se produjo un brote de violencia a principios de octubre en el norte del país, cerca de la frontera con RDC, en

22. Véase el resumen sobre Rwanda – Uganda en este capítulo.

23. Véase el resumen sobre Rwanda – Burundi en este capítulo.

el que murieron 33 personas. Un grupo perteneciente a la insurgencia FDLR penetró desde RDC y atacó la localidad de Kinigi, en el distrito de Musanze, causando la muerte de 14 personas. Los cuerpos de seguridad rwandeses persiguieron a los asaltantes, ejecutaron a 19 y capturaron a cinco. La Policía arrestó a la líder del partido opositor no registrado FDU-Inkingi, Victoire Ingabire, acusada de estar involucrada en los ataques de Kinigi.

Además, el Gobierno de Rwanda continuó restringiendo el espacio político y la libertad de expresión en el país. En septiembre, dos asaltantes no identificados apuñalaron y mataron a un alto cargo del partido FDU-Inkingi, y las autoridades arrestaron a dos personas en conexión con el crimen, aunque la líder del partido señaló que el asesinato era un nuevo intento del Gobierno por intimidar a la oposición. Posteriormente, la líder opositora, Victoire Ingabire, anunció el 9 de noviembre la creación de un nuevo partido opositor, el partido Desarrollo y Libertad para Todos (DALFA-Umurinzi). En enero se inició en Sudáfrica la investigación judicial en torno al asesinato del antiguo jefe de inteligencia de Rwanda, Patrick Karegeya, que fue encontrado muerto en la habitación de su hotel en Johannesburgo en diciembre de 2013. Karegeya, compañero del presidente Paul Kagame durante la rebelión del RPF que derrocó al Gobierno genocida en 1994 y que a su vez cometió graves atrocidades en el país y en la vecina RDC en persecución de los responsables del genocidio, había caído en desgracia para el régimen, fue encarcelado en 2005 y 2006, y en 2007 se exilió junto al antiguo jefe del Estado Mayor, Faustin Kayumba Nyamwasa, con el que fundó el movimiento opositor Rwandan National Congress (RNC), y en 2011 un tribunal rwandés los condenó *in absentia* por ofensas contra el Estado. Ambos en Sudáfrica sufrieron numerosos intentos de asesinato, que derivaron en la expulsión de diplomáticos rwandeses, a pesar de que Rwanda siempre negó su implicación. Cuatro sospechosos rwandeses estaban implicados en el asesinato de Karegeya, pero abandonaron Sudáfrica y no se produjo su extradición. En paralelo, el fiscal jefe de Rwanda en diciembre de 2018 había anunciado que apelaría la sentencia en la que la disidente Diane Rwigara fue absuelta junto a su madre, Adeline, y otras cuatro personas, por parte del Tribunal Supremo rwandés de los cargos de falsificación e incitación a la rebelión el 6 de ese mes. Rwigara es hermana de Assinapol Rwigara, un industrial que en los noventa fue un importante donante del partido en el poder RPF. Posteriormente se convirtió en una voz crítica al régimen e intentó presentarse a las elecciones en agosto de 2017, pero su candidatura fue desestimada por supuestas irregularidades. En septiembre de 2017 fue arrestada y encarcelada a la espera de juicio. Por último, cabe destacar que la justicia francesa abandonó

Durante el año se deterioró gravemente la relación entre Rwanda y Uganda así como entre Rwanda y Burundi y se produjeron acciones por parte de la insurgencia FDLR, desde su feudo en RDC

en diciembre de 2018 la investigación sobre la muerte del presidente rwandés, Juvénal Habyarimana, por falta de evidencias, situación que había deteriorado las relaciones entre ambos países ya que la investigación incluía la participación del presidente Kagame, por aquel entonces líder del grupo insurgente RPF, en el lanzamiento del misil que derribó el avión en el que viajaba y que desencadenó el posterior genocidio. Investigaciones balísticas en 2012 señalaron la posibilidad de que el misil perteneciera a la guardia presidencial de Habyarimana, y una investigación rwandesa en 2009 dictaminó que habrían sido los sectores hutus extremistas los que habrían asesinado a Habyarimana por su voluntad de alcanzar un acuerdo con la minoría tutsi.

Rwanda – Burundi	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	Gobierno de Rwanda, Gobierno de Burundi, grupos armados

Síntesis:

El final de los conflictos armados respectivos en Rwanda en 1994 y en Burundi en 2004 revirtió el dominio político y étnico surgido en la independencia. En Rwanda, la revolución de 1959 derrocó la monarquía tutsi y llevó a las élites hutus al poder, que fueron expulsadas tras el genocidio de 1994 por los refugiados tutsis procedentes de Uganda, y que encumbraron al RPF liderado por el general tutsi Paul Kagame en el Gobierno del país. En Burundi, 40 años de regímenes militares tutsis terminaron con un conflicto armado y la victoria del movimiento pro hutu más importante de la rebelión armada, el CNDD-FDD. Su líder, Pierre Nkurunziza, consiguió tejer una red de equilibrios en su seno para encumbrarse en el poder. Ambos se han convertido en los “hombres fuertes” de la región para promover el desarrollo de sus países y poner fin a los conflictos en la zona. Rwanda, con el FPR en el poder, financió la campaña electoral de Nkurunziza, que es visto como moderado porque marginó a otros sectores de la rebelión hutu burundesa (las FNL de Agathon Rwaswa) con conexiones con su enemigo hutu rwandés FDLR. Nkurunziza y Kagame han intercambiado apoyos en torno a la persecución de sus respectivas insurgencias. No obstante, en 2013 esta relación se truncó cuando se produjo la derrota de la rebelión pro rwandesa del M23 en DRC (enemiga de las FDLR). Rwanda acusó a su vecino burundés de ser el refugio seguro para los combatientes cuya presencia en DRC había justificado la intervención de Rwanda hasta entonces.

Persistió el deterioro de la relación entre Rwanda y Burundi, vínculo que ha empeorado en los últimos años a raíz de la grave crisis que padece Burundi, ya que Rwanda presionó a su vecino para que abriera el espacio político de cara a reducir el clima de violencia en el país.

A su vez, Burundi ha acusado al régimen rwandés de autoritario, de reprimir la oposición política y de apoyar la insurgencia burundesa.²⁴ Las informaciones filtradas en diciembre de 2018 en torno a las denuncias de Refugees International, que señaló que en los campos de refugiados burundeses de Rwanda diversos grupos armados burundeses, como las FNL e Imbogoraburundi, estaban reclutando por la fuerza a combatientes, y que podría existir no sólo la aquiescencia de las autoridades rwandesas sino su colaboración activa, contribuyó todavía más a agravar las relaciones entre ambos países. Posteriormente, a finales de febrero de 2019, una decena de cuerpos sin vida fueron encontrados en la parte burundesa del Lago Rweru que separa Burundi de Rwanda, y las autoridades burundesas afirmaron que estos cuerpos procedían de la parte rwandesa, acusación que fue negada por Rwanda. La tensión persistió durante el año. En este sentido, cabe destacar que en noviembre de 2019 grupos armados no identificados procedentes de Burundi atacaron posiciones militares en el distrito de Bweyeye (Rwanda). Posteriormente, tras un ataque mortal en Burundi por un grupo no identificado, el Gobierno burundés el 28 de noviembre acusó al Ejército rwandés de haber perpetrado ataques y amenazó con tomar represalias en caso de que Rwanda continuara con las hostilidades. Kagame insinuó ante el Parlamento rwandés que países vecinos habían estado involucrados en patrocinar ataques transfronterizos contra Rwanda. Semanas antes, los jefes de Estado Mayor de Rwanda, RDC, Burundi, Uganda y Tanzania se reunieron en RDC el 24 y el 25 de octubre para discutir sobre la posibilidad de llevar a cabo operaciones militares conjuntas contra los grupos armados en el este de RDC.

Rwanda – Uganda	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	Gobierno de Rwanda, Gobierno de Uganda

Síntesis:

Ambos Gobiernos han sido históricamente aliados y han jugado un papel muy importante en la evolución política del otro. El Gobierno ugandés, liderado por Yoweri Museveni y su National Resistance Movement, alcanzó el poder en 1986 con el apoyo militar de la comunidad refugiada tutsi entre la cual se encontraba Paul Kagame. A su vez, la Uganda de Museveni facilitó la creación a finales de los ochenta del Rwandan Patriotic Front (RPF), grupo que desde Uganda lanzó la fracasada ofensiva en 1990 para vencer al Gobierno hutu y que acabó derrocándolo tras el genocidio de 1994. Desde entonces, ambos regímenes han combatido del mismo lado en diversas ocasiones durante las guerras en RDC. Desde el fin de la II guerra en RDC, cuando ambos países se retiraron de territorio congolés, su relación

ha sido desigual, aunque han tenido la capacidad y voluntad de negociar diversos conflictos. No obstante, durante el último año la relación se ha deteriorado gravemente como consecuencia de diversos factores, principalmente por el supuesto apoyo de Uganda a la disidencia rwandesa.

Se deterioró gravemente la relación entre Rwanda y Uganda. Durante todo el año se produjo una escalada de acciones y de represalias entre ambos países que hizo temer el peor escenario, según diversos análisis. El 5 de marzo de 2019 el ministro de Exteriores rwandés anunció que cerraría la frontera con Uganda y aconsejó a los rwandeses residentes en Uganda que abandonaran el país, acusando a este país de arrestar rwandeses de forma arbitraria, de dificultar y poner trabas al comercio regional y, sobre todo, de proporcionar apoyo y cobijo a grupos opositores armados rwandeses, acusaciones que fueron desmentidas por Uganda. Específicamente, Rwanda acusó a Uganda de dar apoyo al movimiento Rwanda National Congress (RNC) y especialmente, al grupo armado Forces Démocratiques pour la Libération de Ruanda (FDLR).²⁵ Ambas organizaciones supuestamente pretenden derrocar al Gobierno rwandés actual y se las señala por revivir las tensiones étnicas que condujeron al genocidio de 1994. Entre abril y agosto ambos países adoptaron medidas punitivas contra los ciudadanos del otro país residentes en el propio, como deportaciones o ejecuciones de personas en tránsito fronterizo acusadas de contrabando o de espionaje y cierre temporal de pasos fronterizos.

En julio, se celebró una cumbre en la capital angolana, Luanda, entre los presidentes de Rwanda, Uganda, DRC y Angola, en la que decidieron nombrar como mediadora entre ambos países a Angola con el apoyo congolés. **Finalmente, los presidentes Kagame y Museveni firmaron un acuerdo el 21 de agosto en Luanda para normalizar las relaciones entre ambos países en el que se comprometieron a respetar la soberanía respectiva, a abstenerse de realizar acciones desestabilizantes, a respetar los derechos y libertades de sus ciudadanos y a reanudar las actividades transfronterizas.** En septiembre una delegación de alto nivel ugandesa visitó Kigali para discutir la implementación del acuerdo. Por otra parte, aunque indirectamente relacionado con todo lo anterior, los jefes de Estado Mayor de Rwanda, RDC, Burundi, Uganda y Tanzania se reunieron en DRC entre el 24 y el 25 de octubre para discutir sobre la posibilidad de llevar a cabo operaciones militares conjuntas contra los grupos armados en el este de RDC. No obstante, continuaron registrándose incidentes de seguridad entre Rwanda y Uganda, en concreto, disparos a nacionales de ambos países en la zona fronteriza, incluyendo la muerte de dos ugandeses acusados de contrabando de tabaco hacia Rwanda, lo que provocó la condena por parte de Uganda, el arresto de 35 rwandeses por entrada ilegal en Uganda y la deportación de 32.

24. Ya en julio de 2018 se constataron ataques transfronterizos, cuando un grupo armado no identificado procedente de Burundi atacó la localidad rwandesa de Cyamuzi, ataques que ya se habían producido en junio. Ya en ese momento el presidente rwandés, Paul Kagame, alertó que su Ejército estaba preparado para defender la integridad del país. The East African, *No end to Rwanda-Burundi spat*, 25 de agosto de 2018.

25. Clement Uwiringiyimana, "Rwanda accuses Uganda of supporting rebels", Reuters, 5 de marzo de 2019.

Sudán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Sudán vive inmerso en un conflicto crónico derivado de la concentración del poder y los recursos en el centro del país. Aparte de los conflictos en las regiones marginalizadas de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, el resto del país sufre también problemas de gobernabilidad derivadas del régimen autoritario del presidente Omar al-Bashir que subió al poder con un golpe de Estado en 1989 y que ejerce un duro control y represión de los disidentes a través de los aparatos de seguridad del Estado. La situación de tensión en el país se agravó con la separación de Sudán del Sur en 2011 ya que afectó gravemente la economía del país que dependía en un 70% de la venta de petróleo, situado mayoritariamente en el sur. Las arcas del estado sudanés vieron disminuir drásticamente sus ingresos por la pérdida del control en la exportación del petróleo y, más tarde, por la falta de acuerdo con Sudán del Sur para su transporte por los oleoductos que pasan por Sudán. Una situación económica con una alta inflación y la devaluación de la moneda contribuyó al inicio de significantes protestas en verano de 2012 en varias ciudades del país que, a principios de 2019 conllevan la caída del régimen de al-Bashir.

Tras 30 años en el poder, el 11 de abril Omar al-Bashir fue derrocado como consecuencia de las movilizaciones y protestas populares, cuya última ola emergió en diciembre de 2018. La caída de al-Bashir –que no implicaba necesariamente la superación del régimen–, generó importantes desafíos y oportunidades para la construcción del nuevo escenario político del país, marcado por las incertidumbres sobre la capacidad del nuevo gobierno de transición para afrontar y resolver los importantes retos que afronta el estado sudanés. Entre estos, los estragos que la crisis económica estaba generando en la población más vulnerable o las tensiones y agravios históricos entre el centro y la periferia, que se manifestaban a través de diferentes escenarios de violencia presentes en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul. Las protestas ciudadanas que habían emergido a finales de 2018 solicitando la dimisión del presidente sudanés, Omar al-Bashir, debido a la crisis económica, se intensificaron al inicio de 2019, extendiéndose a varios puntos del país. Estas fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad sudanesas, siendo denunciado por grupos de derechos humanos que registraron al menos 40 personas asesinadas y alrededor de dos mil detenidos. La intensificación de las protestas llevó al Gobierno de Omar al-Bashir a anunciar diferentes decretos para tratar de sofocar el descontento popular, entre ellos la disolución del Gobierno federal y los 18 gobiernos estatales del país –poniendo a la cabeza de estos últimos a miembros de las fuerzas de seguridad–; el retraso de la reforma constitucional para permitirle una nueva postulación presidencial; y el decreto del estado

de emergencia en todo el país por un año –medida que no se tomaba desde 1999. A su vez, posteriormente también anunció nuevos decretos relativos al estado de emergencia: se incrementaron las facultades y poder de las fuerzas regulares; se prohibieron las reuniones, manifestaciones y huelgas no autorizadas; se amplió el control sobre la salida de divisas del país; se prohibió la distribución, venta y transporte de combustible fuera de los canales oficiales; se autorizó al fiscal general a establecer tribunales de emergencia por todo el país. A mediados de marzo, la Asamblea Nacional ratificó el estado de emergencia decretado por el Gobierno, aunque redujo su duración a seis meses. De forma paralela, al-Bashir traspasó la presidencia del National Congress Party (NCP) a Ahmed Harun (sobre quien pesaba una orden de detención de la CPI por crímenes cometidos en Darfur) en un intento de volver a postularse y ser elegido presidente en la conferencia del partido prevista para abril. Sin embargo, y pese a las medidas decretadas por el Gobierno, las protestas se mantuvieron e intensificaron en el país.

La presión popular finalmente generó que el día 11 de abril, el ministro de Defensa, Awad Mohamed Ahmed Ibn Ouf, anunciara el derrocamiento y detención de al-Bashir por parte del Ejército, informando de la creación de un Consejo Militar de Transición (TMC) que estaría en el poder durante dos años. A la par, se suspendió la Constitución y se declararon tres meses de estado de emergencia. Abdel Fattah Burhan fue nombrado presidente del TMC. La sociedad civil sudanesa rechazó la creación de la Junta Militar y reclamó la entrega del poder a la ciudadanía. La Unión Africana (UA) reaccionó dando al TMC 15 días para entregar el poder a la población bajo amenaza de expulsión del organismo, ampliándose posteriormente a tres meses. En ese momento se iniciaron conversaciones entre el TMC y la coalición opositora liderada por el movimiento Forces for Freedom and Change (FFC) con el fin de acordar un gobierno de transición compartido y liderado por civiles. La tensión se intensificó como consecuencia del incremento de la represión y ataques a los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo las fuerzas paramilitares Rapid Support Forces (RSF). El día 3 de junio se registraron los peores ataques represivos contra las personas manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, que dejaron un balance estimado, según el Comité Central de Médicos Sudaneses, de al menos 108 personas asesinadas y más de 500 heridas. La represión fue condenada por las Naciones Unidas y múltiples países, si bien el bloqueo de China y Rusia impidió una resolución condenatoria de la misma por parte del Consejo de Seguridad de la ONU el 4 de junio. EEUU condenó la represión y condicionó la retirada de Sudán como país “patrocinador de terrorismo” a la implementación de un acuerdo para compartir el poder con los civiles. Por su parte, la UA reaccionó el 6 de junio suspendiendo a Sudán del organismo y exigiendo la creación de un gobierno de transición encabezado por civiles.

Tras meses de negociaciones mediadas por la UA y Etiopía, plagadas de tensiones, movilizaciones, represión, presiones e incidentes, el 17 de julio el Consejo Militar (TMC) y la coalición opositora (FFC) lograron un acuerdo político para la **creación de un gobierno de transición**. Dicho acuerdo político fue consagrado como un acuerdo constitucional el 4 de agosto, y el día 17 se celebró la ceremonia formal de firma del mismo en Jartum. Los principales puntos del pacto eran los siguientes: el período de transición durará 39 meses antes de celebrar elecciones; el Consejo Soberano gobernante estará compuesto por 11 miembros (seis civiles y cinco militares) y estará dirigido por un general durante los primeros 21 meses, y por un civil durante los últimos 18 meses; el primer ministro será nominado por el FFC y confirmado por el Consejo Soberano; el gabinete de gobierno estará compuesto por no más de 20 ministros elegidos por el primer ministro, salvo las carteras de Interior y Defensa que serán elegidas por los miembros militares del Consejo Soberano; el cuerpo legislativo se formará dentro de los primeros 90 días a partir de la firma del acuerdo, cuya composición no superará las 300 personas, de las cuales, al menos el 40% de los escaños deberían asignarse a mujeres; la alianza del FFC tendrá el 67% de los escaños y el 33% restante será para otros partidos políticos no vinculados a al-Bashir; las Fuerzas Armadas de Sudán y el cuerpo paramilitar RSF son parte de la institución militar bajo el mando del jefe de las Fuerzas Armadas; **el Gobierno tendrá como prioridad durante los primeros seis meses del período de transición traer paz en las regiones en guerra: Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul**; el Gobierno de transición trabajará en la elaboración de reformas legales y económicas, así como en delinear una política exterior equilibrada.

El 21 de agosto el economista Abdalla Hamdok asumió el cargo como primer ministro del Gobierno de transición nominado por el FFC y el jefe general de TMC, Abdel-Fattah Burhan, asumió el cargo de presidente del Consejo Soberano. En una declaración conjunta del 21 de agosto, los países de la Troika – Reino Unido, EEUU y Noruega– dieron la bienvenida al nombramiento de Hamdok. De forma paralela, el 19 de agosto, el Tribunal de Justicia de Sudán inició juicio contra el expresidente al-Bashir, acusándolo de cargos de corrupción y posesión ilegal de fondos extranjeros, siendo sentenciado posteriormente a dos años de prisión. Bashir también enfrenta cargos relacionados con el golpe de estado de 1989 que lo llevó al poder y por organizar la violencia contra los manifestantes a principios de 2019. La composición del gabinete de

Tras tres décadas en el poder el presidente sudanés Omar al-Bashir fue derrocado debido a las fuertes movilizaciones populares en el país, abriendo un nuevo escenario de transición en Sudán

gobierno se realizó tratando de incluir a representantes de todas las regiones del país para obtener mayor legitimidad. Fruto de los avances en la conformación del Gobierno de transición civil, la UA, mediante su Consejo de Paz y Seguridad, levantó la suspensión del organismo a Sudán el 6 de septiembre. El día 22 del mismo mes, Hamdok anunció la creación de un comité de investigación independiente sobre la muerte de manifestantes prodemocráticos en junio, el cual debía presentar su informe después de tres meses. La Comisión de Derechos Humanos de Sudán cifró, a partir de los registros policiales, en un total de 85 las personas asesinadas en la represión entre el 3 y el 12 de junio en Jartum, mientras que el FFC mantenía que al menos 127 manifestantes fueron asesinados y cientos más heridos. Paralelamente, miles de sudaneses se manifestaron en varias ciudades el 21 de octubre instando a las nuevas autoridades del país a disolver el antiguo partido gobernante del derrocado Omar al-Bashir (NCP). A finales de noviembre el Gobierno arrestó y encarceló a Ali al-Haj, secretario general del partido, y aprobó un proyecto de ley para dismantelar el antiguo régimen, incluida la disolución del NCP. A su vez, las nuevas autoridades aprobaron reformas legales para aumentar la protección de las libertades civiles.

Por otro lado, durante el año, y sobre todo a partir de las negociaciones abiertas entre el TMC y los grupos civiles opositores al régimen para la conformación del gobierno de transición en el país, se dieron diferentes pasos para desescalar la violencia en las regiones en guerra y lograr la reapertura del proceso de paz.²⁶

En otros aspectos destacados, a finales de octubre el jefe de las fuerzas paramilitares RSF, Mohamed Hamdan “Hemedti”, anunció la retirada y regreso a Sudán de unos 10.000 soldados de la RSF de la campaña militar liderada por Arabia Saudita en Yemen, informando el Gobierno que únicamente quedaban desplegados 5.000 unidades. El primer ministro Hamdok fue designado por el bloque regional Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) para ocupar el cargo de presidente durante un año a partir de febrero de 2020, asumiendo el cargo que Etiopía ocupó desde 2010. Finalmente resaltar que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU en Sudán alertó a finales de año que 9,3 millones de personas en el país, es decir, casi una de cada cuatro, necesitarán asistencia en 2020, de los cuales cinco millones necesitarán asistencia humanitaria, entre ellos 2,4 millones de menores que padecen desnutrición aguda.²⁷

26. Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2020.

27. OCHA, SUDAN. Situation Report. Last updated: 12 Dec 2019.

Norte de África - Magreb

Argelia	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak

Síntesis:

En la presidencia de Argelia sin contestación desde 1999, Abdelaziz Bouteflika se había mantenido en el cargo a pesar de padecer una grave enfermedad que le había supuesto estar al margen de la escena pública desde 2013. Una opaca coalición de figuras políticas y militares ha mantenido las riendas del poder en las sombras, identificada popularmente entre la población argelina como “le pouvoir”. En 2019 el anuncio de que Bouteflika (82 años) se presentaría a un quinto mandato alentó masivas movilizaciones populares de una intensidad no registrada desde la independencia del país en 1962. La presión popular forzó su dimisión y, desde entonces, el poder militar ha intentado controlar la transición y ha promovido medidas como la persecución y arresto de algunas figuras asociadas al antiguo régimen. El movimiento de protesta pacífico Hirak ha persistido en sus movilizaciones contra la corrupción, la influencia del poder militar sobre la política y contra la clase dirigente en general, insistiendo en sus demandas de cambio a un sistema genuinamente democrático capaz de impulsar reformas políticas, sociales y económicas.

Durante 2019 Argelia fue escenario de una profunda convulsión y de movilizaciones populares masivas y persistentes contra el Gobierno y la cúpula del poder a unos niveles no vistos desde la independencia del país en 1962. **Las protestas se activaron en febrero, cuando a pesar de su frágil salud y escasas apariciones públicas en los últimos años, el presidente Abdelaziz Bouteflika (82 años) anunció que se presentaría a un quinto mandato** en las elecciones previstas para abril. A principios de marzo las protestas congregaron a unas 800.000 personas en la capital, Argel, y a dos millones más en distintas localidades del país. En los meses siguientes continuaron registrándose multitudinarias manifestaciones, principalmente los viernes, en el marco de un movimiento pacífico (Hirak) movilizado bajo el mensaje de rechazo a un quinto mandato. Bouteflika intentó apaciguar el clamor popular contra su reelección prometiendo que, de resultar vencedor, impulsaría una serie de medidas, entre ellas una conferencia nacional inclusiva independiente para adoptar reformas constitucionales, políticas y económicas; un referéndum constitucional y un mecanismo independiente para organizar nuevos comicios presidenciales anticipados. Sin embargo, estos anuncios no disuadieron las movilizaciones. Así, a mediados de marzo el mandatario decidió retirar su candidatura y postergar las elecciones. Poco más tarde,

El anuncio de que Abdelaziz Bouteflika se presentaría a un quinto mandato motivó masivas movilizaciones pacíficas en Argelia contra el Gobierno y la cúpula de poder en la sombra, desencadenando la dimisión del mandatario

el 2 de abril, se vio obligado a renunciar –tras dos décadas en el cargo–, después de que el Ejército liderado por el poderoso jefe del Estado Mayor, Gaïd Salah, y el partido oficialista FLN activaran un mecanismo constitucional para declararlo no apto para el puesto. Pese a la dimisión de Bouteflika y a la creciente represión, las protestas continuaron congregando a decenas de miles de personas que exigieron el desmantelamiento del viejo régimen y denunciaron los intentos del poder militar por intentar controlar la transición. El hasta entonces líder de la Cámara Alta del Parlamento, Abdelbaker Bensalah, fue designado presidente interino hasta la celebración de elecciones en julio, pero diversos sectores sociales y políticos de la oposición –desde islamistas a grupos de centroizquierda– anunciaron un boicot a los comicios y exigieron la conformación de una comisión electoral independiente, entre otras demandas. Amplios sectores expresaron su rechazo a cualquier iniciativa promovida por Bensalah y otros actores vinculados al antiguo régimen, incluyendo una propuesta de diálogo nacional que fue recibida con escepticismo y como un intento por cooptar a partidos y asociaciones críticas. Algunos análisis resaltaron que las autoridades argelinas intentaban aprovechar la ausencia de un liderazgo claro en las movilizaciones y la no articulación de un pliego común de demandas. Al mismo tiempo, sin embargo, se destacó el carácter pacífico de las movilizaciones y la unidad en el llamamiento a un cambio de régimen. **En este contexto, y en un reflejo de las pugnas internas en el seno del antiguo régimen, el Ejército y el Gobierno interino promovieron la detención de numerosas personas del entorno de Bouteflika**, entre ellas su hermano, Said Bouteflika –considerado como una de las principales figuras en el poder en la sombra en los últimos años–, el ex jefe de inteligencia Mohamed Mediene, dos ex primeros ministros y varios parlamentarios, entre otras personas.

En los meses siguientes las autoridades argelinas también intensificaron la represión a través de la dispersión de protestas de carácter pacífico, obstáculos para el arribo de manifestantes a las periódicas protestas en la capital, el bloqueo de reuniones de grupos políticos y de derechos humanos y arrestos de voces críticas, entre ellas un activista bereber que murió en prisión en mayo mientras realizaba una huelga de hambre. Se informó de la muerte de otras dos personas vinculadas a las protestas, aunque las circunstancias no estaban claras, así como de cerca de 200 personas heridas. Según la ONG Human Rights Watch **centenares de personas fueron detenidas en 2019 desde el inicio de las movilizaciones, algunas de ellas liberadas sin cargos, pero otras fueron encausadas por ofensa o conspiración contra instituciones del Estado, debilitamiento de la autoridad o moral del Ejército, entre otros delitos**. Otras formas de represión e intimidación incluyeron cierres de webs, detenciones de periodistas y de activistas pro-derechos humanos. Ante la imposibilidad de celebrar

elecciones en julio, el Ejecutivo interino de Bensalah intentó ofrecer algunas concesiones e insistió en la puesta en marcha un diálogo nacional entre el Gobierno y la sociedad civil. Ello, en un contexto en el que se habían articulado diferentes iniciativas de sectores de la sociedad civil y organizaciones afines a partidos políticos que intentaron hacer propuestas y delinear hojas de ruta para una transición. Sectores de la oposición, incluyendo seculares e islamistas y del movimiento estudiantil, mantuvieron su desconfianza y rechazo a participar en los paneles preparatorios del diálogo. Las demandas de las movilizaciones continuaron centradas en la marcha de Bensalah, en el fin del poder de facto de los militares liderados por Gaïd Salah y en el establecimiento de una asamblea constituyente para reformar radicalmente el sistema político argelino. En septiembre, el informe final del comité sobre el diálogo promovido por el Gobierno recomendó la celebración de elecciones presidenciales, que fueron programadas para finales de año. No obstante, diversas fuerzas políticas y sectores sociales hicieron llamamientos al boicot, que se intensificaron tras conocerse que todos los candidatos eran figuras vinculadas al antiguo régimen. Los comicios se celebraron el 12 de diciembre y en ellos resultó electo el ex primer ministro Abdelmadjid Tebboune, con el 58% de los votos. Oficialmente se informó de una participación del 39% del electorado, pero observadores aseguraron que había sido de un 15%. Las elecciones tuvieron lugar en un clima de protestas y de nuevas detenciones de centenares de manifestantes. Al finalizar el año se anunció la muerte del general Gaïd Salah a causa de un ataque al corazón, hecho que añadió incertidumbre al futuro escenario político argelino.

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

El Salvador	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)

Síntesis:

Tras el fin de un conflicto armado (1980-1992), que dejó un balance de alrededor de 75.000 muertes, la situación en El Salvador se ha caracterizado por altos niveles de pobreza y desigualdad, por la proliferación de pandillas juveniles y otras estructuras de crimen organizado, así como por unas altas tasas de homicidios que han convertido al país en uno de los más violentos de la región y del mundo. Durante el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) se logró una tregua con las pandillas que comportó una reducción significativa en la tasa de homicidios, pero la llegada a

la presidencia de Sánchez Cerén en 2015 comportó un endurecimiento de las políticas de seguridad y un sustancial incremento en los niveles de violencia, generando ello una crisis de desprotección y de desplazamiento forzado de miles de personas.

En consonancia con la tendencia observada en los últimos años, la tasa de homicidios en 2019 se redujo sustancialmente respecto de la del año anterior. Tras alcanzar un máximo histórico en 2015 (103 homicidios cada 100.000 habitantes, tasa que convirtió a El Salvador en el país con mayores índices de violencia del planeta), la tasa de homicidios se ha reducido de manera ininterrumpida –81 en 2016, 60 en 2017, 51 en 2018 y 35 en 2019. **Según datos oficiales, en 2019 se registraron 2.383 homicidios, un 29% menos que el año anterior.** El descenso en dicha tasa fue especialmente notable a partir de junio, tras la asunción del nuevo presidente, Nayib Bukele, antiguo alcalde de San Salvador que ganó en primera vuelta las elecciones presidenciales del mes de febrero, siendo el primero en la historia reciente del país en no concurrir con las siglas de ARENA o el FMLN. Según algunos estudios, el número de homicidios diarios tras su asunción del cargo se redujo de nueve a cuatro. En este sentido, el Gobierno señaló que el mes de agosto había sido el menos violento del siglo XXI, mientras que el mes de octubre lo había sido desde el fin de la guerra civil en 1992. Si bien algunos expertos en seguridad sostienen que el periodo de tiempo es muy breve como para establecer correlación alguna entre el descenso en el número de homicidios y las políticas del nuevo Gobierno, y que el número de homicidios ya había disminuido sustancialmente en el primer semestre del año (un 13%, según algunos datos), la Administración de Bukele sostiene que es evidente que su estrategia contra el crimen y la inseguridad ciudadana, denominada Plan Control Territorial, estaba dando sus frutos.

Tras asumir el cargo, Bukele descartó públicamente cualquier tipo de acuerdo o tregua con las maras y, además, anunció el endurecimiento de las medidas contra estas. Poco después, recibió numerosas críticas por haber nombrado como jefe de la Policía a una persona que había sido acusada anteriormente de ordenar ejecuciones extrajudiciales. Según el propio Gobierno, el Plan Control Territorial quiere incidir especialmente en el control de los líderes mareros encarcelados (minimizando sus comunicaciones con el exterior), el corte de la financiación de las maras, y el fortalecimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De este modo, un mes después del inicio de su mandato, Bukele anunció el reclutamiento de 3.000 nuevos soldados, así como la mejora y renovación del equipamiento tecnológico de las Fuerzas Armadas y la Policía. Para tratar de contrarrestar las críticas que algunas de sus actuaciones generaron entre organizaciones de derechos humanos, el Gobierno anunció en la segunda mitad del año la aceptación de una visita por parte de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la puesta en funcionamiento de la Comisión Internacional

contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que tendrá el respaldo de la OEA y Naciones Unidas y tendrá como jefe al guatemalteco Ronalht Ochaeta.

Haití	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, BINUH, bandas armadas

Síntesis:

La actual crisis que atraviesa el país, con movilizaciones masivas y numerosos episodios de violencia registrados en 2019, está vinculada con las acusaciones de corrupción, fraude electoral y negligencia en la acción de gobierno del Presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, la situación de parálisis institucional, fragilidad económica y crisis sociopolítica empezó a agudizarse tras la salida forzada del país del ex presidente Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país. Desde entonces, el despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional y posteriormente de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSTAH, sustituida por MINUJUSTH en 2017 y por BINUH en 2019) y la mayor implicación y coordinación de la comunidad internacional en la normalización del país han propiciado avances en determinados ámbitos de la gobernabilidad del país, pero no han conseguido lograr una estabilidad política, social y económica, ni reducir los altos niveles de corrupción, pobreza, exclusión social y tasas de delincuencia, ni eliminar completamente el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas del país.

Si bien a finales de 2018 ya se habían producido protestas antigubernamentales significativas, la crisis política, institucional, social y económica que atraviesa el país alcanzó su punto más álgido durante el 2019. Como consecuencia de las protestas prácticamente continuas que se registraron durante todo el año, con enfrentamientos frecuentes entre manifestantes y Policía, más de 70 personas habían muerto y más de un centenar habían resultado heridas hasta principios de noviembre. En paralelo, se incrementó de manera notable la violencia vinculada a grupos armados que operan en determinados barrios de Puerto Príncipe y otras ciudades. Además, el empeoramiento de la situación económica agudizó la crisis humanitaria que padece el país. En noviembre, **Naciones Unidas alertó de que más de 3,7 millones de personas necesitaban ayuda alimentaria de manera urgente.** Por su parte, la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos advirtió sobre el riesgo de muerte por inanición de los más de 11.000 reos en el país. A finales del mes de noviembre, una delegación del FMI que visitó el país señaló que Haití se enfrentaba a una crisis económica

Naciones Unidas declaró a principios de noviembre que solamente desde el 15 de septiembre como mínimo 42 personas habían muerto y otras 86 habían resultado heridas

sin precedentes de consecuencias devastadoras y señaló que si persistía la crisis social, existía el riesgo de una recesión económica de más del 1,9% del PIB en 2019. Ante esta situación, a mediados de noviembre el Gobierno se vio obligado a pedir ayuda a la comunidad internacional para paliar la crisis humanitaria que padece el país.

Si bien entre octubre y noviembre de 2018 ya se habían registrado importantes protestas en las que 12 personas habían muerto y más de 50 resultado heridas, las protestas se tornaron multitudinarias y continuas a partir de principios de febrero de 2019, después de que trascendiera un informe del que se desprendía que el Gobierno y el propio presidente, Jovenel Moïse, podrían estar involucrados en el desvío y malversación de importantes cantidades de dinero (más de 2.000 millones de dólares) del fondo PetroCaribe, que permitía el acceso a petróleo venezolano a bajos tipos de interés a varios países de la región. Según varios medios, la agudización de la crisis económica y la creciente escasez de combustible y otros bienes, o la percepción de que el Gobierno incumplía sus promesas electorales, también contribuyeron decisivamente a que miles de personas, convocadas por la oposición, salieran a la calle para exigir la dimisión del presidente. Ya en el mes de febrero 26 personas murieron en el marco de los enfrentamientos y los actos de pillaje que se registraron. A pesar de que Moïse anunció la creación de un comité para un diálogo nacional a finales de febrero, de que el Gobierno presentó ya a mediados del mismo mes un paquete de medidas para atajar la crisis económica y de que Moïse destituyó en mayo al primer ministro, Jean-Henry Céant, las protestas y las peticiones de dimisión continuaron a lo largo del año, con continuos bloqueos, actos de vandalismo, y enfrentamientos entre manifestantes y Policía. En un contexto de creciente escasez de productos básicos a medida que avanzaba el año, las protestas incrementaron especialmente de intensidad a mediados de septiembre.

El 1 de noviembre, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró que solamente desde el 15 de septiembre como mínimo 42 personas habían muerto y otras 86 habían resultado heridas. En los meses de noviembre y diciembre las protestas fueron algo menos concurridas, y las escuelas y los comercios retomaron su actividad después de prácticamente dos meses de parálisis, pero siguieron registrándose abusos policiales –según la oposición– y episodios significativos de violencia y actos de vandalismo y pillaje en los que varias personas resultaron heridas y cuantioso mobiliario urbano dañado.

La crisis social, económica y humanitaria se vio además afectada por la tensión entre el Gobierno y la oposición y por la situación de parálisis institucional que se produjo durante todo el año. **Solamente en 2019, Moïse nombró**

a tres primeros ministros –el tercero de ellos, Fritz-Willian Michel, a finales de año todavía no había sido ratificado en el cargo, después de que trascendiera un intento de sobornar a congresistas para que votaran a su favor– y tuvo que hacer frente a una moción de censura que finalmente no prosperó por pocos votos. Finalmente, cabe destacar que durante el año también se incrementó de manera notable la violencia asociada a bandas delictivas que operan en varias ciudades del país. Según algunos análisis, dichos grupos son utilizados tanto por el Gobierno como por determinados sectores de la oposición para amedrentar a la disidencia o bien para alentar disturbios e inestabilidad. De hecho, durante el año trascendió que algunos oficiales del Gobierno y policías habían estado involucrados en una masacre que se produjo en noviembre de 2018 en el barrio de La Saline (Puerto Príncipe) en la que como mínimo 26 personas fueron asesinadas. Aunque no trascendió el número de víctimas mortales asociadas a este tipo de actores, los enfrentamientos entre bandas rivales fueron constantes y frecuentes durante todo el año. La Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos denunció que en 2019 más de 40 policías habían sido asesinados, mientras que en el 2018 fueron 17.

Honduras	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)

Síntesis:

La situación política y social del país se caracteriza principalmente por las altas tasas de homicidios de Honduras, que en los últimos años suele considerarse entre los países más violentos del mundo, así como por la polarización social y política que se produjo tras la llegada al poder de Manuel Zelaya en 2006. Las críticas de amplios sectores de la población por su intención de convocar un referéndum para reformar la Constitución y poder presentarse así a un nuevo mandato o bien por su relación con los Gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en especial con Venezuela, desembocaron en un golpe de Estado en 2009 que provocó la condena de la comunidad internacional, la suspensión de su membresía en la OEA y el exilio de Zelaya, que le impidió participar en las elecciones presidenciales de 2009. A pesar de que Zelaya pudo regresar al país en 2011, desde entonces ha persistido una importante polarización política y social en el país. La actual fase de la crisis, que ha desembocado en movilizaciones antigubernamentales masivas y en graves episodios de violencia, se agudizó tras los comicios presidenciales de 2017 entre el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, y Salvador Nasralla, un candidato muy cercano políticamente a Zelaya, en los que Hernández, finalmente reelecto por un estrecho margen de votos, fue acusado de fraude electoral.

Siguieron registrándose protestas antigubernamentales durante todo el año, aunque de una intensidad menor

a las del año anterior, pero según los datos disponibles a principios de 2020 la tasa de homicidios se incrementó ligeramente, después de varios años en que esta se había reducido paulatinamente. Según datos oficiales, que coinciden bastante con los ofrecidos por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, en 2019 se registraron 3.996 homicidios, un 7,1% más que año anterior. Estos datos rompen la tendencia a la baja que se observaba desde el 2014, año en el que Honduras fue el país con una tasa de homicidios más alta del mundo (87 homicidios cada 100.000 habitantes). En 2017, por ejemplo, estos se redujeron en un 26% respecto del año 2016, mientras que en 2018 se redujeron otro 6% respecto del año anterior. Sin embargo, Honduras sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Según el Estudio Global de Homicidios 2019 publicado por Naciones Unidas –que utiliza datos del 2017– Honduras tenía la tercera tasa más alta del mundo por detrás de El Salvador y Jamaica. En 2019, los departamentos con tasas de homicidios más altas fueron Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Atlántida. El 55% de las personas asesinadas eran menores de 30 años. Según el Observatorio de la Violencia, en 2019 también se incrementaron el número de masacres (62 a lo largo de todo el año, una cifra significativamente superior a las 33 que se registraron en 2018) y de feminicidios (319 mujeres asesinadas entre enero y octubre, con un total de 5.555 desde 2006). La comisionada de derechos humanos denunció que el 90% de los feminicidios queda impune.

Durante todo el año, de manera prácticamente ininterrumpida, se produjeron protestas contra el presidente Hernández. Si bien no trascendieron cifras sobre personas fallecidas, heridas o detenidas en el marco de las mencionadas protestas, se estima que estas fueron de menor intensidad que las del año pasado, en el que, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 31 personas murieron, más de 1.600 fueron detenidas e incluso se impuso temporalmente el estado de emergencia. En el mes de enero, coincidiendo con el aniversario de la toma de posesión del cargo de Hernández, miles de personas se manifestaron en todo el país exigiendo su renuncia. Sin embargo, las protestas se incrementaron notablemente a partir del mes de abril, después de que el Gobierno aprobara dos decretos de reforma del sistema de sanidad y educación que, según la oposición, abrían la puerta a la privatización de servicios y al despido masivo de personal. A pesar de que el 2 de junio el Gobierno revocó dichos decretos, las protestas, enfrentamientos y disturbios (se quemaron varios edificios en la capital) continuaron. **A finales de junio, el Ejecutivo desplegó a las Fuerzas Armadas en todo el país de manera indefinida para auxiliar a la Policía en el mantenimiento del orden público.** Las protestas volvieron a escalar en el mes de octubre, poco después de que un tribunal federal de EEUU condenara al hermano del presidente por narcotráfico y otros cargos. En el mes de agosto, este mismo tribunal había acusado a Hernández de haber recibido 1,5 millones de

dólares provenientes del narcotráfico para su campaña electoral de los comicios presidenciales de 2013. Ante tal escenario, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país y los principales líderes de la oposición, incluyendo al ex presidente Manuel Zelaya –derrocado en golpe de Estado– y Salvador Nasralla –rival de Hernández en las elecciones presidenciales de 2017 que desataron la crisis política que vive el país actualmente– formaron una coalición para forzar la dimisión del presidente. Otro de los factores que durante el año provocó tensión entre el Gobierno y la oposición fue el intento de reforma del código penal, que la oposición considera podría conllevar un endurecimiento de penas para opositores al Gobierno. A pesar de estos hechos, también cabe destacar que durante el año se llevaron a cabo numerosas negociaciones para implementar los acuerdos alcanzados durante el llamado Diálogo Nacional auspiciado por Naciones Unidas, y que finalizó en diciembre de 2018. Cabe destacar especialmente los avances en materia de reforma electoral –composición de la Corte Suprema Electoral, establecimiento de una segunda vuelta en las elecciones, entre otros ámbitos–, que contaron con el apoyo técnico de la OEA.

México	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, cárteles, grupos armados de oposición

Síntesis:

Desde el año 2006, en el que el presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra al narcotráfico”, tanto los niveles de violencia como las violaciones de derechos humanos en todo el país se incrementaron sustancialmente hasta convertir al país en uno de los que concentra más homicidios en todo el mundo. Desde entonces, se han multiplicado el número de estructuras de crimen organizado vinculadas principalmente al narcotráfico, que en algunas partes del país disputan al Estado el monopolio de la violencia. Según algunas estimaciones, a finales de 2017 la “guerra contra el narcotráfico” había provocado la muerte de más de 150.000 personas y la desaparición de más de 30.000. Además, en México existen algunos movimientos insurgentes en estados como Guerrero y Oaxaca –entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. En el estado de Chiapas, tras el breve alzamiento armado del EZLN en 1994, se han mantenido ciertos niveles de conflictividad en las comunidades zapatistas.

Según los datos hechos públicos por la Secretaría de Seguridad Pública a principios de 2020, **el número de homicidios en 2019 fue de 35.588, superando ligeramente al del año anterior (34.655) y convirtiéndose así en el año más violento desde que se tienen registros públicos sobre homicidios.** Estos datos confirman una tendencia al alza en los últimos años en cuanto al número de homicidios, que se incrementaron de manera drástica desde que a finales de 2006 el ex presidente Felipe Calderón iniciara la llamada “guerra

contra el narcotráfico”. Según datos oficiales, desde diciembre de 2006 hasta abril de 2018 se habían registrado 250.547 homicidios en México, de modo que a finales de 2019 el número total de homicidios probablemente habría superado los 300.000. La tasa de homicidios en 2019 (27 asesinatos cada 100.000 habitantes) también superó a la que se había incluido en el Estudio Global de Homicidios 2019 de Naciones Unidas (24,8, con datos referentes al 2017). Según este informe México tendría la 12ª tasa de homicidios más alta del mundo (24,8, homicidios cada 100.000 habitantes cuando en tiempos de Calderón era inferior a 10), por encima de países como Filipinas o Afganistán. Cabe señalar que 10 de las 11 tasas de homicidios superiores a México (todas excepto Sudáfrica) eran de países de América Latina y el Caribe.

Los datos publicados por el Gobierno, que coinciden en general con los publicados por centros como la organización Causa en Común, también identificaron un incremento en **otras formas de violencia, como los feminicidios (1.006 en 2019, 912 el año anterior), secuestros (de 1.559 en 2018 a 1.614 en 2019), los actos de extorsión (8.523, un 29% más) o la trata de personas (un 12% más que el año anterior).** En números absolutos, los estados con mayor número de homicidios fueron Guanajuato, México, Michoacán, Jalisco y Baja California, mientras que en términos relativos lo fueron Colima (107 homicidios cada 100.000 habitantes), Baja California, Chihuahua, Morelos y Guanajuato. En algunos estados, el incremento de los homicidios respecto del año anterior fue muy notable, como en Sonora (un 57%), Hidalgo o Aguascalientes (un 32%). A nivel nacional, la tasa de homicidios se incrementó de manera notable en los primeros seis meses del año y se estabilizó (aunque sin disminuir) en el segundo semestre.

En enero de 2020 el Gobierno también hizo público un informe según el cual en México habían desaparecido 61.637 personas en la llamada “guerra contra el narcotráfico” desde el año 2006, una cifra significativamente superior a los aproximadamente 40.000 casos que el Ejecutivo había reconocido en 2018. Según el Gobierno, solamente en ese año unas 9.000 personas desaparecieron. El informe, elaborado a partir de datos recopilados por la Fiscalía, señala que la mayor parte de las desapariciones se concentraron en 10 estados, particularmente en los de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Durante el primer año de mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se descubrieron unas 800 fosas clandestinas con más de 1.120 cadáveres, lo que eleva la cifra a 3.631 desde el año 2006.

López Obrador inició el año señalando que su Plan Nacional de Paz y Seguridad se centraría en atajar las causas de la violencia, poniendo el acento en temas de educación, sanidad o empleo, y distanciándose del enfoque estrictamente securitario de sus antecesores en el cargo. Sin embargo, a medida que avanzó el año

el debate se centró en la creación y despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de unos 70.000 efectivos conformado principalmente por agentes del Ejército y la Marina, y dirigido por un ex general. Este hecho comportó numerosas críticas al Gobierno por parte de organizaciones de la sociedad civil que consideran que la creación de la Guardia Nacional comporta la militarización de la seguridad ciudadana en México. Tras varios debates y trámites parlamentarios para garantizar que las Fuerzas Armadas puedan prestar servicio en cuestiones de seguridad pública, la Guardia Nacional inició sus operaciones en mayo y fue desplegándose por todo el territorio a lo largo del año. A pesar de ello, durante 2019 se incrementaron los enfrentamientos tanto entre cárteles de la droga como entre estos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como prueba de ello, hasta el mes de noviembre, 382 policías habían fallecido en el marco de dichos enfrentamientos. Durante el año también se registraron numerosas masacres y episodios de violencia de alta intensidad, la mayoría vinculada a la rivalidad entre grupos por el control de mercados y rutas de narcotráfico, robo de combustible –una de las prioridades del Gobierno durante el año, que desplegó miles de efectivos militares para proteger oleoductos–, extorsión, secuestro o incluso el sector del aguacate. Los enfrentamientos estuvieron protagonizados por decenas de grupos, entre los que destacaron el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa. Algunos de los episodios que generaron mayor atención mediática durante el año fueron el asesinato de 19 personas en agosto por parte del CJNG en Uruapán como respuesta al despliegue de la Guardia Nacional en la región; el asesinato de 23 personas en Guanajuato entre el 7 y el 9 de junio por el control del mercado del petróleo; el asesinato de 28 personas a finales de agosto en el estado de Veracruz por una venganza entre grupos de crimen organizado; el asesinato de 13 policías por parte del CJNG el 14 de octubre en Michoacán; la muerte de 14 miembros de un cártel el 16 de octubre en el estado de Guerrero; o el asesinato de 26 personas en Ciudad Juárez a principios de noviembre por parte del grupo Mexicles, en un episodio de violencia en el que 35 vehículos fueron calcinados y se registraron varias amenazas de bombas. Sin embargo, uno de los episodios que tuvo mayores repercusiones políticas durante el año fue la detención por parte de la Guardia Nacional de Ovidio Guzmán –hijo del “Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa– a mediados de octubre en Culiacán, capital de Sinaloa. Después de que el Cártel de Sinaloa desplegara decenas de efectivos en la ciudad y que ocho personas fallecieran por los enfrentamientos entre estos y las fuerzas de seguridad del Estado, el Gobierno decidió liberar a Ovidio Guzmán en prevención de una mayor escalada de la violencia. También cabe destacar que durante todo el año siguieron produciéndose ataques selectivos contra líderes sociales o periodistas.

En México se registraron 35.588 homicidios en 2019, convirtiéndose así en el año más violento desde que se tienen registros públicos sobre asesinatos

Nicaragua	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En abril de 2018, a raíz del intento por parte del Gobierno de reformar el sistema de la seguridad social, se iniciaron una serie de protestas en todo el país que sumieron al país en la peor crisis sociopolítica de las últimas décadas, en la que cientos de personas murieron, miles resultaron heridas y decenas de miles de personas abandonaron el país. Ante la preocupación nacional e internacional que generaron las protestas, la represión de las fuerzas de seguridad del Estado y los enfrentamientos entre partidarios y opositores del Gobierno, en mayo se inició el llamado Diálogo Nacional –con la participación del Gobierno y varios sectores de la oposición y con la facilitación de la Iglesia Católica–, pero éste se vio interrumpido por las dinámicas políticas y de violencia de la crisis y no logró una salida negociada al conflicto.

A pesar de que disminuyó significativamente la intensidad de la violencia asociada a la crisis política y social que se inició en abril de 2018, durante todo el año se produjeron de manera prácticamente ininterrumpida protestas antigubernamentales, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad o colectivos pro-gubernamentales armados, así como constantes denuncias sobre violaciones masivas de los derechos humanos. Las cifras sobre el impacto y la magnitud de la crisis difieren sensiblemente según las fuentes. Así, a

principios de octubre la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos declaró que entre **abril de 2018 y finales de septiembre de 2019 habían muerto 651 personas, 4.922 habían resultado heridas, 516 habían sido secuestradas y 853 permanecían desaparecidas**. Si se comparan estos datos con los ofrecidos al finalizar el 2018, se puede inferir que según esta asociación en los nueve primeros meses del año 2019 habrían muerto unas 90 personas y que otras 344 habrían resultado heridas. Estas

cifras son algo superiores a las ofrecidas por otras organizaciones, como la Articulación de Movimientos Sociales (perteneciente a la plataforma opositora Unidad Nacional Azul y Blanco), según la cual entre enero y julio 24 personas opositoras habrían sido asesinadas, especialmente en el departamento de Jinotega. Sin embargo, estas cifras difieren significativamente de las ofrecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo según el cual, entre abril de 2018 y septiembre de 2019, 328 personas murieron, tres estaban desaparecidas, 130 permanecían encarceladas y más de 88.000 habían abandonado el país. Según la CIDH, la gran mayoría de dichas cifras se registraron en 2018. Sin embargo, el Gobierno reconocía solamente la muerte de 199 personas. Por otra parte, organizaciones y organismos de derechos humanos –como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Consejo

de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional o varias organizaciones nicaragüenses—denunciaron en varios momentos del año violaciones continuas y masivas de derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, detenciones arbitrarias, hostigamiento y agresiones a colectivos opositores, desapariciones, condenas desproporcionadas, falta de garantías procesales en los juicios, ataques a colectivos específicos, como estudiantes, periodistas o personas religiosas, etc. A finales de año, por ejemplo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos declaró haber recibido más de 3.000 denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas o alentadas por el Estado. En diciembre, 70 organizaciones de la sociedad civil denunciaron la violación sistemática de derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, en la mayor parte de ocasiones el Gobierno consideró que tales informaciones y acusaciones eran sesgadas o estaban motivadas políticamente. Así, el Ejecutivo rechazó la resolución condenatoria del Consejo de Derechos Humanos emitida en abril o el informe presentado por parte del mismo organismo en el que presentaban 250 recomendaciones al Gobierno, del mismo modo que negó la entrada a personal de la OEA para tratar de conocer la situación del país de primera mano. Por su parte, el Gobierno negó buena parte de estas acusaciones y a su vez declaró estar recabando pruebas sobre los crímenes cometidos por determinados manifestantes durante las protestas que podría elevar al Tribunal Internacional de Justicia.

Bolivia atravesó la crisis política y social más intensa de los últimos tiempos, que se saldó con la muerte de 35 personas, centenares de personas heridas y el asilo político de Evo Morales

América del Sur

Bolivia	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Aunque la renuncia y salida del país del presidente Evo Morales a finales de 2019 se precipitaron tras las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales celebradas ese mismo año, el país está inmerso en una situación de polarización política y social prácticamente desde que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se exiliara en EEUU en 2003 tras la represión de unas protestas antigubernamentales en las que más de 100 personas murieron. Tras un periodo de incertidumbre en el que dos presidentes asumieron el poder de forma interina, Evo Morales ganó las elecciones en diciembre de 2005, convirtiéndose en el primer mandatario indígena del país. Sin embargo, su acción de Gobierno, especialmente la reforma agraria, la nacionalización de los hidrocarburos o la aprobación de una nueva Constitución, se vio obstaculizada por la férrea oposición por parte de varios partidos políticos y de las regiones orientales del país que, lideradas por el

departamento de Santa Cruz, exigen mayor autonomía. En paralelo a lucha política entre el Gobierno y la oposición, en los últimos años Bolivia ha enfrentado uno de los mayores índices de conflictividad social de todo el continente, con movilizaciones de distinto signo vinculadas a demandas laborales sectoriales, a la actividad de las empresas extractivas o a los derechos de los pueblos indígenas. La crisis política se agudizó especialmente en 2016 después de que el oficialismo perdiera por estrecho margen de votos —la primera derrota electoral de Evo Morales— un referéndum de reforma constitucional para permitir o no a Evo Morales una nueva reelección y concurrir así a las elecciones presidenciales de 2019.

Bolivia atravesó la crisis política y social más intensa de los últimos tiempos, que se saldó con la muerte de 35 personas, centenares de personas heridas y el asilo político en México del presidente, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García Linera.

La crisis se inició poco después de que se hicieran públicos los resultados preliminares de las elecciones presidenciales, en los que Morales aventajaba a su contrincante, Carlos Mesa, por un margen que obligaba a que hubiera segunda vuelta en los comicios. Sin embargo, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) detuviera el escrutinio durante 24 horas, la distancia que separaba a ambos contendientes se había ampliado significativamente y superaba, por escasas décimas, el margen necesario como para proclamar a Evo Morales vencedor de los comicios en primera vuelta. La OEA declaró

que las explicaciones del TSE sobre los motivos que habían llevado a interrumpir el escrutinio fueron confusas e insuficientes, mientras que tanto Carlos Mesa como la oposición en su conjunto y algunos gobiernos denunciaron fraude electoral. La OEA y la UE pidieron una repetición de los comicios. Las protestas masivas y los enfrentamientos entre partidarios y detractores del Gobierno se iniciaron en varias provincias del país al día siguiente de las elecciones, incluso antes de que el TSE diera como vencedor oficial de las elecciones a Evo Morales, el día 24 de octubre. Las protestas, enfrentamientos, disturbios, quema de edificios públicos, cortes de carretera y bloqueo de ciudades se prolongaron y se intensificaron en las semanas siguientes, especialmente en departamentos como Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija o Sucre, con un saldo final de algunas personas muertas y muchas otras heridas. La OEA inició una auditoría del proceso electoral y sus resultados el 31 de octubre y presentó su informe preliminar el día 10 de noviembre, identificando graves irregularidades e instando al Gobierno a repetir las elecciones. Morales aceptó tal recomendación, pero a las pocas horas, tras la presión por parte del jefe de las Fuerzas Armadas, se exilió en México junto con su vicepresidente. Dos días más tarde, en ausencia de los diputados oficialistas del MAS, la Asamblea Legislativa designó a la hasta entonces vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez, como presidenta interina del país. Esta declaró su intención de convocar nuevas elecciones y de pacificar el país. Tras esta decisión y las declaraciones de Evo Morales desde México

calificando de golpe de Estado su salida del poder, se iniciaron movilizaciones masivas por parte de seguidores del antiguo presidente en varias partes del país. Al día siguiente de que Añez aprobara un decreto por el que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal en la contención de las protestas, nueve manifestantes murieron en Cochabamba y otros 10 en El Alto, todos ellos por heridas de bala. Finalmente, ante las críticas a tal decreto y la magnitud que estaban tomando las protestas, el decreto fue derogado a finales de noviembre. **La Defensoría del Pueblo señaló que desde el inicio de la crisis, pero en especial tras la toma de posesión del nuevo Gobierno, habían muerto 35 personas y otros varios centenares habían resultado heridas.** En el plano político, a finales de noviembre el Parlamento aprobó una ley –con el apoyo del partido del anterior Gobierno, el MAS– que anulaba las elecciones del mes de octubre, estipulaba un periodo de 120 días para la convocatoria de nuevos comicios y conformaba una nueva autoridad electoral para tal fin. En paralelo, el nuevo Gobierno interino presentó una querrela criminal contra Morales ante la Fiscalía por sedición y terrorismo por sus presuntos mensajes de incitación a la violencia. Además, también trascendió que el nuevo Ejecutivo tendría la intención de acusar a Evo Morales ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad por incitar a colectivos sindicales a cercar determinadas ciudades y evitar la llegada de alimentos. Por su parte, Morales también acusó de tales crímenes al Gobierno interino por incitar a las Fuerzas Armadas a reprimir las protestas de manera violenta. A principios de diciembre la OEA presentó un informe más detallado sobre lo que consideró irregularidades y manipulaciones graves en el proceso de recuento de votos en las elecciones de octubre, concluyendo que un análisis pormenorizado de la evolución del escrutinio hacía estadísticamente improbable la victoria de Morales en la primera vuelta.

Chile	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Si bien el detonante de las masivas movilizaciones y numerosos episodios de violencia que se registraron en 2019 fue el incremento del precio del metro, tanto analistas como entidades que convocaron protestas sostienen que las causas reales del descontento social que existe en el país tienen que ver con el modelo político y económico que ha regido en el país en las últimas décadas. Algunos de los aspectos de la gobernabilidad política y económica del país que fueron objeto de crítica durante las movilizaciones fueron la precariedad del sistema de salud o de educación, la creciente privatización del sistema de pensiones, del agua o de otros sectores de la economía, el incremento del precio de la vivienda, los medicamentos o el transporte público, la creciente percepción de la corrupción o el aumento de la desigualdad y las tasas de pobreza.

Chile experimentó las protestas más virulentas y masivas de las últimas décadas, con un saldo final de 26 personas fallecidas, 12.600 heridas y miles de personas detenidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas cifras difieren ligeramente de las ofrecidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que reportó el mismo número de víctimas mortales, unas 3.400 personas civiles hospitalizadas, más de 220 personas con traumas oculares severos y más 8.800 personas detenidas. Todos los informes publicados por organismos y organizaciones de derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas) identificaron graves violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes de seguridad del Estado. A modo de ejemplo, la CIDH denunció violencia sexual, tortura y otros tratos degradantes y humillantes en el marco de la detención de manifestantes. De igual modo, el INDH declaró a mediados de noviembre tener conocimiento sobre 346 acciones judiciales, de las que 246 estaban vinculadas a denuncias de tortura y 58 de violencia sexual. A finales de octubre, la Fiscalía anunció la apertura de 840 investigaciones por presuntas violaciones de los derechos humanos. De entre estas, 597 estaban dirigidas contra Carabineros, 45 contra el Ejército, 16 contra la Policía de investigaciones y ocho contra la Armada.

Las protestas se iniciaron después de que el Gobierno anunciara, el 6 de octubre, un incremento en la tarifa del sistema de transporte público, que propició que centenares de personas, principalmente estudiantes, se organizaran para evadir el pago del billete del metro de la capital, Santiago. Dicha medida cada vez fue más secundada y derivó en los días siguientes en la paralización del sistema de metro y en enfrentamientos entre Policía y manifestantes. El 18 de octubre se expandieron las protestas y los disturbios a varias partes del país y el Gobierno impuso el Estado de emergencia, inicialmente en Santiago y posteriormente en 15 de las 16 capitales regionales y dispuso el despliegue de militares para controlar las protestas. En ciudades como Santiago, Valparaíso, o Coquimbo, además, se decretó el toque de queda. **Si bien al principio las protestas estuvieron motivadas por el incremento en el precio del transporte público, a medida que fueron pasando los días estas se fueron haciendo más multitudinarias y transversales, y el foco de las mismas se amplió para incluir el elevado coste de bienes y servicios, las bajas pensiones, la política económica y social del Gobierno de Sebastián Piñera o la crítica a la clase política y a las instituciones de representación democrática.** A finales de octubre, más de un millón de personas se concentró en la capital en protesta por todos estos temas y también contra la represión por parte del Estado, pues para entonces ya habían muerto 20 personas y varios centenares habían resultado heridas en el marco de las protestas y los disturbios que se registraron en varios puntos del país. A pesar de la retirada del estado de emergencia el 27 de octubre, de la destitución de

todo el Gobierno y de la presentación de un paquete de medidas económicas (pensiones, salud o salarios), siguieron registrándose importantes movilizaciones en el mes de noviembre. A mediados de mes, los poderes legislativo y ejecutivo anunciaron un acuerdo para llevar a cabo un plebiscito, en abril de 2020, sobre la conveniencia o no de elaborar una nueva Constitución. A pesar de que los niveles de movilización y de violencia se redujeron significativamente a partir del anuncio de dichas medidas, hasta finales de año continuaron registrándose importantes movilizaciones, cortes de carretera y disturbios de distinta intensidad en varias partes del país, provocando la muerte de como mínimo tres personas.

Colombia	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Las movilizaciones multitudinarias que se registraron en 2019 están estrechamente vinculadas con el rechazo de una parte de la ciudadanía a la acción de gobierno del presidente Iván Duque, pero también a cuestiones más estructurales del sistema político y el modelo económico que ha regido en el país en las últimas décadas, como las críticas a la corrupción o impunidad judicial o la creciente percepción de que los altos niveles de crecimiento económico que ha experimentado el país no han supuesto una reducción de la desigualdad. Aunque sin alcanzar la magnitud de las protestas del 2019, en los últimos años se habían registrado algunas movilizaciones sectoriales significativas, como las masivas manifestaciones en contra de un proyecto de reforma de la educación superior en 2011 o bien el llamado Paro Nacional Agrario en 2013. Ya bajo mandato de Iván Duque se incrementaron los indicios de malestar social, como así lo evidenció la celebración de una consulta popular contra la corrupción en agosto de 2018; el llamado Paro Nacional Universitario entre octubre y diciembre de 2018, en el que también se registraron algunos enfrentamientos: la denominada “Marcha de las linternas” en enero de 2019, en la que se exigió la renuncia del fiscal general del Estado por varios casos de corrupción y por la percepción de impunidad respecto del asesinato de líderes sociales, o las recurrentes críticas a Duque por la ralentización de la implementación del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC.

El país vivió las protestas antigubernamentales más importantes de las últimas décadas, con un balance aproximado al finalizar el año de seis personas fallecidas, alrededor de 800 personas heridas –la mitad policías y la mitad civiles– y más de 250 personas detenidas. Las protestas, que se produjeron en varias partes del país, se iniciaron a finales de noviembre y al finalizar el año se mantenían muy activas. Los principales motivos de las movilizaciones fueron el rechazo a la política económica del Gobierno y, más en particular, a varias leyes de reforma tributaria, laboral y del sistema de pensiones. A medida que avanzaron

las manifestaciones, la agenda de la oposición se fue ampliando, tal y como ejemplifica el documento con trece demandas que el llamado Comité Nacional del Paro entregó al presidente, Iván Duque, en vistas al diálogo que este inició con varios actores políticos y sociales para contener el alcance de las protestas. Algunas de estas demandas incluyen el pleno cumplimiento del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, la tramitación de leyes anticorrupción, la implementación de compromisos adquiridos por el actual Gobierno y el anterior con diversos colectivos (estudiantes, indígenas, campesinos, etc.) o la depuración de la Policía y la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Las protestas se iniciaron el 21 de noviembre en varias ciudades colombianas, e incluyeron cortes de carreteras, afectación de mobiliario urbano y numerosos enfrentamientos entre policías y manifestantes. En los primeros días de las protestas, el Gobierno ordenó el cierre de pasos fronterizos con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela, mientras que el alcalde de Cali decretó el toque de queda para prevenir lo que consideraba actos vandálicos por parte de los manifestantes. Además, Iván Duque acusó a determinados líderes de la oposición de orquestar y capitalizar las movilizaciones y criticó que los manifestantes quisieron lograr objetivos políticos haciendo uso de la violencia. Sin embargo, a medida que las protestas se fueron consolidando y expandiendo, el Gobierno ofreció un diálogo a las principales organizaciones sociales y sindicales del país. Por su parte, tanto la ONU como organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch criticaron el excesivo uso de la fuerza durante las protestas y exigieron una investigación para depurar responsabilidades.

Ecuador	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Si bien la crisis desatada a finales de 2019 está vinculada al acuerdo entre el Gobierno de Lenin Moreno y el FMI para reducir el déficit público a través de un decreto que recortaba drásticamente el gasto público e incrementaba la recaudación fiscal, en las décadas anteriores el país ya había registrado numerosas protestas y episodios de polarización política y social. De hecho, desde finales de los años noventa, ha habido tres presidentes (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Guitérrez) que no han finalizado sus mandatos por razones políticas. Durante los mandatos del ex presidente Rafael Correa (2007-2017) también se produjeron importantes protestas vinculadas a la gestión gubernamental, a la aprobación de la nueva Constitución de 2008 y a su decisión de concurrir a un tercer mandato (el segundo bajo la nueva Carta Magna). Además, tanto en el mandato de Correa como en el de presidentes anteriores se produjeron movilizaciones recurrentes y brotes de violencia esporádicos vinculados al impacto que estaban teniendo determinados proyectos de minería y de exploración de petróleo en el Amazonas y otras partes del país.

Ecuador vivió una de las movilizaciones más virulentas de los últimos años después de que decenas de miles de personas en todo el país llevaran a cabo protestas de distinto signo en la primera quincena de octubre, tras la aprobación de un decreto que, entre otras cuestiones, preveía la retirada de una subvención a los combustibles. Según un informe hecho público por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, **nueve personas murieron, más de 1.500 resultaron heridas y otras 1.382 fueron detenidas.** Por su parte la Defensoría del Pueblo cuantificó en 11 las víctimas mortales, en 1.340 las personas heridas y en 1.192 las personas detenidas. El 1 de octubre, el presidente, Lenin Moreno, anunció un decreto que preveía varias medidas tributarias y laborales, entre las que se incluía la eliminación de un subsidio a los combustibles que llevaba vigente más de 40 años y que provocó incrementos en el precio de la gasolina de más del 120%. Dicho decreto formaba parte de un acuerdo con el FMI alcanzado en marzo que preveía la reducción del déficit fiscal –a través del recorte en el gasto público y el aumento de la recaudación por parte del Estado– para poder acceder a créditos por valor de más de 4.200 millones de dólares. Según algunos analistas, el acuerdo con el FMI preveía alterar o eliminar programas y políticas que en los últimos años habían propiciado reducciones muy significativas de la pobreza y la extrema pobreza. El anuncio de Moreno provocó una huelga de transportistas y movilizaciones y cortes de carreteras en todo el país, lideradas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y su movimiento político vinculado, Pachakutik. El 3 de octubre, ante el estallido en Quito de numerosos disturbios y episodios de violencia, incluyendo pillaje y enfrentamientos entre manifestantes y Policía, el Gobierno decretó el estado de excepción, y días más tarde ordenó lo que la oposición calificó de toque de queda (el Gobierno, sin embargo, señaló que solamente había restringido la movilidad nocturna alrededor de edificios gubernamentales estratégicos y bases militares y policiales). Las manifestaciones se incrementaron en los días siguientes, de modo que, **ante la movilización de miles de personas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y el Palacio Presidencial, el Ejecutivo trasladó la capital de Quito a Guayaquil.** El Gobierno acusó al ex presidente Rafael Correa y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de orquestar las protestas con el objetivo de perpetrar un golpe de Estado, pero ambos negaron tales acusaciones.

Ante la intensificación de las protestas y la generalización de los cortes de carreteras (que afectaron a la Carretera Panamericana y a 17 de las 24 provincias), Moreno regresó a Quito el 9 de octubre y ofreció un diálogo a la oposición bajo los auspicios de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Ecuador. Aunque no trascendió el contenido de las conversaciones, el 14 de octubre el Gobierno retiró el decreto 883 (conocido popularmente como el Paquetazo), lo cual redujo sustancialmente la intensidad de las movilizaciones. El 23 de octubre la CONAIE anunció que abandonaba las conversaciones

con el Gobierno por considerar que este proseguía su estrategia de represión y hostigamiento contra líderes indígenas. Cabe destacar el inicio de una investigación de la Fiscalía General contra el presidente de la CONAIE por mencionar en un acto público la creación de un ejército propio de movimientos indígenas. Ante las numerosas denuncias por represión y por ataques a la prensa (se registraron más de 100 agresiones a periodistas durante las dos primeras semanas de octubre), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita al país entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre. A finales de mes, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos hizo público un informe en el que acusaba a las fuerzas de seguridad del Estado de utilizar la represión de manera innecesaria y desproporcionada. A principios de diciembre, sin embargo, el Gobierno criticó tal informe por considerar que reflejaba solamente la opinión de la oposición y que obviaba la intensidad, la cantidad y grado de coordinación y premeditación de los episodios de violencia protagonizados por los manifestantes. El Gobierno acusó a la CONAIE de utilizar tácticas de guerrilla urbana, declarando que en el marco de las protestas 435 policías fueron heridos, 108 vehículos afectados o 45 ambulancias atacadas. Finalmente, cabe destacar que a finales de noviembre la Defensoría del Pueblo anunció la creación de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia con el objetivo de evaluar las denuncias presentadas y hacer seguimiento de los casos de vulneración de los derechos humanos.

Venezuela	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La actual crisis política y social que atraviesa el país se remonta a la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 y a su impulso de la llamada Revolución Bolivariana, pero se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 y su sustitución por el entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, que fue considerada inconstitucional por parte de la oposición. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. En un contexto de creciente crisis económica y de movilizaciones recurrentes y en ocasiones masivas, la crisis política en Venezuela se agudizó después de que la oposición ganara cómodamente las elecciones legislativas de diciembre de 2015, obteniendo su primera victoria en unos comicios en dos décadas. Tal victoria provocó una situación de una cierta parálisis institucional entre la Asamblea Nacional, por un lado, y el Gobierno y buena parte del poder judicial por otra.

La crisis política, social y humanitaria que padece Venezuela se agudizó notablemente durante el año

e incluso vivió momentos de riesgo de confrontación militar después de que a principios de año el recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente encargado del país y decenas de países (56 al finalizar el año, principalmente de América y Europa) le reconocieran. La autoproclamación de Guaidó se produjo pocos días después de la toma de posesión del cargo para un segundo mandato de seis años por parte de Nicolás Maduro, que no fue reconocida por numerosos gobiernos por considerar que emanaba de unas elecciones presidenciales –en mayo de 2018– que no cumplieron con los estándares internacionales. Guaidó, que había sido nombrado presidente de la Asamblea Nacional cinco días antes de la jura de Maduro, citó el artículo 233 de la Constitución. **EEUU y la mayor parte de países latinoamericanos reconocieron a Guaidó, y el Parlamento Europeo también votó a favor de reconocerlo como presidente interino. En cambio, países como China, Turquía o Rusia no lo hicieron.** En los días posteriores a la autoproclamación de Guaidó unas 40 personas murieron en el marco de las manifestaciones de cientos de miles de personas en todo el país. Posteriormente, en febrero, varias personas murieron y otros varios centenares resultaron heridos en los enfrentamientos que se produjeron con motivo de los intentos de EEUU y la oposición de hacer entrar al país convoyes de ayuda humanitaria, pero el Gobierno cerró todos los accesos fronterizos con Colombia y Brasil alegando que se trataba de una provocación y denunciando una posible invasión del país por parte de EEUU. Según reconoció el propio Ejecutivo, unos 400 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente de la Guardia Nacional, desertaron y cruzaron la frontera con Colombia. Sin embargo, la mayor parte de las Fuerzas Armadas se mantuvieron leales al Gobierno. Según organizaciones de derechos humanos, en los disturbios que se produjeron a finales de febrero se reportaron ejecuciones sumarias y numerosos ataques contra manifestantes por parte de grupos paramilitares progubernamentales. **A finales de abril, Guaidó instó a las Fuerzas Armadas a rebelarse contra el Gobierno y derrocar a Maduro.** Aunque se registraron nuevas desertiones, el Gobierno mantuvo el control de la situación y calificó de golpe de Estado la acción de la oposición. En los días siguientes al llamamiento de Guaidó se incrementaron los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Maduro. Por su parte, el Gobierno recrudesció la represión contra determinados sectores de la oposición. Durante el mes de mayo, 15 parlamentarios opositores fueron arrestados, abandonaron el país o se refugiaron en embajadas de diversos países. Durante el resto del año la oposición continuó denunciando represión policial y militar, violaciones de los derechos humanos y hostigamiento contra políticos opositores. Según varios medios, tanto este último fenómeno como el intento de sobornos a

La crisis que padece Venezuela se agudizó e incluso vivió momentos de riesgo de confrontación militar después de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente encargado del país y decenas de países le reconocieran

políticos opositores arreció a finales de año en vistas a la sesión de la Asamblea Nacional de principios de enero de 2020 en la que se debía votar (como finalmente acabó sucediendo) la prolongación del mandato presidencial de Guaidó durante un año más. Durante el segundo trimestre también se mantuvo la tensión y la retórica belicista entre el Gobierno de Maduro y EEUU. Sin embargo, a finales de 2019 el Congreso de los EEUU aprobó una ley en la que descartaba cualquier tipo de acción militar en el país y en cambio abogaba decididamente por las negociaciones políticas entre Maduro y la oposición. La tensión política entre Venezuela y los países vecinos de Brasil, Colombia y Perú también se incrementó a finales de año después de que Maduro acusara a dichos países de apoyar un asalto a un cuartel militar en el Estado de Bolívar en el que fueron sustraídos más de 100 fusiles y cuantiosa munición y en el que se tomaron varios rehenes e incluso una persona falleció. Según el Gobierno, tal acción militar tenía motivaciones políticas y pretendía asaltar unidades militares en Táchira, Zulia, Barinas, Aragua, Distrito Capital y Sucre, aunque algunos medios de comunicación desmintieron tal versión.

La crisis política y social transcurrió en paralelo a un claro deterioro de la situación humanitaria del país. En octubre, Naciones Unidas declaró que **desde el año 2015 más de 4,5 millones de personas habían abandonado el país, aunque el número real era muy superior porque esta cifra no incluía a las personas que habían huido del país por cruces fronterizos ilegales.** En abril, Naciones Unidas alertó de que siete millones de personas necesitaban asistencia, aunque algunas organizaciones locales señalan que dicha cifra podría ser muy superior. Algunas fuentes advirtieron sobre el desabastecimiento crónico de productos, sobre el riesgo de colapso del sistema sanitario o bien sobre los cortes de luz, que fueron muy frecuentes durante todo el año. A mediados de abril, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Federación Internacional de la Cruz Roja para la distribución masiva de ayuda de emergencia. En cuanto a la situación de derechos humanos, durante todo el año se registraron denuncias sobre violaciones masivas de derechos humanos. En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó enviar una misión al país para investigar las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Finalmente, cabe destacar que, según el Estudio Global de Homicidios 2019 de Naciones Unidas, hecho público a mediados de año, y que recoge y analiza datos del 2017, Venezuela tuvo una tasa de 57 homicidios cada 100.000 habitantes –la segunda en América Latina, por detrás de El Salvador, con 62–, siendo claramente el país latinoamericano en el que esta se ha incrementado más en las últimas décadas, pasando de 13 en 1991 a 57 en 2017. La situación en la capital, Caracas, es especialmente alarmante, pues tuvo una tasa de homicidios de 122.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), entre 1999 y 2018 se registraron más de 333.000 homicidios, y la tasa de impunidad es del 92%. Según este observatorio (la única fuente disponible ante la inexistencia de datos oficiales al respecto), en 2018 se registraron 23.047 homicidios, lo cual situó a Venezuela como el país con una mayor tasa de homicidios de América Latina (81,4 cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 51 registrados en El Salvador). En cuanto al número de protestas, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señaló que en los seis primeros meses de 2019 se habían registrado 10.477 protestas callejeras –fundamentalmente, reivindicaciones políticas y sociales–, un 97% más que en el mismo periodo del año anterior.

2.3.3. Asia y Pacífico

Asia Central

Tayikistán	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán

Síntesis:

La tensión que afecta a Tayikistán está vinculada en gran parte al conflicto armado de 1992-1997, que enfrentó a dos bloques marcados por fuertes divisiones regionales: la alianza opositora de fuerzas islamistas y sectores liberales anticomunistas (centro y este del país) contra las fuerzas gubernamentales heredadas del régimen soviético (norte y sur). El acuerdo de paz de 1997 resultó en un compromiso de reparto de poder, con la incorporación de la oposición al Gobierno. En su etapa de rehabilitación posbélica, los problemas a los que hace frente el país incluyen tensiones regionales (con descontento de la población leninabadi en el norte del país hacia sus antiguos aliados del sur, los kulyabis, grupo de población predominante en el poder tras el fin de la guerra), la presencia de algunos señores de la guerra y ex combatientes opositores no desmovilizados en algunas zonas del país, el autoritarismo del régimen, la corrupción, los altos niveles de pobreza y desempleo, las tensiones con sus vecinas Uzbekistán y Kirguistán, la inestabilidad asociada a su frontera con Afganistán y la amenaza potencial de grupos armados yihadistas.

Se mantuvo la tensión en el país en torno a varios ejes, con nuevos incidentes violentos reivindicados por ISIS, así como un incremento de la tensión con choques violentos en zonas de la frontera con Kirguistán en el valle de Ferghana. Por una parte, Tayikistán se vio afectado en 2019 por diversos episodios de violencia que las autoridades atribuyeron a ISIS y que el grupo reivindicó, si bien algunos análisis subrayaron la escasa información sobre los mismos, en un contexto de restricciones a la libertad de prensa, lo que dificultaba

el contraste sobre la autoría de los hechos. Entre los incidentes, en mayo **unos disturbios en una prisión de máxima seguridad en el distrito de Vahdat (junto a la capital) resultaron en la muerte de 29 presos y tres guardias de seguridad. ISIS reivindicó en junio los hechos**, afirmando que los atacantes eran miembros del grupo. Según el Ministerio de Interior de Tayikistán, 17 de los 29 fallecidos eran miembros de ISIS y otros tres eran integrantes del Partido del Renacimiento Islámico (PRI) –actor partícipe del conflicto armado de los años noventa y del acuerdo de paz de 1997, y partido político objeto de represión institucional desde 2015, a través de su ilegalización en 2015 y su designación como organización terrorista en 2016. El Ministerio de Justicia afirmó que entre los instigadores de los disturbios se incluía Gulmurod Halimov, hijo de Behruz Gulmurod, ex coronel de operaciones especiales de Tayikistán y comandante de la Policía que en 2015 desertó y se unió a ISIS pasando a ser jefe militar de la organización en 2016. Según el Gobierno, otros presos involucrados pertenecían a grupos ilegalizados como Jamaat Ansarullah y el Movimiento Islámico de Turkestán. Los disturbios letales estuvieron precedidos de otros disturbios en noviembre de 2018 en otra cárcel de alta seguridad en Khujand (norte), reivindicados también por ISIS, con 25 presos y dos guardias de seguridad muertos –cifra que algunas fuentes elevaban al medio centenar. Los disturbios de mayo llevaron a algunos activistas a cuestionar de nuevo la situación de las cárceles en el país, con graves condiciones de sobrepoblación y denuncias de torturas, sentencias contra personas sin vínculos con violencia, así como de la necesidad de programas de rehabilitación para personas condenadas con cargos relacionados con terrorismo y extremismo.

La tensión se incrementó de nuevo en noviembre, cuando se produjo un ataque contra un puesto fronterizo cerca de la frontera con Uzbekistán. Según las autoridades, una veintena de combatientes de ISIS llevaron a cabo el ataque, y dieron un balance de 15 atacantes, un policía y un guardia fronterizo fallecidos, así como de otros cinco combatientes detenidos. Asimismo, las autoridades afirmaron que el grupo habría cruzado desde Afganistán. ISIS reivindicó el ataque y cifró en 10 los guardias fronterizos muertos. La zona estuvo bloqueada al acceso a prensa. Algunos análisis señalaron los interrogantes en torno a lo sucedido. Por otra parte, el Gobierno anunció en abril el retorno de más de 80 menores y adolescentes desde Iraq, hijos de madres encarceladas por las autoridades iraquíes acusadas de pertenecer a ISIS. Según el Gobierno tayiko, unas 1.900 personas de nacionalidad tayika se habían unido a ISIS en Siria e Iraq, y algunas fuentes cifraban en un centenar los combatientes de Tayikistán actualmente en Afganistán en diversos grupos armados. Por otra parte, aumentó la tensión en el Valle de Ferghana –área entre Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán, con numerosos enclaves y tramos fronterizos en disputa. Durante el año se produjeron choques violentos intercomunitarios entre población de Tayikistán y Kirguistán, con participación

de guardias fronterizos de ambos países,²⁸ en torno a Vorukh –enclave de Tayikistán en Kirguistán–, la región kirguiza de Batken que lo rodea, y en torno a los distritos de Bobojon Ghafurov (Tayikistán) y Leylek (Kirguistán). La decena de choques violentos durante el año causaron diversas víctimas mortales y varias decenas de heridos. Tras los choques de julio, que llevaron a Kirguistán a evacuar a unos 600 residentes de la región de Batken, los presidentes de ambos países se reunieron en la zona en disputa. En los choques de septiembre, Tayikistán denunció el despliegue de unas 300 tropas kirguizas. Algunos análisis alertaron de que el uso de armas por parte de población civil en los choques suponía un salto cualitativo con respecto a choques fronterizos intercomunitarios en años anteriores.

Asia Meridional

Bangladesh	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)

Síntesis:

Desde la creación de Bangladesh como Estado independiente en 1971 tras su secesión de Pakistán en un conflicto armado que ocasionó tres millones de muertes, el país ha vivido una complicada situación política. Las elecciones de 1991 dieron paso a la democracia tras una sucesión de gobiernos militares autoritarios que dominaron el país desde la independencia. Los dos principales partidos, BNP y AL, se han sucedido desde entonces en el poder después de diferentes elecciones, siempre contestadas por la formación perdedora, dando lugar a gobiernos que no han dado respuesta a los principales retos del país como la pobreza, la corrupción o la baja calidad de la democracia, y que han respondido a intereses partidistas. En 2008, la AL accedió al poder después de un periodo de dos años dominado por un Gobierno interino militar que trató de poner fin sin éxito a la crisis política que había sumido al país en una situación de violencia en los meses previos y que llevó incluso al encarcelamiento de las líderes de los dos partidos. La convocatoria de elecciones para 2014 en un contexto político muy frágil y con una fuerte oposición del BNP a las reformas emprendidas por la AL, como la eliminación del Gobierno interino para supervisar los procesos electorales, derivaron en una grave y violenta crisis política durante el año 2013. En paralelo, el establecimiento en 2010 de un Tribunal para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra de 1971, instrumentalizado por el Ejecutivo para acabar con la oposición islamista, en particular el partido Jamaat-e-Islami, agravó la situación en el país.

Se mantuvo la tensión en el país en torno a diferentes cuestiones, aunque disminuyeron los niveles de violencia

con respecto a años anteriores. El primero de los focos de tensión fueron las elecciones. Tras la proclamación de los resultados de los comicios parlamentarios celebrados el 30 de diciembre de 2018 que otorgaron la victoria al partido gobernante Awami League, con 288 de 300 escaños, se sucedieron las acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición, sobre todo por el partido BNP. Además, actores internacionales como la UE, EEUU y el Reino Unido expresaron su preocupación por el posible fraude electoral. En marzo se celebraron elecciones locales en un clima de violencia. Al menos siete personas murieron en episodios de violencia vinculados al proceso electoral. Además, las elecciones fueron boicoteadas por el principal partido de la oposición, el BNP, y se registraron enfrentamientos entre integrantes de esta fuerza política y del partido en el Gobierno. Las diferentes elecciones dejaron en manos del partido gubernamental el control casi total de las diferentes instituciones del país. En paralelo, persistían las tensiones entre el Gobierno y el BNP por el encarcelamiento de la dirigente opositora y antigua primera ministra, Khaleda Zia, que tuvo que ser trasladada de prisión a un hospital y cuya excarcelación continuó exigiendo el BNP. El segundo de los focos de tensión fue la estrategia de contrainsurgencia impulsada por el Gobierno, que se intensificó tras los atentados en Sri Lanka. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo numerosos arrestos durante el año de personas acusadas de pertenecer a diferentes organizaciones armadas de carácter islamista y se registraron algunos enfrentamientos y acciones de grupos armados. El Gobierno señaló que la presencia de ISIS no era significativa en el país, pero esta organización armada difundió en varias ocasiones mensajes y vídeos de adhesión de insurgentes bangladeshíes. Cabe señalar que la situación política regional también tuvo impactos en la crisis bangladeshí. En primer lugar, la crisis humanitaria de la población refugiada rohingya en Bangladesh, procedente de Myanmar, continuó sin resolverse. Fracasaron los intentos de retorno de esta población a Myanmar, y crecieron de manera preocupante los discursos que trataron de vincular a la comunidad rohingya con la insurgencia islamista. Por otra parte, la aprobación en la India de legislación que daba lugar a que población procedente de Bangladesh y que profesara religiones diferentes a la musulmana pudieran acceder a la nacionalidad india deterioró las relaciones entre ambos países.²⁹

India	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

28. Véase el resumen sobre Kirguistán en este capítulo.

29. Véase el resumen sobre India e India (Assam) en este capítulo.

Síntesis:

En mayo de 2014, el partido nacionalista hindú BJP ganó las elecciones y asumió el Gobierno del país, encabezado por Narendra Modi como primer ministro. En 2019, Modi renovó su victoria electoral. Desde entonces, el Ejecutivo ha promovido un programa de gobierno nacionalista hindú acompañado de un discurso, medidas y políticas discriminatorias contra la población musulmana. Las tensiones entre hindúes y musulmanes en la India se habían acrecentado en las décadas previas, especialmente a raíz de los graves episodios de violencia en Gujarat en el año 2000, cuando tras el incendio de un tren en el que viajaban peregrinos hindúes y en el que murieron 58 personas, se desataron violentos disturbios en los que murieron cerca de 800 musulmanes y más de 250 hindúes, aunque organizaciones de la sociedad civil sostienen que las cifras fueron mucho mayores. Modi, ministro jefe de Gujarat en ese momento y miembro de la organización ultranacionalista hindú RSS, fue acusado de connivencia e incluso incitación a la violencia contra la población musulmana. En 2019, el Gobierno de Modi aprobó varias medidas consideradas muy perjudiciales para la comunidad musulmana, como la retirada del estatus especial de autonomía y la condición de estado a Jammu y Cachemira; el Registro Nacional de Ciudadanía en Assam, que excluía de la ciudadanía india a dos millones de musulmanes; y la aprobación de la Ley de Ciudadanía, excluyendo a la población musulmana procedente de Afganistán, Pakistán y Bangladesh de la posibilidad de acceder a la ciudadanía india.

India fue escenario de intensas protestas sociales en el mes de diciembre tras la aprobación por parte del parlamento de la Ley de Ciudadanía, que generó enorme controversia social al establecer que podían acceder a la nacionalidad india la población inmigrada al país procedente de Afganistán, Pakistán y Bangladesh que fueran hindúes, cristianas, sijs, budistas, jainitas o parsis, excluyendo a la población musulmana. Las protestas, en las que participaron centenares de miles de personas, se iniciaron en el estado de Assam, en el nordeste del país, y se expandieron a otros estados.³⁰ Las protestas estuvieron protagonizadas por sectores de la sociedad civil que apuntaron al carácter discriminatorio de la legislación contra la población musulmana, señalando que se trataba de una violación al carácter secular de la Constitución india. Por otra parte, la ley también generó el rechazo de amplios sectores de la población de Assam, que se oponen a la nacionalización de la población inmigrante procedente de Bangladesh al señalar que pone en grave peligro el frágil equilibrio demográfico del nordeste de la India. Las protestas fueron especialmente intensas en el estado de Uttar Pradesh —el 20% de la población de este estado es musulmana—, donde **murieron al menos 19 personas en enfrentamientos con la Policía.** Otras cinco personas murieron en Assam tras ser tiroteadas por las fuerzas de seguridad en diferentes manifestaciones. Además, se produjeron miles de detenciones. Las protestas se acrecentaron después de que la Policía llevara a cabo una violenta operación contra los estudiantes que se manifestaban

Al menos cinco personas murieron en el estado indio de Assam en las protestas por la Ley de Ciudadanía, que se expandieron al resto del país

en la Universidad Jamia Millia Islamia en Delhi, deteniendo a más de 100 personas, y la Universidad Aligarh Muslim University en Uttar Pradesh, donde también se produjeron decenas de detenciones. El Gobierno impuso el estado de emergencia en amplias zonas de la capital. Además, se anunció que se llevaría a cabo un Registro Nacional de Ciudadanía, de manera similar al elaborado en Assam, que generó enormes críticas por parte de las organizaciones de derechos humanos, señalando las graves discriminaciones que había ocasionado contra la población musulmana.

India (Assam)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB-IKS, KPLT, NSLA, UPLA y KPLT

Síntesis:

El grupo armado de oposición ULFA surge en 1979 con el objetivo de liberar el estado de Assam de la colonización india y establecer un Estado soberano. Las transformaciones demográficas en el estado tras la partición del subcontinente indio, con la llegada de dos millones de personas procedentes de Bangladesh, están en el origen de la reclamación de la población de origen étnico asamés de un reconocimiento de sus derechos culturales, civiles y de creación de un Estado independiente. Durante las décadas de los ochenta y noventa se producen varias escaladas de violencia, así como intentos de negociación que fracasan. En el año 2005 se inicia un proceso de paz que tiene como consecuencia una reducción de la violencia y que se interrumpirá en el año 2006 dando lugar a una nueva escalada del conflicto. Por otra parte, en los ochenta surgen grupos armados de origen bodo, como el NDFB, que reivindican el reconocimiento de su identidad frente a la población mayoritaria asamesa. Desde 2011 se ha producido una reducción significativa de la violencia y numerosos grupos armados han entregado las armas o iniciado conversaciones con el Gobierno.

Se redujo notablemente la actividad armada de los grupos insurgentes en Assam y a finales de año se especulaba con la firma de un acuerdo entre Gobierno y gran parte de las organizaciones insurgentes que aún continuaban activas en el estado.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por el centro de investigación South Asia Terrorism Portal, dos insurgentes murieron durante 2019 como consecuencia del conflicto. Uno de los hechos más graves de violencia se produjo en mayo, cuando la explosión de una granada —en un atentado reivindicado por el grupo armado ULFA (I)— ocasionó heridas a seis personas. Posteriormente, la dirigencia del grupo armado señaló que se comprometía a no utilizar bombas en espacios públicos, después de que en el atentado resultaran heridos varios civiles. Además, durante el año varios dirigentes insurgentes se entregaron

30. Véase el resumen sobre India (Assam) en este capítulo.

a la Policía y se especuló con que el comandante en jefe, Paresh Baruah, había perdido contacto con los integrantes del grupo. La situación se habría agravado para el grupo armado tras un operativo lanzado por las Fuerzas Armadas de Myanmar contra el grupo armado naga NSCN-K en Taga, una zona en la que otros grupos armados operativos en la India también tienen sus bases, entre ellos el ULFA(I) y el NDFB-S. En esta operación habría muerto el dirigente del ULFA-I Jyotirmoy Asom. A finales de año, el Gobierno indio extendió la ilegalización del ULFA (incluyendo todas sus facciones) por un plazo de cinco años.

En paralelo, **se agravó la crisis por la aprobación en diciembre de la Ley de Ciudadanía** que contemplaba otorgar la ciudadanía india a las personas inmigrantes procedentes de Afganistán, Bangladesh y Pakistán que fueran hindús, cristianas, sijs, budistas, jainitas o parsis, excluyendo a la población musulmana. **La aprobación de esta legislación derivó en intensas protestas sociales que posteriormente se expandieron al resto del país.**³¹ Assam ya había sido escenario de numerosas protestas en torno a la cuestión de la ciudadanía, con importantes tensiones sociales entre población autóctona de Assam y población originaria de Bangladesh, debido al frágil equilibrio demográfico del estado y el temor a la nacionalización de inmigrantes procedentes de Bangladesh. A esto se sumaron las protestas de las organizaciones de derechos humanos y población musulmana que señalaron que se trataba de una legislación claramente discriminatoria e islamófoba. De hecho, dos millones de personas quedaron excluidas del Registro Nacional de Ciudadanía después de que en los últimos cuatro años 33 millones de personas hubieran tenido que probar su nacionalidad para ser incluidos en el registro. Esto dejó fuera a muchas personas carentes de los documentos necesarios para realizar los trámites burocráticos, que con la nueva legislación podría demandar la nacionalidad. Organizaciones assamesas señalaron que el Gobierno indio estaba instrumentalizando la cuestión religiosa, frente a las demandas de prohibición de la inmigración ilegal por parte de algunos sectores de la sociedad assamesa, independientemente de la religión profesada por la población inmigrante. **Al menos cinco personas murieron tiroteadas por la Policía en las manifestaciones de protesta a pesar del toque de queda impuesto por el Gobierno y centenares fueron detenidas.**

La violencia en Jammu en Cachemira llevó a un incremento de la tensión entre India y Pakistán acrecentando el temor a un nuevo conflicto armado entre los dos países

India – Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Territorio Internacional
Actores:	India, Pakistán

31. Véase el resumen sobre India en este capítulo.

Síntesis:

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En cuatro ocasiones (1947-1948; 1965; 1971, 1999) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida territorialmente entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera *de facto* entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se trasladó al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión derivó en el hasta ahora último conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera de facto que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que estos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

Las relaciones entre India y Pakistán se deterioraron gravemente durante el año como consecuencia de diferentes episodios de violencia en el estado indio de Jammu y Cachemira, objeto de disputa entre los dos países desde la independencia y partición de 1947.

Cerca de un centenar de personas murieron como consecuencia de diferentes hechos de violencia en el marco de la disputa entre los dos países. Un grave atentado en febrero que causó la muerte a 45 soldados indios derivó en acusaciones por parte del Gobierno indio de complicidad pakistaní con los hechos y llevó a una escalada de la tensión militar y diplomática entre los dos países. Las Fuerzas Aéreas indias señalaron que habían llevado a cabo ataques aéreos preventivos contra un campo de entrenamiento de Jaish-e-Mohammad en territorio pakistaní, hecho negado por Pakistán. A su vez, el Gobierno pakistaní anunció la captura de un piloto militar indio –que fue puesto en libertad posteriormente en un gesto que Pakistán calificó de “buena voluntad”– y el derribo de aviones indios en territorio pakistaní y el Gobierno indio alegó el derribo de otro avión pakistaní en territorio indio. Además, el Gobierno indio amenazó con cortar el cauce de los ríos que vierten en el Indo, poniendo en peligro la continuidad del Tratado del Río Indo entre ambos países que garantiza el reparto de los recursos hídricos, indispensable para la supervivencia de la población y la economía local, fundamentalmente agrícola. En marzo la tensión se rebajó levemente con el regreso a las embajadas respectivas de los altos comisionados de cada país. Además, se produjo una reunión conjunta de carácter técnico para facilitar los desplazamientos de

peregrinos sijs de la India que visitan lugares sagrados en Pakistán, aunque el Gobierno indio señaló que no se trataba de la reanudación del diálogo bilateral. **En agosto la tensión escaló gravemente con la retirada a Jammu y Cachemira de su estatus constitucional especial.**² Esta situación derivó en que el Consejo de Seguridad de la ONU, a propuesta de China –que se hizo eco de una demanda histórica de Pakistán– celebrara una reunión a puerta cerrada sobre la situación en Cachemira por primera vez en décadas en el mes de agosto. Aunque no se consensuó ninguna declaración conjunta, diversos diplomáticos hicieron llamamientos a que las partes restringieran al máximo cualquier acción unilateral de respuesta a la crisis. En diciembre debía celebrarse una nueva reunión también a petición de China que fue aplazada puesto que la misión de Naciones Unidas sobre el terreno no presentó su informe. Como consecuencia de los enfrentamientos armados entre los dos Ejércitos en la Línea de Control (frontera que separa *de facto* India y Pakistán) murieron unas 50 personas a lo largo de todo el año, en su mayoría soldados. No prosperaron los llamamientos al diálogo que se hicieron a lo largo del año y en septiembre, en un discurso ante Naciones Unidas, el primer ministro pakistaní, Imran Khan, advirtió a la India de que sus acciones podían derivar en una nueva guerra.

Sri Lanka	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, partidos políticos y organizaciones sociales tamiles, grupo armado National Towheed Jamaat (NTJ)

Síntesis:

En 1983 el grupo armado de oposición independentista tamil LTTE inició el conflicto armado que asoló Sri Lanka durante casi tres décadas. El proceso de creciente marginación de la población tamil por parte del Gobierno, integrado fundamentalmente por las elites cingalesas, tras la descolonización de la isla en 1948 llevó al grupo armado a reclamar la creación de un Estado tamil independiente por la vía armada. Desde 1983, cada una de las fases en las que se desarrolló el conflicto finalizó con un proceso de paz fallido. En 2002 se iniciaron negociaciones de paz con mediación noruega, después de la firma de un acuerdo de alto el fuego, el fracaso de las cuales llevó a la reanudación con gran virulencia del conflicto armado en 2006. En mayo de 2009 las Fuerzas Armadas vencieron militarmente al LTTE y recuperaron todo el territorio del país tras dar muerte al líder del grupo armado, Velupillai Prabhakaran. En los años posteriores, miles de tamiles permanecieron desplazados y no adoptaron medidas para avanzar en la reconciliación. Además, el Gobierno se negó a investigar los crímenes de guerra del conflicto armado, negando la comisión de este tipo de delitos. No obstante, en 2015 las elecciones presidenciales y parlamentarias resultaron en la formación de un nuevo Gobierno, que dio lugar al inicio de algunas reformas políticas y a tímidos avances en la investigación de los crímenes durante el conflicto armado.

La situación de Sri Lanka sufrió un grave deterioro y fue escenario de un gravísimo episodio de violencia. Más de 320 personas murieron –en su mayoría población local y al menos 40 personas extranjeras– y 500 resultaron heridas como consecuencia de varios atentados simultáneos el domingo de Pascua, en iglesias en las inmediaciones de Colombo –capital del país– y Batticaloa y tres hoteles de lujo en Colombo.

Los atentados fueron cometido por un grupo islamista desconocido hasta ese momento, National Towheed Jamaat (NTJ) y reivindicados por ISIS, lo que supondría el ataque más mortífero en el exterior y el episodio más grave de violencia en Sri Lanka desde la finalización del conflicto armado en 2009. Con posterioridad al ataque se produjeron más de 1.800 detenciones de musulmanes y en una de las redadas policiales murieron al menos 15 personas, entre ellas seis menores, como consecuencia de los enfrentamientos que se desencadenaron con la Policía y la detonación de explosivos por parte de suicidas. Investigaciones parlamentarias posteriores determinaron graves fallos de seguridad por parte de las autoridades de Sri Lanka, ya que el jefe de los servicios de inteligencia habría recibido informaciones sobre el elevado riesgo de ataque con anterioridad a los atentados sin que se hubiera dado una respuesta adecuada a estas amenazas. Además, el máximo responsable de los atentados, el predicador extremista Mohamed Zahran, había sido investigado por los servicios de inteligencia previamente a los atentados. El jefe de la Policía y el antiguo secretario de Defensa fueron detenidos por negligencia y no haber prevenido los atentados. Posteriormente a los ataques se produjeron diferentes episodios de violencia contra la comunidad musulmana en el país, como agresiones contra mezquitas y negocios propiedad de personas de confesión musulmana.

En lo que respecta al ámbito político, en noviembre se celebraron elecciones presidenciales en las que resultó victorioso por una amplia mayoría el candidato del partido SLPP, Gotabaya Rajapaksa, hermano del ex presidente Mahinda Rajapaksa. Gotabaya se desempeñó como secretario de Defensa entre 2005 y 2015 y fue el máximo responsable de las Fuerzas Armadas durante los últimos años del conflicto armado y durante las operaciones militares que dieron fin al conflicto en 2009 y al grupo armado LTTE, con acusaciones al Ejército de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra contra la población civil tamil, como los bombardeos intencionados contra población civil, hospitales y centros de atención humanitaria. Tras su elección se produjo la renuncia del primer ministro Ranil Wickremesinghe, del partido opositor UNP, lo que derivó en la toma de posesión como primer ministro de Mahinda Rajapaksa. El retorno al control gubernamental del país por parte del clan Rajapaksa incrementó la preocupación entre amplios sectores de la sociedad civil y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como por parte de

32. Véase el resumen sobre India (Jammu y Cachemira) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

algunos países. Gotabaya había anunciado durante la campaña electoral que no daría continuidad a los compromisos del Ejecutivo de Sri Lanka con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en materia de reconciliación y rendición de cuentas con respecto a las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Por otra parte, previamente a la configuración del nuevo Gobierno, el nombramiento del general Shavendra Silva como comandante de las Fuerzas Armadas había sido objeto de condenas por parte de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por su implicación en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.

En Sri Lanka, la victoria electoral de Gotabaya Rajapaksa incrementó la preocupación de las organizaciones de derechos humanos ante la interrupción de la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado

algunos análisis sostienen que la situación política en Hong Kong supone el mayor reto para China desde la llegada al poder de Xi Jinping. Según algunos balances hechos públicos a finales de año, dos personas murieron, unas 2.600 resultaron heridas y más de 7.000 habían sido detenidas durante las movilizaciones, que se iniciaron a finales de marzo y se prolongaron durante todo el año. Efectivamente, a finales de marzo, miles de personas protestaron contra los intentos del Parlamento regional hongkonés de aprobar un proyecto de ley de enmienda a las leyes de extradición y que permitiría, entre otras cuestiones, la entrega de personas fugitivas a la jurisdicción china. Según algunos análisis, este proyecto alentó el temor entre buena

parte de la ciudadanía de que se pudiera menoscabar la autonomía regional de Hong Kong y de que Beijing pudiera utilizar la cobertura legal de la nueva legislación para extraditar a líderes políticos que se oponen al actual estatus quo de la región. Si bien en su fase inicial las protestas pivotaron fundamentalmente alrededor de la retirada del proyecto de ley, a medida que avanzaban las protestas se incluyeron nuevas exigencias –como la investigación de los presuntos abusos policiales durante las manifestaciones y la renuncia de la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam–, o bien demandas ciudadanas que ya se habían planteado en el pasado, como la introducción del sufragio universal en la elección del Consejo Legislativo o del Gobierno regional. A pesar de las protestas de finales de marzo, Carrie Lam declaró su intención de proseguir con el mencionado proyecto de ley, auspiciando nuevas y más masivas movilizaciones a finales de abril, cuando más de 100.000 personas se concentraron en las inmediaciones del Parlamento regional.

Las protestas vivieron un punto de inflexión en el mes de junio, cuando el Gobierno regional de Hong Kong anunció la suspensión de las controvertidas enmiendas a la legislación de extradición después de que cientos de miles de personas –un millón según los organizadores– se movilaran y se registraran los episodios de violencia más importantes de las últimas décadas en enfrentamientos entre Policía y manifestantes, lo que comportó el cierre de edificios públicos durante varios días. Tras el anuncio de Lam, cientos de miles de personas –hasta dos millones según algunas fuentes– siguieron movilizándose para la completa retirada del proyecto de ley. El 1 de julio, con motivo del 22º aniversario de la cesión de soberanía de Reino Unido a China, decenas de manifestantes irrumpieron en la sede del Consejo Legislativo, mientras que a finales de mes se registraron nuevos enfrentamientos con la Policía después de que varias personas, incluyendo pasajeros, fueran atacadas en una estación de tren. A principios de agosto una huelga general obligó a cancelar unos 200 vuelos, mientras que días más

Asia Oriental

China (Hong Kong)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Sistema, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En 1997, tras más de 150 años de dominio británico y varios años de negociaciones que culminaron en un acuerdo chino-británico en 1984, China recuperó la soberanía sobre Hong Kong al amparo del principio “un país, dos sistemas”. Bajo este principio, Beijing se comprometía a respetar –durante 50 años– la idiosincrasia institucional y el autogobierno del enclave, garantizando su estatus de región especial administrativa y una “ley básica” que prevé un gobierno regional relativamente autónomo con competencias ejecutivas, legislativas y judiciales. Desde entonces, el movimiento ciudadano y los partidos políticos que abogan por una mayor democratización y autonomía de Hong Kong y que rechazan la interferencia del Gobierno central en los asuntos domésticos del enclave han incrementado notablemente su fortaleza institucional, su apoyo popular y su capacidad de movilización. Aunque tanto las autoridades centrales como las regionales declaran ser sensibles a las demandas de la mayor parte de la ciudadanía y en ocasiones han presentado propuestas de reforma política, la magnitud de las protestas se incrementó notablemente en las dos décadas posteriores a la devolución de Hong Kong por parte de Reino Unido. En la segunda mitad de 2014, cientos de miles de personas participaron en protestas multitudinarias –popularmente conocidas como la Revolución de los Paraguas o “Occupy Central”– contra una serie de reformas electorales propuestas por Beijing. Desde entonces hasta el estallido de las movilizaciones masivas en 2019 también se produjeron numerosas protestas antigubernamentales y episodios recurrentes de tensión entre ciudadanos hongkoneses con visiones distintas sobre el estatus político de la región y su relación con el resto de China.

En 2019 se registraron las protestas más multitudinarias e intensas de las últimas décadas, hasta el punto de que

tarde, entre el 12 y el 14 de agosto, miles de personas ocuparon el aeropuerto internacional, provocando la cancelación de más vuelos y graves enfrentamientos entre manifestantes y policías. El 1 de septiembre, los manifestantes volvieron a concentrarse en el aeropuerto. Durante el mes de agosto, el transporte público se vio afectado por las movilizaciones, y miles de estudiantes de secundaria y universidad decidieron no asistir a clase para participar en las protestas. A pesar de que Carrie Lam anunció la retirada definitiva de su proyecto de ley, las protestas prosiguieron durante el mes de septiembre e incluso se incrementaron a principios de octubre con motivo de la conmemoración del 70º aniversario de la fundación de la República Popular China y de la prohibición decretada por el Gobierno regional de portar máscaras durante concentraciones colectivas en lugares públicos. En el mes de noviembre se registraron algunos de los enfrentamientos más virulentos de todo el año, especialmente después de que miles de manifestantes ocuparan varias universidades. Tuvo especial impacto mediático el sitio de la Policía a la Universidad Politécnica durante dos semanas, en el que unas 1.100 personas fueron detenidas. El 24 de noviembre se celebraron elecciones a los consejos distritales, que tuvieron una participación récord de un 71% y que fueron catalogados por algunos analistas como un referéndum sobre las protestas que estaban teniendo lugar. Los partidos calificados de pro-democracia obtuvieron el mejor resultado de su historia, logrando el control de 17 de los 18 distritos en liza y triplicando el número de escaños (de 124 a 388), mientras que los partidos próximos a Beijing sufrieron una severa derrota y perdieron más de 242 escaños. Las protestas se reanudaron a principios de diciembre, con reivindicaciones que iban más allá de la retirada de las enmiendas a la ley de extradición, y se mantenían muy activas al finalizar el año.

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ³³	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia
Síntesis:	La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado “eje del mal”. Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron

conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea del Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

Tras un año en el que el buen avance de las negociaciones intercoreanas y entre Corea del Norte y EEUU sobre la desnuclearización de la península coreana propiciaron una reducción a la mínima expresión de las tensiones militares, estas volvieron a incrementarse sustancialmente tras el fracaso de la cumbre entre los mandatarios de EEUU y Corea del Norte en el mes de febrero. Más allá de las acusaciones sobre la culpabilidad del bloqueo de las mencionadas negociaciones, la confrontación militar y la retórica belicista se evidenciaron a partir del mes abril, coincidiendo con los ejercicios militares conjuntos que históricamente llevan a cabo EEUU y Corea del Sur. Según Pyongyang, estos contravienen el compromiso de facto que ambos países habrían asumido en 2018 en el marco de la distensión de relaciones que se produjo durante ese año. Pocos días después de la finalización de tales ejercicios, Corea del Norte lanzó misiles balísticos de corto alcance, los primeros desde diciembre de 2017. El Gobierno de EEUU trató de minimizar dichos lanzamientos asegurando que no suponían una violación de los compromisos adoptados por Pyongyang en 2018 –y que según Washington afectarían solamente a los ensayos nucleares y a los misiles balísticos intercontinentales–, pero a la vez los criticó por considerar que sí suponían una clara violación de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Gobierno norcoreano siguió llevando a cabo lanzamientos de misiles de corto alcance en julio, agosto, octubre y noviembre. A finales de año incluso varios medios de comunicación especularon con la posibilidad de que Corea del Norte hubiera ensayado un nuevo tipo de misiles capaces de ser disparados desde submarinos. La tensión fue especialmente alta en el mes de agosto, coincidiendo con los nuevos ejercicios militares conjuntos que EEUU y Corea del Sur llevaron a cabo durante prácticamente todo el mes o en el mes de noviembre y con la presentación de la nueva estrategia de defensa de Corea del Sur, y que prevé un incremento sustancial del gasto militar surcoreano. En noviembre, a pesar de que EEUU y Corea del Sur acordaron posponer las maniobras militares previstas para principios de mes en aras de la reanudación del diálogo entre EEUU y Corea del Norte, bloqueado desde febrero, las Fuerzas Armadas norcoreanas dispararon varios proyectiles de artillería cerca de la frontera marítima en disputa en dirección a Corea del Sur. En paralelo a estas acciones, en varios momentos del año el Gobierno norcoreano advirtió sobre la posibilidad de reanudar los ensayos de su programa nuclear y misiles balísticos si para finales del año 2019 no había un cambio significativo en la

33. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano.

estrategia negociadora de EEUU. Finalmente, también cabe destacar el incidente militar que se produjo en el mes de julio, cuando las Fuerzas Aéreas de Corea del Sur lanzaron cientos de disparos de advertencia a aviones rusos que patrullaban la región conjuntamente con aviones chinos y que, según Seúl, habían violado su espacio aéreo al sobrevolar las islas Dokdo (Mar Oriental o Mar del Japón).

Sudeste Asiático y Oceanía

Indonesia (Papúa Occidental)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport

Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

Se incrementaron notablemente tanto los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición OPM y las Fuerzas Armadas como las protestas y disturbios en la región de Papúa (administrativamente dividida en las provincias de Papúa y Papúa Occidental), con un saldo final de decenas de personas muertas y decenas de miles de personas desplazadas de manera forzosa. En cuanto a los enfrentamientos entre el OPM y las Fuerzas Armadas, la violencia en el distrito de Nduga (y regiones aledañas como Puncak, Puncak Jaya o Lanny Jaya) se incrementó exponencialmente desde diciembre de 2018 después de que 17 personas fueran asesinadas por el OPM en un solo ataque. Esta acción, la de mayor envergadura en la región en los últimos años en Papúa, propició el inicio de una campaña de contrainsurgencia por parte de las Fuerzas Armadas y la

En Papúa Occidental se incrementaron notablemente tanto los enfrentamientos armados como las protestas y disturbios, con un saldo final de decenas de personas muertas y decenas de miles de personas desplazadas de manera forzosa

Policía con bombardeos aéreos y artillería pesada que provocó la muerte de unos veinte civiles y un número indeterminado de combatientes y soldados. No trascendió la mortalidad asociada al conflicto en 2019, pero según informaciones publicadas en prensa alrededor de 30 soldados y combatientes podrían haber fallecido en el marco de los mencionados enfrentamientos. Además, en octubre una red de ONG locales denunció que 189 personas que habían abandonado sus hogares a causa de la violencia habían fallecido entre principios de diciembre de 2018 y octubre de 2019, principalmente por enfermedades y desnutrición. Un informe hecho público por las autoridades locales del distrito de Nduga en el mes de abril señaló que más de 20.000 personas habían abandonado sus hogares a causa de la violencia, aunque algunas ONG elevaban dicha cifra a más de 32.000 y el Gobierno la reducía a unas 3.500. Si bien a finales de 2018 las Fuerzas Armadas ya habían sido acusadas de numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo el uso de fósforo blanco, durante el año prosiguieron tales acusaciones. Ya en enero, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, declaró haber solicitado autorización para visitar la región y llevar a cabo una investigación sobre tales acusaciones. En marzo, un representante del Comité Nacional para Papúa Occidental declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que las Fuerzas Armadas estaban cometiendo numerosas violaciones de los derechos humanos en Papúa, principalmente dirigidas contra población papú.

En cuanto a las protestas vinculadas al conflicto político en Papúa, cabe destacar principalmente las que se produjeron en los meses de agosto y septiembre. En agosto, como mínimo 10 personas murieron en Jayapura y el distrito de Deiyai en el marco de las protestas que se registraron en más de 30 ciudades de toda Indonesia después de que estudiantes papús fueran atacados y hostigados en Surabaya y Malang el 17 de agosto, Día de la Independencia en Indonesia. Decenas de personas fueron arrestadas en relación a dichos incidentes, que provocaron que el Gobierno desplegara miles de efectivos policiales y militares en las regiones más afectadas por las protestas, como Manokwari, Sorong, Timika o Wamena. En algunas de estas ciudades, varios edificios fueron incendiados. **En septiembre, se registró la espiral de violencia más intensa de todo el año, cuando 43 personas (33 según Human Rights Watch) murieron en la ciudad de Wamena y otras varias más en ciudades como Jayapura.** Los incidentes se iniciaron después de que un grupo de estudiantes universitarios papús fuera atacado en su residencia (uno murió y otros dos resultaron heridos) y de que, días después, un profesor de una escuela profiriera insultos racistas contra un estudiante papú en la misma ciudad de

Wamena. A finales de septiembre, decenas de personas habían muerto y más de 16.000 habían abandonado la ciudad –según datos proporcionados por el Gobierno– por la espiral de violencia que afectó principalmente a personas provenientes de otras partes de Indonesia. Tras estos incidentes, en los que numerosos edificios públicos, comercios y vehículos fueron incendiados, algunos analistas advirtieron que organizaciones islamistas en Indonesia habían hecho un llamamiento a defender a la población musulmana no papúa residente en la región de Papúa, exacerbando así el riesgo de enfrentamientos comunitarios o de índole religiosa. En Jayapura, donde murieron cuatro personas, y en otras ciudades también se registraron incidentes de violencia. A finales de año, con motivo del Día de la Independencia de Papúa, decenas de personas fueron detenidas en el marco de las movilizaciones de conmemoración de la efeméride. **En el plano político, cabe destacar que en el mes de octubre, después de la mencionada espiral de violencia, el presidente Widodo visitó la región de Papúa y mostró su disposición a reunirse con los líderes del movimiento secesionista papúa**, principalmente el Movimiento Unido de Liberación de Papúa Occidental, que en ocasiones anteriores había pedido que tales conversaciones contaran con una observación y facilitación internacional. En el mes de abril, un grupo de abogados había solicitado a la Corte Suprema que revisara la legalidad del referéndum de 1969 tras el que Indonesia se anexionó la región de Papúa y que según varias organizaciones de derechos humanos no cumplió con los estándares mínimos de transparencia, a pesar de estar organizado y supervisado por Naciones Unidas.

2.3.4. Europa

Europa occidental

España (Cataluña)	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, identidad Interna
Actores:	Gobierno de España, Gobierno de Cataluña, actores políticos, sociales y judiciales de Cataluña y España, jefatura de Estado

Síntesis:

El conflicto sobre el estatus de Cataluña gira en su fase actual en torno al choque entre, por una parte, las aspiraciones de independencia para Cataluña de un sector político y social amplio de su población y, por otra parte, la defensa por el Estado español y otro sector político y social amplio de España y Cataluña de la integridad territorial de España y –en diverso grado– su defensa de la unidad nacional, la soberanía nacional española y/o la interpretación de que el marco normativo vigente imposibilita el ejercicio de autodeterminación de Cataluña. Así, el conflicto tiene diversos niveles, principalmente entre actores de Cataluña y España y dentro de Cataluña, y también ramificaciones internacionales. Existen narrativas

e interpretaciones diferentes sobre los orígenes y causas de fondo, así como su evolución y posibles vías de solución. Entre otros elementos, se esgrime el derecho de autodeterminación y la defensa de la integridad territorial estatal, se apela a agravios acumulados en ámbitos como recursos, competencias y reconocimiento identitario y nacional, así como a la diversidad de aspiraciones dentro de Cataluña y a los límites de la legalidad. El independentismo tomó mayor fuerza, política y social a partir de 2012, dos años después de la sentencia del Tribunal Constitucional que recortaba el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña –que había sido aprobado en 2005 por todas las fuerzas políticas del Parlamento catalán (excepto el Partido Popular), finalmente recortado en el Congreso español, y ratificado posteriormente en referéndum catalán (2006) con un 74% de votos (49% de participación)– y en un contexto de crisis económica, recortes en derechos y gasto público, y convulsión social. Se inició entonces lo que se ha denominado el “proceso soberanista”, con acciones políticas y sociales de múltiples actores para ejercer la autodeterminación y lograr la independencia, cuestionadas y/o perseguidas a su vez por otros actores desde el ámbito político y judicial en Cataluña y España. Entre las acciones, una consulta popular el 9 de octubre de 2014, en la que participaron 2,3 millones de personas y el 80,76% de ellas votó a favor de que Cataluña sea un Estado independiente. En las elecciones parlamentarias catalanas de 2015, presentadas como plebiscitarias por los partidos pro-independencia, estos obtuvieron el 47,74% de los votos y una mayoría parlamentaria (72 de 135 escaños). En 2017 escaló la tensión, con una sucesión de acontecimientos, entre ellos la aprobación en el Parlamento catalán de la ley del referéndum de autodeterminación y de la ley de transitoriedad jurídica en un procedimiento exprés en que la oposición denunció la vulneración de sus derechos y de la legalidad estatutaria y constitucional, por lo que en su mayoría se ausentó de la votación; la celebración el 1 de octubre de un referéndum (43% de participación y 90% favorable a la independencia) suspendido previamente por el Tribunal Constitucional y las cargas policiales contra participantes pacíficos, un millar de lesionados y el cierre del 14% de los colegios electorales, según el Gobierno catalán; la asunción de los resultados favorables a la independencia y la suspensión de la independencia por la propia Presidencia catalana el 10 de octubre, y una declaración de constitución de república independiente ese mismo día por los partidos pro-independencia; una declaración de constitución de república catalana e inicio de un proceso constituyente aprobada en el Parlamento catalán el 27 de octubre (70 votos a favor, 10 en contra, 2 abstenciones y 53 ausencias); la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por la que el Gobierno estatal intervino la autonomía catalana; el encarcelamiento preventivo e inicio de un macroproceso judicial contra líderes sociales y políticos catalanes, que concluyó en octubre de 2019 con graves penas de prisión. En estos años se han sumado otros procedimientos judiciales contra cargos políticos, policiales y activistas, en una tendencia de judicialización de la disputa política, en el marco de la cual dirigentes políticos, incluyendo el entonces presidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont, salieron de España y residen desde entonces en el extranjero. Figuras en el exterior, como Puigdemont, han promovido la internacionalización del conflicto, incluyendo a través de la creación del llamado Consejo por la República Catalana. El conflicto ha generado crispación política y parálisis gubernamental y polarización social y mediática, y también amplia movilización de diferente signo. Por otra parte, entre 2018 y 2019 el Gobierno español y el catalán llevaron a cabo intentos de diálogo, que incluyeron la Declaración de Pedralbes (2018), si bien afrontaron numerosos obstáculos.

Se incrementó la tensión en torno al conflicto sobre el estatus de Cataluña, principalmente de la mano de la sentencia dictada contra líderes sociales y políticos independentistas, que ahondó en la brecha entre instituciones del Estado, Gobierno y partidos políticos de ámbito estatal, por un lado, y un amplio sector político y social de Cataluña por otro. La tensión transcurrió en 2019 en diversos ámbitos, incluyendo el judicial, social, político y mediático en Cataluña y España y, como en años anteriores, abarcó también la esfera internacional. En el ámbito judicial, la dinámica de judicialización del conflicto de años anteriores desembocó en la sentencia del llamado “juicio del proceso”, relativo a hechos acontecidos en Cataluña en torno al referéndum del 1 de octubre, tras la fase oral entre febrero y junio de 2019. El Tribunal Supremo dictó sentencia el 14 de octubre, condenando a penas de entre nueve y 13 años de prisión e inhabilitación absoluta por delito de sedición –y en algunos casos también por malversación– a los dos líderes sociales independentistas Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural) y Jordi Sànchez (presidente de Asamblea Nacional Catalana, ANC), así como a seis miembros del Gobierno catalán destituido que facilitó la consulta (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolores Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull) y a la entonces presidenta del Parlamento (Carme Forcadell). Tres ex miembros del Ejecutivo catalán (Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó) fueron condenados por desobediencia a multas y un año y ocho meses de inhabilitación. La sentencia causó gran conmoción en el independentismo y otros sectores de población de Cataluña contrarios a la judicialización del conflicto e incrementó la tensión política y social en el último trimestre del año. Desencadenó numerosas movilizaciones en múltiples localidades catalanas, incluyendo una marcha masiva al aeropuerto de Barcelona el mismo día de la sentencia, organizada por la plataforma Tsunami Democràtic –que causó la cancelación de 110 de los 780 vuelos programados, según Aena–; así como marchas masivas de varios días desde diversas localidades (Berga, Castelldefels, Girona, Tarragona, Tàrraga y Vic) y que confluyeron en Barcelona el 18 de octubre en una manifestación multitudinaria en una jornada en que algunos sindicatos convocaron huelga general en Cataluña. Se sucedieron también varias noches de disturbios en las ciudades de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, con motivaciones diversas entre sus participantes, según informaciones de prensa. Organizaciones de derechos humanos denunciaron uso excesivo de la fuerza durante las cargas policiales y actuaciones que contribuían a aumentar la tensión, tanto de Policía Nacional como de Mossos d’Esquadra, policía autonómica. El Ministerio de Interior cifró en cerca de 200 las personas detenidas en los primeros siete días de protestas, así como en 600 los heridos, de los cuales –según las mismas fuentes– 289 eran agentes de policía. Hubo diversos heridos de gravedad, incluyendo entre otros un joven atropellado por un furgón de los Mossos y varios civiles que perdieron la visión de un ojo. 70 periodistas resultaron heridos, un 69% de ellos a causa de actuaciones de los cuerpos

policiales, según el observatorio de medios Mèdia.cat. La comisaria para los derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, expresó preocupación por las numerosas denuncias de agresiones contra periodistas, por manifestantes y por agentes de la Policía, y por el contexto de inseguridad para los periodistas que cubrían el conflicto, así como por las alegaciones de uso desproporcionado de la fuerza y de uso inapropiado de armas antidisturbios. La comisaria condenó con firmeza los ataques violentos y los actos de vandalismo y al mismo tiempo instó a las autoridades españolas a reconsiderar el uso de balas de goma y balas de foam. En los últimos meses del año hubo nuevas protestas. Entre ellas, en noviembre, varios miles de manifestantes convocados por Tsunami Democràtic cortaron la autopista AP-7 en La Jonquera y bloquearon durante 24 horas el paso fronterizo con Francia, en rechazo a la sentencia y apelando a la comunidad internacional a que inste al Gobierno español a dialogar sobre el conflicto de Cataluña. 20 personas fueron detenidas, 19 de ellas por la Gendarmería francesa, y posteriormente puestas en libertad, algunas con cargos y medidas cautelares. Tsunami Democràtic también convocó una acción de protesta antes y durante el partido de fútbol entre los clubs FC Barcelona y Real Madrid CF el 18 de diciembre, en defensa de “derechos, libertad y autodeterminación” e instando al Gobierno español al diálogo.

En una declaración pública el 19 de noviembre, la ONG internacional de derechos humanos **Amnistía Internacional expresó su preocupación por la definición del delito de sedición del Código Penal español, que consideraba muy general, así como por la interpretación extensiva de ese delito realizada por el Tribunal Supremo, lo que para Amnistía Internacional suponía una vulneración del principio de legalidad** –contenido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos–, permitiendo la criminalización de actos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica. En el caso de Sànchez y Cuixart, Amnistía Internacional consideró que la sentencia condenatoria restringía excesiva y desproporcionadamente sus derechos de libertad de expresión y libertad pacífica y urgió a las autoridades españolas a que fueran puestos en libertad y que garantizaran fórmulas que permitieran anular la condena. Respecto a los ex miembros del Gobierno y del Parlamento, señaló que pudieron haber cometido algún delito legítimamente condenable en virtud del cargo que ejercían, pero que debido a la vaga definición del delito que se les imputaba y la interpretación excesiva de este, la sentencia vulneraba el principio de legalidad. Por ello, instó a las autoridades españolas a que en los eventuales recursos legales que planteen las personas condenadas, se tenga en cuenta debidamente la vulneración del principio de legalidad.

Durante el año continuaron en marcha otros procesos judiciales. Así, el presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, se enfrentó a una pena de inhabilitación en el juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acusado de un delito de desobediencia por no retirar

una pancarta con lazos amarillos, símbolo en defensa de la libertad de los presos independentistas, en el Palau de la Generalitat en precampaña electoral, desoyendo la orden de la Junta Electoral Central. En noviembre Torra asistió a la primera vista del juicio. Por otra parte, la Audiencia Nacional fijó para enero de 2020 el inicio del juicio al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el exdirector de los Mossos, Pere Soler, el exsecretario general de Interior, César Puig, acusados de delito de rebelión, y la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana, acusada de sedición, por no haber impedido el referéndum del 1 de octubre ni las protestas ante la Consejería de Economía el 20 y 21 de septiembre de 2017. A su vez, entre otros procesos judiciales en marcha, en noviembre se suspendió el juicio contra los ex miembros de la Mesa del Parlamento y la ex diputada Mireia Boya, que estaba previsto empezase ese mes. Se enfrentan a acusaciones de delito de desobediencia por permitir la tramitación de las leyes del referéndum y de transitoriedad del 6 y 7 de septiembre de 2017. La condición de aforado de Joan Josep Nuet tras resultar elegido como diputado en el Congreso llevó a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) remitiese su caso al Tribunal Supremo, mientras el TSJC mantuvo su competencia para juzgar al resto de acusados y ordenó un nuevo señalamiento para llevar a cabo el juicio oral, que se celebraría en 2020.

En el ámbito judicial internacional, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en diciembre que Oriol Junqueras, líder político independentista y candidato electo en las elecciones del Parlamento europeo de mayo de 2019 –en prisión preventiva desde noviembre de 2017– tenía inmunidad como parlamentario europeo desde la proclamación de los resultados, lo que requería su excarcelación. No obstante, la Corte señaló que correspondía al Tribunal Supremo apreciar los efectos aparejados a la inmunidad en otros procedimientos, en referencia a la causa judicial contra Junqueras por el referéndum del 1 de octubre, con sentencia desde el 14 de octubre. A partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal Supremo decidirá cómo aplicarla, lo que se preveía para inicios de 2020. A su vez, horas después de la sentencia de la corte europea, el Parlamento europeo autorizó en diciembre la entrada del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del ex consejero de Salud Toni Comín, ambos elegidos como europarlamentarios en los comicios de mayo –retirando su prohibición impuesta desde la reactivación de la euroorden–, por lo que su toma de posesión de los escaños tendrá lugar en enero de 2020.

En el ámbito político, en el marco de las negociaciones para la investidura de un nuevo gobierno en España tras las elecciones parlamentarias de noviembre de 2019, el año finalizó con previsión de acuerdo de investidura entre los partidos ERC y PSOE, a ratificarse en los primeros días de enero de 2020, que incluiría la constitución de una mesa de diálogo entre gobiernos y una consulta a la población de Cataluña sobre los acuerdos que se alcancen en esa mesa, según trascendió a finales de

diciembre. Como parte del acuerdo, a través de su abstención ERC facilitaría la investidura de un gobierno de coalición de PSOE y Podemos. Por su parte, JxCAT advirtió de que este partido no se sentía vinculado al acuerdo entre PSOE y Podemos y acusó a ERC de debilitar el independentismo. En relación al diálogo entre los gobiernos catalán y español, ambos ejecutivos dieron por roto el diálogo en febrero de 2019 e intercambiaron acusaciones cruzadas. El 20 de diciembre de 2018, tras una breve reunión entre los presidentes de los Gobiernos español y catalán, Pedro Sánchez y Quim Torra, en el Palau de Pedralbes, ambos gobiernos habían emitido la llamada Declaración de Pedralbes. Según el texto, ambos gobiernos convenían en afirmar que existía un conflicto sobre el futuro de Cataluña; defendían un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con apoyo amplio en la sociedad catalana; que debían potenciarse espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica; y que la vía del diálogo requiere del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía. Ambos gobiernos difirieron en la valoración sobre el alcance de la declaración y sus acentos.

Precedían a la declaración meses de acercamientos y desencuentros entre los dos ejecutivos tras la llegada en junio de 2018 al Gobierno del PSOE después de una moción de censura contra el Partido Popular, apoyada por las formaciones independentistas ERC y PDeCAT. En enero de 2019 se produjeron varias reuniones a nivel ministerial, que debían permitir avanzar en el despliegue de la Declaración de Pedralbes, incluyendo la propia arquitectura del diálogo. Las negociaciones abordaban la creación de una mesa de diálogo entre partidos para canalizar los asuntos más políticos, que se complementarían con la comisión bilateral Generalitat-Estado, enmarcada en el Estatuto de Cataluña y reactivada el 1 de agosto de 2018 –paralizada desde julio de 2011. Trascendieron desacuerdos entre los dos gobiernos sobre la composición de la mesa de partidos en que iba a consistir el esquema de diálogo basado en la declaración de Pedralbes. Aun así, a principios de febrero el Gobierno español aceptaba la inclusión de una figura que “diera fe” de que lo pudiese ocurrir en la mesa de partidos, en referencia a la demanda de ERC y JxCAT de un relator. Las discusiones en torno a una figura intermediaria y, en su conjunto, el diálogo entre ejecutivos, generaron fuertes críticas de los partidos PP y Ciudadanos, que lo calificaron como una traición a la unidad de España y convocaron una manifestación contraria al diálogo sobre Cataluña, que tuvo lugar el 10 de febrero y que congregó 45.000 personas según la Policía –200.000 según los convocantes.

Además de las presiones de los partidos de la oposición política, el diálogo transcurría influido por el contexto político de negociaciones para la aprobación de los presupuestos estatales –y la posición de enmienda a la totalidad de los presupuestos por parte de ERC y

PDeCAT–, así como de la situación de prisión preventiva de los líderes sociales y políticos catalanes y el inicio de la fase oral del juicio contra ellos. Ya antes de la celebración de la manifestación, los gobiernos catalán y español dieron por fracasadas las negociaciones. El Gobierno español del PSOE responsabilizó al Gobierno catalán de la suspensión del diálogo por rechazar el marco en que se había planteado el diálogo y que, según el Gobierno español, excluía desde el principio la autodeterminación de Cataluña y un referéndum contrario al marco constitucional. El Gobierno no dio por terminadas de forma definitiva las conversaciones, pero insistió en que el único marco posible de diálogo era dentro de la legalidad y de la Constitución española. Por su parte, el Gobierno catalán acusó al Gobierno español de abandonar el diálogo y lo atribuyó a las presiones de los partidos de la derecha política. El Ejecutivo catalán reiteró su posición de que la mesa de partidos del esquema de diálogo debía materializarse al nivel estatal. Además, achacó al Gobierno español falta de valentía para concretar en la práctica los mecanismos de diálogo, así como prisas por cerrar un acuerdo que aún no estaba listo. Señaló que seguirían sentándose en la mesa de negociaciones. Por otra parte, durante el año se celebró solo una reunión, en febrero, de la mesa de diálogo de los partidos catalanes, convocada por primera vez en noviembre de 2018 por el presidente de Cataluña como un espacio paralelo al de las negociaciones entre los gobiernos español y catalán, y en la que rehusaron participar el PP, Ciudadans y la CUP. En la reunión de febrero de este espacio de diálogo, el presidente catalán hizo público el documento de 21 puntos que había entregado al presidente del Gobierno español en la breve reunión que mantuvieron ambos en diciembre de 2018. Entre otros puntos, el documento reclamaba el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña y hacerlo efectivo, una mediación internacional y el fin de las amenazas de la aplicación del artículo 155, entre otras.

Rusia y Cáucaso

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj

Síntesis:

La tensión entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente de facto– está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Éste comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre esta y su vecina Armenia. El

conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego.

La situación de seguridad en torno a la línea de alto el fuego mejoró significativamente,

en consonancia con la evolución de finales de 2018, y en contraste con años anteriores, reduciéndose los niveles de tensión entre Armenia y Azerbaiyán. Según la base de datos de ACLED, en 2019 hubo una quincena de víctimas mortales relacionadas con el conflicto –lo que supone una reducción frente al medio centenar del año anterior–, así como diversos heridos. Las víctimas, miembros de las fuerzas de seguridad de ambos países, se produjeron por violaciones del alto el fuego en torno a la militarizada Línea de Contacto. Durante el año los Gobiernos de Armenia y Azerbaiyán se comprometieron a fortalecer el alto el fuego y el mecanismo de comunicación directo adoptado en 2018 para facilitar la prevención de incidentes. No obstante, no hubo aún compromiso para un acuerdo práctico de ampliación del limitado equipo de observadores de la OSCE que supervisa el alto el fuego. En algunos momentos del año se registraron incrementos de incidentes de seguridad, como en junio, lo que llevó a los co-mediadores a instar a las partes a abstenerse de acciones provocativas, incluyendo el uso de francotiradores. En medio de la carrera armamentística que aún afecta a la región (gasto militar del 4,8% del PIB en 2018 en Armenia, 3,8% en 2017; 3,8% en Azerbaiyán, igual que en 2017), ambos países llevaron a cabo ejercicios militares, criticándose mutuamente. Entre ellos, en marzo Azerbaiyán movilizó a 10.000 tropas, 500 tanques y 300 sistemas de misiles, entre otro equipamiento militar, en ejercicios de gran escala durante cinco días, poco antes de la cumbre de marzo entre los líderes armenio y azerbaiyano, lo que generó críticas del Gobierno armenio.

Por otra parte, se incrementó la tensión política en algunos momentos en torno a visitas a Nagorno-Karabaj de cargos políticos de Armenia, como el viaje en febrero del director del Servicio Nacional de Seguridad, que expresó su apoyo a nuevos asentamientos armenios en Nagorno-Karabaj –política muy criticada por Azerbaiyán por las dificultades que añade para un eventual acuerdo sobre el estatus del territorio y para el retorno de la población azerbaiyana de Nagorno-Karabaj desplazada por la guerra. La visita en agosto del primer ministro armenio, Nikol Pashinian, a Nagorno-Karabaj, en el marco de la cual Pashinian afirmó que Nagorno-Karabaj era una región armenia, también desencadenó críticas de Azerbaiyán. Por su parte, el presidente azerbaiyano, Ilhan Aliyev, afirmó en noviembre que Nagorno-Karabaj siempre había sido territorio de Azerbaiyán y acusó a Armenia de genocidio durante la guerra. Por otra parte, Nagorno-Karabaj celebró elecciones locales en septiembre, sin reconocimiento internacional. Asimismo,

se deterioraron las relaciones entre las autoridades de Nagorno-Karabaj y el Gobierno de Armenia.

Rusia (norte del Cáucaso) ³⁴	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Sistema, Identidad, Gobierno Interno
Actores:	Gobierno federal ruso, gobiernos de las repúblicas de Daguestán, Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)
Síntesis:	El norte del Cáucaso es escenario de diversos focos de tensión, incluyendo en forma de conflictividad armada que enfrenta a fuerzas de seguridad federales y locales, por un lado, y a actores insurgentes yihadistas, por otro. La violencia es resultado de un cúmulo de factores, incluyendo la regionalización e islamización de la insurgencia procedente de Chechenia –república escenario de dos guerras, entre 1994-1996 y entre 1999 y principios del siglo XXI–, así como del impacto de políticas de persecución contra el islam salafista, graves violaciones de derechos humanos, déficits de gobernabilidad y malestar social. A lo largo de los años se establecieron estructuras armadas locales en repúblicas como Daguestán, Chechenia, Ingushetia y Kabardino-Balkaria, conectadas regionalmente a través del llamado Emirato Caucásico. A partir de finales de 2014 diversos comandantes del norte del Cáucaso proclamaron su lealtad a ISIS, escindiéndose del Emirato Caucásico y estableciendo una rama caucásica vinculada a ISIS (Vilayat Kavkaz). Además, una parte de la insurgencia se desplazó a Siria e Iraq, uniéndose a diversos grupos armados. Los niveles de violencia han ido fluctuando en las diversas repúblicas, considerados como conflicto armado en el caso de Daguestán entre los años 2010 y 2017, y en el conjunto del norte del Cáucaso la violencia armada ha remitido en los últimos años. A la violencia armada se añaden otros ejes de tensión, como las graves violaciones de derechos humanos, especialmente contra activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes, así como las disputas en torno a cuestiones fronterizas, tensiones interétnicas, rivalidades por el poder político y violencia de corte criminal.

El norte del Cáucaso continuó afectado por múltiples ejes de tensión, incluyendo conflictividad armada entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia vinculada a ISIS, con un descenso en las víctimas mortales respecto a años anteriores. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo numerosas operaciones contrainsurgentes en la región y declararon medidas de régimen antiterrorista, mientras la insurgencia perpetró diversos ataques, incluyendo contra puestos de policía. El balance de víctimas fue de una treintena entre enero y noviembre, según el portal independiente Caucasian Knot. A diferencia de años anteriores, en los que Daguestán era la república con mayor número de fallecidos, en 2019 Kabardino-Balkaria fue la más afectada en términos de mortalidad, con una docena de fallecidos, en su práctica

totalidad miembros de la insurgencia regional. Le siguió Daguestán, con una decena de insurgentes fallecidos, y Chechenia, con ocho víctimas mortales. La mitad eran insurgentes y la otra mitad, miembros de las fuerzas de seguridad. En otras zonas, como Ingushetia y la región de Stavropol, también hubo fallecidos y heridos. ISIS reivindicó diversos ataques, incluyendo contra varios policías en la capital de Chechenia en junio y contra un puesto de Policía en julio en el distrito de Achkhoy-Martan (Chechenia), que causaron varias víctimas mortales y heridos. Las autoridades rusas detuvieron a diversas personas acusadas de pertenecer a ISIS y planificar ataques. A su vez, un ex comandante checheno de la segunda guerra de Chechenia, Zelimkhan Khangoshvili, fue asesinado en Berlín en agosto. Círculos próximos a la víctima apuntaron a una conexión entre su muerte y los servicios de seguridad rusos. Por otra parte, en noviembre fue asesinado en Moscú el jefe del Centro para el Combate contra el Extremismo de Ingushetia, ataque que algunos medios atribuyeron a un conflicto entre la víctima y sectores próximos al jeque Batal-Khadji, uno de cuyos líderes fue asesinado en 2018.

Por otra parte, **la región continuó afectada por la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias y secuestros, con nuevas denuncias sobre abusos en 2019.** El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa condenó en marzo el uso extendido de tortura y malos tratos contra personas detenidas en Chechenia. Asimismo, la organización rusa Red LGTBI denunció en enero detenciones y tortura por parte de las autoridades chechenas contra hombres gays y mujeres lesbianas, con cifras de 40 detenidos y dos personas fallecidas. Por otra parte, en junio fue puesto en libertad, tras 18 meses en prisión, el director de la rama chechena de la organización de derechos humanos Memorial, Oyub Titiyev, sentenciado en marzo a cuatro años de cárcel con cargos denunciados como falsos por organizaciones de derechos humanos. Por otra parte, se incrementó la tensión política y social en torno al pacto de 2018 entre Chechenia e Ingushetia para la demarcación fronteriza. Miles de ciudadanos ingushetios protestaron en marzo, reclamando un referéndum sobre el pacto y la dimisión del presidente ingushetio Ynus-Bek Yevkúrov, con varios heridos en choques con las fuerzas de seguridad, redadas y detenciones. Yevkúrov dimitió en junio. Las negociaciones paralelas entre Chechenia y Daguestán para su demarcación fronteriza también se vieron afectadas por la tensión en Ingushetia y protestas en Daguestán, y ambas autoridades anunciaron la suspensión del proceso en abril. Asimismo, también hubo tensión social en Daguestán en torno a las movilizaciones en Meusisha contra la construcción de un nuevo canal, con varios heridos en choques con la Policía y el servicio federal de seguridad. Por otra parte, la situación de conflictividad en el norte del Cáucaso transcurrió en un contexto general de tensión política

34. En anteriores ediciones de este informe se analizaban por separado las tensiones Rusia (Daguestán) y Rusia (Chechenia).

y social en Rusia en 2019 en torno a las elecciones locales de septiembre, con protestas masivas en julio y agosto en Moscú y detenciones de gran escala.

Sudeste de Europa

Serbia – Kosovo	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Internacional ³⁵
Actores:	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX

Síntesis:

La tensión entre Serbia y Kosovo está asociada al proceso de determinación del estatus político de la región tras el conflicto armado de 1998-1999, que enfrentó al grupo armado albanés ELK contra el Gobierno serbio y a la OTAN contra este último, tras años de represión del régimen de Slobodan Milosevic contra la población albanesa de la entonces provincia de Serbia en el marco de la federación yugoslava. La ofensiva de la OTAN, no autorizada por la ONU, dio paso a un protectorado internacional. En la práctica, Kosovo quedó dividido sobre líneas étnicas, con un incremento de las hostilidades contra la comunidad serbia, cuyo aislacionismo fue a su vez potenciado desde Serbia. El estatus final del territorio y los derechos de las minorías han sido eje de tensión continua, a lo que se añaden los problemas internos de Kosovo (ej. paro, corrupción, criminalidad). El proceso de determinación del estatus final, iniciado en 2006, no logró un acuerdo entre las partes ni el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la propuesta del enviado especial de la ONU. En 2008, el Parlamento de Kosovo proclamó la independencia del territorio, rechazada por la población serbia de Kosovo y por Serbia.

La tensión entre Serbia y Kosovo se mantuvo elevada, en un contexto de proceso de diálogo paralizado y en el que Serbia puso a su Ejército en alerta de combate junto a la frontera, mientras en Kosovo se incrementó la inestabilidad política. Kosovo mantuvo en vigor en 2019 la imposición de aranceles del 100% a la importación de productos de Serbia. Esta medida, adoptada en 2018 en protesta por la campaña de Serbia contra el reconocimiento internacional de Kosovo, desencadenó a finales de 2018 el incremento de tensión entre ambos, la paralización de las negociaciones, así como la dimisión de los alcaldes serbokosovares de las cuatro localidades de mayoría serbia del norte de Kosovo, generando un vacío de poder. El mantenimiento de los aranceles en 2019 profundizó la disputa entre Kosovo y Serbia y entre Kosovo y las áreas serbias de Kosovo. Las autoridades kosovares convocaron elecciones

La tensión entre Serbia y Kosovo se mantuvo elevada, en un contexto de cancelación del diálogo bilateral y de inestabilidad política en Kosovo

extraordinarias municipales en el norte de Kosovo para el 19 de mayo. La negativa de la Comisión Electoral Central en abril a validar las candidaturas del partido serbokosovar Lista de Serbia generó críticas de los afectados y del Gobierno de Serbia, mientras la medida fue finalmente revocada. La Lista de Serbia obtuvo el 90% de los votos en los cuatro municipios kosovares de mayoría serbia. En julio los comercios serbokosovares de los cuatro municipios llevaron a cabo una huelga de dos días en protesta por los aranceles. A su vez, el primer ministro kosovar, Ramush Haradinaj, cesó en abril al ministro serbokosovar de Administración del Gobierno local, Ivan Todosijevic, tras describir éste a la población albanokosovar como terrorista y acusarla de denunciar falsos crímenes en la guerra.

La tensión entre Kosovo y Serbia también se incrementó tras una operación en mayo de la policía de Kosovo contra el contrabando y la delincuencia organizada en diversas zonas del norte de Kosovo, que se saldó con 29 detenidos, incluyendo 19 policías locales y dos funcionarios de la misión de la ONU en Kosovo, UNMIK, en el marco de la cual resultaron heridas una docena de personas, incluyendo 10 civiles. En respuesta **el Gobierno de Serbia denunció que la operación estaba diseñada para intimidar a la población serbia del norte de Kosovo y que constituía una amenaza a la estabilidad y la paz. Además, ordenó a las tropas del Ejército serbio junto a la frontera situarse en alerta de combate** para proteger a la población serbia si la tensión escalaba. El presidente serbio advirtió de que si se producía una escalada del conflicto o un ataque contra la población serbia, el Estado serbio resultaría victorioso. El presidente kosovar instó a la población serbokosovar a mantener la calma y apoyar a la Policía. Por su parte, la misión de la OTAN en Kosovo, KFOR, llamó a la calma y afirmó que seguía de cerca la situación. La ONU señaló que en la detención de los dos funcionarios de la UNMIK –liberados posteriormente– no se había respetado la inmunidad que les aplica y anunció una investigación sobre los hechos. La tensión se mantuvo elevada en meses posteriores. Trascendió la supuesta negativa de la Policía de Kosovo de permitir la entrada a Kosovo a personas con pasaporte de Serbia. El ministro de Defensa de Serbia denunció en julio que las autoridades kosovares le habían impedido entrar en Kosovo. El Gobierno kosovar negó que hubiera ninguna medida de prohibición.

También aumentó la incertidumbre política en Kosovo. **El primer ministro Ramush Haradinaj dimitió en julio tras ser citado por las Salas Especializadas y la Fiscalía Especializada, órganos del sistema judicial de Kosovo, de composición internacional y con sede en La Haya, que investigan crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes cometidos en el**

35. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

periodo del conflicto armado, entre 1998 y 2000, relativos a las alegaciones contenidas en un informe del Consejo de Europa sobre crímenes perpetrados por combatientes de la guerrilla albanokosovar ELK. Desde 2018 y hasta noviembre de 2019, la Fiscalía Especializada había citado en torno a un centenar de ex combatientes para ser interrogados, incluyendo Haradinaj. La coalición en el Gobierno rechazó la designación de un nuevo primer ministro, lo que llevó a la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas en octubre. El partido nacionalista albanokosovar Vetevendosje (Autodeterminación) obtuvo la victoria (26% de los votos). Se ordenó el recuento en la mitad de los colegios electorales de Kosovo y se invalidaron más de 3.700 votos depositados en Serbia. Los resultados supusieron un vuelco del mapa político de Kosovo, quedando el PDK fuera de la opción de gobierno por primera vez desde la declaración de independencia de Kosovo en 2008.

2.3.5. Oriente Medio

Golfo

Irán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La tensión se enmarca en un contexto político caracterizado por la polarización, desde hace décadas, entre sectores conservadores y reformistas en Irán, y por el papel clave que juegan las autoridades religiosas y los cuerpos armados –en particular la Guardia Republicana– en el devenir de Irán. La tensión interna se agudizó a mediados de 2009, cuando Ahmadinejad fue reelegido en unos comicios denunciados como fraudulentos por la oposición que motivaron las mayores protestas populares en el país desde la revolución islámica de 1979. El fin de los dos mandatos consecutivos de Ahmadinejad y la llegada al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani en 2013 parecieron abrir una nueva etapa en el país, despertando expectativas respecto a una posible reducción de la tensión política interna y sobre un eventual cambio en las relaciones de Irán con el exterior. No obstante, las tensiones internas persisten.

Durante 2019 Irán registró la mayor convulsión interna de la última década, después de que multitudinarias protestas motivaran una durísima represión por parte de las fuerzas de seguridad con un saldo de más de 300 personas fallecidas. Las movilizaciones populares contra un alza en el precio de los combustibles se iniciaron a mediados de noviembre y hasta finalizar el año se contabilizaban 304 víctimas mortales, según un balance hecho público por Amnistía Internacional a

mediados de diciembre. El Gobierno anunció el 15 de noviembre un sorpresivo aumento de 50% en el precio de los combustibles, alentando manifestaciones masivas en diversas ciudades de Irán, en las que participaron unas 200.000 personas, según cifras oficiales, y que involucraron bloqueos de carreteras y ataques a tiendas y bancos, entre otras acciones. El régimen respondió con un bloqueo casi total de internet y con una dura represión, que supuso numerosas muertes en pocos días. Medios de prensa informaron que solo en una localidad, en Mahshahr (noroeste), un centenar de personas murieron –incluyendo muchas personas de la minoría árabe que habita la zona– después de que las fuerzas de seguridad dispararan directamente a los manifestantes. **Naciones Unidas denunció violaciones a los derechos humanos y a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, alertó sobre la falta de transparencia sobre las víctimas de la represión y expresó su preocupación por las al menos 7.000 personas arrestadas** en 28 de las 31 provincias iraníes desde mediados de noviembre. Respecto a esto último, se alertó sobre posibles maltratos físicos, vulneraciones al debido proceso, confesiones forzadas y por la posibilidad de que muchas de las personas detenidas enfrenten cargos y penas castigadas con la pena de muerte en Irán. Amnistía Internacional también denunció intimidaciones, amenazas e incluso extorsiones a las familias de las víctimas.

Diversos análisis resaltaron la dura respuesta del régimen a las movilizaciones, más contundente que la de otros episodios de contestación recientes: unas 70 personas murieron en el marco de las protestas del llamado Movimiento Verde contra la reelección de Mahmoud Ahmadinejad en 2009 y unas dos docenas fallecieron en las protestas que denunciaron la situación económica del país entre diciembre de 2017 y enero de 2018. **Las autoridades iraníes denunciaron las recientes movilizaciones como producto de una conspiración de enemigos externos**, subrayando la coordinación en algunos de los ataques a infraestructuras clave –incluyendo puertos, silos y refinerías– considerados como no habituales en el modus operandi de las protestas en el país. La reacción del régimen iraní se enmarca, por tanto, en el clima general de pugnas geoestratégicas y de tensiones internacionales y regionales que protagoniza Teherán y que se materializa en diversos enfrentamientos indirectos.³⁶ En esta línea, las autoridades iraníes también subrayaron la coincidencia con las protestas y convulsión durante 2019 en Iraq y Líbano –países en los que Teherán tiene un destacado ascendiente–, alimentando las sospechas de que se trataba de una campaña orquestada para desestabilizar la zona de influencia iraní.³⁷ Algunos análisis puntualizaron que si bien no se puede descartar una intervención externa en la convulsión en Irán, existe desde hace años frustración por un sistema político que percibe el disenso como traición y una extendida preocupación

36. Véase los resúmenes sobre Irán – EEUU, Israel y el de Israel-Siria-Líbano en este capítulo y el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

37. Véase resúmenes sobre Iraq y Líbano en este capítulo.

social por la situación económica del país, con una elevada inflación y problemas de desempleo. Condiciones económicas que se han deteriorado en el último período, además, tras la decisión del Gobierno de EEUU de intensificar su política de sanciones al régimen iraní. En este contexto, algunos análisis alertaron también sobre las consecuencias de las políticas represivas en las provincias que albergan minorías como la árabe o kurda. Otros recordaron que Irán se encuentra en fase preelectoral, con comicios legislativos y presidenciales previstos para febrero de 2020 y 2021, respectivamente.

Multitudinarias protestas en Irán a partir de noviembre motivaron una durísima represión por parte de las fuerzas de seguridad con un saldo de más de 300 personas fallecidas

Irán (noroeste)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Komala, KDP, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG)

Síntesis:

A pesar de la naturaleza heterogénea y multiétnica de Irán, las minorías que habitan el país, entre ellas los kurdos, han sido sometidas a décadas de políticas centralistas y de homogeneización y han denunciado discriminación por parte de las autoridades de la República Islámica. En este contexto, desde 1946 distintos grupos políticos y armados de origen kurdo se han enfrentado a Teherán en un intento por obtener una mayor autonomía para la población kurda, que se concentra en las provincias del noroeste del país. Grupos como el Partido Democrático Kurdo (PDKI) y Komala encabezaron esta lucha durante décadas. Desde 2004 es el Partido por la Vida Libre en Kurdistán (PJAK), vinculado al PKK de Turquía, el que protagoniza el conflicto con Teherán, y su brazo armado, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, se enfrenta periódicamente con las fuerzas iraníes, en particular miembros de la Guardia Revolucionaria. Según trascendió, en 2011 el PJAK y el Gobierno iraní habrían pactado un cese el fuego que comprometería al grupo armado a cesar sus ataques y a las autoridades a suspender la ejecución de prisioneros kurdos, pero las hostilidades y los enfrentamientos de baja intensidad persisten.

Las informaciones sobre el conflicto entre Irán y grupos kurdos que operan en el noroeste del país y en la zona fronteriza con Iraq apuntaron a un relativo descenso en los niveles de violencia en comparación con el año anterior. **Si en 2018 las hostilidades provocaron la muerte de unas 60 personas, los datos relativos a 2019 indican que los diversos hechos de violencia habrían dejado en torno a una decena o quincena de personas fallecidas, según diferentes balances a partir de informaciones de prensa.** Cabe destacar que los incidentes se concentraron principalmente en los meses de verano y que en ocasiones los balances fueron ambiguos o contradictorios. En julio, informaciones de la prensa oficial indicaron que las fuerzas iraníes

habían dado muerte a dos militantes en el área de Chaldoran (provincia Azerbaiyán Occidental). Aunque no se identificó al grupo al que pertenecían, en la zona suelen producirse incidentes protagonizados por el grupo armado kurdo PJAK y fuerzas iraníes. Una semana más tarde se conoció que un ataque armado contra un vehículo militar causó la muerte a tres miembros de la Guardia Revolucionaria en la localidad de Piranshahr (provincia Azerbaiyán Occidental). Días más tarde, en aparente represalia a esta última emboscada, tuvo

lugar una operación en la zona fronteriza que incluyó el uso de cohetes, aviones no tripulados y fuego de artillería. Fuentes oficiales iraníes informaron que en ella habían ejecutado o herido a un gran número de militantes. En agosto, el PJAK reconoció que cuatro de sus combatientes habían fallecido en escaramuzas con las fuerzas iraníes, entre el 8 y el 11 de julio en la provincia de Kermanshan. En estos choques habría muerto también un soldado iraní y otro más habría perdido la vida en nuevas hostilidades registradas en la zona a finales de julio. En este contexto, las autoridades iraníes lanzaron advertencias al Gobierno Regional del Kurdistán sobre el uso de su territorio por parte de grupos armados como base, centro de entrenamiento y espacio desde donde lanzar ataques sobre Irán.

Cabe destacar que, paralelamente, de acuerdo con informaciones de prensa, durante 2019 grupos de la oposición kurda y representantes del gobierno iraní habrían mantenido una serie de reuniones secretas en Oslo en lo que podría ser un primer paso para identificar condiciones para unas negociaciones. Los contactos involucrarían a representantes de dos ramas del Komala Party of Iranian Kurdistan –una tercera facción de Komala, comunista, no tomó parte de la iniciativa– y de dos facciones rivales del Kurdistan Democratic Party (KDP). Según trascendió, los encuentros en Oslo habrían tenido lugar en mayo, junio y agosto en el marco de una iniciativa que estaría siendo facilitada por el Norwegian Center for Conflict Resolution (NOREF). Algunos análisis destacaron que Teherán pretendería disuadir a sectores kurdos de una escalada en Irán, en un contexto geopolítico de crecientes tensiones y en el que se sospecha que la insurgencia kurda estaría recibiendo ayuda de Arabia Saudita y EEUU.

Irán (Sistán Baluchistán)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Guardia Revolucionaria (Pasdaran), grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán

Síntesis:

Sistán Baluchistán es una provincia iraní limítrofe con Afganistán y Pakistán —la población baluchi vive a ambos lados de la frontera— y de mayoría sunní, en contraste con el resto del país, donde predomina la rama chií del Islam. La zona se caracteriza por altos índices de pobreza y es escenario de rutas de contrabando y de tráfico de drogas. Desde 2005 el grupo Jundollah (Soldados de Dios) ha llevado a cabo una campaña insurgente en esta región. La organización, que también se autodenomina Movimiento de Resistencia del Pueblo, fue creada en 2002 y denuncia una persecución sectaria por parte de Teherán. Jundollah asegura que su objetivo es la defensa de los derechos, la cultura y la religión de los baluchis y niega tener una agenda separatista y vínculos con el exterior, como le acusa el Gobierno iraní, que le atribuye conexiones con EEUU, Reino Unido, Pakistán, Arabia Saudita y con la red al-Qaeda. Ante la posibilidad de desestabilización de esta zona, Teherán ha reforzado sus dispositivos de control y ha condenado a muerte a decenas de militantes de Jundollah. Las acciones del grupo insurgente se han reducido desde 2010, tras la captura y ejecución de su líder, pero nuevos grupos armados con una agenda similar a la de Jundollah, entre ellos Jaish al-Adl (Ejército de la Justicia) han continuado operando en la zona y protagonizando esporádicos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La tensión protagonizada por las fuerzas de seguridad iraníes y grupos insurgentes en la provincia de Sistán Baluchistán continuó motivando periódicos hechos de violencia en 2019 con un saldo de víctimas mortales superior al del año anterior. **La región fue escenario de un episodio especialmente cruento a principios de año, en febrero, cuando un ataque suicida provocó la muerte de 27 miembros de la Guardia Revolucionaria y dejó heridos a otros 13.** La ofensiva, la más cruenta en años, fue reivindicada por el grupo armado Jaish al-Adl o Ejército de Justicia. Previamente, en enero, otro incidente que involucró a un escuadrón de desactivación de explosivos en la capital de la provincia, Zahedan, dejó a tres militares heridos —un segundo artefacto estalló mientras intentaban neutralizar el primero. Tras los hechos de febrero el Gobierno iraní amenazó con venganza, acusó a los perpetradores del ataque de mercenarios e insistió en vincular las actividades de grupos insurgentes en el país con el apoyo de potencias foráneas. Funcionarios iraníes señalaron principalmente a EEUU, Arabia Saudita e Israel y destacaron que el ataque se produjo el mismo día en que el Gobierno estadounidense celebraba una conferencia sobre Medio Oriente en Polonia en la que participaron 60 países y que estuvo centrada en la discusión de fórmulas para intensificar las presiones a Irán. En los meses siguientes y tras un período de tensiones e intercambio de acusaciones mutuas por sucesivos ataques armados en la zona fronteriza, **Irán y Pakistán anunciaron en abril la formación de una fuerza conjunta de reacción rápida para actuar contra milicias insurgentes que operan en la zona.** En marzo, Teherán había solicitado a Islamabad que actuara decisivamente para neutralizar la actividad de grupos insurgentes responsables de ofensivas en

Irán. Según trascendió, entre los perpetradores del atentado de febrero el Gobierno iraní identificó a tres ciudadanos pakistaníes, entre ellos el atacante suicida. En abril, después de un ataque contra un autobús que dejó 14 personas fallecidas en la provincia pakistaní de Baluchistán por parte de un nuevo grupo armado baluchi (Balochi Raji Aajori Saangar o BRAS), el Gobierno de Islamabad había asegurado contar con evidencias de que la organización poseía campos de entrenamiento en territorio iraní. A mediados de año, un nuevo hecho de violencia en la zona de Saravan dejó otros dos militares fallecidos, un miembro de la Guardia Revolucionaria y otro de la milicia Basij.

Irán – EEUU, Israel³⁸

Intensidad: 3

Evolución: ↑

Tipología: Sistema, Gobierno Internacional

Actores: Irán, EEUU, Israel

Síntesis:

Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Khomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del “eje del mal” y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, despertó expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015. En los últimos años la retirada de EEUU del acuerdo en 2018 y la intensificación de su política de sanciones, el progresivo alejamiento de Irán de los compromisos adquiridos en el acuerdo y un convulso contexto regional han agravado la tensión y dificultaban la búsqueda de una salida a esta disputa.

Tras la intensificación de la tensión en 2018 debido a la decisión de EEUU de retirarse del pacto en torno al programa nuclear iraní —el Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) suscrito en 2015—, la situación se agravó significativamente en 2019. **Durante el año se constató una ampliación de la política de sanciones unilaterales a Irán por parte de EEUU, un progresivo alejamiento de Teherán de algunos de los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo y una**

38. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

serie de incidentes en Oriente Medio que propiciaron un escenario volátil y peligrosamente favorable a una escalada militar. Durante el año el régimen iraní intentó presionar a los países que permanecen adheridos al pacto, conocidos como P4+1 (Francia, Reino Unido, China, Rusia y Alemania) para conseguir medidas que permitieran aliviar las sanciones económicas impuestas por Washington. Teherán dictó en mayo un ultimátum de 60 días y amenazó con aumentar el enriquecimiento de uranio. En julio se conoció que Irán había superado las reservas de uranio enriquecido permitido por el JCPOA. Teherán lanzó un nuevo ultimátum, advirtiendo con nuevas vulneraciones al acuerdo. Estas amenazas se concretaron en los meses siguientes en el levantamiento a los límites en investigación y desarrollo nuclear y la activación de las centrifugadoras en la planta de Fordow (al sur de Teherán). En este contexto, la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) encendió la alerta en noviembre, al informar que el país había acumulado más agua pesada del límite previsto en el acuerdo. La UE y los países europeos involucrados en el acuerdo rechazaron los sucesivos ultimátum de Irán y a finales de año alertaron sobre la posibilidad de activar el mecanismo de resolución de disputas previsto en el JCPOA, que podría desembocar en nuevas sanciones a la república islámica. Irán advirtió que si se ponía en marcha este mecanismo reconsideraría sus compromisos con la ONU en materia nuclear.³⁹

Durante 2019 escaló la tensión vinculada al programa atómico iraní a causa de la política de sanciones a Irán por parte de EEUU, el progresivo alejamiento de Teherán de compromisos adquiridos en el acuerdo sobre sus actividades nucleares y una serie de hechos de violencia en Oriente Medio

Paralelamente, a lo largo de 2019 EEUU amplió las sanciones contra la república islámica, incluyendo contra el líder supremo, Alí Khamenei, y en abril designó al cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) como organización terrorista. La medida fue respondida por Teherán, que situó en su lista negra al Comando Central de EEUU (CENTCOM) para Oriente Medio y Asia Central. Los debates y tensiones en torno a la implementación del acuerdo sobre el programa nuclear iraní estuvieron condicionados por el convulso contexto regional y por numerosos incidentes, en particular en las aguas del Golfo. En mayo fueron atacados cuatro barcos en la costa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) –dos saudíes, un noruego y uno de EAU– en acciones no reivindicadas y en una ofensiva con drones en territorio saudí contra instalaciones petroleras reivindicada por el grupo armado yemení al-houthistas, que motivó acusaciones contra Irán. En junio se encendieron las alarmas por el ataque a dos barcos petroleros (uno japonés y otro noruego) en el Golfo de Omán y el derribo de un avión no tripulado estadounidense, hechos que EEUU atribuyó a Irán.

Teherán negó responsabilidad en el primer incidente y respecto al segundo aseguró que la nave de EEUU había violado su espacio aéreo. **Medios de prensa informaron entonces que el presidente estadounidense había aprobado ataques militares contra Irán en respuesta al derribo del dron, pero que se retractó horas después.** Donald Trump explicó posteriormente su decisión por el impacto desproporcionado que habría tenido el ataque estadounidense. En julio se informó del derribo de otro avión no tripulado, esta vez iraní, por parte de EEUU.

Uno de los hechos con mayor repercusión se produjo en septiembre, cuando las instalaciones de la planta petrolera operada por la compañía estatal saudí Aramco en Abqaiq y Khurais (Provincia Oriental) resultaron seriamente dañadas por un ataque con misiles y drones, forzando temporalmente la suspensión del 50% de la producción petrolera saudí. Aunque el grupo armado yemení al-houthistas reivindicó la ofensiva, EEUU, Arabia Saudita y los países europeos del E3 (Alemania, Francia y Reino Unido) responsabilizaron a Irán de la agresión. Teherán negó tener ningún vínculo con la ofensiva y amenazó con represalias masivas en caso de ataques. En diciembre, una nueva escalada de violencia entre Washington y Teherán, que se materializó en una serie de hechos de violencia en Iraq y en un ataque aéreo estadounidense que resultó en la muerte del alto general iraní,

Qassem Suleimani, en los primeros días de enero de 2020, encendieron aún más las alarmas sobre la deriva de esta confrontación.⁴⁰

Cabe destacar que a lo largo de 2019 EEUU anunció también un mayor despliegue de fuerzas en Oriente Medio –incluyendo fuerzas aéreas, navales y sistemas de defensa antimisiles– con el argumento de una mayor percepción de amenaza por parte de Irán y promovió un nuevo esquema de seguridad marítima para la zona, al que se sumaron Reino Unido, Australia y Bahrein. Irán, por su parte, lanzó en septiembre su propia iniciativa de seguridad marítima para la zona, apostó por fortalecer los lazos regionales y mantuvo reuniones con EAU sobre asuntos marítimos. En este contexto de tensiones crecientes, el International Institute for Strategic Studies (IISS) publicó un estudio en el que destaca que el balance en términos de fuerzas militares convencionales es favorable a EEUU y sus aliados en la región, pero que el balance efectivo de fuerzas se decanta a favor de Irán debido a su capacidad para recurrir a terceros actores armados no estatales en varios países de la zona. IISS subraya que a través de esta política Irán ha evitado una confrontación directa con sus adversarios y que su capacidad de movilización de distintas milicias le permitiría contar con una fuerza de unos 200.000 efectivos.

39. Véase el resumen sobre Irán (nuclear) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020, Análisis de tendencias y escenarios*. Icaria: Barcelona, 2020.

40. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Mashreq

Egipto	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En el marco de las llamadas “revueltas árabes”, las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas, Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban una nueva posición de poder y el estamento militar que deseaba garantías de preservación de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

La situación en Egipto continuó caracterizándose por la **consolidación de la deriva autoritaria del Gobierno de Abdel Fattah al-Sisi y la persistente persecución y represión de las voces disidentes**, en un contexto marcado también por el estado de emergencia vigente en el país desde 2017 debido al conflicto en la península del Sinaí.⁴¹ Durante 2019 el Gobierno impulsó unos polémicos cambios constitucionales que fueron ratificados en abril en un referéndum denunciado por diversas voces por falta de garantías y acusaciones de fraude. **Las modificaciones legales introducidas suponen que al-Sisi puede extender su actual mandato de cuatro a seis años y optar a otros dos períodos, permitiendo su permanencia en el poder hasta 2034.** Adicionalmente, la reforma constitucional permitió a al-Sisi la designación de una serie de autoridades y altos cargos de la judicatura, mermando así el margen de independencia del Poder Judicial y ampliando el poder de los sectores militares en la vida política egipcia. Durante el año el Gobierno también promovió cambios en la cuestionada ley que regula la actividad de las ONG en el país, pero las modificaciones fueron consideradas cosméticas entre sectores de la sociedad civil. ONG internacionales de derechos humanos como

Human Rights Watch (HRW) denunciaron que la nueva normativa mantenía la mayor parte de las restricciones a las ONG. A modo de ejemplo, la ley prohíbe a las ONG realizar investigaciones o estudios de opinión sin autorización del gobierno y participar en actividades percibidas como “políticas” o “lesivas para la seguridad nacional”, y permite el estricto seguimiento de las ONG por parte de las fuerzas de seguridad.

Paralelamente, en 2019 se mantuvo el clima de acoso y persecución a las voces críticas y disidentes, incluyendo a personas del mundo académico, periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas. En los primeros meses del año hubo detenciones de manifestantes que se movilizaron para denunciar la negligencia de las autoridades tras un accidente de tren en el que murieron una veintena de personas. En vísperas del referéndum sobre la reforma constitucional también se produjeron detenciones de al menos 160 activistas que cuestionaron los cambios, según datos de HRW. En un contexto regional marcado por las masivas movilizaciones en países como Sudán o Argelia, al-Sisi advirtió públicamente a la población egipcia sobre los riesgos de las protestas. Durante el segundo semestre, los arrestos masivos se intensificaron después de que un empresario egipcio radicado en España, Mohamed Ali, difundiera en redes sociales críticas contra al-Sisi por mala gestión y abuso de recursos públicos. Las acusaciones –negadas por el mandatario en una alocución televisada– alentaron multitudinarias protestas antigubernamentales en diversas ciudades del país, entre ellas El Cairo, Alejandría, Damietta y Suez y una repuesta represiva de las fuerzas de seguridad. Así, según diversas fuentes, **entre septiembre y diciembre más de 4.000 personas habían sido arrestadas.** A lo largo de todo el año también se registraron detenciones de personas acusadas de apoyo, financiación o pertenencia a grupos terroristas y **se denunció el extenso uso de la pena de muerte en el marco de juicios colectivos y por cargos vinculados supuestamente con violencia política.** Cientos de personas habrían sido condenadas a la pena capital en procesos militares y civiles, según HRW. Durante el año, al menos 15 personas detenidas por cargos políticos fueron ejecutadas, de acuerdo a los datos del Frente Egipcio por los Derechos Humanos. Expertos de la ONU también alertaron sobre ejecuciones arbitrarias en el país, en al menos nueve casos con indicios de confesiones bajo torturas o juicios irregulares. Durante 2019 **se continuó alertando sobre la situación de las personas detenidas, entre ellas el ex presidente y líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, que murió en prisión en junio.** Expertos de la ONU indicaron que las condiciones de su detención podrían haber conducido al fallecimiento del dirigente islamista. Adicionalmente, Egipto continuó siendo uno de los países más peligrosos para los y las periodistas –una treintena de reporteros permanecían detenidos a finales de 2019, algunos acusados de difundir noticias

41. Véase el resumen sobre Egipto (Sinaí) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

falsas– y las autoridades continuaron con su política de bloqueo a webs de noticias, políticas o de derechos humanos –más de 600 sitios habrían sido cerrados desde 2017, según HRW. Cabe mencionar también que persistió el acoso a activistas por los derechos de las mujeres –incluyendo prohibiciones de viajar fuera del país– y al colectivo LGTBI –personas transgénero fueron detenidas y acusadas de terrorismo, entre otros casos.

Iraq	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Interno internacionalizado Gobierno
Actores:	Gobierno, oposición política y social, Irán, EEUU

Síntesis:

La invasión internacional de Iraq liderada por EEUU en 2003 derivó en el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein y en la configuración de un nuevo sistema político. El nuevo sistema instaurado a instancias de Washington dividió el gobierno en función de líneas sectarias. En este contexto, en los últimos años ha crecido la desafección y frustración ante una clase dirigente percibida como corrupta y motivada por intereses personales y de grupos, a expensas de la calidad de vida de la ciudadanía. Así, desde 2015, se han sucedido las manifestaciones populares –protagonizadas mayoritariamente por jóvenes– que denuncian la corrupción endémica, los déficits de gobernanza, los graves problemas en la provisión de servicios, el desempleo y la falta de perspectivas de futuro. En 2019, las movilizaciones antigubernamentales masivas y la severa represión de las fuerzas de seguridad expusieron la seria crisis política que afronta el país, la falta de legitimidad de sus autoridades y los recelos ante la influencia de actores externos –y en particular a la creciente ascendencia de Irán– en los asuntos iraquíes.

Durante 2019 **Iraq fue escenario de una grave tensión como consecuencia de masivas protestas contra el sistema político, la corrupción, el nepotismo y el mal manejo económico de la clase dirigente que fueron duramente reprimidas, resultando en la muerte de más de 400 personas y en más de 20.000 heridas.** Aunque el país ha vivido periódicas movilizaciones populares desde 2015, los hechos vinculados a las manifestaciones del último año fueron considerados por algunos analistas como los más graves desde la invasión estadounidense del país en 2003. Las protestas – mayoritariamente pacíficas y que en ocasiones congregaron hasta 200.000 personas– fueron también más sostenidas e involucraron a colectivos diversos, entre ellos desempleados, estudiantes, activistas de la sociedad civil y miembros de tribus. La situación puso en evidencia la fragilidad y falta de legitimidad del sistema de gobierno instaurado tras el derrocamiento de Saddam Hussein, el descontento con un modelo de poder basado en divisiones sectarias y la irritación por

la creciente influencia de Irán en algunos sectores de la población iraquí, incluyendo entre shíes. Si bien hubo protestas contra la corrupción que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el sur del país en los primeros meses del año –Najaf, en mayo, y Basora, en junio–, los hechos más significativos se concentraron en el segundo semestre. Las manifestaciones antigubernamentales se intensificaron a principios de octubre y el detonante habría sido la decisión del primer ministro, Adel Abdul Mahdi, de degradar a un popular general, considerado por algunos sectores como un héroe por su papel en la lucha contra ISIS. El hecho de que el general perteneciera a Servicio de Contraterrorismo (CTS) y la relación de competencia del CTS con el conglomerado de milicias de Hashd al-Shaabi –las más poderosas de las cuales están vinculadas con Irán– fue interpretado por algunos sectores como una rendición ante los grupos paramilitares de Hashd.

Las protestas rápidamente ampliaron sus demandas y pusieron el foco de sus críticas en la corrupción, la falta de empleos y las graves carencias en los servicios públicos. **Las movilizaciones en Bagdad y en diversas ciudades del sur del país –que luego se expandieron a otras zonas del norte y centro del país– fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y armas de fuego para dispersarlas.** Manifestantes también atacaron sedes de partidos islamistas shíes y de grupos paramilitares. Así, tan solo en la primera semana de protestas el balance de fallecidos fue de 149 manifestantes y ocho miembros de las fuerzas de seguridad. La dura respuesta de las autoridades no sofocó el movimiento, como tampoco el paquete de medidas anunciado por el gobierno de Mahdi (creación de empleos, castigo a corruptos, ayudas a la población más pobre, cambios en el gabinete) y las movilizaciones continuaron en las semanas siguientes. En este contexto, la mayor autoridad shí del país, el ayatollah Ali al-Sistani –que suele pronunciarse solo en situaciones de grave crisis– denunció la represión y exigió una investigación de los hechos, mientras que el dirigente político y clérigo shí Moqtada al-Sadr expresó su apoyo a los manifestantes y exigió la renuncia del gobierno. Informaciones de prensa aseguraron que el máximo líder de la unidad al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Qassem Soleimani, viajó en noviembre a Bagdad para conseguir un acuerdo que permitiera la continuidad del gobierno. A mediados de ese mes, en tanto, la misión de la ONU en Iraq (UNAMI) propuso una hoja de ruta para resolver la crisis –apoyada públicamente por al-Sistani– que incluía cuestiones como el fin inmediato de la violencia, la liberación de personas detenidas, una investigación sobre la desaparición y excesivo uso de la fuerza contra manifestantes y reformas electorales, entre otras medidas.⁴²

A finales de noviembre, manifestantes incendiaron el consulado de Irán en Najaf, evidenciando el componente crítico a la influencia de Teherán en Iraq entre algunos

42. Véase el capítulo sobre Oriente Medio en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*, Icaria: Barcelona, 2020.

de los sectores movilizados, incluso en zonas de mayoría shíí. Las fuerzas de seguridad y milicias respondieron con dureza y abatieron a 44 personas en Najaf y Nassiriya. Tras estos hechos, al-Sistani pidió al Parlamento que retirara su apoyo a Mahdi. El primer ministro presentó su renuncia y hasta finales de año las fuerzas políticas no habían conseguido acordar la formación de un nuevo gobierno. En diciembre las movilizaciones continuaban, en paralelo a denuncias de ataques y muertes de manifestantes –algunos de ellos a puñaladas– presuntamente a manos de simpatizantes de milicias pro-iraníes o de colaboradores de las fuerzas estatales. La UNAMI alertó de denuncias creíbles sobre asesinatos, secuestros y detenciones arbitrarias a manos de “milicias”, “terceras partes”, “entidades armadas” o “saboteadores” y denunció continuos y severos abusos a los derechos humanos. Según el balance de la UNAMI, desde el 1 de octubre y hasta el 9 de diciembre, la violencia durante las protestas había causado la muerte de 424 personas y heridas a unas 8.758, incluyendo integrantes de las fuerzas de seguridad, aunque esta última cifra se eleva a casi 20.000 si se contabiliza a las personas afectadas por heridas causadas, por ejemplo, por la inhalación de gas. La UNAMI denunció que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, las autoridades iraquíes no permitieron el acceso a estadísticas oficiales hospitalarias sobre los afectados en las manifestaciones ni las visitas para entrevistar a las víctimas. Diversos análisis intentaron aportar claves para entender las dinámicas del movimiento de protesta en Iraq y las dificultades para una pronta solución a la crisis en el país. Entre ellas, se mencionó la extendida desconfianza hacia la clase política y los mecanismos democráticos – en parte a causa de las experiencias de fraude electoral, nepotismo, clientelismo y uso de partidos para proyectos personalistas, entre otros factores–; el elemento generacional –la mayor parte de los manifestantes son menores de 30 años, que representan el 67% de la población y experimentan una frustración creciente ante los fallos de gobernanza en el país–; la respuesta cortoplacista de las autoridades –vinculada a su incapacidad para ofrecer un proyecto de futuro atractivo–; y las dificultades del movimiento de protesta para canalizar sus demandas, orientadas a cambios profundos y estructurales en un sistema político que perciben como corrupto e incapaz de mejorar las condiciones de vida de la población pese a las riquezas petroleras del país. En este contexto, **la escalada de hostilidades entre Washington y Teherán a finales de año, que se materializó en una serie de hechos de violencia en Iraq y la muerte del general iraní Qassem Soleimani en un ataque estadounidense en Bagdad amenazaban con desestabilizar aún más el escenario interno iraquí.**⁴³

Iraq fue escenario de una grave tensión como consecuencia de masivas protestas contra el sistema político, la corrupción, el nepotismo y el mal manejo económico de la clase dirigente que fueron duramente reprimidas, resultando en la muerte de más de 400 personas

Israel – Siria – Líbano

Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán

Síntesis:

La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que se establecieron en el Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado chií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

En línea con lo observado el año anterior, la tensión internacional histórica que involucra a Israel, Siria y Líbano, y progresivamente de una manera más directa a Irán, motivó diversos incidentes que habrían costado la vida a casi un centenar de personas –94 fallecidas a partir de recuentos informales. **La mayor parte de los hechos de violencia vinculados a esta tensión se produjeron en territorio sirio y afectaron la zona de los Altos del Golán –ocupados por Israel desde la guerra árabe israelí de 1967–, pero también otras zonas, como Quneitra, Deir al-Zour, Aleppo, Hama e incluso Damasco.** Así, en enero, ataques aéreos israelíes en el sur de la capital siria sobre instalaciones que pertenecerían a Irán y milicias afines fueron seguidos, en una aparente represalia, por ataques sobre la zona del Golán ocupada por Israel. Las fuerzas israelíes respondieron con un nuevo ataque contra fuerzas de al-Quds –la unidad militar iraní encargada de operaciones extraterritoriales– que habría causado la muerte a 12 personas. Pese a las advertencias de Rusia a Israel sobre sus operaciones en Siria, fuerzas israelíes atacaron nuevamente en febrero un puesto de observación de Hezbollah en Quneitra (sur) y en marzo lanzaron una operación aérea contra un presunto depósito de armas iraníes en Aleppo que habría causado la muerte a varios combatientes iraquíes e iraníes. En abril los ataques israelíes afectaron infraestructuras del régimen sirio en Hama, mientras que en mayo Damasco informó

43. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

de la intercepción de misiles israelíes lanzados desde los Altos del Golán que pretendían alcanzar objetivos iraníes en la capital siria. Los meses de verano fueron escenario de los incidentes más cruentos: ataques aéreos israelíes contra fuerzas progubernamentales sirias, activos iraníes y de Hezbollah en Altos del Golán, Homs y Damasco entre junio y julio habrían causado la muerte de 35 personas, entre ellos al menos siete civiles. En septiembre, un presunto ataque israelí en el este, cerca de la frontera con Iraq, habría provocado la muerte de otros 18 combatientes iraníes e iraquíes. En noviembre, tras interceptar cuatro cohetes lanzados desde el Golán hacia Israel, las fuerzas israelíes lanzaron una ofensiva contra objetivos sirios e iraníes en los que habrían muerto otras 23 personas. En diciembre, otros dos incidentes contra milicias pro-iraníes en la provincia siria de Deir al-Zour dejaron diez fallecidos, en hechos que Hezbollah atribuyó a Israel. Durante el año se informó de otros ataques de Israel destinados a evitar ofensivas con drones desde Siria sobre territorio israelí.

El ataque israelí sobre posiciones de Hezbollah en la capital libanesa, en agosto, encendió las alarmas en 2019

Los incidentes vinculados a esta tensión también afectaron a territorio libanés. **La acción que provocó más alarma durante 2019 fue la ofensiva israelí contra Hezbollah en Beirut, en agosto. Dos aviones no tripulados israelíes lanzaron una ofensiva contra posiciones de Hezbollah en la zona de Dahiyah, bastión del grupo shií al sur de la capital libanesa.** Un día después se informó de otra acción israelí en el este de Líbano contra el Frente Popular de Liberación Palestino (FPLP), organización que también recibe apoyo de Irán. La ofensiva sobre Beirut fue considerada por las autoridades libanesas como una “declaración de guerra” –en palabras del presidente libanés– y como la acción más grave desde la guerra desde 2006, por lo que hicieron un llamamiento a la comunidad internacional a denunciar la flagrante violación de la soberanía del país. El líder de Hezbollah, en tanto, señaló que esta acción hostil ponía en entredicho los términos vigentes desde 2006. En septiembre, de hecho, se produjeron los primeros intercambios de artillería entre Israel y Hezbollah en años, aunque no se registraron víctimas. **Durante 2019 las partes también intercambiaron declaraciones amenazantes. Así, por ejemplo, el líder de Hezbollah alertó sobre la posesión de numerosos misiles con capacidad de golpear a Israel, mientras que altos cargos militares israelíes subrayaron que en una próxima confrontación bélica no deberían hacerse distinciones entre el Gobierno libanés y Hezbollah.** En esta línea, cabe destacar que tras la conformación del nuevo gobierno libanés a principios de año, las autoridades libanesas emitieron una declaración que reivindicaba el derecho de los libaneses a la resistencia frente a la ocupación y agresiones de Israel, en lo que se consideró como una cobertura para las estructuras militares de Hezbollah.

Cabe agregar que los sucesivos informes de la ONU sobre las operaciones de la UNIFIL y la implementación de la resolución 1701 (2006) constataron las sistemáticas

violaciones del espacio aéreo libanés por parte de Israel y también informaron sobre las acciones israelíes para cerrar túneles que atravesaban la llamada Línea Azul, entre otras acciones. Si bien no se registraron avances en las demarcaciones fronterizas, se produjeron algunos contactos destinados a resolver las disputas de límite marítimo entre Líbano e Israel, a instancias de EEUU. Finalmente, cabe destacar que en las dinámicas de esta tensión durante 2019 también influyeron otros posicionamientos de Washington, en particular el decreto firmado en marzo por el Gobierno de Donald Trump que reconoció soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Siria y Líbano rechazaron la medida y Naciones Unidas aseguró que la declaración estadounidense no cambiaba el estatus del Golán.

Líbano	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham

Síntesis:

El asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005 desencadenó la llamada “Revolución del Cedro” que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las Fuerzas Armadas sirias –presentes en el país desde hacía tres décadas– exigida en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por otra parte, sectores más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión entre sectores políticos y sociales libaneses y ha favorecido un significativo incremento de la violencia en el país.

A diferencia de años previos en los que la tensión estuvo determinada sobre todo por la influencia del conflicto armado en la vecina Siria y en particular por hechos de violencia en las zonas fronterizas, **durante 2019 la situación en Líbano estuvo marcada especialmente por masivas movilizaciones antigubernamentales que se intensificaron en la segunda mitad del año.** 2019 se inició con el anuncio del primer ministro, Saad Hariri, sobre la formación de un nuevo gobierno de unidad nacional después de nueve meses de bloqueo tras las elecciones parlamentarias. Tras la aprobación del nuevo Ejecutivo por el Parlamento en febrero, la atención se centró en las reformas económicas y la propuesta de presupuesto del nuevo gobierno, hecho

que activó las primeras protestas contrarias a las medidas de austeridad en mayo. A partir de entonces, se sucedieron las movilizaciones de veteranos militares y funcionarios, entre otros colectivos, y se produjeron algunos choques entre las personas manifestantes y las fuerzas de seguridad. **Las protestas se intensificaron a finales de septiembre y adquirieron una dimensión masiva en octubre, después de que Hariri anunciara un impuesto al uso de la red social WhatsApp como parte del paquete de medidas de austeridad de su gobierno. Las movilizaciones –consideradas como las mayores de la última década– se iniciaron en Beirut, pero se extendieron por todo el país,** denunciando la corrupción y el mal manejo económico de la clase dirigente y exigiendo la renuncia del gobierno. Los manifestantes ocuparon los espacios públicos para sus debates y denunciaron el sistema político confesional imperante en el país. Algunos análisis destacaron como elementos característicos de estas protestas su masividad y naturaleza descentralizada, el apoyo a las manifestaciones en todas las regiones y comunidades, el hecho de que las movilizaciones trascendieran las divisiones confesionales, entre otros elementos.⁴⁴ También se destacó el papel de las mujeres en el movimiento de contestación.⁴⁵

Líbano fue escenario de masivas movilizaciones antigubernamentales, consideradas las mayores de la última década

En el marco de las protestas se produjeron diversos incidentes que derivaron en la muerte de cinco personas. Entre ellas dos refugiados sirios que fallecieron en un edificio que se incendió durante las protestas, dos personas tiroteadas por los guardaespaldas de un parlamentario que intentó sumarse a las protestas y fue atacado por los manifestantes, y otra que recibió el disparo de un soldado que intentaba dispersar las protestas. Paralelamente, decenas de personas resultaron heridas en enfrentamientos diversos entre la policía y manifestantes, entre manifestantes y partidarios del presidente Michel Aoun, entre manifestantes y

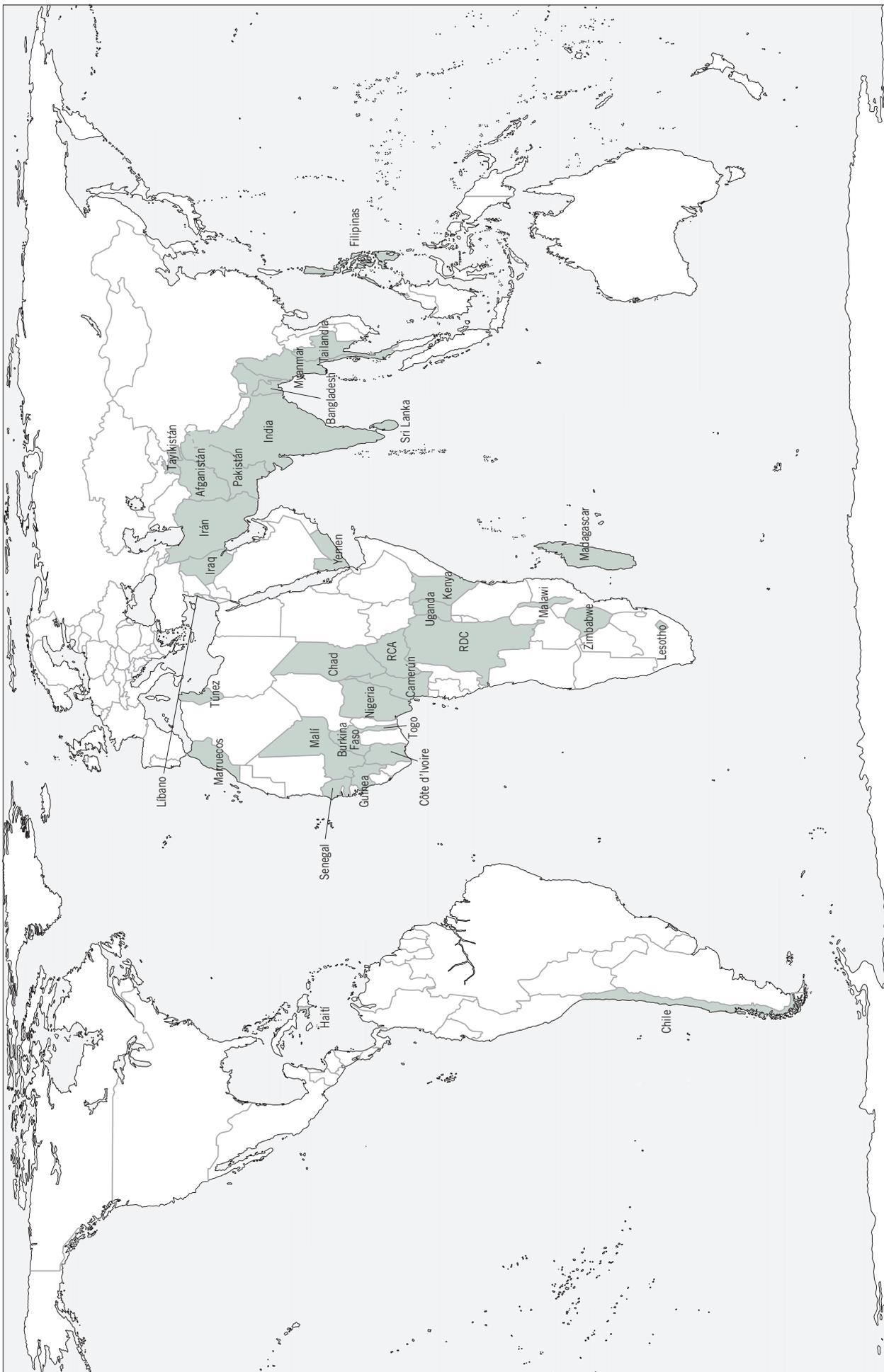
seguidores de Hezbollah y su grupo aliado Amal, y entre miembros de estas dos organizaciones y del partido cristiano Fuerzas Libanesas. Cabe destacar que el líder de Hezbollah inicialmente respaldó las protestas, pero luego rechazó las demandas de renuncia del gobierno y atribuyó las movilizaciones a interferencias externas. El mismo discurso que asumieron las autoridades iraníes tras el estallido de protestas en ese país y la coincidencia de intensas movilizaciones en Líbano e Iraq durante el último trimestre de 2019.⁴⁶ Las protestas antigubernamentales forzaron la renuncia de Hariri a finales de octubre. Las facciones políticas negociaron durante semanas hasta consensuar la designación del ex ministro de Educación, Hassan Diab, como nuevo primer ministro. Diab asumió a mediados de diciembre y prometió formar un gobierno de tecnócratas en un plazo de seis semanas, pero las movilizaciones –incluyendo peticiones de renuncia del nuevo primer ministro– continuaron. La incertidumbre política persistía a fines de 2019, en medio de una severa crisis económica, la peor en el país desde la guerra civil (1975-1990), según analistas. Cabe destacar algunos otros hechos relevantes durante el año. Entre ellos, dos incidentes ocurridos en junio: un ataque perpetrado por un presunto “lobo solitario” del grupo armado ISIS, que dejó cinco personas fallecidas en Trípoli, y la agresión al convoy de un ministro en las afueras de Beirut protagonizado por dos facciones drusas rivales que dejó dos muertos y motivó varias semanas de parálisis en el gabinete. En este sentido, cabe mencionar que los informes de la ONU sobre la situación en Líbano informaron de la detención de decenas de personas vinculadas a ISIS y al ex Frente al-Nusra en 2019 y también subrayaron que no se han observado progresos tangibles en el desmantelamiento y desarme de milicias libanesas, según lo previsto en los Acuerdos de Taif (1989) y en la resolución 1554 (2004) del Consejo de Seguridad de la ONU.

44. Anis Chérif-Alami, “Twenty Days of Lebanese Protests: Between Continuity, Innovation and Uncertainty”, *Arab Reform Initiative*, 6 de noviembre de 2019.

45. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

46. Véase los resúmenes sobre Iraq e Irán en este capítulo.

Mapa 3.1. Género, paz y seguridad



Países en conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos 2019

3. Género, paz y seguridad

- El 83% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos.
- Según el centro de investigación ACLED durante 2018 y 2019 las mujeres y las niñas representaban el 95% de las víctimas de la violencia sexual en contextos de conflicto.
- El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva resolución (2467) sobre violencia sexual en conflictos armados en medio de la polémica por haber excluido los derechos sexuales y reproductivos de las supervivientes de esta violencia.
- El Consejo de Seguridad de la ONU reconoció los vínculos entre desplazamiento forzado y violencia sexual en los conflictos. Según ACNUR, las mujeres y las niñas representan la mitad aproximadamente de la población desplazada a nivel internacional.
- Algunos impactos de género de los conflictos sobre hombres fueron, por ejemplo, la campaña de persecución de las autoridades de Chechenia contra hombres homosexuales, bisexuales y percibidos como tales o el reclutamiento obligatorio por las Fuerzas Armadas de Rusia a los hombres residentes en Crimea.
- Las mujeres participaron activamente en las protestas populares que tuvieron lugar en países como Líbano, Argelia o Sudán.

El capítulo Género, paz y seguridad analiza los impactos de género de los conflictos armados y las tensiones sociopolíticas, así como la integración de la perspectiva de género en diversas iniciativas de construcción de paz en el ámbito internacional y local por parte de las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, de los Gobiernos, así como de diferentes organizaciones y movimientos de la sociedad civil locales e internacionales.¹ Además se hace un seguimiento de la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad. La perspectiva de género permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo también analiza las consecuencias de los conflictos en la población lesbiana, gay, trans, bisexual e intersexual (LGTBI) y su participación en iniciativas de construcción de paz. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Instituciones Sociales y Género; en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Instituciones Sociales y Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

3.1. Desigualdades de género

El Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI)² es una medición de la discriminación contra las mujeres en las instituciones sociales, que refleja las leyes, normas y prácticas discriminatorias en 180 países teniendo en cuenta cinco dimensiones: la discriminación en el seno de la familia, la violencia contra las mujeres, la preferencia por hijos varones, el acceso de las mujeres a los recursos y su acceso al espacio público. Las instituciones sociales discriminatorias (normas formales e informales, actitudes y prácticas) restringen el acceso de las mujeres a los derechos, la justicia y el empoderamiento, y perpetúan las desigualdades de género en áreas como la educación, la salud, el empleo o la participación política.

1. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.

2. El SIGI es un índice elaborado por la OCDE que mide cinco subíndices integrados por 16 indicadores que incluyen: matrimonio infantil, responsabilidades en el hogar, divorcio, herencias, violencia contra las mujeres, mutilación genital femenina, autonomía reproductiva, abortos selectivos por sexo, acceso seguro a la tierra, acceso seguro a la propiedad de otros recursos, acceso seguro a servicios financieros formales, derechos laborales, derechos de ciudadanía, participación política, libertad de movimiento y acceso a la justicia. OCDE, *Social Institutions & Gender Index*, OCDE, 2019.

Tabla 3.1. Países en conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos³

	Niveles medios de discriminación	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación	Sin datos
Conflictos armados⁴	Burkina Faso ⁵ India (2) Tailandia RDC (3)	Chad ⁶ Malí Myanmar Nigeria ⁷ RCA	Afganistán 20 (2) Camerún ⁸ Iraq Pakistán (2) Yemen (2)	Argelia Burundi Egipto Israel ⁹ Libia Níger ¹⁰ Palestina ¹¹ Siria Somalia Sudán (2) Sudán del Sur
Tensiones	Chile Haití India (5) ¹² Kenya RDC (4) ¹³ Senegal Tailandia Tayikistán Zimbabwe	Chad Côte d'Ivoire Filipinas Indonesia Malawi Madagascar Nigeria (2) Sri Lanka Togo Túnez Uganda (2) ¹⁴	Bangladesh Guinea Irán (4) Iraq (2) Líbano (2) ¹⁵ Marruecos Pakistán (2)	Angola Arabia Saudita Argelia Bahrein China (5) Congo, Rep. del Egipto Eritrea Gambia Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Israel (2) Kosovo Palestina ¹⁶ Siria Somalia Sudán (2) Sudán del Sur Taiwán Uzbekistán Venezuela

De acuerdo con el SIGI, los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 29 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este índice con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que **14 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2019 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación, seis en países con niveles medios de discriminación y que 10 conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto –Argelia, Burundi, Egipto, Israel, Libia,**

20 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar en 2019 se dieron en países donde existían niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos

Níger, Palestina,¹⁷ Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur-. Así, el 58% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con niveles de discriminación de género altos o muy altos. Esta cifra asciende al 83% si se incluyen los contextos con niveles medios de discriminación. Asimismo, en otros cuatro países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles bajos (Mozambique, Ucrania y Turquía) o muy bajos (Colombia) de acuerdo con el SIGI. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, **al menos 42 de las 94 tensiones activas durante el año 2018 transcurrieron**

- Tabla elaborada a partir de los niveles de la discriminación de género del SIGI (OCDE) señaladas en el último informe disponible (2019) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escola de Cultura de Pau (véase capítulo 1, Conflictos armados y capítulo 2, Tensiones). El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.
- Entre paréntesis, el número de conflictos armados o tensiones en dicho país.
- Burkina Faso, Níger y Malí protagonizan un único conflicto armado, denominado Región Sahel Occidental.
- Nigeria, Camerún, Chad y Níger protagonizan un único conflicto armado, denominado Región Lago Chad (Boko Haram).
- Ibid.
- Ibid. Camerún además es escenario de otro conflicto armado denominado Camerún (Ambazonia/North West y South West).
- Israel y Palestina protagonizan un único conflicto.
- Véase nota 6.
- En el SIGI Palestina recibe la denominación Gaza y Cisjordania.
- Una de las tensiones protagonizadas por la India hace referencia a la que mantiene con Pakistán.
- En el caso de RDC una de las tensiones es la tensión internacional denominada África Central (LRA), en la que intervienen tanto las Fuerzas Armadas congoleesas como milicias de autodefensa de la RDC. Véase el capítulo 2 (Tensiones).
- Una de las tensiones de Uganda hace referencia a la tensión denominada África Central (LRA). Véase el capítulo 2 (Tensiones).
- Una de las tensiones en Líbano hace referencia a la que mantiene con Israel y Siria.
- Véase nota 11.
- Ibid.

en países en los que existían graves desigualdades de género (niveles medios, altos o muy altos según el SIGI), lo que supone un 57% de las tensiones para las que existían datos. 21 tensiones transcurrían en países sobre los que no hay datos disponibles (Angola, Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Burundi, China, República del Congo, Egipto, Eritrea, Gambia, Gaza y Cisjordania, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Israel, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Taiwán, Uzbekistán y Venezuela).

3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género

En este apartado se aborda la dimensión de género en el ciclo del conflicto, en especial en referencia a la violencia contra las mujeres. La perspectiva de género es una herramienta de utilidad para el análisis de los conflictos armados y las tensiones de carácter sociopolítico y que permite dar visibilidad a aspectos generalmente obviados en este análisis tanto en términos de causas como de consecuencias.

3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones

Al igual que en años anteriores, durante 2019 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos.¹⁸ Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales.

En abril tuvo lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU el debate abierto sobre violencia sexual en conflictos armados. El secretario general presentó su informe anual de seguimiento y evaluación sobre esta materia. El informe del secretario general abarcó el año 2018 y, como en años anteriores, analizó la situación de 19 países, 13 de ellos en situación de conflicto armado: Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Siria y Yemen, a lo que se añade el conflicto en la región del Lago Chad, que incluye a Nigeria. El informe identificó

actores en conflicto responsables de la utilización de violencia sexual, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

Cabe destacar que, igual que sucediera durante 2018, de los 19 contextos¹⁹ que fueron objeto de análisis en el informe del secretario general de la ONU, nueve de ellos registraron niveles elevados de intensidad durante 2019 –Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)– superando en general el millar de víctimas mortales anuales y generando graves impactos en las personas y el territorio, entre los que se incluía la violencia sexual relacionada con el conflicto armado. En seis de ellos también se produjo una escalada de la violencia durante el 2019 con respecto al año anterior –Malí, Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC (este), Colombia y Afganistán. La mayoría de los actores armados identificados por el secretario general como responsables de violencia sexual en conflictos armados eran actores no estatales, algunos de los cuales habían sido incluidos en las listas de organizaciones terroristas de Naciones Unidas.

El centro de investigación ACLED también presentó un balance sobre el impacto de la violencia sexual en los conflictos, señalando que entre inicios de 2018 y junio de 2019 se habían registrado globalmente, 400 eventos de violencia sexual en contextos de conflicto, de los que 140 se habían producido en 2019.²⁰ La violencia sexual constituía más de una cuarta parte de la violencia política dirigida específicamente contra las mujeres. Según ACLED, las mujeres y las niñas representaban el 95% de las víctimas de la violencia sexual en contextos de conflicto. En lo que respecta a los contextos de conflicto, durante 2018 los países más afectados fueron RDC, Sudán del Sur, Burundi, India y Sudán y durante los primeros meses de 2019 RDC, India, Sudán del Sur, Burundi, Mozambique y Zimbabwe.

Activistas LGTBI y organizaciones de derechos humanos denunciaron a principios de 2019 una nueva campaña de persecución de las autoridades de **Chechenia** contra hombres homosexuales, bisexuales y percibidos como tales. La plataforma rusa Red LGBT presentó una denuncia a finales de enero ante las autoridades rusas por la detención de al menos 14 personas en la capital chechena, Grozny, así como por la comisión

18. La ONU considera violencia sexual relacionada con los conflictos los “incidentes o pautas de violencia sexual [...], es decir, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable que se cometa contra las mujeres, los hombres, los niños o las niñas. Estos incidentes o pautas de comportamiento se producen en situaciones de conflicto o posteriores a los conflictos o en otras situaciones motivo de preocupación (por ejemplo, durante un enfrentamiento político). Además, guardan una relación directa o indirecta con el propio conflicto o enfrentamiento político, es decir, una relación temporal, geográfica o causal. Aparte del carácter internacional de los supuestos crímenes, que, dependiendo de las circunstancias, constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio u otras violaciones manifiestas de los derechos humanos, la relación con el conflicto puede ser evidente teniendo en cuenta el perfil y las motivaciones del autor, el perfil de la víctima, el clima de impunidad o la situación de colapso en que se encuentre el Estado en cuestión, las dimensiones transfronterizas o el hecho de que violen lo dispuesto en un acuerdo de cesación del fuego”. UN Action Against Sexual Violence In Conflict, *Marco analítico y conceptual de la violencia sexual en los conflictos*, noviembre de 2012.

19. En algunos países recogidos en el informe del secretario general de la ONU se produjo más de un conflicto armado de acuerdo con la definición de la Escola de Cultura de Pau. El listado completo de conflictos armados en los países recogidos en el informe del secretario general es: Libia, Malí (norte), Región Lago Chad (Boko Haram) –incluye Nigeria–, RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), RDC (Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Colombia, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria, Yemen (al-houthistas) y Yemen (AQPA).

20. ACLED, Fact Sheet: Sexual Violence in Conflict, 19 de junio de 2019.

Cuadro 3.1. Actores armados y violencia sexual en conflictos²¹

El informe del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos publicado en marzo de 2019 incluyó una lista de actores armados sobre los que pesan sospechas fundadas de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia sexual o de ser responsables de ellos en situaciones de conflicto armado, que son objeto de examen por el Consejo de Seguridad.²²

	AGENTES ESTATALES	AGENTES NO ESTATALES
Iraq		ISIS
Malí		MNLA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, Grupos de Autodefensa de los Tuareg Imgad y sus Aliados
Myanmar	Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw)	
RCA		LRA; Facciones de ex-Seleka: Unión por la paz en la República Centroafricana, Movimiento Patriótico por la República Centroafricana, Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana/facción Gala, Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana/facción de Abdoulaye Hussein, Agrupación Patriótica para la Renovación de la República Centroafricana; Frente Democrático del Pueblo Centroafricano/Abdoulaye Miskine; Revolución y Justicia; Retorno, Reclamación y Rehabilitación/Abbas Sidiki; Milicias asociadas a los Grupos antibalaka
RDC	Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo; Policía Nacional Congoleña	Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano-Janvier; Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano-Renovada; Fuerzas Democráticas Aliadas; Fuerzas para la Defensa del Congo; Milicias Bana Mura; Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda; Fuerzas de Resistencia Patrióticas de Ituri; Kamuina Nsapu; LRA; Nduma Defensa del Congo; Mai-Mai Kifuafua; todas las facciones Mai-Mai Simba; Nyatura; Nduma Defensa del Congo-Renovado; Mai-Mai Raia Mutomboki; todas las milicias twa
Siria	Fuerzas Armadas sirias y los servicios de inteligencia sirios	ISIS; Hay'at Tahrir Al-Sham (encabezada por Frente Al-Nusra); Ejército del Islam, Ahrar Al-Sham; fuerzas pro gubernamentales que incluyen las milicias de las Fuerzas de Defensa Nacional
Somalia	Ejército Nacional Somalí; Policía Nacional Somalí y sus milicias aliadas; Fuerzas de Puntlandia	Al-Shabaab
Sudán	Fuerzas Armadas Sudanesas; Fuerzas de Apoyo Rápido	Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Ejército de Liberación del Sudán-Abdul Wahid
Sudán del Sur	Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur; Policía Nacional de Sudán del Sur	LRA; Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Facción pro-Machar del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición partidario de Riek Machar; Fuerzas del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición alineadas con el Vicepresidente Primero Taban Deng
Otros casos		Boko Haram

de torturas y al menos un asesinato, motivados por su orientación sexual. Según la información obtenida por la red, las personas detenidas fueron golpeadas, agredidas sexualmente y torturadas con corrientes eléctricas, así como obligadas a firmar formularios vacíos. En informaciones posteriores, la red denunció que entre finales de diciembre de 2018 y enero de 2019, 40 personas habían sido detenidas por la Policía en Chechenia por su homosexualidad. De estas cifras, 14 personas fueron retenidas en instalaciones de las fuerzas de seguridad. La organización también cifró en 150 el número de personas LGTBI a las que la plataforma ha evacuado de Chechenia desde abril de 2017. Organizaciones internacionales también se hicieron eco del incremento de la persecución contra población LGTBI en Chechenia. En enero Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) difundieron las denuncias de la red rusa. En abril Amnistía Internacional denunció que dos años después de las numerosas persecuciones cometidas en 2017 contra hombres homosexuales en

Chechenia –secuestros, torturas, asesinatos–, no había habido aún rendición de cuentas por esos crímenes. HRW publicó en mayo un informe en el que documentaba y denunciaba violaciones de derechos humanos contra hombres gays, incluyendo detenciones ilegales, palizas y al menos una violación en un recinto del Departamento de Asuntos Internos del régimen checheno, ubicado en la capital, Grozny. El informe denunciaba también la impunidad de la persecución de 2017.

A lo largo de 2019 diversos informes constataron y ampliaron las evidencias sobre el fenómeno de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en **Siria**. Las investigaciones hechas públicas en este período documentaron de manera especial los abusos cometidos por las fuerzas del régimen sirio. Un informe elaborado por el Syrian Justice and Accountability Center (SJAC) centrado en las experiencias de antiguas personas presas analizó las experiencias de más de 300 personas supervivientes desde 2012, de las cuales 91 aportaron

21. En esta tabla se utiliza la denominación de los actores armados tal y como aparece recogida en el informe del secretario general y que no necesariamente coincide con la utilizada en los capítulos 1 y 2 de este anuario.

22. Consejo de Seguridad de la ONU, Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General, S/2018/250, 23 de marzo de 2018.

evidencias sobre hechos de violencia sexual y de género. El informe, publicado en enero, apuntó la existencia de crímenes diversos, como violaciones, amenazas de violencia sexual, torturas en los genitales y restricciones de acceso a la salud reproductiva contra hombres y mujeres. Otra investigación elaborada por la organización Lawyers and Doctors for Human Rights (LDHR) y dada a conocer en marzo se focalizó en el uso de violencia sexual contra hombres. El documento alerta sobre su utilización para humillar y silenciar a los prisioneros en los centros de detención controlados por el régimen, con prácticas que incluirían violaciones, esterilizaciones forzadas, quema y mutilación de genitales como forma de forzar confesiones u obtener sumisión. De las 138 personas entrevistadas por LDHR, más del 40% reconoció haber padecido alguna forma de agresión sexual y 90% situaciones de desnudos forzados ante sus guardianes. Otro informe elaborado por UNFPA, publicado en mayo y basado en testimonios recopilados en 2018, certificó que la violencia y el acoso sexual, la violencia en el hogar y los matrimonios precoces continuaban afectando las vidas de mujeres y niñas. La investigación subrayó que el temor a la violencia sexual había intensificado las restricciones a la movilidad de mujeres y niñas en algunas áreas, en un contexto de costumbres y tradiciones patriarcales. Estas restricciones se identificaban como el principal obstáculo para acceder a servicio de asistencia a supervivientes de violencia sexual y de género.

La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre **Myanmar**, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentó su informe específico sobre el impacto de la violencia sexual en el conflicto armado.²³ El informe señala que a pesar de que la misión verificó casos de mujeres, hombres y niñas sometidos a diferentes formas de violencia sexual –violaciones, violaciones colectivas, tortura sexual, esclavitud sexual– en el marco de las operaciones militares en los estados Kachin y Shan, y sobre todo durante las operaciones militares en el estado Rakhine durante 2017, dando lugar a un genocidio de la población rohingya, el Gobierno birmano no ha llevado a cabo ninguna investigación ni rendición de cuentas, y las autoridades militares responsables de las operaciones siguen ostentado sus puestos de mando. Como consecuencia, la misión de investigación independiente decidió publicar dicho informe específico, ampliando el alcance de sus investigaciones y recogiendo nuevas evidencias sobre los perpetradores de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en el país.²⁴ En su primer informe de 2018, la Misión ya había concluido que los actos de violencia sexual y de género constituían crímenes internacionales de tortura, de guerra, así como actos constitutivos de crímenes contra la humanidad y genocidio. En el informe de 2019, la misión señala

que la violencia sexual demuestra la intención genocida de las Fuerzas Armadas de Myanmar de destruir a la población rohingya, con asesinatos de mujeres e infligiendo en las mujeres rohingya graves daños físicos y mentales y en sus condiciones de vida con el objetivo de aniquilar a la población rohingya. En el informe se documenta la matanza generalizada y sistemática de mujeres y niñas, la selección sistemática de mujeres y niñas en edad reproductiva para su violación, ataques contra mujeres embarazadas y bebés, mutilación y otras lesiones en sus órganos reproductores, marcas físicas en sus cuerpos y heridas tan severas a consecuencia de las cuales sean incapaces de volver a tener relaciones sexuales o de concebir. La misión internacional señaló que el Gobierno de Myanmar eludió por completo su responsabilidad de proteger a la población y de investigar, perseguir y castigar a los responsables de dichas graves violaciones de los derechos humanos.

3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados

A lo largo del año se produjeron diferentes iniciativas de respuesta frente a la violencia sexual en el marco de los conflictos armados, así como de lucha contra la impunidad en diferentes estamentos judiciales. A continuación se recogen algunas de ellas.

En relación a la respuesta de Naciones Unidas frente la explotación y abusos sexuales por personal que desempeña servicio bajo su mando, continuó desplegándose la estrategia impulsada por el secretario general de la ONU, António Guterres, si bien continuaron recibiendo denuncias. Según el informe de 2019 del secretario general,²⁵ se avanzó en el fortalecimiento del enfoque centrado en las víctimas, con nuevas herramientas para evitar la contratación de personal con antecedentes de explotación o abusos sexuales; se aumentó la colaboración con la sociedad civil y expertos externos, incluyendo a través de la puesta en marcha en 2019 de una Junta Consultiva de la Sociedad Civil, que tiene mandato de plantear propuestas para intensificar la lucha contra la explotación y los abusos sexuales. No obstante, seguían existiendo numerosos obstáculos, como las dificultades de seguimiento de los Estados miembros en los casos de denuncias de fuerzas ajenas a Naciones Unidas. **El secretario general identificó en su informe progresos y compromiso en los sectores de mantenimiento de la paz y humanitario, e instó a intensificar los esfuerzos en los programas de desarrollo.**

En relación a las denuncias de explotación y abusos sexuales perpetrados por personal militar y civil

23. Human Rights Council, *Sexual and gender-based violence in Myanmar and the gendered impact of its ethnic conflicts*, A/HRC/42/CRP.4, 22 de agosto de 2019.

24. La misión ya había presentado un primer informe en 2018 sobre el conjunto de violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las operaciones militares en el país. Para ampliar información, véase el capítulo Género, paz y seguridad en Escuela de Cultura de Pau, *Alerta 2019! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Icaria editorial, 2019.

25. Secretario General de la ONU, *Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales*, A/73/744, 14 de febrero de 2019.

desplegado en misiones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales, **el informe constató una disminución en el número de denuncias en 2018 con respecto a 2017**. Según el informe hubo 54 denuncias (56 según la base de datos online de Naciones Unidas Conduct in UN Field Missions), frente a 62 en 2017 y 104 en 2016. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) recibió otras 33 denuncias, no contabilizadas en el informe por diferentes motivos, incluyendo solapamiento con denuncias anteriores y falta de información suficiente para abrir una investigación, entre otros. El 83% de las 94 víctimas afectadas por las denuncias eran personas adultas, y el restante 17% menores. 34 de las 54 denuncias (63%) eran relativas a explotación sexual de personas adultas y las otras 20 denuncias (37%) hacían referencia a abusos sexuales. 64 de las personas denunciadas como autores de la violencia sexual eran efectivos militares, otros 14 eran agentes de policía y 14 eran personal civil. Respecto a las misiones, el 74% de las denuncias estaban relacionadas con la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) y la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO). El 26% restante afectaba a la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH), la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS). Asimismo, según la base de datos online de la ONU, **en 2019 se recibieron 80 denuncias, 56 de las cuales referidas a explotación sexual, 19 a abusos y cinco a ambos. Las denuncias afectaban a 71 víctimas adultas y a 20 menores**.

Por otra parte, se presentaron 94 denuncias contra personal de Naciones Unidas en entidades diferentes a las de mantenimiento de paz. En el caso del Programa Mundial de los Alimentos (PMA) se recibieron 19 denuncias en 2018, 11 de ellas contra personal del PMA y ocho contra asociados externos en la ejecución de sus programas o proyectos. La suma de denuncias de los 12 años anteriores era de 26. Naciones Unidas señaló la dificultad de saber si el marcado incremento se debía a un mayor número de incidentes o a una mayor disposición a denunciar en un contexto de más sensibilización. En el caso de ACNUR también hubo un incremento significativo, con 34 denuncias en 2018 contra personal de la agencia, frente a las 19 en 2017, y 83 contra asociados externos, frente a las 20 de 2017. Asimismo, Naciones Unidas informó de que se había incrementado el número de denuncias contra personal de actores externos a Naciones Unidas asociados a esta en la ejecución de programas o proyectos, con 109 denuncias en 2018, frente a las 25 en 2017. En el caso de UNICEF, las denuncias pasaron de ocho en 2017

a 15 en 2018. Finalmente, en relación a las fuerzas ajenas a Naciones Unidas

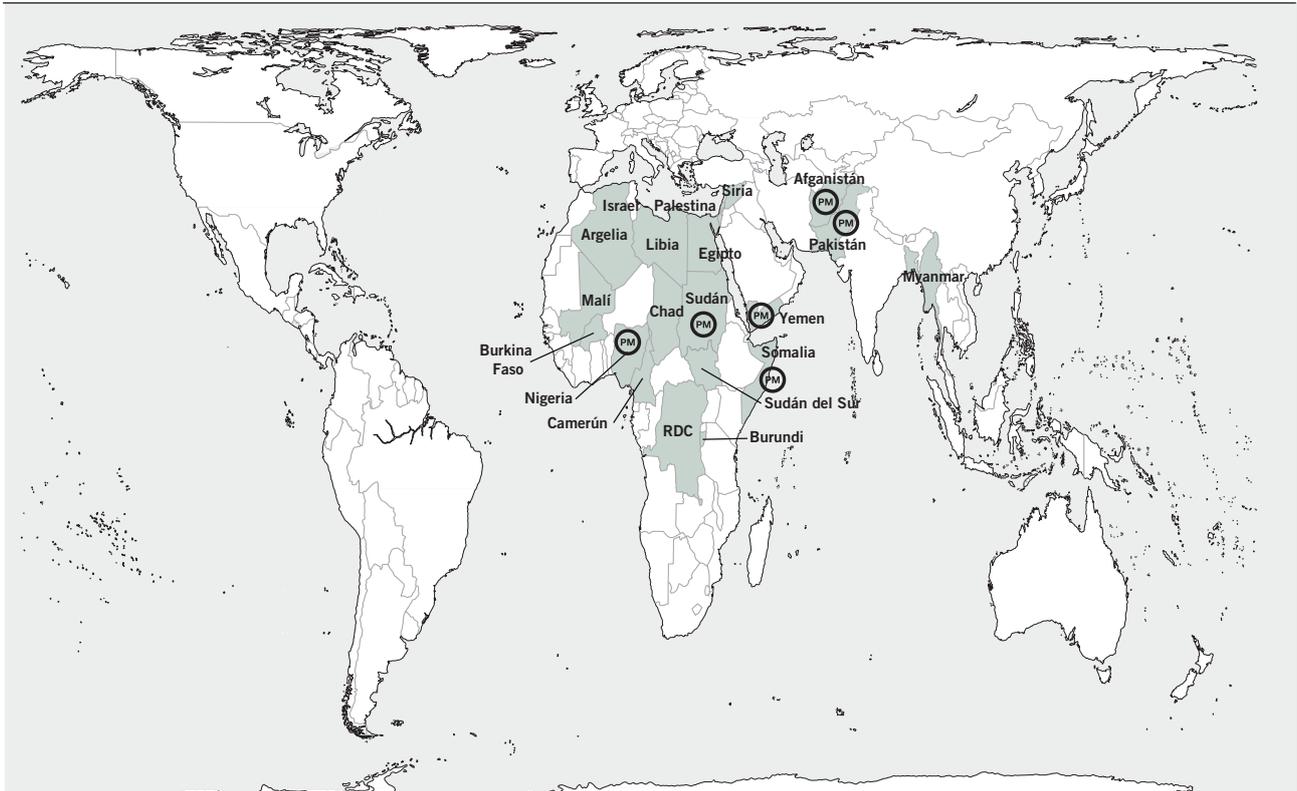
3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado

Además de la violencia sexual, los conflictos armados y las tensiones tuvieron otros graves impactos de género. La impunidad en torno a las violaciones de derechos humanos continuó siendo un elemento recurrente. El informe del relator especial sobre la situación de derechos humanos publicado en julio de 2019 analizó **la persistencia de la impunidad en las violaciones de derechos humanos que se comenten contra personas defensoras de derechos humanos**, incluyendo mujeres defensoras y personas defensoras de los derechos de la población LGTBI.²⁶ Examinó los principales obstáculos, recogió buenas prácticas y planteó líneas a seguir y recomendaciones. En clave interseccional, el informe subraya los riesgos específicos de violencia que afrontan personas, grupos o movimientos en función del tipo de derecho que defienden y también de los intereses económicos o políticos que confrontan. El relator alertó del riesgo de personas defensoras de la igualdad de género, de la diversidad sexual, del medio ambiente y la tierra, entre otras. Entre los obstáculos que limitan el acceso a la justicia y que generan impunidad en las violaciones de derechos humanos, el informe señaló –entre otros– la falta de un enfoque diferenciado e interseccional. Al respecto, el relator señaló los obstáculos adicionales relacionados con la discriminación de género que sufren las mujeres defensoras de los derechos humanos, incluyendo su estigmatización. Los obstáculos específicos también incluyen la dificultad de asumir los gastos asociados a la denuncia y su seguimiento en casos en que tienen bajo su responsabilidad el cuidado familiar, así como la falta de mecanismos de protección para sus familiares y los costes físicos y emocionales de enfrentar un sistema que reproduce los estereotipos de género. El relator también destacó los obstáculos de acceso a la justicia de personas LGTBI, así como de pueblos indígenas y afrodescendientes. Para transformar esa situación, el informe plantea la importancia de aplicar un enfoque diferencial e interseccional.

Asimismo, la población **LGTBI** y gitana en Ucrania continuó viendo vulnerados sus derechos, incluyendo a causa de la acción de grupos de extrema derecha, cuya presencia e impunidad en Ucrania se ha visto reforzada en el marco del conflicto en Ucrania. En 2019 ACNUDH alertó sobre la interrupción impune de actividades de población LGTBI y gitana por parte de grupos de extrema derecha en diversas localidades, si bien sí identificó mejoras en la protección por parte de la Policía en eventos de mayor escala en ciudades grandes.

26. Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos, A/74/159, 15 de julio de 2019.

Mapa 3.2. Países en conflicto armado y con legislación discriminatoria contra la población LGBTI



■ Países en conflicto armado en 2019 y con legislación discriminatoria contra la población LGBTI (incluye ilegalidad de actos sexuales consensuales, barreras legales a la libertad de expresión sobre cuestiones de orientación sexual y barreras para la formación de ONG)

PM Países en conflicto armado donde está codificada la pena de muerte para la población LGBTI. (ILGA, *Homofobia de Estado*, 2020)

Fuente: Elaboración propia con datos de Escola de Cultura de Pau y Lucas Ramon Mendos, *State-Sponsored Homophobia 2019*, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), Ginebra; ILGA, 2019.

Tabla 3.3. Conflictos armados en 2019 en países con legislación discriminatoria contra la población LGBTI

ÁFRICA	ASIA	ORIENTE MEDIO
Argelia Burundi Camerún (Ambazonia/North West y South West), Libia Malí Región Lago Chad (Boko Haram) Región Sahel Occidental RDC (este) RDC (este-ADF) RDC (Kasai) Somalia Sudán (Darfur) Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) Sudán del Sur	Afganistán Myanmar Pakistán Pakistán (Baluchistan)	Egipto (Sinaí) Israel - Palestina Siria Yemen (al-houtistas) Yemen (AQPA)

Fuente: Elaboración propia con datos de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2020. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2020. ILGA World: Lucas Ramón Mendos, *Homofobia de Estado 2019: Actualización del Panorama Global de la Legislación*. Ginebra; ILGA, diciembre de 2019.

27. En esta lista se incluyen aquellos países incluidos en el informe de ILGA en las categorías de Criminalización (Actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo y Actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo) y Restricción (Restricciones a la libertad de expresión en temas relacionados con orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales y Restricciones al registro u operación de organizaciones de la sociedad civil). ILGA World: Lucas Ramón Mendos, *Homofobia de Estado 2019: Actualización del Panorama Global de la Legislación*. Ginebra; ILGA, diciembre de 2019.

En relación a la violencia contra la población **LGTBI a nivel global**, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, realizó un **llamamiento en julio a los Estados y otros actores involucrados en la protección de la población solicitante de asilo y refugiada LGTBI a reconocer su situación de vulnerabilidad específica y de necesidades diferenciadas, e identificó el acceso al asilo como un elemento básico de protección** frente a los niveles desproporcionados de detención arbitraria, abusos policiales, violencia y asesinatos extrajudiciales por parte de actores estatales y no estatales a los que se ve expuesta la población LGTBI. Esta también afronta vulneraciones de derechos en forma de esterilizaciones forzadas, las llamadas “terapias de conversión” y las restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación. Por eso, el Experto Independiente instó a los Estados a garantizar que los temores fundados de ser perseguido a causa de la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y/o las características sexuales sea aceptado como base para el reconocimiento del estatuto de refugiado. Según sus datos, solo 37 Estados otorgaban asilo en base a esas circunstancias.

En 2019 solo 37 Estados otorgaban el estatuto de refugiado a personas solicitantes perseguidas por motivos de orientación, identidad o expresión de género, pese a los niveles desproporcionados de violencia que afrontaba la población LGTBI y su situación de vulnerabilidad específica

Por otra parte, el Experto Independiente publicó en julio su informe sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, que abordó la discriminación que sufre la población LGTBI en todo el mundo en ámbitos como la educación, la atención de la salud, vivienda y empleo, entre otros, así como las dinámicas de inclusión para la protección contra la violencia.²⁸ El informe abordó de manera específica la situación de las personas LGTBI solicitantes de asilo, refugiadas, migrantes y desplazadas internas. El informe subrayó que la vulnerabilidad estructural de las personas LGTBI podía verse agravada, debido al riesgo especial que afrontan de sufrir violencia, abuso y explotación durante todas las fases de su recorrido y a manos de personas funcionarias, traficantes y tratantes. El Experto señaló que las personas LGTBI a menudo ocultaban su identidad como una vía de supervivencia, para evitar acoso y abuso y también para poder acceder a alimentos y refugio. El informe destacó la importancia de la facilitación de instalaciones adecuadas de alojamiento y de saneamiento, así como el acceso a una vivienda permanente. **El estigma y la discriminación tenían impactos diferenciados sobre migrantes, desplazados y refugiados, ya que les disuaden específicamente de mostrar su identidad, lo que a su vez conlleva obstáculos para la presentación de solicitudes de asilo vinculadas**

a persecuciones por motivos de orientación sexual. Los migrantes LGTBI en situación irregular pueden ser más vulnerables a la violencia, acoso y explotación. Asimismo, la situación de las personas migrantes LGTBI detenidas por entrada y estancia irregular podía ir acompañada de aislamiento social y violencia física y sexual, agravada en el caso de las personas trans. El informe también alertaba de las amenazas a la seguridad física de los menores LGTBI no acompañados, incluyendo las dificultades de acceso a servicios, a alojamiento seguro, así como la atención a sus necesidades psicosociales específicas.

La agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas, ACNUR, presentó su informe anual recogiendo la **situación internacional en términos de desplazamiento forzado** y analizando las cifras globales de 2018. Durante este año se alcanzó la cifra record de 70,8 millones de personas desplazadas mundialmente, de las que 25,9 millones eran personas refugiadas. En lo respecta al análisis de estos datos desde una perspectiva de género, las cifras desagregadas por sexo de las que disponía ACNUR con respecto a la población objeto de atención por parte de esta agencia, señalaban que 25,7 millones

eran mujeres y niñas y 25,4 millones eran hombres y niños. Cabe señalar que 131 países proporcionaron a ACNUR cifras desagregadas por sexo, una cifra inferior a la del año 2017, en el que 147 países facilitaron estos datos. Las cifras que hacían referencia específicamente a la población refugiada señalaban que las mujeres y las niñas representaban el 48% de esta población, aunque, por ejemplo, en el caso específico de África, las mujeres constituían el 52% de la población refugiada. Cabe destacar que la resolución 2467 sobre las mujeres, la paz y la seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad en 2019, identificaba el vínculo existente entre desplazamiento forzado y violencia sexual en el marco de los conflictos armados, señalando que esta violencia puede constituir una forma de persecución por motivos de género, dando lugar a elegibilidad para el reconocimiento del asilo o del refugio. **En su informe sobre las mujeres, la paz y la seguridad de 2019, el secretario general de la ONU señalaba que una de cada cinco mujeres refugiadas que se hallaba en situaciones humanitarias complejas había sufrido violencia sexual.**²⁹ Organizaciones como Oxfam, señalaron que en situaciones de desplazamiento forzado vinculadas a la emergencia climática mundial, las mujeres se hallaban en situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia y los abusos y las desigualdades de género dificultaban en mayor medida la mejora de sus condiciones de vida.³⁰ ONU Mujeres también llamó la

28. Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, *Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género*, 17 de julio de 2019, A/74/181.

29. Secretario General de la ONU, Informe sobre las mujeres, la paz y la seguridad. S/2019/800. Octubre de 2019.

30. Oxfam, Forced From Home: Climate-fuelled displacement, 2019.

atención sobre la situación de las mujeres desplazadas y refugiadas. En un informe sobre las condiciones de vida de las mujeres sirias refugiadas en Líbano, señaló que las desigualdades de género y la discriminación incrementaban el riesgo que las mujeres y las niñas sufrieran violencia física y sexual, así como explotación en los ámbitos público y privado.³¹ Las mujeres sirias representan algo más de la mitad de la población siria refugiada en Líbano y cerca del 80% de las que fueron entrevistadas por ONU Mujeres señalaron que no podían cubrir sus necesidades básicas y que tenían grandes dificultades para acceder a la ayuda humanitaria.

En el marco del conflicto armado en **Ucrania** se puso de manifiesto un año más sus impactos de género, incluyendo de la militarización sobre los hombres. Así, los hombres residentes en Crimea se vieron afectados por la imposición de la novena campaña de reclutamiento obligatorio en las Fuerzas Armadas de Rusia. **En los meses de primavera y hasta junio de 2019, 3.300 hombres fueron reclutados en Crimea, la cifra más extensa de una misma campaña desde que en 2015 comenzaron los procesos de reclutamiento forzoso.** HRW denunció que el derecho internacional humanitario prohíbe de manera explícita a Rusia, como potencia ocupante, obligar a los residentes de Crimea a alistarse en sus Fuerzas Armadas. HRW también denunció la presentación de cargos penales contra aquellos hombres de Crimea que rechazaban ser reclutados. Desde 2015 Rusia ha reclutado forzosamente a entre 18.000 y 18.900 hombres residentes en la península.

Naciones Unidas, ONG y centros de investigación alertaron sobre la situación de mujeres y menores vinculados al grupo armado Estado Islámico (ISIS) que se encuentran reclusos en centros de detención en el noreste de Siria, mayoritariamente controlados por las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF) –coalición dominada por el grupo kurdo YPG. Especial preocupación provocaron las condiciones humanitarias en el campo de al-Hol –también referido como al-Hawl– en la provincia de Hasakah, que pasó de albergar a unas 10.000 personas en diciembre de 2018 a más de 70.000 en abril de 2019, coincidiendo con la campaña armada que acabó con la expulsión de ISIS de Baghouz, último bastión del grupo en la zona. Según datos de la ONU, 94% de las personas habitantes de al-Hol eran mujeres o menores. Organizaciones como Human Rights Watch alertaron sobre los graves problemas que enfrentan sobre todo las 11.000 mujeres y menores extranjeros –de unas 50 nacionalidades– que viven en instalaciones anexas a al-Hol. Unos 7.000 serían menores de 12 años. Tras una visita al campo, HRW denunció las pésimas condiciones de higiene, la proliferación de enfermedades cutáneas, tuberculosis, diarreas, hepatitis, desnutrición, así como las complicaciones que afrontan las mujeres embarazadas antes, durante y en la

fase posterior al parto. HRW y el think tank International Crisis Group (ICG) destacaron la ambigüedad legal en la que se encuentran las personas reclusas en al-Hol. Formalmente no están prisioneras, pero tampoco son reconocidas como desplazadas internas, lo que dificulta su acceso a ayuda humanitaria. Las fuerzas kurdas consideran que estas personas han sido transferidas a al-Hol para que sean repatriadas a sus respectivos países. No obstante, como apunta ICG, los diferentes países que tienen a sus nacionales retenidos en al-Hol han asumido estrategias muy diversas: algunos habían comenzado repatriaciones –entre ellos Rusia, Malasia, Uzbekistán o Kosovo– y otros –como Marruecos o Túnez– no tenían especial interés en su retorno y países occidentales –de la UE, Canadá o Australia– habían repatriado a menos de 200 personas hasta octubre de 2019.

Cabe destacar que en al-Hol convivían mujeres diversas y con una vinculación muy variada con ISIS. Algunas de ellas son activas militantes de la organización, pero otras establecieron relaciones con el grupo de manera circunstancial o en contextos de coerción –incluyendo algunas casadas a la fuerza con combatientes de ISIS. En este contexto, al-Hol es escenario de continuas disputas y hechos de violencia. Mujeres militantes de ISIS, seguidoras de la versión extrema del Islam que promueve el grupo armado, controlan al resto de mujeres y su vestimenta, lanzan piedras, insultan o amenazan con incendiar las tiendas de las mujeres y menores que consideran infieles, entre otras prácticas. ICG destacó que a finales de septiembre, en tan solo una semana, dos mujeres murieron tiroteadas por guardias en el anexo de al-Hol y los cuerpos de otras dos aparecieron en las instalaciones tras haber sido ejecutadas, presuntamente después de que una militante de ISIS dictara sentencia en su contra. Paralelamente, se ha destacado la profunda vulnerabilidad de los niños y niñas que habitan en este campo, muchos de los cuales son menores no acompañados, con problemas para acreditar su nacionalidad. Según algunos informes, algunas mujeres estarían ocultando a menores huérfanos o haciéndolos pasar por sus hijos ya sea por razones ideológicas como por considerar que optimizan sus opciones de repatriación. La gravísima situación humanitaria en estos centros se vio afectada también por las dinámicas de violencia del conflicto armado. La intensificación de las incursiones turcas en el noreste de Siria a partir de octubre encendió las alarmas sobre la volatilidad en la región y el destino de las personas retenidas en estos centros de detención.

Respecto al impacto de los conflictos armados en niños y niñas, el secretario general de la ONU presentó su informe anual en el que recogía algunos impactos específicos de género sobre la población infantil.³² Así, se constató la utilización de la violencia sexual por parte de los actores en los conflictos contra niños y niñas en

31. IPSOS Group SA, Unpacking gendered realities in displacement: the status of Syrian refugee women in Lebanon, UN Women, 2018.

32. Los niños y los conflictos armados. Informe del Secretario General. A/73/907–S/2019/509. Asamblea General de la ONU, Consejo de Seguridad de la ONU, 20 de junio de 2019.

países como Afganistán, República Centroafricana, RDC, Malí o Colombia, entre otros. niños y niñas fueron forzados a combatir e integrarse como parte de los actores contendientes en los conflictos armados, y fueron víctimas directas de la violencia, resultando muertos o heridos. Los colegios y centros educativos continuaron siendo objetivo militar en los conflictos armados, mermando seriamente el derecho a la educación de niños y niñas en todo el mundo.

3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género

En este apartado se analizan algunas de las iniciativas más destacadas para incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la construcción de la paz.

3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad

La implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad estuvo marcada por los dos debates monográficos en el Consejo de Seguridad. El primero de ellos, en abril, trató sobre la violencia sexual y los conflictos armados. El secretario general presentó su informe anual sobre esta materia.³³ La sociedad civil resaltó nuevamente la importancia de entender la violencia sexual en los conflictos armados en un marco más amplio de violencias de género perpetradas tanto por actores militares como por civiles en un contexto de profundas desigualdades internacionales entre hombres y mujeres, agravadas por el armamentismo y el militarismo.

En el mes de octubre tuvo lugar el **debate anual sobre mujeres, paz y seguridad en el Consejo de Seguridad de la ONU** coincidiendo con la presentación del informe de evaluación de la implementación de la agenda sobre esta temática por parte del secretario general de la ONU.³⁴ El informe del secretario general recogió los resultados de la evaluación independiente promovida por ONU Mujeres sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2015 por Naciones Unidas durante la revisión de alto nivel la agenda mujeres, paz y seguridad; de las operaciones de mantenimiento de la paz; y de la estructura para la consolidación de la paz. La evaluación independiente del cumplimiento de los compromisos con respecto a la agenda mujeres, paz y seguridad, señaló que el 50% se había logrado o estaba en vías de lograrse, el 40% se estaba cumpliendo de forma irregular y el 10% había sufrido retrocesos o no había experimentado

ningún tipo de avance.³⁵ Cabe destacar que entre los compromisos y recomendaciones establecidos en 2015 que no han avanzado en los últimos años está el de incluir el enfoque de género en los acuerdos de paz. Tanto en 2017 como en 2018 hubo un retroceso en el número de acuerdos que incluyeron cláusulas de género en sus textos. Frente al 39% de los acuerdos de 2015, solo el 27% de los acuerdos de 2017 y el 7,7% de los acuerdos de 2018. Tampoco se están teniendo en cuenta las recomendaciones de no recurrir a fórmulas como la creación de consejos asesores o estatus de observadoras, para incluir a las mujeres, sino promover la participación significativa con capacidad de incidencia.

Entre los hechos más destacados del año está la **aprobación de la resolución 2467**, promovida por el Gobierno de Alemania y aprobada por mayoría en el Consejo de Seguridad con las abstenciones de China y Rusia. La resolución se aprobó en medio de fuertes tensiones entre los Gobiernos del Consejo de Seguridad y fue objeto de importantes críticas por numerosas organizaciones de la sociedad civil. En diferentes momentos del proceso de redacción de la resolución EEUU, Rusia y China amenazaron con vetarla. El texto de la resolución, dedicado a la violencia sexual en conflictos armados, sufrió importantes transformaciones para ser aprobada, ya que la inclusión de la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos para las víctimas de la violencia sexual en los conflictos generó el rechazo del Gobierno de EEUU, que se negó a aprobarla si esta fórmula no era excluida, a pesar de que la resolución anterior 2106 de 2013 ya hacía referencia a esta cuestión y la resolución 2467 la menciona en uno de los párrafos del preámbulo. Otras cuestiones que también debieron ser excluidas del texto para que la resolución fuera aprobada fueron la adopción de un mecanismo formal en el seno del Consejo de Seguridad sobre violencia sexual en los conflictos armados –por ejemplo, un grupo de trabajo–, la inclusión de referencias a la derivación de casos a la Corte Penal Internacional o el reconocimiento de la vulnerabilidad de la población LGTBI frente a esta violencia.³⁶ La sociedad civil, por su parte, insistió nuevamente en que no era necesario añadir nuevas resoluciones a la agenda, sino que por el contrario la prioridad debía ser la implementación efectiva de los compromisos adquiridos por los Gobiernos a lo largo de las dos últimas décadas, y mostró su enorme preocupación por todos los aspectos que debieron ser excluidos, como los derechos sexuales y reproductivos o el vínculo con la Corte Penal Internacional. En todo caso, se destacaron algunos aspectos positivos de esta resolución, como la adopción de un enfoque centrado en las supervivientes en el diseño de respuestas a esta violencia, así como una mayor atención al continuum

33. Véase el apartado 4.2.1. de este capítulo.

34. Las mujeres y la paz y la seguridad. Secretario General de la ONU, S/2019/800, Consejo de Seguridad de la ONU, 9 de octubre de 2019.

35. Allen, L., Mapping of the Gender Recommendations in the Three 2015 Peace and Security Reviews, 2019.

36. Davis, Sara E. y True, J., Pitfalls, Policy, and Promise of the UN's approach to Conflict-Related Sexual Violence and the New *Resolution 2467*, PRIO, 2019.

de violencia que precede al uso de la violencia sexual en los conflictos armados. La resolución abordaba la cuestión de los menores nacidos como consecuencia de violaciones, identificando la necesidad de proporcionar un mayor y mejor apoyo a estos niños y niñas. También se reconocían de forma más explícita las vinculaciones entre violencia sexual y desplazamiento forzado, así como una mayor consideración a los hombres y niños víctimas de violencia sexual. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que algunas de las cuestiones que no habían sido abordadas con suficiente contundencia en la resolución eran, por ejemplo, la rendición de cuentas del personal de mantenimiento de la paz o la situación de las mujeres defensoras de los derechos humanos.³⁷

Con respecto a los planes de acción nacional sobre la 1325, **durante 2019 cuatro países aprobaron nuevos planes: Bangladesh, Namibia, Líbano y Armenia.** Así pues, un total de 83 países contaba con un plan al finalizar el año 2019, lo que representa el 43% de los países miembro de la ONU. De acuerdo con el análisis de estos planes llevado a cabo por la organización internacional WILPF, de los 83 planes existentes solo el 34% de ellos contaba con un presupuesto específico asignado a la implementación del plan y solo el 30% de los planes vigentes incluía referencias a la cuestión del desarme. Durante 2019, nueve países se comprometieron a elaborar su primer plan de acción nacional de cara a la revisión de 2020: Uruguay, Chipre, Malta, Egipto, Etiopía, Bulgaria, Letonia, Sri Lanka y Sudáfrica.

En Colombia persistieron los retos en la aplicación del enfoque de género incluido en el acuerdo de paz

En octubre se llevó a cabo la tercera misión conjunta de Naciones Unidas y la Unión Africana (UA) en torno a la agenda mujeres, paz y seguridad, con una visita a la región del Cuerno de África encabezada por la enviada especial de la UA para esta agenda, Bineta Diop, y la secretaria general adjunta de la ONU, Amina J. Mohammed. Durante la visita regional se desplazaron a Somalia, Djibouti, Etiopía y Eritrea, países en los que se reunieron tanto con representantes gubernamentales como con organizaciones de la sociedad civil. En el caso de Etiopía, cabe destacar las reuniones con diferentes ministras del Gobierno y las discusiones al liderazgo regional que este país está ejerciendo en materia de participación política de las mujeres. En Somalia, el eje de la visita fue la participación de las mujeres en las elecciones y su papel en la prevención del extremismo violento. En Djibouti el tema central fue la participación de las mujeres en la gobernanza y en Eritrea tuvo un carácter marcadamente económico, con reuniones en torno al empoderamiento económico de las mujeres. La delegación también estuvo integrada por representantes de ONU Mujeres

y la representante especial del secretario general de la ONU para la violencia sexual en los conflictos armados.

3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz³⁸

Varios procesos de paz fueron relevantes desde un punto de vista de género durante el año 2019. Organizaciones de mujeres reclamaron una mayor participación en diferentes negociaciones en todo el mundo así como la inclusión de agendas de género. Sin embargo, en la mayoría de los procesos negociadores no se pusieron en marcha transformaciones de calado para incluir la participación de las mujeres de forma significativa.

Colombia

En Colombia persistieron los retos en la aplicación del enfoque de género incluido en el acuerdo de paz que en 2016 alcanzaron el Gobierno y las FARC y que actualmente se encuentra en fase de implementación. Diferentes organismos publicaron balances de la implementación del enfoque de género.

La Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz presentó su informe de evaluación de tres años de implementación. En este balance, las mujeres representantes de la sociedad civil señalaron que seguían sin abordarse algunas de las causas estructurales de desigualdad y violencia que tienen especial impacto en las mujeres y las comunidades rurales, indígenas, afrocolombianas, palenqueras y raizales del país, así como en la población LGTBI. Criticaron que se haya desdibujado el género como eje central de implementación, puesto que el Plan Marco de Implementación limita su carácter transversal. No obstante, el informe destacó la decisión del Gobierno de crear la Alta Instancia de Género de carácter gubernamental. Por otra parte, señalaron el elevado desconocimiento que existe en las instituciones en los diferentes territorios del país tanto del propio acuerdo de paz, como del enfoque de género y otros enfoques diferenciados. El Instituto Kroc también presentó su informe de seguimiento del enfoque de género, en el que se constataban las dificultades y el retraso en la implementación de este enfoque.³⁹ Frente al 27% de compromisos generales del acuerdo cuya implementación no se había iniciado en agosto de 2019, en lo que respecta al enfoque de género no se había iniciado el 42% de los compromisos. Además, sólo se había completado el 8% de los compromisos relativos al enfoque de género, frente al 25% del conjunto del

37. Madeleine Rees, *Madeleine Rees on UN Security Council Resolution 2476*, WILPF, 2019.

38. Para una información más exhaustiva sobre la integración de la perspectiva de género en los procesos de paz actualmente activos, puede consultarse en el anuario de la Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Icaria editorial, 2020.

39. Instituto Kroc, ONU Mujeres, FDIM y Suecia, *Hacia la paz sostenible por el camino de la igualdad de género. II informe de seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia*, diciembre de 2019.

acuerdo. Kroc señaló que los mayores avances se lograron en el punto relativo a los derechos de las víctimas.

Por otra parte, en su informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante el año 2019, el ACNUDH reconoció algunos esfuerzos realizados, como el reconocimiento a las víctimas por parte de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición a defensoras de derechos humanos, mujeres y personas LGBTI víctimas de violencia sexual. No obstante, la Alta Comisionada exhortó al Gobierno a avanzar en la implementación de las disposiciones del acuerdo relativas al enfoque étnico y de género, teniendo en cuenta algunos de los retos que tanto las mujeres como la población LGBTI enfrentan en el país. Así, se documentaron elevadas tasas de violencia sexual en el país, las más altas de los últimos 10 años, con 52,3 víctimas por cada cien mil habitantes. Las mujeres y, sobre todo la población LGBTI, experimentaron enormes dificultades para participar en los procesos electorales en el país. Las mujeres representaron el 37% y las personas abiertamente LGBTI el 0,06% de las candidaturas que concurrieron en diferentes procesos electorales.

Organizaciones de mujeres en países como Siria, Yemen o Sudán del Sur reclamaron una mayor participación en la construcción de la paz

Georgia

En Georgia continuaron produciéndose reuniones durante el año entre representantes gubernamentales participantes en el proceso de paz y población civil georgiana afectada por el conflicto, incluyendo organizaciones de mujeres. Se trata de una práctica iniciada por ONU Mujeres en 2013 y que posteriormente pasó a organizar el Gobierno, con apoyo de la agencia de la ONU, y recogida en el plan de acción nacional de Georgia para la implementación de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. Las reuniones abordaron tanto cuestiones tratadas al máximo nivel del proceso de paz –las llamadas Conversaciones Internacionales de Ginebra– como aquellas abordadas en los mecanismos de prevención de incidentes (IPRM). En las diversas reuniones, las organizaciones de mujeres participantes compartieron prioridades, como la necesidad de tratar la situación de seguridad en torno a la línea de demarcación fronteriza y las barreras en la zona fronteriza y de disponer de más información sobre el sistema de comunicación directa entre las partes en conflicto para la gestión de incidentes. Además, instaron a la reanudación del IPRM específico sobre la región en conflicto de Abjasia. Señalaron también la necesidad de promover instrumentos de derechos humanos, especialmente de las mujeres y niñas, de Abjasia y Osetia del Sur. También pusieron énfasis en los problemas de libertad de movimiento y las dificultades económicas en las áreas fronterizas en conflicto, como factor que lleva al éxodo de población, especialmente de jóvenes, de esas zonas. A su vez, reclamaron mejoras

en la infraestructura de carreteras, en la cobertura telefónica y de internet, los sistemas de riego y servicios de salud, entre otros.

Yemen y Siria

Durante 2019 organizaciones de mujeres, activistas y feministas de Oriente Medio continuaron reivindicando un mayor protagonismo y presencia sustantiva en la vida pública y política, incluyendo los ámbitos de negociación en los que puede definirse el futuro de sus países. En Yemen y Siria, a través de distintas iniciativas y espacios, mujeres demandaron una presencia mínima de 30%. En este sentido, en lo que respecta a Yemen los contactos promovidos por la ONU que desembocaron en el llamado Acuerdo de Estocolmo en diciembre de 2018 contaron con la participación de tan solo una mujer en las delegaciones negociadoras. En el caso de Siria, el establecimiento a finales de 2019 de un comité constitucional en el marco del proceso de paz de Ginebra, también auspiciado por Naciones Unidas, fue celebrado como una noticia positiva, entre otras cosas, por contar con casi un 30% de representantes mujeres sirias. En ambos contextos también continuaron activos

formatos ad-hoc integrados por mujeres con la intención de asesorar a los respectivos enviados especiales de la ONU –el Syrian Women’s Advisory Board, en el caso de Siria, y el Technical Advisory Group, en el caso de Yemen. Paralelamente, desde ámbitos más formales como desde organizaciones de la sociedad civil se insistió en la identificación de prioridades que, desde el punto de vista de las mujeres, son cruciales para la transformación de los conflictos armados. En el caso de Yemen, se insistió en la necesidad de atender con urgencia las necesidades humanitarias de la población, frenar el flagelo de la violencia sexual y de género, abordar la problemática de las personas detenidas y desaparecidas, poner fin al uso de menores soldados y adoptar medidas para evitar la proliferación de armas. En Siria, algunas organizaciones de mujeres hicieron propuestas para abordar temáticas como una futura Constitución con mirada feminista, el retorno seguro de personas desplazadas internamente y refugiadas a causa del conflicto y una reconstrucción postbélica que tenga en consideración las necesidades y capacidades de las mujeres.

Sudán del Sur

En el mes de abril, organizaciones de mujeres de Sudán del Sur hicieron un llamamiento a que el Gobierno de transición implementase el acuerdo de paz, que contempla que el 35% de los ministerios estén liderados por mujeres. Según un estudio publicado por Oxfam, las mujeres han participado activamente en los diferentes procesos de paz que han tenido lugar en Sudán del Sur

40. Soma, Esther, *Our Search for Peace: Women in South Sudan’s National Peace Processes, 2005–2018*, Oxfam, enero 2020.

en diferentes espacios y niveles, aunque generalmente han sido excluidas de la toma de decisiones y del ejercicio del poder.⁴⁰ No obstante, las organizaciones de la sociedad civil han exigido reiteradamente una mayor participación e inclusión, así como la consideración de los derechos de las mujeres y las violencias de género como aspectos esenciales de los diferentes acuerdos de paz que se han firmado desde el año 2005. Entre los obstáculos que han impedido su participación de forma más significativa ha sido la violencia, amenazas e intimidaciones que han sufrido, así como la falta de acceso a los recursos necesarios. Aunque los diferentes acuerdos han establecido cuotas de participación para garantizar la inclusión de las mujeres, no se han respetado, lo que ha impedido que las mujeres hayan podido ejercer sus derechos de participación política sin sufrir discriminación. Las organizaciones de mujeres se han movilizado en los últimos años para exigir también la implementación de los diferentes acuerdos de paz que se han alcanzado.

Red de Mujeres Mediadoras

En septiembre tuvo lugar la presentación de la Alianza Global de Redes Regionales de Mujeres Mediadoras, iniciativa a través de la que se pretende mejorar la coordinación en el trabajo de las redes regionales que la componen: Red de Mujeres Mediadoras del Mediterráneo, Red Nórdica de Mujeres Mediadoras, Mujeres Árabes Mediadoras, FEMWISE Africa y Red de Mujeres Mediadoras de la Commonwealth. Los objetivos de esta alianza global son compartir información, crear sinergias y evitar duplicaciones; crear una plataforma para el apoyo mutuo entre las redes; hacer incidencia y divulgación conjunta donde sea relevante; desarrollar acciones conjuntas para mejorar la participación e influencia de las mujeres en los procesos de paz a todos los niveles: local, nacional, regional e internacional, y en todas las fases; implementar acciones conjuntas para asegurar mejores resultados de género en los acuerdos de paz y los marcos de implementación; trabajar y establecer contactos con actores internacionales de mediación para garantizar que se de prioridad a la participación de las mujeres en los procesos de paz, proporcionando nombres para puestos de mediación de alto nivel, conectando las iniciativas diplomacia de primera, segunda y tercera vía. La presentación de la Alianza global se produjo en el marco de la 74ª sesión de la Asamblea General de la ONU y reunió a representantes de todas las redes regionales.

OSCE

La OSCE lanzó en diciembre de 2019 un documento con herramientas para la participación de mujeres y procesos de paz efectivos, con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de medidas para la participación de mujeres en las negociaciones de paz en la zona OSCE, en las que la organización intergubernamental desempeña

funciones de facilitación y mediación. La guía contiene propuestas prácticas para los actores mediadores de la OSCE, las presidencias de turno, los Estados miembro así como las estructuras ejecutivas de la organización. Según los datos de *Alerta 2020*, en 2019 en los procesos de paz bajo mediación de la OSCE no había espacios de participación directa en los formatos negociaciones formales y solo en el caso de Georgia existían mecanismos institucionalizados de participación indirecta. El propio documento señala que a lo largo de su trayectoria la OSCE apenas ha asignado a mujeres funciones de mediación, facilitación y moderación en los cuatro procesos formales de paz de Ucrania, Georgia (Abjasia, Osetia del Sur), Moldova (Transdniestria), Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaja).⁴¹ De 52 representantes/enviados especiales y personales, coordinadores de grupos de trabajo y co-presidentes, solo uno ha sido desempeñado por una mujer, que actuó de representante especial de la presidencia de turno en Ucrania y en el Grupo Trilateral de Contacto. Asimismo, según la OSCE, una mujer representó a la OSCE como co-mediadora en el grupo de trabajo sobre asuntos humanitarios de las Conversaciones Internacionales de Ginebra (GID, por sus siglas en inglés, nombre con el que se conoce el proceso de paz de Georgia). Si se amplía el foco a las organizaciones intergubernamentales co-mediadoras, una mujer ha servido como co-presidenta de la ONU en las GID y una mujer como co-mediadora de la UE en el grupo de trabajo de asuntos humanitarios de las GID. Asimismo, solo una de las 14 jefaturas de la misión de la OSCE en Moldova –involucrada en el proceso de paz relativo al estatus de Transdniestria– ha sido ocupada por una mujer.

3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil

Durante 2019 tuvieron lugar diferentes iniciativas de construcción de paz lideradas y protagonizadas por organizaciones de mujeres de la sociedad civil. En este apartado se recogen algunas de las más relevantes.

Durante 2019 varios países de África y Oriente Medio volvieron a ser escenario de masivas movilizaciones populares contra sus respectivos gobernantes y regímenes políticos. En países como **Libano** o **Argelia** las mujeres tuvieron un papel especialmente destacado en las protestas y llamaron la atención sobre demandas vinculadas al sistema patriarcal, las desigualdades de género y los derechos de las mujeres. Mujeres libanesas estuvieron muy presentes en las redes sociales, utilizadas durante las protestas como un medio para hacer públicos sus agravios y demandas, se situaron en primera línea de las barricadas y formaron barreras humanas entre las fuerzas de seguridad y las personas manifestantes como una manera de evitar escaladas de tensión y preservar la naturaleza pacífica de las movilizaciones. La perspectiva de las mujeres libanesas permitió amplificar

41. OSCE, *Inclusion of Women and Effective Peace Processes: A Toolkit*, OSCE, 2019.

las denuncias más allá de las críticas a la clase política, la mala gobernanza, la inoperancia de los servicios públicos y los problemas derivados de una economía en crisis. Así, se visibilizaron cuestiones interseccionales y retos estructurales que enfrentan las mujeres, entre los que se cuentan las discriminaciones legales en materia de ciudadanía –que entre otras cosas no permiten a las libanesas traspasar la nacionalidad a sus hijos e hijas–; las leyes de estatus personal –que regulan temas familiares como el matrimonio, el divorcio, la custodia o la herencia a partir de jurisdicciones religiosas y no de juzgados civiles y que también contemplan múltiples disposiciones discriminatorias– y los déficit en las normas destinadas a combatir la violencia de género –que, por ejemplo, no castiga la violación en el matrimonio. En este sentido, las libanesas denunciaron las múltiples opresiones derivadas de la sociedad patriarcal y el régimen político-confesional vigente en el país. Cabe destacar que numerosas organizaciones de mujeres libanesas vienen promoviendo desde hace años una mayor representación en los ámbitos de decisión política y, en particular, una cuota de 30%, que no ha sido aprobada. De hecho, Líbano continúa teniendo una escasa presencia de mujeres en el Parlamento, entre las más bajas de los países del norte de África y Oriente Medio. En lo que respecta a Argelia, diversos medios de comunicación resaltaron la masiva presencia y liderazgo de mujeres –en cifras consideradas como sin precedentes– en las movilizaciones contra el poder político que se activaron en el país desde febrero con la intención de poner fin al régimen de Abdelaziz Bouteflika. Algunos análisis destacaron la reivindicación del espacio público y los derechos de ciudadanía de las mujeres argelinas y vincularon su masiva participación en las movilizaciones con el hecho de que las protestas mantuvieran su carácter eminentemente pacífico. La participación en las protestas de una figura icónica de la guerra de liberación argelina como Djamilia Bouhired (de 83 años) fue interpretada como un recordatorio de que, pese a la participación de muchas mujeres en la guerra de independencia, desde entonces se ha impuesto un sistema desigual que exige una contestación activa de las mujeres para garantizar la igualdad de derechos.

En **Sudán**, se produjo el derrocamiento por parte de la cúpula militar del presidente Omar al-Bashir en abril, en cuya caída fueron determinantes las movilizaciones populares de la sociedad civil y en concreto, de las organizaciones de mujeres sudanesas. Tras la caída del régimen, decenas de organizaciones feministas del país siguieron demandando cambios estructurales en relación a los derechos de las mujeres, solicitando ampliar su participación en los órganos ejecutivo y legislativo, así como tener mayor presencia en las mesas de negociación de paz. Meses después de la masiva movilización social, diversas fuentes habían señalado que las mujeres seguían ausentes del nuevo régimen. Durante tres décadas el régimen de al-Bashir había elaborado una legislación represiva para someter a las mujeres, con el objetivo de satisfacer a las fuerzas ultraconservadoras islámicas que apoyaron al

régimen. A pesar de haber liderado la caída del régimen, diversas fuentes señalaron que grupos de la sociedad civil y el Ejército habían empezado a negociar en torno al futuro político del país, y las mujeres estaban quedando nuevamente al margen, tal y como había destacado, entre otras, Sara Abdelgalil, una de las pocas representantes femeninas en la Sudanese Professionals Association (SPA), uno de los principales grupos que organizaron las protestas.⁴² En este sentido, las activistas remarcaron que la ausencia de mujeres líderes en el nuevo régimen no se trata simplemente de una cuestión de igualdad, sino que sobre todo afecta a la calidad de la transición y, en último lugar, al éxito de la revolución. De las decenas de civiles que participaron en las negociaciones, solo una era mujer, Mervat Hamadelneel, desconocida en los círculos activistas. Estas organizaciones elevaron críticas hacia el liderazgo de los grupos de la sociedad civil que han estado negociando la transición política, las FFC, que han sido más proclives a construir un compromiso con la Junta Militar que con la población a la que debían representar. Hala Alkharib, directora regional del Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa, destacó que la falta de diversidad reducía la capacidad de análisis del equipo negociador, y la mayoría de los partidos políticos que están negociando en nombre de la población sudanesa no recogían los retos y demandas planteados por las mujeres, lo que obstaculiza que las mujeres se sumen a ellos. Otra de las activistas con un importante papel en las movilizaciones, Samahir Mubarak, señaló que en la nueva fase los partidos políticos deberán reorganizarse y que no obtendrán votos de las mujeres si sus puntos de vista no están representados. Mujeres activistas se manifestaron el 4 de agosto alrededor del cuartel general del SPA para exigir una mayor representación en el escenario político del país. El nuevo gabinete tras el derrocamiento de al-Bashir fue nombrado el 8 de septiembre por el primer ministro Abdalla Hamdok. Compuesto por 18 miembros, contaba con cuatro mujeres, incluyendo la primera mujer en ocupar la cartera de Exteriores en el país, un hito histórico y que pone de manifiesto el importante papel que han jugado las mujeres en el cambio político que ha experimentado el país en los últimos meses. El Gabinete conducirá el país durante el periodo de transición hasta la celebración de elecciones generales en 39 meses. Asmaa Abdalla se añade al conjunto de ministras de Exteriores del continente africano de la actualidad, junto a Kenya, RCA, Sudáfrica, Sierra Leone o Sudán del Sur, entre otros, y en una de las pocas ministras de Exteriores de un país árabe. Asma Abdalla, antigua embajadora, había sido la tercera mujer en ser incorporada al Ministerio de Exteriores y fue destituida en 1989 tras el golpe de Estado que llevó al poder a Omar al-Bashir, y perseguida desde entonces, por lo que se exilió a Marruecos, hasta que en 2018 se unió a los movimientos opositores a al-Bashir, las Forces for Freedom of Change (FFC), que contribuyeron a su derrocamiento.

Mujeres de la sociedad civil de **Ucrania** crearon la Red de la Sociedad Civil para la Implementación de las Resoluciones de Mujeres, Paz y Seguridad y de la

42. Justin Lynch, *Women fueled Sudan's revolution, but then they were pushed aside*, Independent, 4 de agosto de 2019.

CEDAW. La iniciativa fue establecida en febrero de 2019, en el marco de un seminario organizado por el Centro de Desarrollo de la Democracia (Democracy Development Centre, por su nombre en inglés, DDC) y la Global Network of Women Peacebuilders (GNWP), con el apoyo de la agencia suiza de desarrollo y cooperación. La red tiene el objetivo de coordinar la elaboración de informes sombra de la CEDAW por parte de la sociedad civil, así como facilitar el intercambio de información entre las entidades. En el marco del lanzamiento, las participantes pusieron de manifiesto la falta de participación y representación de las mujeres en el proceso de paz, así como denunciaron los impactos del conflicto, incluyendo de una mayor prevalencia de la violencia sexual y de género, impactos desproporcionados de la inestabilidad económica y política sobre las mujeres, incluyendo mujeres de las áreas rurales, mujeres gitanas y otras minorías.

La red de la sociedad civil de la **ex Yugoslavia** conocida como Coalición para una Comisión Regional para el Establecimiento de los Hechos sobre todas las Víctimas de Crímenes de Guerra y otras graves Violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia (RECOM) anunció en 2019 que asumirá la creación de un listado regional de víctimas de las guerras de los años noventa en el espacio de la ex Yugoslavia. La Coalición para la RECOM denuncia que los gobiernos de la región no tienen voluntad política de establecer conjuntamente la RECOM. La Coalición, establecida en 2008 y que agrupa a 2.050 organizaciones de la sociedad civil de la zona, anunció su compromiso de, por una parte, intensificar el proceso de documentar los crímenes de guerra. Para ello, acordaron incrementar el número de personas investigadoras en los equipos de análisis de la plataforma, involucrar a centros académicos, ampliar las bases de datos y generar más atención pública hacia la situación y perspectiva de las víctimas. Por otra parte, se comprometen también a fortalecer en el periodo de 2020-2023 la red de reconciliación y justicia transicional de la región, así como a ofrecer apoyo experto a las organizaciones de jóvenes en su trabajo de denuncia de la tergiversación de hechos establecidos por los tribunales internacionales.

Organizaciones de mujeres de la sociedad civil siguieron abogando por una salida negociada al conflicto entre **Corea del Norte y Corea del Sur** y llevaron a cabo diferentes iniciativas. La plataforma Korea Peace Now, integrada por varias organizaciones de mujeres – Women Cross DMZ, Nobel Women's Initiative, Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) y Korean Women's Movement for Peace– publicó un informe sobre el impacto de género y humanitario de las sanciones impuestas a Corea del Norte por parte de la comunidad internacional.⁴³ El informe, elaborado por un grupo de personas expertas independientes, concluye que las sanciones están obstaculizando el acceso humanitario a la población más vulnerable del país,

impactando incluso en algunos de los principales retos humanitarios del país como la inseguridad alimentaria crónica, la falta de acceso a los servicios básicos de salud, el deterioro del ámbito WASH (agua, el saneamiento e higiene), así como la alta vulnerabilidad frente a desastres naturales. El informe también destacaba el impacto de las sanciones en el tejido económico del país –en sectores económicos con importante presencia de mujeres–, así como en el conjunto de la sociedad, exacerbando las tasas de violencia doméstica, violencia sexual y el tráfico y la prostitución de mujeres, así como las cargas de cuidado que recaen fundamentalmente en las mujeres, con importantes impactos en las condiciones de vida de las coreanas.

Más de 50 organizaciones de mujeres de **Camerún** dieron apoyo al memorándum “Voces de Mujeres de Camerún en el Proceso de Diálogo Nacional”, presentado en septiembre de 2019 en Yaoundé y elaborado por la Plataforma Consultativa de Mujeres para el Diálogo Nacional. La Plataforma constituye un espacio que reúne a mujeres de diversos ámbitos de Camerún y de la diáspora con el objetivo de promover la construcción de paz sostenible en el país, afectado por un conflicto armado entre el Estado y guerrillas en las regiones anglófonas. El documento subraya la necesidad de que las voces de las mujeres sean incluidas en términos de igualdad de espacio participativo para contribuir de manera sustantiva y constructiva al Diálogo Nacional que tuvo lugar entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. El memorándum es el resultado de cinco espacios consultivos directos realizados desde julio con miembros de la Plataforma Consultiva, así como de un mecanismo online de recopilación de datos, así como de la incorporación de los resultados preliminares de un estudio participativo de análisis de género del conflicto. El memorándum contiene recomendaciones generales al Diálogo Nacional, incluyendo el fortalecimiento de la participación y la inclusividad del Diálogo Nacional, involucrando a mujeres, población joven y mayores y la creación de un clima que facilite la libertad de expresión sin miedo a las represalias, entre otras, así como recomendaciones sobre cuestiones que afectan específicamente a las mujeres. Entre estas, el establecimiento de medidas que reduzcan la impunidad de los perpetradores de violencia de género, la institucionalización de la educación para la paz, mecanismos simplificados de acceso a certificados de nacimiento y de identidad destrozados en el marco del conflicto, la implementación de leyes y políticas de descentralización, representación de las mujeres y la inclusión de la perspectiva de género en todas las comisiones que se creen en el marco del diálogo, un alto el fuego bilateral, programas holísticos que den respuesta a las necesidades de las mujeres, incluyendo mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, menores, jóvenes, personas mayores, entre otros, así como establecimiento de estructuras especializadas en trauma para abordar cuestiones relacionadas con la violencia sexual y de género, entre otras recomendaciones.

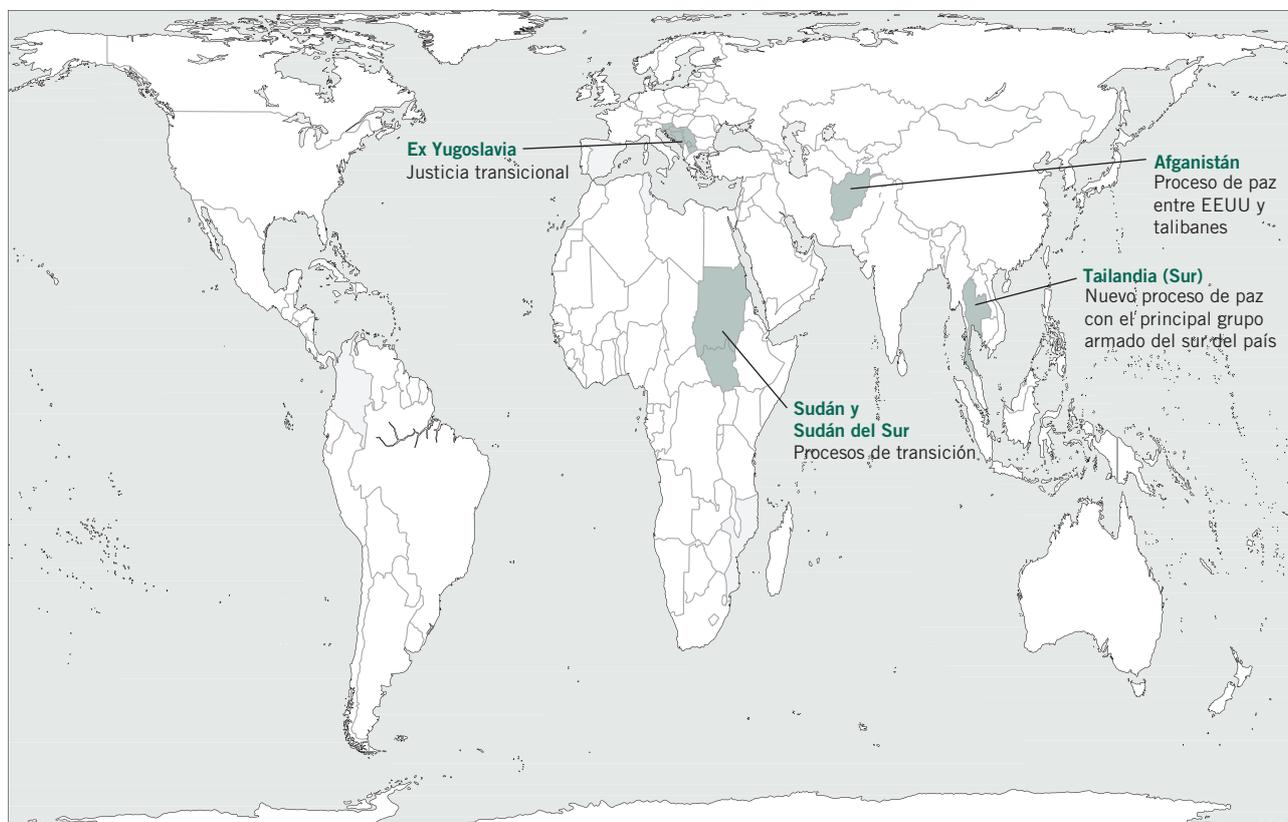
43. Féron, H., Eriksson Fortier, E., Gray, K., Kim, S., O'Reilly, M., Park, K. B., Yoon, J., The Human Costs and Gendered Impact of Sanctions on North Korea, Korea Peace Now, 2019.

4. Oportunidades de paz para 2020

Tras analizar el año 2019 en materia de conflictividad y construcción de paz, la Escola de Cultura de Pau de la UAB destaca en este capítulo cuatro ámbitos que constituyen oportunidades de paz para el futuro. Se trata de contextos donde existe o ha habido en el pasado una situación de conflicto armado o de tensión en los que confluyen una serie de factores que pueden conducir a su transformación positiva. Las oportunidades identificadas de cara a 2020 hacen referencia a las negociaciones entre talibanes y EEUU en el caso de Afganistán; a las perspectivas de transición en Sudán y Sudán del Sur; al nuevo proceso de negociación entre el Gobierno tailandés y el BRN, principal grupo armado del sur del país; y al impulso de la sociedad civil a la justicia transicional en la ex Yugoslavia frente a los bloqueos políticos a través de un registro regional de víctimas.

Todas estas oportunidades de paz requerirán del esfuerzo y compromiso real de las partes implicadas y, en su caso, del apoyo de actores internacionales para que las sinergias y factores positivos ya presentes favorezcan la construcción de la paz. En este sentido, el análisis de la Escola de Cultura de Pau pretende ofrecer una visión realista de estos escenarios y temáticas, identificando los elementos positivos que alimentan las expectativas de cambio, pero también poniendo de manifiesto las dificultades y problemáticas que existen y que podrían suponer obstáculos para su materialización como oportunidades de paz.

Mapa 4.1. Oportunidades de paz para 2020



4.1. Las negociaciones entre talibanes y EEUU, ¿una oportunidad para la paz en Afganistán?

El conflicto armado en Afganistán es sin duda uno de los escenarios bélicos de mayor gravedad de las últimas décadas. Décadas de guerra han dejado un devastador legado en términos de muertes, población herida, infraestructuras básicas destruidas, emergencia humanitaria, graves violaciones de los derechos humanos y profundas desigualdades de género, entre otros muchos aspectos. Desde que en el año 2009 la misión de Naciones Unidas en el país, UNAMA, iniciara la recopilación de datos sobre muertes de población civil, más de 35.000 civiles han muerto como consecuencia directa de la violencia armada y una cifra considerablemente superior han resultado herida. A esta cifra se añaden las decenas de miles de fallecimientos de insurgentes y soldados afganos y extranjeros desplegados en el país. Los derechos de mujeres y niñas se han visto gravísimamente conculcados en todas las fases del conflicto armado, en paralelo a múltiples violaciones a los derechos humanos del conjunto de la población civil, incluyendo crímenes de guerra. En un escenario de intensificación de la violencia, los talibanes y el Gobierno de EEUU anunciaron en el mes de enero de 2019 el inicio de un proceso de negociaciones, partiendo de un acuerdo marco que debía ser detallado a lo largo de las negociaciones, por el que EEUU se comprometía a la retirada de sus tropas desplegadas en el país y los talibanes a dar garantías de que Afganistán no volvería a ser utilizado por grupos terroristas para llevar a cabo sus acciones. Tras varios meses de negociaciones directas entre una delegación talibán, encabezada por Mullah Baradar Akhund, y una delegación estadounidense encabezada por el diplomático de origen afgano Zalmay Khalilzad, se anunció la firma de un acuerdo en agosto en EEUU, pero de forma sorpresiva el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló esta firma. No obstante, las negociaciones continuaron posteriormente, lo que hacía previsible la firma de un acuerdo en 2020.

Desde que se produjera la invasión del país por parte de EEUU en el año 2001, han sido múltiples los intentos, infructuosos, de llevar a cabo negociaciones de paz para poner fin al conflicto. Estas negociaciones han tenido siempre una doble dimensión. Por un lado, los intentos del Gobierno afgano de liderar un proceso de paz con todos los actores afganos involucrados en la contienda armada, conocido generalmente como diálogo o proceso intraafgano. Para ello se creó, por ejemplo, el Alto Consejo para la Paz en 2010 durante el Gobierno de Hamid Karzai, y cuyo primer presidente, Burhanuddin Rabbani, fue asesinado en un atentado en 2011. Sin embargo, los talibanes siempre se negaron a llevar a cabo negociaciones directas con el

Gobierno afgano, y reclamaban conversaciones directas con el Gobierno de EEUU, señalando que el Gobierno afgano no dejaba de ser un “títere” estadounidense. En paralelo, actores regionales como Qatar, Arabia Saudí, Pakistán o Rusia, entre otros, también han jugado un papel importante en diferentes momentos bien sea impulsando acercamientos entre actores, obstaculizando el diálogo o trasladando intereses geopolíticos a la arena de la negociación.

El proceso de negociaciones de 2019 representó, sin embargo, un punto de inflexión. Un acuerdo entre la insurgencia talibán y EEUU podría permitir una reducción considerable de la violencia en el país y abrirá la puerta a negociaciones más amplias y, posiblemente, más inclusivas. Las conversaciones entre EEUU y los talibanes está siendo un proceso de élites, totalmente excluyente con la sociedad afgana y estrechamente vinculado a la necesidad política

Un acuerdo entre la insurgencia talibán y EEUU podría permitir una reducción considerable de la violencia en el país y abrirá la puerta a negociaciones más amplias y, posiblemente, más inclusivas

del Gobierno de EEUU de reducir la presencia o retirar sus tropas del país. No se trata, por tanto, de un proceso de paz encaminado a la construcción de una paz sostenible y transformadora en el país, que tenga en cuenta los gravísimos impactos que la violencia ha tenido en la población ni las violaciones de derechos humanos que se han cometido en las últimas décadas. Pero este acuerdo podría permitir desbloquear una situación estancada, abriendo oportunidades para otros diálogos, tanto de alto nivel como podría ser un proceso entre talibanes y Gobierno afgano, como procesos amplios de diálogo nacional más incluyentes con la sociedad civil y actores cruciales como las organizaciones de mujeres. Así pues, el reto está en aprovechar la oportunidad que otorga una eventual reducción de los enfrentamientos armados para acometer transformaciones de calado más profundo y dar impulso a iniciativas de paz transformadoras que sí tengan como aspectos centrales de la agenda la inclusividad y los derechos humanos. La comunidad internacional, bajo el liderazgo de Naciones Unidas, puede jugar un papel importante acompañando un proceso que debe obedecer a dinámicas y lógicas locales y no a imposiciones externas que lo distorsionen. Por otra parte, el Gobierno afgano debe ser capaz de afrontar retos ineludibles como la participación significativa de las mujeres afganas en el proceso, así como la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos que los diferentes actores implicados en el conflicto armado han cometido y siguen cometiendo en el país. Se trata de exigencias básicas y concretas de importantes sectores de la sociedad civil afgana.

Un futuro escenario de construcción de paz en el país hará frente a importantes obstáculos, puesto que un eventual acuerdo de paz entre EEUU y los talibanes no significará la plena finalización del conflicto armado en el país, aunque indudablemente supondrá la reducción del principal foco de violencia. Así pues, permanece el interrogante sobre cuál será la relación entre talibanes y fuerzas de seguridad afganas y sobre qué sucederá con otros actores armados, fundamentalmente ISIS, ya que no está claro qué capacidad de control sobre sus acciones tienen los talibanes. Además, en el marco de un proceso con el Gobierno afgano se deberá abordar cuál será el encaje político de los talibanes y su aceptación o no del marco constitucional e institucional afgano

actual. Así pues, se abre por delante la posibilidad de un proceso de transición en el que se refuerce la situación de impunidad y poder de actores armados, con instituciones excluyentes o, por el contrario, que constituya una oportunidad para consolidar una agenda de derechos humanos y que abra espacios más amplios para la participación social. Esta oportunidad no debería ser un paréntesis en un conflicto que ha dejado un legado de destrucción tan profundo en la sociedad afgana, sino que debería servir para iniciar un proceso de paz verdaderamente sostenible e inclusivo en el que se acometan los retos y las reformas pendientes para lograr una mejora sustantiva en las condiciones de vida de la población afgana.

4.2. Perspectivas de transición en Sudán y Sudán del Sur

Tras años de inestabilidad y conflictividad armada padecidos en Sudán y Sudán del Sur, durante el año 2019 ambos países han vivido diversos escenarios políticos que han abierto la puerta al inicio de sendos procesos transicionales que pueden lograr asentar la paz y la estabilidad. Si las transiciones tienen éxito, el siguiente paso será la convocatoria de elecciones para que la ciudadanía de cada país vuelva a tener en sus manos la elección de sus respectivos gobiernos, cerrando de este modo el círculo de los regímenes anteriores. Se atisba un proceso complejo en cada país, no exento de dificultades y retos que tendrán que ir abordándose en cada contexto, pero a su vez, se presenta como el mejor escenario posible después de años de inestabilidad que han golpeado drásticamente a las poblaciones de ambos estados vecinos.

En lo que respecta a Sudán, 2019 significó el año del cambio tras la caída del presidente Omar al Bashir y del Gobierno del National Congress Party (NCP), después de 30 años asentados en el poder bajo un régimen de carácter autocrático erigido a partir de la militarización del Estado. La última oleada de movilizaciones populares iniciadas en diciembre de 2018, pero que remiten al año 2012, conllevó la caída del Gobierno en el mes de abril y la creación de un Consejo Militar de Transición (TMC) que anunció que estaría en el poder durante dos años. Tras meses de importantes tensiones en el país debido a la negativa de los militares a entregar el poder a los civiles, y después de importantes presiones internas e internacionales, sobre todo por parte de la Unión Africana, se logró la conformación de un Gobierno de Transición híbrido. Este nuevo Ejecutivo estaba conformado por civiles y militares y fue ratificado a mediados de agosto, presidido por el economista Abdalla Hamdok como primer ministro y por Abdel-Fattah Burhan, jefe general de TMC, como presidente del Consejo Soberano. En los acuerdos establecidos se estipuló que se abriría un proceso de transición que durará 39 meses antes de celebrar elecciones y devolver el poder a la ciudadanía, tiempo en el cual el Gobierno de transición trabajará en la elaboración de reformas legales y económicas, así como en delinear una política exterior equilibrada.

El nuevo Gobierno sudanés ha ido introduciendo diferentes medidas dirigidas hacia un nuevo proceso de apertura democrática. Entre ellas destaca la puesta en marcha de reformas legales para aumentar la protección de las libertades civiles, así como también el inicio de procesos judiciales sobre crímenes y violaciones a los derechos humanos producidos en el país para tratar de poner fin a la impunidad. Del mismo modo también ha dado pasos, presionado por las demandas de la sociedad civil sudanesa, contra el antiguo régimen, disolviendo el

antiguo partido gobernante del NCP. El movimiento de mujeres sudanesas, muy activo en las movilizaciones populares que consiguieron el derrocamiento de al Bashir, se mantiene muy activo en el país. Entre otras cosas, ha exigido al nuevo Ejecutivo de transición la adhesión a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la cual no había sido ratificada por el país por negativa del anterior Gobierno. Asimismo, otro de los escenarios sobre el cual el nuevo Gobierno está incidiendo es el relativo a desescalar la violencia en las regiones en guerra (Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, también denominadas estas dos últimas como “las Dos Áreas”), retomando las conversaciones de paz que se están desarrollando en la actualidad en Juba, capital de Sudán del Sur.¹ La resolución de dichos conflictos armados representa una prioridad en la nueva agenda del Gobierno, habiéndose establecido un periodo de seis meses desde su conformación para traer la paz a las regiones en guerra a través de la firma, el 11 de septiembre, de una hoja de ruta para la paz denominada “Declaración de Juba de Medidas de Fomento de la Confianza y la Preparación para la Negociación”. Al respecto se han dado algunos pasos positivos en la reducción de la violencia armada en Darfur y las Dos Áreas, mediante diferentes medidas adoptadas: decretos de altos el fuego, liberación de prisioneros políticos, facilitación de la llegada de ayuda humanitaria, etc. Si bien las negociaciones de paz de Juba no han podido lograr el objetivo de cerrar un acuerdo de paz en los territorios en los seis meses estipulados, las mismas se mantienen abiertas con proyecciones positivas de generar un acuerdo estable.

En lo que respecta a la transición en Sudán del Sur, durante el 2019 la violencia en el país se ha reducido significativamente, en el marco de un contexto caracterizado por la ratificación por las partes en 2018 del acuerdo de paz firmado en el 2015, bajo el nuevo acuerdo denominado Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan (R-ARCSS). Este escenario ha dado pie a la consecución de la firma del alto el fuego más longevo producido entre los dos principales grupos que iniciaron el conflicto armado en diciembre de 2013. La reducción de las hostilidades militares ha producido una mejora en la situación de seguridad, ha facilitado el libre desplazamiento de personas, así como también ha incidido en facilitar la provisión de ayuda humanitaria. Este último aspecto se vuelve fundamental en un país que a finales de 2019, según datos de la ACNUR, registraba alrededor de 4,3 millones de personas desplazadas forzosamente por la violencia. Estas cifras situaban a Sudán del Sur como la mayor crisis de personas refugiadas en África y la tercera más grande del mundo, por detrás de Siria y Afganistán.²

1. Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2020.
2. UNHCR, “South Sudan Refugee Crisis”.

Del mismo modo, como parte del acuerdo R-ARCSS, las partes acordaron el establecimiento de un periodo de pre-transición de ocho meses, tiempo en el cual se debía configurar un Gobierno transicional de coalición. Si bien los tiempos iniciales previstos no cumplieron, la conformación, a principios de 2020, del ansiado Gobierno de Unidad, ha abierto un nuevo escenario de transición y esperanza en el país. Aún es pronto para juzgar la capacidad de las partes para mantener la unidad en el país, existiendo diferentes retos a resolver (descentralización territorial, reforma del sistema de seguridad, etc.), pero sin duda la conformación del nuevo ejecutivo representa un importante paso en la desescalada de la confrontación a nivel nacional y una oportunidad para lograr asentar la paz.

En este nuevo escenario de oportunidad abierto en los dos países, también hay que añadir los importantes avances que se han registrado durante el 2019 en las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Sudán y Sudán del Sur. Esta mejora en las relaciones se observa, por un lado, en la firma de un acuerdo de delimitación fronteriza histórico entre ambos estados y, por otro, en el mayor compromiso de los gobiernos de ambos países en la resolución de los conflictos armados del país vecino. En el primer caso, los dos países han vuelto a reabrir los cruces fronterizos para mejorar el comercio bilateral y la libertad de movimiento, firmando un acuerdo de delimitación de la frontera compartida en agosto de 2019, dejando solo cinco áreas sujetas a nuevas negociaciones: Dabba al-Fukhar, Jabal al-Muqainis, Kaka, Kefi Kenji y Hofrat Al-Nehass. En el segundo caso, el Gobierno de Sudán del Sur se ha ofrecido como mediador en las conversaciones de paz entre el Gobierno de Sudán y las fuerzas rebeldes

La conformación de gobiernos transicionales de unidad en Sudán y Sudán del Sur abre un nuevo escenario para la consecución de la paz y la estabilidad en la región

de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, las cuales tienen lugar en Juba, capital sursudanesa. Del mismo modo, el Ejecutivo sudanés ha hecho lo propio en relación al conflicto armado en Sudán del Sur, incidiendo entre el Gobierno de Salva Kiir y el principal grupo opositor, el SPLA-IO, encabezado por Riek Machar.

Entre los principales retos que afrontan los procesos de transición en ambos países, destaca la capacidad que tengan los ejecutivos de mantener la unidad, introducir medidas que frenen los estragos que la crisis socioeconómica está generando en la población más vulnerable, así como resolver las tensiones y poner fin a los escenarios de violencia que aún persisten. En este último caso, en ambos estados se mantienen episodios de violencia debido a la existencia de grupos armados no signatarios de los correspondientes acuerdos de paz:

en el caso de Sudán destaca la presencia de las fuerzas rebeldes darfuríes del SLA lideradas por Abdel Wahid (SLA-AW), mientras que en Sudán del Sur entre los diferentes grupos armados aún activos se encuentra el Frente de Salvación Nacional (NAS), dirigido por Thomas Cirillo, en la región de Ecuatoria Central. Por ello, será determinante la capacidad de inclusión de dichas fuerzas en negociaciones de paz para lograr un compromiso total de acabar con la violencia.

En ambos escenarios transicionales se prevé fundamental la presión que puedan seguir ejerciendo sobre ellos la sociedad civil organizada de ambos países, así como la comunidad internacional, fundamentalmente la proveniente de la Unión Africana y los organismos regionales, para tratar de garantizar que el camino hacia la paz, la estabilidad y la democracia se torna irreversible.

4.3. El nuevo proceso de negociación entre el Gobierno tailandés y el BRN, principal grupo armado del sur del país

Durante el 2019, en paralelo al colapso del proceso de paz que en 2015 habían iniciado el Gobierno de Tailandia y MARA Patani —organización paraguas que representa a varios grupos armados—, trascendieron varios contactos exploratorios entre el nuevo Gobierno y el principal grupo armado que opera en el sur del país, el BRN. En enero de 2020, el Gobierno y el BRN formalizaron el inicio de un nuevo proceso de paz en una rueda de prensa conjunta en Kuala Lumpur (Malasia) en la que reconocían haber llevado a cabo la primera ronda de negociación, ponían fecha para un siguiente encuentro en marzo y expresaban su intención de negociar bilateralmente en primera instancia para posteriormente incluir a otros grupos insurgentes en el proceso. A pesar de los elevados niveles de violencia en el terreno, de las resistencias por parte de sectores del Estado y de la insurgencia a resolver el conflicto a través del diálogo, de las reservas del Estado a impulsar cualquier medida de descentralización o autonomía regional, y de las dificultades que se han observado en los anteriores procesos de negociación,³ existen algunas variables que invitan al optimismo respecto de la resolución de uno de los conflictos armados más mortíferos del Sudeste asiático en los últimos años.

Tras la parálisis del proceso de paz con MARA Patani, el Gobierno inició conversaciones de paz directas con el grupo armado más activo en el sur del país

En primer lugar, las conversaciones de paz directas con el BRN, sobre el que existe consenso de que es el grupo con mayor capacidad operativa en el sur del país, debería permitir superar una de las principales debilidades y fuentes de frustración del anterior proceso de paz: las dudas de Bangkok sobre la relación entre el BRN y MARA Patani y sobre la ascendencia real y control de esta última sobre los combatientes en el terreno y los niveles de violencia en el sur del país. Aunque formalmente había tres representantes de BRN en MARA Patani, en varias ocasiones el propio BRN expresó su escepticismo y distanciamiento respecto del proceso de paz. Ante la falta de avances sustantivos en la negociación entre el Gobierno y MARA Patani y la constatación de que MARA Patani no ejercía un control directo sobre las células armadas operativas en las tres provincias de Yala, Pattani y Narathiwat, ya desde 2017 el Gobierno trató de establecer contacto con el BRN.⁴ El deseo de Bangkok de entablar conversaciones directas con el BRN se hizo mucho más explícito tras el colapso de las conversaciones con MARA Patani en febrero de 2019 y tras la celebración de las elecciones en marzo, las primeras tras el golpe de Estado de 2014, y la

conformación del nuevo Gobierno en junio. En agosto, de hecho, el propio BRN reconoció haber tenido contactos con el Ejecutivo dentro y fuera del país e incluso declaró haber planteado sus condiciones para el diálogo. A finales de año, el nuevo jefe negociador del Gobierno desde octubre, el General Wanlop Rugsanoah, reconoció abiertamente su intención de iniciar conversaciones bilaterales directas con el BRN y pocos días más tarde trascendió un encuentro en Berlín entre ambas partes, aunque sin la participación de Malasia, que ha ejercido el rol de facilitador del diálogo en los últimos años.

Aún si a finales de 2019 y principios de 2020 el proceso estaba en una fase todavía muy embrionaria, algunos análisis han señalado que ambas partes parecen haber mostrado un mayor compromiso hacia el proceso de negociación. A modo de ejemplo, el Gobierno declaró acceder a que personas expertas en procesos de paz puedan observar las negociaciones (a título individual, y no en representación de ninguna organización), lo que podría interpretarse como gesto hacia el BRN y una respuesta indirecta a su demanda de ampliar e internacionalizar el espacio de intermediación. Cabe recordar que, además de las demandas planteadas por el BRN

en agosto de 2019 —como la liberación de todas las personas acusadas de tener vínculos con el movimiento insurgente o bien el inicio de una investigación sobre las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado—, en abril de 2017 el grupo había emitido un comunicado en el expresaba sus condiciones para cualquier diálogo con el Estado: la participación de la comunidad internacional como observadora del diálogo; la mediación del proceso a cargo de una tercera parte imparcial; y un acuerdo entre las partes negociadoras acerca del diseño del proceso. Del mismo modo, el hecho de que el encuentro que se llevó a cabo en Berlín a finales de 2019 estuviera auspiciado por una organización internacional —y que Malasia declarara no conocer los contenidos del mismo— parece apuntar en la misma dirección. Por otra parte, el hecho de que en octubre de 2019 el Gobierno nombrara al General Wanlop, que había sido secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, podría denotar la intención del Gobierno de atraer a los sectores más reacios de los aparatos de seguridad del Estado hacia una apuesta estratégica de resolver el conflicto a través de la negociación. Según

3. Principalmente las conversaciones que tuvieron lugar en Langkawi (Malasia) a finales de 2005 entre el Gobierno tailandés y representantes de cinco grupos insurgentes a instancias del ex primer ministro malasio Mohatih Mohamad para desarrollar un plan de paz; las negociaciones directas entre el Gobierno de Yingluck Shinawatra y el BRN en 2013 y 2014; y el proceso de paz entre la junta militar y MARA Patani entre 2015 y 2019.

4. Para un análisis del proceso de paz entre el Estado y MARA Patani, véase International Crisis Group, *Southern Thailand: Dialogue in Doubt*, Asia Report nº270, 8 de julio de 2015 y *Southern Thailand's Peace Dialogue: No Traction*, nº 148, 21 de septiembre de 2016. Para un análisis de las etapas previas del proceso de paz, véase Duncan McCargo, *Southern Thailand: From conflict to negotiations?*, Lowy Institute for International Policy, abril de 2014.

el centro de investigación International Crisis Group,⁵ el hecho de que en diciembre de 2018 se estableciera un Secretariado para el Diálogo de Paz en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, cuando hasta entonces la supervisión del proceso había correspondido al Comando de Operaciones de Seguridad Internas —una unidad en el seno de las Fuerzas Armadas que, entre otras cuestiones, tuvo un importante rol en la supresión de la disidencia interna en décadas anteriores— podría ser bien percibido por la insurgencia del sur del país.

Por parte de la insurgencia, trascendió a la prensa que la decisión del BRN de iniciar conversaciones bilaterales con el Gobierno había sido tomada en el máximo órgano decisorio del grupo, el Dewan Pimpinam Parti. Cabe recordar que en las anteriores negociaciones, desde el propio BRN se había cuestionado que sus representantes en MARA Patani tuvieran algún tipo de autoridad o cargo dentro de la organización armada. La decisión del BRN de iniciar conversaciones con el Estado tendría aún más relevancia estratégica porque se produce después de que a principios de 2019 el BRN sustituyera a su líder hasta entonces —Abdullah Wan Mat Noor, también conocido como Dulloh Waemanor⁶— por Kho Zari, que según algunos medios representaría a aquellos sectores del grupo más escépticos con diálogo con el Estado. Sea como sea, durante su primer encuentro en enero de 2020 el Gobierno reconoció la autoridad y representatividad en el seno del BRN del jefe negociador designado por el grupo, Anas Abdulrahman, algo que no había sucedido en el anterior proceso con MARA Patani.

Otro aspecto que puede ser relevante para el nuevo proceso de negociación es que este tendrá lugar en un escenario formalmente democrático y no bajo la tutela de la junta militar (formalmente Consejo Nacional para la Paz y el Orden, CNPO) que ha regido el país desde el golpe de mayo de 2014 hasta las elecciones de marzo de 2019. Si bien dichas elecciones, pospuestas en varias ocasiones en los últimos años, no han supuesto una ruptura importante con el régimen de la junta militar —de hecho, el primer ministro es Prayuth Chan-ocha, líder del CNPO—⁷, sí han supuesto la posibilidad de que se plantee y discutan más abierta y libremente los conceptos de descentralización administrativa, o autonomía regional. Según varios análisis, siendo que la opción de la independencia del sur de Tailandia no es factible y ni siquiera se ha planteado abiertamente en las negociaciones, uno de los aspectos fundamentales de una eventual resolución del conflicto pasa por la disposición del Gobierno a explorar alguna fórmula de organización territorial del Estado que permita acomodar

las aspiraciones de autogobierno de la mayor parte de la población de las provincias sureñas de mayoría musulmana. Históricamente el Gobierno jamás ha mostrado disposición en público a ni siquiera discutir esta cuestión, pero a principios de 2019 el entonces negociador en jefe del Gobierno, el General Udomchai Thammasarorat, por primera vez declaró estar estudiando fórmulas como una zona administrativa especial u otras fórmulas compatibles con la Constitución. En las elecciones del pasado mes de marzo, la mitad de los 13 escaños que se elegían en las provincias afectadas por el conflicto armado fueron ganados por un partido —Prachachart— que aboga abiertamente por una resolución dialogada del conflicto y por un modelo de descentralización política para las provincias sureñas fronterizas con Malasia. En la misma línea, Abhisit Vejjajiva, antiguo primer ministro y líder del Partido Demócrata (la formación históricamente dominante en el sur del país y uno de los más importantes en la historia reciente del país), también abogó abiertamente por la descentralización del poder como un mecanismo de resolución del conflicto.

Aunque los niveles de violencia han disminuido paulatinamente en los últimos tres años hasta alcanzar los mínimos históricos desde el reinicio del conflicto armado en 2004, el Estado ha reconocido públicamente en varias ocasiones que la estrategia militar de contrainsurgencia es insuficiente para resolver el conflicto armado. De hecho, la insurgencia del sur del país ha demostrado contar con una importante capacidad operativa en el terreno, como así lo demuestra el atentado que llevó a cabo en noviembre de 2019 en el que 15 personas fallecieron. Además, algunas voces han advertido sobre la posibilidad de que la cronificación del conflicto armado propicie la irrupción de organizaciones de corte yihadista con objetivos alejados de la agenda política de las organizaciones insurgentes del sur del país. Por su parte, la insurgencia ha comprobado como los altos niveles de violencia en el sur del país no solamente no han comportado ninguna concesión política significativa por parte del Estado, sino que ha propiciado una militarización sin precedentes de la zona y la imposición desde el 2005 de un decreto de emergencia que algunas voces han comparado con la ley marcial y que ha sido muy criticada por auspiciar la impunidad con la que operan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la región. Así las cosas, el inicio de un proceso de diálogo entre el Estado y el mayor grupo armado del sur de Tailandia en un contexto de creciente normalización democrática del país parece ser un paso en la buena dirección en la resolución del conflicto.

5. International Crisis Group, *Southern Thailand's Peace Dialogue: Giving Substance to Form*, Asia Report n° 304, 21 de enero de 2020.

6. Dulloh Waemanor había sustituido a Sapaeng Basor tras su muerte en Malasia a principios de 2017.

7. Según la Constitución aprobada por la Junta Militar en 2017, el primer ministro es elegido en una sesión conjunta entre la Cámara de Representantes y el Senado, cuyos 250 miembros son designados íntegramente por el CNPO.

4.4. El impulso de la sociedad civil a la justicia transicional en la ex Yugoslavia frente a los bloqueos políticos: hacia un registro regional de víctimas

Las guerras de los años noventa en el espacio de la ex Yugoslavia resultaron en graves impactos en la población civil en todos los territorios afectados, incluyendo en términos de víctimas mortales, personas heridas, desaparecidas, desplazadas forzosamente, víctimas de violencia sexual, torturas, entre otras. En estas décadas, diversos procesos e iniciativas internacionales y locales en el ámbito de la justicia transicional han abordado cuestiones relativas a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de esos conflictos, como el trabajo del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), establecido en 1993 y disuelto en 2017, o las Cámaras Especializadas y la Fiscalía Especializada –tribunal establecido en 2017 con sede en La Haya y jueces internacionales pero integrado en el sistema judicial de Kosovo con el mandato y jurisdicción relativos a supuestas graves violaciones del derecho internacional por parte de miembros del grupo armado albanokosovar ELK recogidas en un informe del Consejo de Europa de 2011. Los esfuerzos de justicia transicional han hecho frente a múltiples obstáculos, en gran parte vinculados a la falta de voluntad política de los gobiernos regionales por impulsar procesos efectivos de justicia transicional. Pese a ello, actores de la sociedad civil regional continúan impulsando nuevas iniciativas en el ámbito de justicia transicional. Entre las iniciativas, la red de la sociedad civil de la ex Yugoslavia conocida como Coalición para una Comisión Regional para el Establecimiento de los Hechos sobre todas las Víctimas de Crímenes de Guerra y otras graves Violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia (RECOM) anunció en 2019 el compromiso de creación de un listado regional completo de víctimas de las guerras de los años noventa en el espacio de la ex Yugoslavia.

La Coalición para la RECOM, que agrupa actualmente a más de 2.000 organizaciones de la sociedad civil de la ex Yugoslavia y en la que todas las comunidades étnicas de la región estaban representadas, se creó en 2008 para impulsar el establecimiento de una comisión regional, oficial, por parte de los gobiernos sucesores de la ex Yugoslavia, que tuviera carácter independiente con respecto a los gobiernos fundadores y que asumiera el mandato de establecer los hechos relativos a los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos; establecer un registro de todas las víctimas de las guerras; recopilar los datos sobre espacios de detención y personas víctimas de tortura y malos tratos en el marco de los conflictos, así como datos sobre personas desaparecidas; y llevar a cabo audiencias públicas de testimonios de personas víctimas, entre otras.

La decisión de más de dos mil organizaciones de la Coalición para la RECOM de aspirar a completar un listado de víctimas constituye una oportunidad para la construcción de la memoria regional

La creación de la RECOM era vista por actores de la sociedad civil como una vía para avanzar en la reparación y la reconciliación, así como para evitar la manipulación e instrumentalización política por las élites respectivas de los impactos de los conflictos armados, incluyendo los balances de víctimas. En 2014 se avanzó en un estatuto de la RECOM que recogía planteamientos de los gobiernos, como la clarificación de que la RECOM no sería un órgano judicial ni que se financiaría con presupuestos estatales. La involucración de los enviados de los presidentes de la región en esas fechas mostraba cierta apariencia de compromiso político.

No obstante, en los últimos años ha quedado clara la negativa de los gobiernos a hacer realidad la comisión regional. Pese a nuevos esfuerzos de la Coalición para la RECOM en 2017 –año en que llegaba a su fin el TPIY–, incluyendo con nuevas recogidas de firmas, estos resultaron infructuosos. La Cumbre de los Balcanes Occidentales de 2018, que había generado esperanzas de un posible impulso a la creación de la RECOM a materializarse en forma de la firma de una declaración de establecimiento de la RECOM, puso de manifiesto la falta de voluntad política, sin que se lograra dicha declaración formal. Finalmente, a finales de 2019 la Coalición para la RECOM, constatando nuevamente la falta de voluntad política de los respectivos gobiernos, acordó dejar sin efectos el estatuto de la RECOM y asumir como sociedad civil el reto de elaboración de un listado regional de víctimas.

Si bien el abandono de la RECOM por los gobiernos supone un fracaso institucional, la decisión de las más de dos mil organizaciones de la Coalición para la RECOM de seguir adelante y aspirar a completar un listado de víctimas constituye una oportunidad para la construcción de la memoria regional y, con ella, avanzar en la reparación y la reconciliación. Supone además una demostración de que el tejido social es un actor clave de construcción de paz, imprescindible para avanzar frente a las resistencias institucionales y políticas, a pesar de las limitaciones de recursos y alcance. Como parte de su empeño, la coalición de la sociedad civil presentó en 2019 un mapa que documentaba 130.000 víctimas fallecidas o desaparecidas y que continuará ampliando. Como parte de ello, está prevista la intensificación del proceso de documentación de los crímenes de guerra, incrementando el número de personas investigadoras en los equipos de análisis de la coalición, así como involucrando a centros académicos. La coalición también prevé fortalecer la red de reconciliación y justicia transicional en la región para el periodo 2020-2023 y ofrecer apoyo experto a las entidades juveniles

en su trabajo de denuncia sobre los intentos de tergiversación política de hechos esclarecidos por los tribunales internacionales.

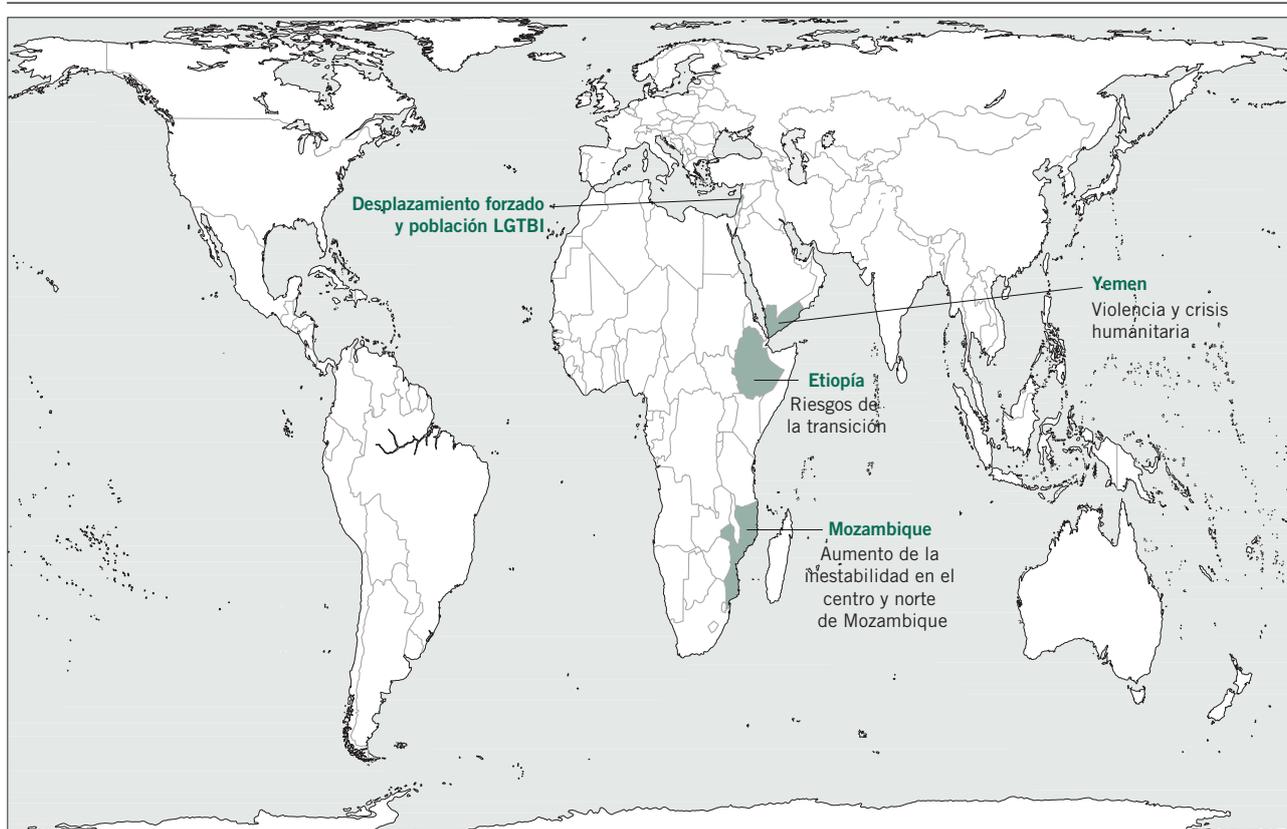
La sociedad civil organizada de la ex Yugoslavia afronta obstáculos a sus esfuerzos de justicia transicional, incluyendo la prevalencia de narrativas políticas y sociales que han tendido a minimizar o a rehuir las responsabilidades de los antecesores políticos y militares de los respectivos territorios y comunidades en las graves violaciones de derechos humanos durante los conflictos; la limitada voluntad política de colaboración efectiva con los procesos internacionales e híbridos de justicia transicional; los limitados recursos destinados a los procesos judiciales locales y la continuación de dificultades en estos, como la insuficiente protección de

testigos; así como los ataques y abusos contra defensores de derechos humanos en la región, entre otros. No obstante, elementos como su experiencia acumulada de documentación y denuncia, la articulación en red regional y la multiplicidad de actores (organizaciones de derechos humanos, organizaciones juveniles, asociaciones de víctimas, centros de investigación, entre otros) fortalecen la oportunidad existente. Para fortalecerla, se hace necesario también el apoyo decidido de actores de la comunidad internacional en múltiples niveles, incluyendo en forma de apoyo político a los esfuerzos en justicia transicional de la sociedad civil en el marco de diálogos bilaterales y multilaterales de actores internacionales con los gobiernos de la región y a través de apoyo económico internacional a los actores de la sociedad civil de la región.

5. Escenarios de riesgo para 2020

A partir del análisis del año 2019 de los escenarios de conflicto armado y tensión a nivel mundial, la Escola de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo cuatro contextos que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante 2020. Los escenarios de alerta de cara al año 2020 hacen referencia a los retos de la transición etíope en un año que se prevé convulso; al incremento de la violencia en Mozambique y los riesgos para el nuevo acuerdo de paz; a las perspectivas en Yemen tras cinco años de escalada de violencia en el país y en un escenario de frágiles iniciativas de paz; y a los riesgos específicos para la población LGTBI en el contexto global de desplazamiento forzado.

Mapa 5.1. Escenarios de riesgo para 2020



5.1 Retos y riesgos de la transición etíope ante un 2020 convulso

El nombramiento del primer ministro Abiy Ahmed a principios de 2018 propició importantes y positivos cambios a nivel doméstico y a nivel regional en Etiopía. El histórico acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía de septiembre de 2018, resultado de numerosas complicidades a ambos lados del Mar Rojo creando un *momentum* para la paz en el Cuerno de África, no hubiera sido posible sin la visión y la voluntad política de Abiy Ahmed.¹ A nivel interno, dando continuidad a algunas de las políticas iniciadas por el anterior primer ministro Hailemariam Desalegn, en unos pocos meses, Abiy levantó el estado de emergencia en el país, ordenó la liberación de miles de prisioneros, , permitió que sectores disidentes regresaran al país y propició una mayor libertad de expresión al facilitar la creación de nuevos partidos y el desbloqueo de cientos de sitios web y canales de televisión. Alcanzó acuerdos de paz con las históricas insurgencias de Oromiya y de Ogadén, el OLF y el ONLF, respectivamente. Inició un proceso de reformas designando a antiguos defensores de los derechos humanos para fortalecer instituciones como la junta electoral y aceleró la reforma de la economía debido al endeudamiento del Estado. Sus acciones le ganaron elogios tanto nacionales como extranjeros, que culminaron con la entrega del Premio Nobel de la Paz 2019 por sus esfuerzos en el proceso de paz entre Eritrea y Etiopía. Sin embargo, las acciones de Abiy para dismantlar el viejo orden han desembocado en un debilitamiento del Estado etíope. Le han dado un nuevo impulso a los movimientos nacionalistas de base étnica resurgidos durante las movilizaciones masivas iniciadas en 2015 por parte de la comunidad oromo que finalmente le llevaron al poder. Esta situación está desencadenando una escalada de violencia política que podría incluso afectar al desarrollo de las elecciones programadas para 2020.

Cuando la coalición gobernante del Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF) estableció el sistema de federalismo étnico tras su llegada al poder en 1991, pretendía equilibrar las demandas de más de 90 grupos étnicos, muchos de los cuales estaban organizados en movimientos nacionalistas armados. El federalismo étnico, que dividió a Etiopía en nueve estados semiautónomos (y dos ciudades multiétnicas), otorgó a los grupos étnicos más grandes un mayor grado de autogobierno y ofreció reconocimiento y niveles reducidos de autonomía a muchos grupos más pequeños.

Sin embargo, más de dos décadas después, el sistema que en su momento fue diseñado para aglutinar una

nación multiétnica ahora está contribuyendo a su implosión, tal y como destacan diversos análisis. Ha sembrado la disfunción política, ya que las tareas ordinarias de gobierno se han convertido en espacios de competencia y conflicto étnico. La delimitación de los límites administrativos, la asignación de recursos estatales, la organización de un censo dos veces pospuesto y los planes para la celebración de las elecciones en 2020 son motivo de creciente tensión.² Estas tensiones étnicas se han intensificado bajo las reformas liberalizadoras de Abiy Ahmed. A medida que el EPRDF ha reducido su estricto control, han surgido nuevas oportunidades, agravios y discursos de la mano de líderes regionales y actores de la sociedad civil. En noviembre la ONU alertó de la existencia de dos millones de personas desplazadas como consecuencia del clima de violencia intercomunitaria que sacude al país.³

Las zonas del país más afectadas por la violencia intercomunitaria fueron el noroeste (región Amhara), el noreste y el centro-sur (Oromiya). Entre las acciones más destacadas, cabe remarcar la muerte de 200 personas a principios de mayo de 2019 de la comunidad gumuz en la zona Agi Agew (Amhara) en represalia por ataques previos en la región Benishangul-Gumuz; en junio de ese año se produjeron asesinatos de altos cargos del gobierno de la región de Amhara, lo que fue calificado como un intento de golpe de estado contra esta región, y el Gobierno federal intervino para controlar la situación, llevando a cabo acciones represivas contra la oposición política amhara. Entre otros hechos, cabe destacar la muerte de 86 personas durante las protestas que tuvieron lugar en octubre en Addis Abeba y otras partes del estado de Oromiya en protesta por la acusación contra un activista, Jawar Mohammed, quien había sido uno de los artífices de las protestas que contribuyeron a encumbrar a Abiy al poder en 2018 y que ahora acusó al primer ministro de repetir los mismos errores que sus antecesores.

Tal y como destacó la organización International Crisis Group (ICG), existen cuatro ejes de división y conflicto.⁴ El primero de ellos afecta a la región de Oromiya, el estado natal de Abiy, donde sus rivales, e incluso algunos antiguos aliados, consideran que el primer ministro debería hacer más para promover los intereses de la región. El segundo eje de división enfrenta a los líderes de la comunidad oromo con los del estado de Amhara, el segundo más poblado de Etiopía, cuyos líderes cuestionan la creciente influencia de Oromiya sobre el Gobierno,

El sistema de federalismo étnico en Etiopía, que en su momento fue diseñado para aglutinar una nación multiétnica, ahora está contribuyendo a su implosión, según diversos análisis

1. Véase el resumen sobre Eritrea-Etiopía en el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2020.

2. Véase Woldemikael, Olivia, "Ethiopia: Beyond ethnic federalism", *African Arguments*, 9 de diciembre de 2019.

3. Véase el resumen sobre Etiopía en el capítulo 2 (Tensiones).

4. Véase International Crisis Group, *Keeping Ethiopia's Transition on the Rails*, n°283/África, 16 de diciembre de 2019.

así como sobre la multiétnica capital, Addis Abeba, que a su vez está rodeada por la región de Oromiya. El tercer eje de división enfrenta a las comunidades tigray y amhara (junto a sus respectivos estados), respecto a dos territorios -Gichew y Gobe- que el estado de Amhara afirma que Tigray se anexionó a principios de la década de los noventa. El cuarto eje implica a los líderes de la comunidad tigray (y su respectivo estado) y al Gobierno federal de Abiy. La comunidad tigray percibe una pérdida de poder y privilegios en la ruptura del sistema político que ambos construyeron en 1991. El partido de la comunidad tigray, el Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) se resiste a la pérdida de poder derivada de su no participación en el nuevo partido forjado de las cenizas de la coalición EPRDF, el Partido de la Prosperidad (PP). Este partido aglutina representantes de los otros tres partidos (el amhara ADP, el oromo ODP y el multiétnico SEPDM) de la antigua coalición excepto del TPLF, que no ha querido integrarse en el PP (porque implicaba diluir su poder en un nuevo partido), además de otros partidos de otras regiones. El objetivo de la creación del partido también responde a un intento de reducir la tensión y las divisiones étnicas que han contribuido a definir el país, buscando fomentar la unidad nacional y la integración de las etnias en un proyecto común.

Por otra parte, el aumento de los ataques contra iglesias y mezquitas en diversas partes del país en 2019 sugiere que las crecientes tensiones interreligiosas podrían agregar otro nivel de complejidad a la situación. En este sentido, la influyente Iglesia ortodoxa criticó la respuesta del primer ministro a los enfrentamientos afirmando que había fracasado en proteger a los miembros de esta congregación, debido a que la Iglesia ortodoxa Tewahedo, que se vincula a la comunidad amhara, sufrió diversos ataques. Otra cuestión a tener en cuenta es la exclusión de amplias franjas de población del supuesto milagro económico etíope, que contribuye a exacerbar la situación.

Una última cuestión que contribuye negativamente es el estancamiento del proceso de paz entre Eritrea y Etiopía durante el año 2019, con muchos frentes todavía abiertos.⁵ La frontera continúa siendo una de las zonas más militarizadas del planeta con la presencia de centenares de miles de soldados de ambos países y la existencia de un número indeterminado de minas antipersona. Es imprescindible una rápida supervisión regional e internacional de la desmilitarización de la frontera para evitar que pueda producirse una involución en el proceso. Tigray, como estado fronterizo en el que se tienen que implementar algunas decisiones relativas al acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía, ha contribuido a agravar esta situación bloqueando decisiones del Gobierno federal.

A las tensiones se suma otro debate cada vez más destacado entre partidarios y opositores del sistema federalista étnico del país, posiblemente el principal campo de batalla político de Etiopía en la actualidad, tal y como destaca el ICG. El sistema, introducido

en 1991 después de que el gobierno revolucionario liderado por Tigray tomara el poder, delega la autoridad a las regiones definidas etnolingüísticamente, mientras divide el poder central entre los partidos gobernantes de esas regiones. Si bien el apoyo y la oposición al sistema se define en parte por quién puede ganar o perder por su desmantelamiento, ambas partes reúnen argumentos sólidos que entroncan con importantes debates académicos sobre la cuestión. Los defensores señalan la historia sangrienta anterior al 1991 del gobierno central coercitivo y argumentan que el sistema protege los derechos de las diferentes comunidades etnolingüísticas en un país diverso formado a través de la conquista y la asimilación. Los detractores argumentan que, debido a que el sistema estructura el estado según líneas étnicas, socava la unidad nacional, alimenta el conflicto étnico y deja en una situación de vulnerabilidad a las minorías en regiones dominadas por los principales grupos étnicos. Este debate se puso de manifiesto en el referéndum celebrado por la comunidad sidama. El 20 de noviembre de 2019 se celebró un referéndum en la región para decidir si se convertía en un estado federal semi autónomo. La comisión electoral dictaminó que el 98,5% de la gente que participó en el referéndum votó a favor de la creación del nuevo estado, en un proceso que transcurrió en un clima de libertad y normalidad democrática. La comunidad sidama representa el 4% de la población del país, siendo la quinta comunidad nacional más amplia, y la principal en el estado de los Pueblos, las Naciones y las Nacionalidades del Sur (Southern Nations, Nationalities and People's State, SNNPS por sus siglas en inglés), del que se separará. Históricamente sectores de la comunidad sidama han reclamado disponer de un estado propio, lo que ha provocado tensiones en la región SNNPS, que acoge a 56 grupos étnicos. Diversos analistas señalaron que este paso, que convertirá la región sidama en el décimo estado, puede ser un acicate para que otras comunidades (wolayta, hadiya, gurage, keffa, entre otras) pretendan disponer de su propio estado en términos étnicos.

El ciclo electoral que tendrá lugar en 2020 puede contribuir a fortalecer la transición o a exacerbar la división y el conflicto, por lo que no es descartable que si el clima de violencia intercomunitario sigue escalando, pueda desembocar en un aplazamiento electoral. Más allá de cuál sea el resultado final, es determinante que este proceso contribuya a la celebración de un diálogo nacional donde las condiciones principales sean la participación de todos los actores políticos y sociales, la ausencia de violencia en la defensa de las diferentes opciones políticas y la erradicación del discurso del odio para prevenir la polarización de las opciones divergentes. El proceso de reformas emprendidas por el Gobierno de Abiy se está viendo amenazado por todas estas cuestiones, que pueden, en definitiva, hacer fracasar la transición en marcha en un país que además juega un papel determinante a nivel regional y en el conjunto del continente africano.

5. Véase el resumen sobre Eritrea-Etiopía en el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2020.

5.2. El incremento de la violencia en Mozambique y los riesgos para el nuevo acuerdo de paz

Durante el 2019 Mozambique ha vuelto a padecer un incremento de la violencia y la inestabilidad en diferentes provincias del país que amenazan los esfuerzos por consolidar la paz. Por un lado, si bien en agosto de ese año se logró la firma de un acuerdo de paz, calificado como histórico, entre el Gobierno Mozambiqueño y el principal grupo opositor RENAMO, las divisiones internas y las luchas de poder en el movimiento opositor amenazan seriamente la consolidación de la paz alcanzada. Por otro lado, más inquietante se presenta el incremento de la violencia en la provincia norteña de Cabo Delgado provocado por el accionar de grupos insurgentes, así como por la presencia de contratistas privados de seguridad, que amenaza con generar un efecto contagio en la zona.

En lo que respecta a las tensiones históricas entre el partido de Gobierno FRELIMO y el opositor grupo RENAMO, el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Maputo firmado entre ambos en agosto de 2019, si bien ha puesto fin sobre el papel al histórico contencioso que han mantenido las dos fuerzas políticas en el país, el pacto se ha visto seriamente amenazado debido a las fracturas internas en el seno de la RENAMO. Dichas fracturas han emergido a raíz de las luchas por el liderazgo de la organización producidas tras el fallecimiento, en mayo de 2018, del histórico líder de RENAMO Afonso Dhlakama. Tras un proceso interno cargado de tensiones y enfrentamientos, en enero de 2019 Ossufo Momade fue elegido presidente de RENAMO con alrededor del 60% de los votos, sin embargo, una sección del movimiento se negó a reconocerlo. Apenas seis meses después de su nombramiento, Momade firmó un primer acuerdo de desmilitarización con el presidente Filipe Nyusi que generó recelos y tensiones en algunos sectores armados del movimiento, que exigieron su renuncia, acusándolo de traicionar al grupo. Posteriormente, estas tensiones y discrepancias se trasladaron a la firma del acuerdo de paz entre RENAMO y el Gobierno, que tampoco fue reconocido por el sector disidente del grupo, autodenominado Junta Militar de RENAMO y presidido por Mariano Nhongo. Más tarde, y como consecuencia de la importante derrota cosechada por RENAMO en las elecciones celebradas en octubre (presidenciales, provinciales y legislativas), en las cuales obtuvo solo el 22% del sufragio frente al 73% del partido de gobierno, las tensiones al interior de la organización se incrementaron, poniendo aún más en entredicho el liderazgo de Momade. FRELIMO no solo amplió sus votos y apoyo a nivel nacional, sino que también se impuso en todas las asambleas provinciales del país, incluidas aquellas situadas en los bastiones históricos de apoyo de RENAMO. La disidente Junta Militar de RENAMO no reconoció los resultados de los comicios y se atribuyó diversos ataques

El deterioro de las crisis abiertas en Mozambique con la disidencia de la RENAMO en la región central del país y con grupos armados yihadistas en Cabo Delgado amenaza la consolidación de la paz

armados en el centro del país, principalmente en la provincia de Sofala. Desde ese momento, los enfrentamientos armados y los ataques contra civiles se han intensificado, y la disidencia interna se ha negado a participar en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes (DDR) estipulado en el acuerdo de paz. La Junta Militar de RENAMO ha amenazado con intensificar la guerra si el Gobierno de Nyusi se niega a acceder a negociar mejores condiciones para la reintegración de sus combatientes que las acordadas en el acuerdo de paz de agosto de 2019.

Por otro lado, en el otro frente abierto en el país en la provincia norteña de Cabo Delgado, durante el 2019 se ha producido un incremento significativo de la violencia. Desde el inicio de la violencia en 2017, año en el que se registraron 119 asesinatos, las muertes generadas por el conflicto entre las fuerzas gubernamentales y la insurgencia yihadista han ascendido hasta contabilizar alrededor de 700, así como se han registrado alrededor de 115.000 personas desplazadas. A su vez, también se han incrementado los ataques dirigidos contra la población civil, las tropas gubernamentales así como contra infraestructuras de gas natural o contra empresas extractivas. Del mismo modo,

la violencia ha pasado de concentrarse en las áreas rurales a extenderse a principios de 2020 a centros urbanos, si como también se han registrado incidentes en el lado de la frontera tanzana. Detrás de la oleada de violencia presuntamente se sitúan grupos armados con agendas yihadistas vinculados con la organización Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ), pero también, desde junio del 2019, el Estado Islámico (ISIS) ha anunciado públicamente su presencia en el área atribuyéndose desde ese momento hasta la fecha diferentes ataques producidos en la provincia. Si bien la presencia de ISIS es cuestionada por diversos analistas, así como por las fuerzas de seguridad mozambiqueñas, quienes han negado sistemáticamente que existan evidencias de la presencia efectiva del grupo en la región,⁶ las reivindicaciones de ataques en su nombre son un constante.

El incremento de la inestabilidad en la provincia de Cabo Delgado, una zona de especial relevancia estratégica debido a sus importantes reservas de gas y rubí que son explotadas por industrias extractivas nacionales y extranjeras, ha llevado a que el Gobierno mozambiqueño despliegue una estrategia de militarización para defender sus intereses económicos. Como parte de la misma, durante el 2019 el presidente Felipe Nyusi y su homólogo ruso, Vladimir Putin, firmaron un acuerdo de energía y seguridad que incluía el despliegue en la zona de contratistas privados

6. ISS, "Is Islamic State taking charge of Mozambique's jihadist insurgency?", 10 de enero 2020.

rusos de seguridad. Según diferentes informaciones de prensa, el mismo incluía la presencia en el país de unos 200 mercenarios rusos del Grupo Wagner, quienes se habrían unido a las fuerzas de seguridad mozambiqueñas en el combate a la insurgencia en Cabo Delgado. La presencia de mercenarios rusos no representa una novedad en el continente africano, ya que también existen indicios de su participación en los conflictos armados de Libia, República Centroafricana o Sudán. Si bien el Gobierno ruso ha negado la presencia de estos actores privados, desde el mes de agosto se han registrado diferentes noticias sobre su participación en acciones armadas en Cabo Delgado. Sin embargo, a principios de 2020, según noticias de prensa, el Grupo Wagner se habría retirado del país debido a sus deficiencias en el combate a la insurgencia, siendo reemplazado por el contratista privado con origen en Zimbabwe, Dyck Advisory Group.⁷ Estas y otras medidas puestas en marcha por el Gobierno de Mozambique en

Cabo Delgado para reducir a la insurgencia, a la que cataloga como grupos criminales, han tenido el efecto de incrementar la violencia y de generar un efecto llamada en la zona para combatir a las fuerzas extranjeras.

La consolidación de la ansiada paz en el país, que ha transitado por diferentes escenarios de inestabilidad desde la resolución de la guerra civil en 1992, se ha puesto en entredicho con el incremento de las tensiones y la violencia en las regiones centrales y norteñas. El Gobierno de Mozambique y los países de la región articulados en torno a la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC) tienen ante sí el reto de buscar medidas encaminadas a la consolidación de la paz que ponga fin a la inestabilidad que amenaza con provocar un efecto contagio en la zona. Asimismo, la comunidad internacional tiene ante sí el reto de acompañar a los actores locales de la sociedad civil que trabajan en la construcción de paz en el país.

7. Daily Maverick, "SA private military contractors' and Mozambican airforce conduct major air attacks on Islamist extremists", 9 de abril de 2020.

5.3. Yemen en el abismo: cinco años de escalada de violencia y frágiles iniciativas de paz

En los últimos años, sucesivos análisis han alertado sobre la preocupante deriva del conflicto armado yemení. Escenario de diversos focos de conflicto en el pasado reciente –una rebelión armada desde 2004 liderada por el grupo insurgente conocido como los al-houhistas, en el norte; la persistente actividad de una filial de al-Qaeda; un creciente movimiento secesionista en el sur; y una contestación contra el régimen de Alí Abdullah Saleh en el marco de las revueltas árabes en 2011–, la violencia en el país se ha intensificado sobre todo a partir de 2015. En marzo de ese año, Arabia Saudita decidió intervenir militarmente en apoyo al gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, depuesto meses antes por los al-houthistas –considerados por Riad como “proxies” de Irán– aprovechando el escenario de transición incierta abierto en el país tras la salida de Saleh. Desde entonces, el conflicto armado se ha tornado más complejo debido a la implicación de numerosos actores y a la proyección de intereses regionales e internacionales en la disputa. Adicionalmente, la violencia del conflicto ha llevado al país a afrontar en la actualidad la peor crisis humanitaria provocada por el ser humano, según la ONU. La negativa evolución del conflicto ha estado determinada por diversos factores que, en caso de persistir, podrían conducir a Yemen a una crisis aún más profunda.

En primer lugar, el conflicto se ha caracterizado por un intenso uso de la violencia que ha tenido como consecuencia altos niveles de letalidad y un elevadísimo número de víctimas civiles. Desde 2015, el conflicto armado yemení viene siendo señalado como uno de los más graves a nivel mundial. Según los datos de ACLED, en el último lustro las hostilidades han causado la muerte de unas 100.000 personas, de las cuales unas 12.000 son civiles.⁸ Entre marzo de 2015 y junio de 2019 la Oficina de Derechos Humanos de la ONU había documentado el fallecimiento de una cifra menor, pero igualmente elevada, de civiles: 7.292 víctimas mortales como consecuencia directa de hechos de violencia. Este dramático balance es resultado de las continuas prácticas de ataques indiscriminados y/o deliberados contra población y objetivos civiles –mercados, mezquitas, escuelas, bodas, funerales, entre otros– por parte de los diferentes actores implicados en la contienda. Diversas fuentes han denunciado la especial responsabilidad de la coalición militar liderada por Arabia Saudita, cuyos ataques aéreos han causado la mayoría de las muertes de civiles –un 67% de todas las

víctimas reportadas entre 2015 y 2019, según ACLED– y la mayor parte de los fallecimientos de menores en el marco del conflicto en el período 2015 a 2018, según datos del Grupo de Expertos de la ONU para Yemen.⁹ Pese a las advertencias a las partes sobre la comisión de crímenes de guerra por no respetar principios básicos del derecho internacional humanitario (DIH) –como la distinción entre civiles y combatientes–, estas prácticas han persistido en un clima de impunidad.

En segundo lugar, en los últimos años no se han adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro de la situación humanitaria en el país, que se ha agravado enormemente. Más bien al contrario, el conflicto ha incluido reiterados ataques a infraestructuras de salud, asedios y bloqueos al acceso de ayuda humanitaria. Este tipo de acciones han afectado gravemente a la población, favoreciendo la propagación de enfermedades como el cólera y un aumento en los niveles de desnutrición, en un país altamente dependiente de las importaciones de alimentos y que antes de la escalada de violencia de 2015 ya era el más pobre del mundo árabe. Se estima que un 80% de la población del país –que en total asciende a 30 millones de habitantes– necesita algún tipo de ayuda humanitaria. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y el Frederick S. Pardee Center for International Futures anticipaba que al finalizar 2019 habría unas 102.000 víctimas mortales de violencia directa –una estimación coincidente con ACLED– y que otras 131.000 podrían perder la vida a causa de otros impactos del conflicto, como la falta de alimentos o de acceso a los servicios de salud.¹⁰ Paralelamente, se han denunciado abusos, corrupción y repartos discrecionales vinculados a la entrega humanitaria, en el marco de lógicas de economía de guerra.

Un tercer factor que explica la persistencia de las dinámicas de violencia en Yemen es el continuo flujo de armas y de apoyo logístico militar a las partes contendientes. La provisión de arsenales ha continuado a pesar de los múltiples indicios sobre la comisión de vulneraciones a los derechos humanos y al DIH y de la vigencia de normativas nacionales, regionales y del Tratado Internacional de Comercio de Armas (2014), que exige a los Estados que garanticen que sus exportaciones no serán utilizadas para perpetrar abusos a los derechos humanos, violaciones al DIH o actos de terrorismo, entre

El conflicto armado en Yemen se ha agravado y tornado más complejo por la proyección de intereses regionales e internacionales y ha conducido al país a la peor crisis humanitaria a nivel mundial

8. ACLED, *Press release: over 100,000 reported killed in Yemen war*, ACLED, 31 de octubre de 2019.

9. Human Rights Council, *Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014*, Report of the Group of Eminent International and Regional Experts as submitted to the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/42/17, 9 de agosto de 2019.

10. Jonathan D. Moyer et al. *Assessing the impact of war on development in Yemen*, UNDP – Frederick S. Pardee Center for International Futures, abril de 2019.

otras acciones. En este contexto, el Grupo de Expertos de la ONU sobre Yemen ha advertido explícitamente a países como Irán –denunciado por la provisión de armas a los al-houthistas–, EEUU –principal proveedor de armas a Arabia Saudita– y otros países europeos como Reino Unido o Francia –que también suministran arsenales a Riad y a otros países de la coalición– sobre el riesgo de ser considerados cómplices en la comisión de abusos. España también ha mantenido sus exportaciones de armas a Arabia Saudita, país que se ha convertido en uno de los principales clientes de la industria militar española y que en los últimos años ha pasado a ser el primer comprador de armas a nivel mundial. Aunque algunos países han aprobado algunas restricciones en las ventas de armas –en especial tras el escándalo por el asesinato del periodista Jamal Kashoggi en la embajada saudí en Estambul, en 2018, que expuso internacionalmente las prácticas abusivas de Riad–, aún se está lejos de un embargo total a todas las partes, como reclaman diversas voces. En un contexto en el que están en juego intereses geopolíticos y pugnas de poder regionales, las armas han seguido circulando, favoreciendo con ello que los actores armados yemeníes mantengan su apuesta por la vía violenta para resolver el conflicto.

Por último, un cuarto factor que ha condicionado la evolución del contexto yemení en el último lustro ha sido la fragilidad de las iniciativas de paz. Tras años de bloqueo y desencuentros en los intentos de diálogo, a finales de 2018 la firma del llamado Acuerdo de Estocolmo entre los al-houthistas y el gobierno de Hadi, a instancias de la ONU, alentó ciertas expectativas positivas. Sin embargo, a lo largo de 2019 fueron evidentes las dificultades para implementar el acuerdo. El pacto –considerado como un primer paso entre las partes, con potencial para abrir negociaciones sobre aspectos sustantivos del conflicto en el futuro– contempla tres cuestiones muy concretas: la creación de un comité para desescalar las tensiones en la ciudad

de Taiz, intercambios de prisioneros, y una serie de medidas para garantizar el alto el fuego en el puerto de Hodeida, clave para los ingresos de suministros al país. Durante 2019 no hubo avances en lo primero, solo progresos limitados en el segundo y numerosos obstáculos para consolidar la tregua en Hodeida, en parte por diferencias de interpretación que algunos analistas atribuyen a la vaguedad en el redactado del acuerdo. A esto se suma que en 2019 el conflicto yemení se vio afectado por las divisiones dentro del bando anti-al-houthista, que derivó en una lucha abierta en Adén entre fuerzas del Gobierno de Hadi y sectores secesionistas del sur apoyados por Emiratos Árabes Unidos –país que forma parte de la coalición liderada por Riad, pero que tiene su propia agenda de intereses en Yemen. Si bien Arabia Saudita consiguió que las partes suscribieran un pacto para evitar una nueva guerra dentro del conflicto armado yemení, al finalizar 2019 la implementación del llamado Acuerdo de Riad era incierta, debido a lo ajustado de su cronograma y la persistencia de los enfrentamientos. Omán, en tanto, intentaba facilitar contactos informales entre Riad y los al-houthistas, en un contexto en que analistas destacaban el interés de Arabia Saudita por poner fin a su costosa incursión militar en Yemen.

Un cambio de tendencia en el conflicto armado en Yemen requiere, por tanto, revertir las dinámicas expuestas – frenando la violencia, abordando la crisis humanitaria, deteniendo los suministros de armas y reforzando las iniciativas de paz– y de un mayor compromiso de la comunidad internacional para favorecer una salida al conflicto y atender las urgentes necesidades de la población. Pavimentar el camino a la paz en Yemen también pasa por reconocer la complejidad del contexto yemení y dar cabida a las numerosas voces que desde la sociedad civil –en especial organizaciones de mujeres– vienen reclamando un papel sustantivo en la definición del futuro del país.

5.4 . El desplazamiento forzado en el contexto global: riesgos específicos para la población LGTBI

La violencia, persecución, conflictos y violaciones de derechos humanos continúan desplazando forzosamente a población civil en niveles sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Según los datos publicados por ACNUR en 2019, correspondientes a finales de 2018, la población desplazada forzosamente en el mundo ascendía a 70,8 millones de personas, incluyendo 25,9 millones de personas refugiadas, 41,3 millones de desplazadas internas y 3,5 millones de solicitantes de asilo. Un sector de población específicamente vulnerable a violaciones de derechos humanos, tanto en los países de origen –forzando al desplazamiento– como durante el tránsito y en los países de acogida, son las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI), expuestas a violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Pese a cierto fortalecimiento del marco normativo internacional y la movilización de actores de la sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos, se requiere de mayor acción de múltiples actores para evitar la perpetuación de la violencia contra población LGTBI en situación de desplazamiento forzado.

Tradicionalmente la mayoría de los Estados no han reconocido las formas de persecución que no están explicitadas como tales en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951). Esta recoge algunas formas de persecución que constituyen motivo de solicitud de asilo –como persecución por motivos étnicos, religiosos, políticos, de nacionalidad– y enuncia de manera más genérica la pertenencia a un determinado grupo social. Los Principios de Yogyakarta (2007 y ampliados en 2017) clarifican que los Estados están obligados a garantizar a través de la legislación que los temores de una persona a ser perseguida por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales sean aceptados como motivo para otorgar la condición de refugiado.¹¹ No obstante, en 2019, tanto ACNUR como el Experto Independiente sobre la Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género alertaban de que solo unos 37

Estados otorgan el asilo sobre la base de dichos motivos y que la mayoría de Estados que proporcionan asilo no reconocían ese tipo de persecución como base para el reconocimiento del estatus de persona refugiada. Pese a la existencia del marco normativo internacional, por tanto, existe un riesgo evidente de que las personas perseguidas por motivos de orientación sexual e identidad de género no puedan hacer efectivo su derecho al asilo. Y aun cuando lo logran continúan expuestos a riesgos específicos de violencia y discriminación.

Activistas y organizaciones LGTBI, así como grupos y organismos de derechos humanos señalan que la población LGTBI está expuesta a niveles desproporcionados de violaciones de derechos humanos en todo el mundo, que puede incluir actos de violencia como asesinatos, palizas, secuestros, agresiones

La población desplazada interna, solicitante de asilo, migrante y refugiada LGTBI puede ver agravada su vulnerabilidad y afronta riesgo específico de violencia, explotación y discriminación en todas las etapas de su recorrido por parte de múltiples actores

sexuales, amenazas, coacción, detenciones arbitrarias, “terapias de conversión”, esterilizaciones forzadas, entre otras. La orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales se entrecruzan con múltiples ejes que configuran las realidades de la población (edad, clase, etnia, religión, lugar de residencia, cuerpo, entre otros). Las desigualdades en torno a esos ejes pueden resultar en grados de violencia y discriminación específicos y exacerbados. La población desplazada interna, solicitante de asilo, migrante y refugiada puede ver agravada su vulnerabilidad y afronta riesgo específico de violencia, explotación y discriminación en todas las

etapas de su recorrido por parte de múltiples actores, incluyendo sociedades de acogida, funcionarios, actores armados y grupos criminales, otras personas refugiadas, entre otros.¹² Los riesgos de violencia y extorsión pueden llevarles a ocultar su identidad de género y orientación sexual. En ausencia de alojamiento y otras instalaciones (saneamiento, provisión de servicios) que garanticen de manera adecuada la protección de las personas LGTBI, estas pueden sufrir hostigamiento y violencia y sus necesidades específicas pueden verse desatendidas. Entre ellas, puede resultar especialmente difícil el acceso a servicios de salud y derechos reproductivos sensibles a la diversidad sexual y de género.¹³ En el

11. Los llamados Principios de Yogyakarta (YP, por sus siglas en inglés) son un compendio de principios que reflejan el estado actual del derecho internacional de los derechos humanos en lo que concierne a la orientación sexual y la identidad de género. Recogen la legislación internacional ya existente a partir de los tratados internacionales, la jurisprudencia de los órganos de los tratados de los derechos humanos, tribunales y comisiones especializadas, así como a las interpretaciones realizadas por figuras de autoridad como los relatores especiales y los grupos de trabajo de la ONU, la opinión de expertos y prácticas en los países. Fueron elaborados en 2006 (presentados en 2007), y revisados y ampliados en 2017 (YP+10), resultado de un proceso internacional en que la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional de Derechos Humanos, en nombre de una coalición de organizaciones de derechos humanos, asumieron la elaboración de estos principios, para generar más claridad sobre las obligaciones de los Estados en este ámbito.

12. Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. *Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género*. A/74/181, 17 de julio de 2019.

13. *Ibid.*

cruce de fronteras, las personas LGBTI puede verse sometidas a exámenes físicos invasivos.

Son diversos los contextos donde se ha denunciado violencia, abuso y explotación contra población LGBTI desplazada, refugiada, solicitante de asilo y migrante. Entre ellos, en Líbano se ha denunciado cómo las personas LGBTI refugiadas en el país afrontan un riesgo específico de detención, junto a mujeres libanesas trans y hombres libaneses homosexuales, bisexuales y queers de renta económica baja.¹⁴ En diversos casos se ha identificado que las personas migrantes LGBTI recluidas en instalaciones de detención están expuestas a riesgo de aislamiento social y violencia, incluyendo violencia sexual.¹⁵ Organizaciones de la sociedad civil que proporcionan apoyo a población refugiada LGBTI en Reino Unido como UKLGIG también han denunciado trato inadecuado por parte de funcionarios del Ministerio de Interior. En el marco de la caravana de personas migrantes centroamericanas que se desplazaron en 2018 hacia EEUU para solicitar asilo, decenas de personas LGBTI se constituyeron como grupo propio,

denunciando abusos verbales y dificultades específicas a lo largo del trayecto. En Kenya, población refugiada LGBTI procedente de Uganda, RDC, Etiopía y Burundi ha sido objeto de ataques reiterados por parte de población local y de otras personas refugiadas.

Las denuncias de violencia contra población LGBTI desplazada en diversos contextos del mundo, reiteradas en los últimos años en un contexto de mayor visibilidad y movilización por parte de organizaciones LGBTI, ponen de manifiesto la necesidad de mayores esfuerzos para integrar un enfoque interseccional en la prevención y transformación de conflictos y en las respuestas globales y estatales a la situación de desplazamiento forzado interno y externo. Los Estados están obligados a hacer efectivo el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo de la población LGBTI. Los actores de la sociedad civil, especialmente de los países de tránsito y acogida, tienen la oportunidad de contribuir a la exigencia de rendición de cuentas de sus Estados, incluyendo a través de mecanismos internacionales y de múltiples vías de participación y movilización social.

14. OutRight Action International y Arab Foundation for Freedom & Equality, *Activism and Resilience: LGBTQ progress in the Middle East and North Africa. Case studies from Jordan, Lebanon, Morocco and Tunisia*. 2018.

15. Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, *op. cit.*; ACNUR, *Protecting Persons with Diverse Sexual Orientations and Gender Identities: A Global Report on UNHCR's Efforts to Protect Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Asylum-Seekers and Refugees*, 2015.

Glosario

- AA:** Arakan Army (Ejército de Arakan)
- ABSDF:** All Burma Students' Democratic Front (Frente Democrático Estudiantil de Toda Birmania)
- ABM:** Ansar Beit al-Maqdis
- ACNUDH:** Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ACNUR:** Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
- ADF:** Allied Democratic Forces
- ADF-NALU:** Allied Defence Forces - National Army for the Liberation of Uganda (Fuerzas de Defensa Aliadas - Ejército Nacional para la Liberación de Uganda)
- ADSC:** All Darfur Stakeholders Conference (Conferencia de Actores de Darfur)
- AFISMA:** Misión Internacional de Apoyo a Malí bajo Liderazgo Africano
- AIEA:** Agencia Internacional de la Energía Atómica
- AKP:** Adayat ve Kalkinma Partisi (Partido de la Justicia y el Desarrollo)
- AKR:** Nueva Alianza de Kosovo
- ALBA:** Alianza Bolivariana para las Américas
- ALP:** Arakan Liberation Party (Partido de Liberación Arakan)
- AMISOM:** Misión de la Unión Africana en Somalia
- ANSIPRJ:** Alliance Nationale pour la Souveraineté et la Restauration de la Justice (Alianza Nacional para la Protección de la Identidad Peul y la Restauración de la Justicia)
- AP:** Autoridad Palestina
- APCLS:** Alliance de Patriotes pour un Congo Libre et Souverain
- APHC:** All Parties Hurriyat Conference
- APRD:** Armée Populaire pour la Restauration de la République et de la Démocratie (Ejército Popular para el Restablecimiento de la República y la Democracia)
- AQMI:** Al-Qaeda en el Magreb Islámico
- AQPA:** Al-Qaeda en la Península Arábiga
- ARS:** Alianza para la Reliberación de Somalia
- ASEAN:** Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones del Sureste Asiático)
- ASWJ:** Ahlu Sunna Wal Jama'a
- ATLF:** All Terai Liberation Front (Frente de Liberación de Todo Terai)
- ATMM:** Akhil Terai Mukti Morcha
- ATTF:** All Tripura Tiger Force (Fuerza de los Tigres de Todo Tripura)
- AUBP:** Programa de fronteras de la Unión Africana
- BDP:** Partido de la Paz y la Democracia
- BH:** Boko Haram
- BIFF:** Bangsamoro Islamic Freedom Fighters
- BIFM:** Bangsamoro Islamic Freedom Movement
- BINUCA:** Oficina Integrada de Construcción de Paz de Naciones Unidas en R. Centrafricana
- BLA:** Baluch Liberation Army (Ejército de Liberación Baluchi)
- BLF:** Baluch Liberation Front (Frente de Liberación Baluchi)
- BNUB:** Oficina de las Naciones Unidas en Burundi
- BLT:** Baloch Liberation Tigers
- BM:** Banco Mundial
- BRA:** Balochistan Republican Army (Ejército Republicano de Baluchistán)
- BRP:** Baloch Republican Party (Partido Republicano Baluchi)
- CAP:** Consolidated Appeal Process (Proceso de Llamamientos Consolidados)
- CARICOM:** Comunidad del Caribe
- CDH:** Consejo de Derechos Humanos
- CEEAC:** Comunidad Económica de los Estados de África Central
- CEMAC:** Comunidad Económica y Monetaria de África Central
- CENCO:** Conferencia Episcopal Congoleña
- CIA:** Central Intelligence Agency
- CHD:** Centre for Humanitarian Dialogue
- CICR:** Comité Internacional de la Cruz Roja
- CMA:** Coordinadora de Movimientos de Azawad
- CMPFPR:** Coordinadora de Movimientos Patrióticos de Resistencia
- CNDD-FDD:** Congrès National pour la Défense de la Démocratie - Forces pour la Défense de la Démocratie (Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia - Fuerzas para la Defensa de la Democracia)
- CNDP:** Congrès National pour la Défense du Peuple (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo)
- CNF:** Chin National Front (Frente Nacional Chin)
- CNT:** Consejo Nacional de Transición de Libia
- CPA:** Comprehensive Peace Agreement (Acuerdo de Paz Global)
- CPI:** Corte Penal Internacional
- CPI-M:** Communist Party of India-Maoist (Partido Comunista de la India-Maoísta)
- CPJP:** Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix (Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz)
- CPN-UML:** Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist) (Partido Comunista de Nepal [Marxista Leninista])
- DDR:** Desarme, Desmovilización y Reintegración
- DHD:** Dima Halim Daogah
- DHD (J):** Dima Halim Daogah, Black Widow faction (Dima Halim Daogah, facción Viuda Negra)
- DHD (Nunisa):** Dima Halim Daogah, Nunisa faction (Dima Halim Daogah, facción Nunisa)
- DIH:** Derecho Internacional Humanitario
- DKBA:** Democratic Karen Buddhist Army (Ejército Democrático Budista Karen)
- DMLEK:** Democratic Movement for the Liberation of the Eritrean Kunama (Movimiento Democrático para la Liberación del Pueblo Kunama de Eritrea)
- DPA:** Darfur Peace Agreement (Acuerdo de Paz de Darfur)
- EA:** Eusko Alkartasuna (Solidaridad Vasca)
- EAC:** East African Community (Comunidad de Estados de África del Este)
- EAU:** Emiratos Árabes Unidos
- ECOMIB:** Misión de ECOWAS en Guinea Bissau
- ECOWAS:** Economic Community Of West African States (Comunidad Económica de Estados de África Occidental)
- EDA:** Eritrean Democratic Alliance (Alianza Democrática Eritrea)
- EEBC:** Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía
- EEUU:** Estados Unidos de América
- EFDM:** Eritrean Federal Democratic Movement (Movimiento Democrático Federal Eritreo)

EIC: Eritrean Islamic Congress (Congreso Islámico Eritreo)

EIPJD: Eritrean Islamic Party for Justice and Development (Partido Islámico Eritreo para la Justicia y el Desarrollo)

ELF: Eritrean Liberation Front (Frente de Liberación Eritreo)

ELK: Ejército de Liberación de Kosovo

ELN: Ejército de Liberación Nacional

ENSF: Eritrean National Salvation Front (Frente de Salvación Nacional Eritreo)

EPC: Eritrean People's Congress (Congreso del Pueblo Eritreo)

EPL: Ejército Popular de Liberación

EPDF: Eritrean People's Democratic Front (Frente Democrático del Pueblo Eritreo)

EPP: Ejército del Pueblo Paraguayo

EPPF: Ethiopian People's Patriotic Front (Frente Patriótico Popular Etíope)

EPR: Ejército Popular Revolucionario

EPRDF: Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Eritreo)

ESL: Ejército Sirio Libre

ETA: Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad)

ETIM: East Turkestan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turquestán Oriental)

ETLO: East Turkestan Liberation Organization (Organización para la Liberación del Turquestán Oriental)

EUAM Ukraine: Misión de Apoyo de la UE a la Reforma del Sector de Seguridad Civil en Ucrania

EUAVSEC South Sudan: Misión de la Unión Europea en materia de seguridad de la aviación en Sudán del Sur

EUBAM: Misión de Asistencia Fronteriza de la UE a Moldova y Ucrania

EUBAM Libia: Misión de la Unión Europea de Asistencia y Gestión Integrada de Fronteras en Libia

EUBAM Rafah: Misión de Asistencia Fronteriza en el Paso Fronterizo de Rafah

EUCAP NESTOR: Misión de la Unión Europea de Desarrollo de las Capacidades Marítimas Regionales en el Cuerno de África

EUCAP SAHEL Mali: Misión de Naciones Unidas en el Sahel – Malí

EUCAP SAHEL Niger: Misión de Naciones Unidas en el Sahel - Níger

EUFOR ALTHEA: Operación Militar de la UE en Bosnia y Herzegovina

EUFOR RCA: Misión de mantenimiento de la paz de la UE en RCA

EUJUST LEX: Misión Integrada de la UE por el Estado de Derecho en Iraq

EULEX Kosovo: Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo

EUMM: Misión de Observación de la UE en Georgia

EUNAVOR Somalia: Fuerza Naval de la Unión Europea – Somalia, Operación Atalanta

EUPOL Afghanistan: Misión de Policía de la UE en Afganistán

EUPOL COPPS: Misión de Policía de la UE para los Territorios Palestinos

EUPOL RDC: Misión de Policía de la UE en RD Congo

EUSEC RDC: Misión de Asistencia de la UE a la Reforma del Sector de Seguridad en RD Congo

EUTM Mali: Misión de la UE para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Malí.

EUTM Somalia: Misión Militar de la UE para contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad de Somalia

EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FAR-LP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación del Pueblo

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo

FATA: Áreas Tribales bajo Administración Federal

FDLP: Frente Democrático de Liberación de Palestina

FDLR: Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda)

FDPC: Front Démocratique du Peuple Centrafricain (Frente Democrático del Pueblo Centrafricano)

FEWS NET: Red de Sistemas de Alerta Temprana Contra la Hambruna de USAID

FFR: Front des Forces de Redressement (Frente de Fuerzas de Reorganización)

FIS: Frente Islámico de Salvación

FLEC-FAC: Frente de Liberação do Enclave de Cabinda (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda)

FNL: Forces Nationales de Libération (Fuerzas Nacionales de Liberación)

FOMUC: Force Multinationale en Centrafrique (Fuerza Multinacional de la CEMAC en RCA)

FPLP: Frente Popular de Liberación de Palestina

FPI: Front Populaire Ivoirien (Frente Popular Marfileño)

FPR : Front Populaire pour le Redressement (Frente Popular por la Liberación)

FPRC: Front Patriotique pour la Renaissance de la Centrafrique

Frente POLISARIO: Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro

FRF: Forces Republicaines et Federalistes (Fuerzas Republicanas y Federalistas)

FRODEBU: Front pour la Démocratie au Burundi (Frente para la Democracia en Burundi)

FRUD: Front pour la Restauration de l'Unité et la Démocratie (Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia)

FSN: Frente de Salvación Nacional

FUC: Front Uni pour le Changement Démocratique (Frente Unido para el Cambio Democrático)

FUDD: Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura

FURCA: Force de l'Union en République Centrafricaine (Fuerza de la Unión en la R. Centrafricana)

GAI: Global Acceleration Instrument (Instrumento de Aceleración Global)

GAM: Gerakin Aceh Merdeka (Movimiento de Aceh Libre)

GATIA: Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados

GFT: Gobierno Federal de Transición

GIA: Grupo Islámico Armado

GSPC: Grupo Salafista para la Predicación y el Combate

HAK: Congreso Nacional Armenio

HaY: Harakah al-Yaqin (Movimiento de la Fe)

HCUA: Alto Consejo para la Unidad de Azawad

HDZ: Unión Democrática Croata

HDZ 1990: Unión Democrática Croata 1990

HM: Hermanos Musulmanes
HPG: Humanitarian Policy Group
HRW: Human Rights Watch
HUM: India Assam
IBC: Iraq Body Count
ICG: International Crisis Group
ICR/LA: Iniciativa de Cooperación Regional contra el LRA
IDG: Índice de Desigualdad de Género
IDMC: Internal Displacement Monitoring Centre
IDP: Internally Displaced Person (Persona Desplazada Interna)
IEG: Índice de Equidad de Género
IFLO: Islamic Front for the Liberation of Oromia (Frente Islámico para la Liberación de Oromiya)
IGAD: Intergovernmental Authority on Development (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo)
IISS: International Institute for Strategic Studies
IMU: Islamic Movement of Uzbekistan (Movimiento Islámico de Uzbekistán)
INLA: Irish National Liberation Army (Ejército Irlandés de Liberación Nacional)
IRA: Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés)
ISAF: International Security Assistance Force (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad)
ISF: Misión de Estabilización Internacional en Timor-Leste
ISIS: Estado Islámico
IWF: Iduwini Volunteers Force
JEM: Justice and Equality Movement (Movimiento para la Justicia y la Igualdad)
JKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front (Frente de Liberación de Jammu y Cachemira)
JMB: Jamaat-ul-Mujahideen (Asamblea de Muyahidines)
JTMM: Janatantrik Terai Mukti Morcha (Frente de Liberación del Pueblo de Terai)
KANU: Kenya African National Union (Unión Nacional Africana de Kenya)
KCK: Koma Civakên Kurdistan (Unión de las Comunidades en Kurdistán)
KCP: Kangleipak Communist Party (Partido Comunista Kangleipak)
KDP: Partido Democrático de Kurdistán
KFOR: Misión de la OTAN en Kosovo
KIA: Kachin Independence Army (Ejército para la Independencia de Kachin)
KIO: Kachin Independence Organization (Organización para la Independencia Kachin)
KLNLF: Karbi Longri National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional Karbi Longri)
KNA: Kuki Liberation Army (Ejército de Liberación Kuki)
KNF: Kuki National Front (Frente Nacional Kuki)
KNPP: Karenni National Progressive Party (Partido Progresista Nacional Karen)
KNU: Kayin National Union (Unión Nacional Kayin)
KNU/KNLA: Karen National Union/Karen National Liberation Army (Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen)
KPF: Karen Peace Force (Fuerza de Paz Karen)
KPLT: Karbi People's Liberation Tigers (Tigres de Liberación del Pueblo Karbi)
KRG: Gobierno Regional del Kurdistán
KYKL: Kanglei Yawol Kanna Lup (Organización para la Salvación del Movimiento Revolucionario en Manipur)
LeJ: Lashkar-e-Jhangvi (Ejército de Jhangvi)
LeT: Lashkar-e-Toiba
LJM: Liberation and Justice Movement (Movimiento para la Liberación y la Justicia)
LRA: Lord's Resistance Army (Ejército de Resistencia del Señor)
LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tigres de Liberación de la Tierra Tamil)
M23: Movimiento 23 de Marzo
MAA: Movimiento Árabe de Azawad
MAPP-OEA: Misión de la OEA de apoyo al proceso de paz en Colombia
MASSOB: Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra)
MDC: Movement for Democratic Change (Movimiento para el Cambio Democrático)
MEND: Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Movimiento para la Emancipación para el Delta del Níger)
MFDC: Mouvement de las Forces Démocratiques de Casamance (Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance)
MFO: Fuerza Multinacional de Observadores para la supervisión del tratado de paz entre Egipto e Israel
MIB OEA: Misión de la OEA de Buenos Oficios en Ecuador y Colombia
MICOPAX: Mission de Consolidation de la Paix en République Centrafricaine (Misión de Consolidación de la Paz en R. Centroafricana de la CEEAC)
MILF: Moro Islamic Liberation Front (Frente Moro de Liberación Islámico)
MINURCA: Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana
MINURCAT: Misión de Naciones Unidas para la República Centroafricana y Chad
MINURSO: Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
MINUSCA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en RCA
MINUSMA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí
MINUSTAH: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
MISCA: Misión de Apoyo a Rep. Centroafricana bajo Liderazgo Africano
MISMA: Misión Internacional de Asistencia a Malí
MIT: Organización Nacional de Inteligencia de Turquía
MJLC: Mouvement des Jeunes Libérateurs Centrafricains (Movimiento de los Jóvenes Libertadores Centroafricanos)
MLC: Mouvement pour la Libération du Congo (Movimiento para la Liberación del Congo)
MLF: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)
MMT: Madhesi Mukti Tigers (Tigres Mukti Madhesi)
MNJTF: Multinational Joint Task Force (Fuerza Regional de Tarea Conjunta)
MNLA: Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad
MNLF: Moro National Liberation Front (Frente Moro de Liberación Nacional)

MONUC: Misión de las Naciones Unidas en la RD Congo

MONUSCO: Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de RD Congo

MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People (Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni)

MOVADEF: Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales

MPC: Mouvement Patriotique por la Centrafrique

MPRF: Madhesi People's Right Forum (Foro de los Derechos del Pueblo Madhesi)

MRC: Mombasa Republican Council (Consejo Republicano de Mombasa)

MQM: Muttahida Qaumi Movement (Movimiento Nacional Unido)

MSF: Médicos Sin Fronteras

MUYAO: Movimiento Unido por la Yihad en África Occidental

MVK: Madhesi Virus Killers (Asesinos de Virus Madhesi)

NC: Nepali Congress Party (Partido del Congreso Nepali)

NCP: National Congress Party (Partido del Congreso Nacional)

NDA: Niger Delta Avengers (Vengadores del Delta del Níger)

NDF: National Democratic Front (Frente Democrático Nacional)

NDFB: National Democratic Front of Bodoland (Frente Democrático Nacional de Bodoland)

NDGJM: Niger Delta Greenland Justice Mandate

NDPVF: Niger Delta People's Volunteer Force (Fuerza Voluntaria del Pueblo del Delta del Níger)

NDV: Niger Delta Vigilante (Patrulla del Delta del Níger)

NLD: National League for Democracy (Liga Nacional por la Democracia)

NLFT: National Liberation Front of Tripura (Frente de Liberación Nacional de Tripura)

NMSP: New Mon State Party (Partido del Nuevo Estado Mon)

NNC: Naga National Council (Consejo Nacional Naga)

NNSC: Neutral Nations Supervisory Commission (Comisión de Supervisión de Naciones Neutrales)

NPA: New People's Army (Nuevo Ejército Popular)

NSCN-IM: National Socialist Council of Nagaland-Isaac Muivah (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Isaac Muivah)

NSCN-K: National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia- Khaplang)

NSCN (K-K): National Socialist Council of Nagaland (Kole-Kitovi) (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia (Kole-Kitovi))

NSCN-R: National Socialist Council of Nagaland-Reformation (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Reforma)

NSLA: National Santhal Liberation Army) Ejército Nacional Santhal

OAS/AZ: Oficina de la OEA en Belice - Guatemala

OCHA: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas

OCI: Organización para la Cooperación Islámica

OEA: Organización de los Estados Americanos

OFDM: Oromo Federalist Democratic Movement (Movimiento Democrático Federalista Oromo)

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

OLF: Oromo Liberation Front (Frente de Liberación Oromo)

OMC: Organización Mundial del Comercio

OMIK: Misión de la OSCE en Kosovo

ONG: Organización No Gubernamental

ONLF: Ogaden National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional de Ogadén)

ONU: Organización de las Naciones Unidas

ONUCI: Operación de Naciones Unidas en Côte d'Ivoire

OPC: Etiopía Oromiya

OPM: Organisasi Papua Merdeka (Organización de la Papua Libre)

OSCE: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa

OTAN: Organización para el Tratado del Atlántico Norte

OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief

PALU: Parti Lumumbiste Unifié (Partido Lumumbista Unificado)

PARECO: Patriotes Résistants Congolais (Patriotas Resistentes Congoleses)

PCP: Partido Comunista del Perú

PCP: India Manipur

PKDI: Partido Democrático Kurdo

PJAK: Partido por la Vida Libre en Kurdistán

PLJ: Partido Libertad y Justicia

PKK: Partido de los Trabajadores del Kurdistán

PLA: People's Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional)

PLJ: Partido Libertad y Justicia

PMA: Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PPP: Pakistan People's Party (Partido del Pueblo de Pakistán)

PPRD: Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia)

PREPAK: People's Revolutionary Party of Kangleipak (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak)

PREPAK (Pro): People's Revolutionary Party of Kangleipak / Progressive (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak / Progresista)

PYD : Democratic Union Party (Partido Unión Democrática de kurdos en Siria)

RAMM: Región Autónoma del Mindanao Musulmán.

RAMSI: Regional Assistance Mission to Solomon Islands (Misión Regional de Asistencia a las Islas Salomón)

RASD: República Árabe Saharaui Democrática

RCA: República Centroafricana

RDC: República Democrática del Congo

RENAMO: Resistencia Nacional Mozambiqueña

REWL: Red Egbesu Water Lions

RFC: Rassemblement des Forces pour le Changement (Coalición de las Fuerzas para el Cambio)

RPF: Rwandan Patriotic Front (Frente Patriótico Rwandés)

RPF: Revolutionary People's Front (Frente Popular Revolucionario)

RSADO: Red Sea Afar Democratic Organization (Organización Democrática Afar del Mar Rojo)

RSF: Rapid Support Forces

RTF: Regional Task Force (Grupo de Trabajo Regional)

SADC: Southern Africa Development Community (Comunidad de Desarrollo del África Austral)

SAF: Sudanese Armed Forces (Fuerzas Armadas de Sudán)

SCUD: Socle pour le Changement, l'Unité Nationale et la Démocratie (Plataforma para el Cambio, la Unidad Nacional y la Democracia)

SFOR: Fuerza de Estabilización de la OTAN en Bosnia y Herzegovina

SIGI: Índice de Instituciones Sociales y Género

SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo)

SLA: Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán)

SLA-Nur: Sudan Liberation Army-Nur (Ejército para la Liberación de Sudán, facción Nur)

SLDF: Sabaot Land Defence Forces (Fuerzas de Defensa de la Tierra Sabaot)

SNNPR: Southern Nations, Nationalities, and People's Region (Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos Meridionales)

SPLA: Sudan People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, Fuerzas Armadas de Sudán del Sur)

SPLA-IO: SPLA in Opposition

SPLM: Sudan People's Liberation Movement (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés)

SPLM-N: Sudan People's Liberation Army-North (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte)

SSA-S: Shan State Army-South (Ejército del Estado Shan-Sur)

SSC: Sool, Saanag y Cayn

SSDM/A: South Sudan Democratic Movement/Army (Movimiento/ Ejército Democrático de Sudán del Sur)

SSLA: South Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán del Sur)

SSNPLO: Shan State Nationalities People's Liberation Organization (Organización Popular para la Liberación del Estado de las Nacionalidades Shan)

TAK: Los Halcones de la Libertad del Kurdistán

TIPH: Presencia Internacional Temporal en Hebrón

TMLP: Terai Madhesh Loktantrik Party

TNLA: Ta-ang National Liberation Army (Ejército Nacional de Liberación Ta-ang)

TPIR: Tribunal Penal Internacional para Rwanda

TPIY: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

TPLF: Tigrayan People's Liberation Front (Frente Popular de Liberación de Tigrayan)

TTP: Tehrik-e-Taliban Pakistan

UA: Unión Africana

UAD: Union pour l'Alternance Démocratique (Unión por la Alternancia Democrática)

UCPN-M: Unified Communist Party of Nepal (Maoist) (Partido Comunista Unificado de Nepal) [Maoísta]

UE: Unión Europea

UFDD: Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (Unión de las Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo)

UFDG: Union des Forces Démocratiques de *Guinée* (Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea)

UFDR: Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (Unión de Fuerzas Democráticas para la Coalición)

UFF: Ulster Freedom Fighters (Luchadores por la Libertad del Ulster)

UFR: Union des Forces de la Résistance (Unión de las Fuerzas de la Resistencia)

UFDR: Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (Unión de las Fuerzas Democráticas por la Unidad)

ULFA: United Liberation Front of Assam (Frente Unido de Liberación de Assam)

ULFA-I: United Liberation Front of Assam-Independent (Frente Unido de Liberación de Assam-Independiente)

UNAMA: Misión de asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán

UNAMI: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq

UNAMID: United Nations and African Union Mission in Darfur (Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur)

UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas

UNDOF: Fuerza de Observación de la Separación de Naciones Unidas

UNEF: Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas

UNFICYP: Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

UNIFIL: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (o FPNUL)

UNIOGBIS: Oficina Integrada de Construcción de Paz de Naciones Unidas en Guinea Bissau

UNIPSIL: Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona

UNISFA: Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei

UNITAF: Unified Task Force (Fuerza de Tareas Unificadas)

UNLF: United National Liberation Front (Frente Unido de Liberación Nacional)

UNMIK: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo

UNMIL: Misión de las Naciones Unidas en Liberia

UNMISS: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur

UNMIT: Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste

UNMOGIP: Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en la India y Pakistán

UNOCA: Oficina Regional de Naciones Unidas en África Central

UNOGBIS: Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau

UNOWA: Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental

UNPOS: Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia

UNRCCA: Centro Regional de Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central

UNRWA: Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo

UNSCO: Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio

UNSCOL: Oficina del Coordinador Especial de Naciones Unidas para Líbano

UNSMIL: Misión de Apoyo a Naciones Unidas en Libia

UNMIT: Misión integrada de Naciones Unidas en Timor Leste

UNSOM: Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Somalia

UNTSO: Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua

UPC: Union pour la Paix en Centrafrique
UPDS: United People's Democratic Solidarity (Solidaridad Democrática del Pueblo Unido)
UPLA: United People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Unido)
UPPK: United People's Party of Kangleipak (Partido Unido Popular de Kangleipak)
UPRONA: Union pour le Progrès National (Unión para el Progreso Nacional)
URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USAID: United States Agency for International Development (Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU)
USN: Union pour la Salut National
UTI: Unión de Tribunales Islámicos
UVF: Ulster Volunteer Force (Fuerza de Voluntarios del Ulster)
UWSA: United Wa State Army (Ejército del Estado Wa Unido)

VIH/SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humana/ Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
VRAE: Valle entre los Ríos Apurímac y Ene
WILPF: Women's International League for Peace and Freedom (Liga Internacional de las Mujeres para la Paz y la Libertad)
WPNLG: West Papua National Coalition for Liberation
YPG: People's Protection Unit (Unidad de Protección del Pueblo)
YPJ: Women's Protection Units (Unidades de Protección de Mujeres)
ZANU-PF: Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (Unión Nacional Africana de Zimbabwe – Frente Patriótico)
ZUF: Zeliangrong United Front (Frente Unido Zeliangrong)

Escola de Cultura de Pau

La Escola de Cultura de Pau (ECP) es una institución académica de investigación para la paz ubicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue creada en 1999 con el objetivo de promover la cultura de paz a través de actividades de investigación, diplomacia paralela, formación y sensibilización.

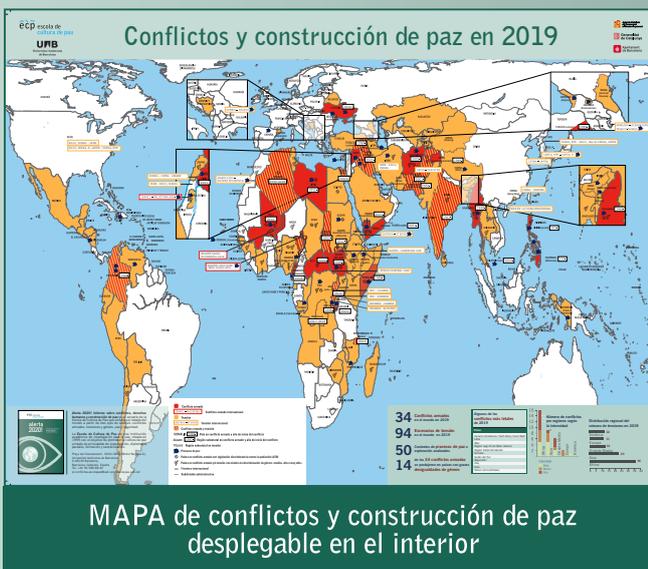
Los principales ámbitos de acción de la Escola de Cultura de Pau son:

- **Investigación.** Las áreas de investigación de la ECP incluyen los conflictos armados y las crisis sociopolíticas, los procesos de paz, los derechos humanos y la justicia transicional, la dimensión de género y la educación para la paz.
- **Educación y formación.** El personal investigador de la ECP imparte clases en cursos de grado y postgrado en universidades catalanas, incluyendo la Diplomatura en Cultura de Paz, el título de postgrado que la propia ECP ofrece en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, se ofrecen clases y talleres en temas específicos, entre ellos la educación en y para el conflicto y la sensibilidad al conflicto.
- **Diplomacia paralela.** La ECP promueve el diálogo y la transformación de conflictos a través de iniciativas de diplomacia paralela, con diferentes actores y en diversos ámbitos de acción.
- **Servicios de consultoría.** La ECP lleva a cabo servicios de consultoría para instituciones locales e internacionales.
- **Sensibilización.** Las iniciativas de la ECP en materia de sensibilización incluyen actividades dirigidas a la sociedad catalana y española, entre ellas colaboraciones con medios de comunicación.

Escola de Cultura de Pau

Parc de Recerca, Edifici MRA, Plaça del Coneixement, Universitat Autònoma de Barcelona,
08193 Bellaterra (España) Tel: +34 93 586 88 48
Email: pr.conflictes.escolapau@uab.cat / Web: <http://escolapau.uab.cat>

Alerta 2020! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2019 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.



Con el apoyo de:



Para quienes trabajamos en el campo de la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos los informes *Alerta!*, de la Escola de Cultura de Pau, constituyen una referencia imprescindible. Su rigor y el equilibrio en el tratamiento y seguimiento sistemático de asuntos tan complejos y delicados como los conflictos que asolan muchos rincones del planeta son especialmente valiosos para poder hacernos una idea fiable de lo que acontece a nuestro alrededor. La experiencia acumulada por sus responsables a lo largo de muchos años nos facilitan, asimismo, un apreciable material no solo para saber lo que ocurre en cada uno de los focos de conflicto analizados, sino también para conocer su evolución en el tiempo. Todo ello sin olvidar las cada vez más oportunas y necesarias reflexiones desde la perspectiva de género y de derechos humanos a los temas de paz y seguridad.

Jesús A. Núñez Villaverde
Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción humanitaria (IECAH)

El anuario *Alerta!* de la Escola de Cultura de Pau proporciona un análisis profundo de las tendencias más importantes en el ámbito de la paz y la seguridad, los derechos humanos y los conflictos. Apoyado en un número impresionante de cifras, es un recurso directamente relevante para quienes trabajan en este ámbito. Lo que me agrada en particular es que no solo ofrece buenas aportaciones con respecto a los factores desencadenantes de los conflictos, sino que también tiene una sección específica con perspectivas sobre las oportunidades para la paz. Esta forma de analizar el mundo proporciona a quienes lo leen una visión exhaustiva y las últimas aportaciones acerca de las dinámicas de la paz y los conflictos.

Gabriëlla Vogelaar,
Academy Fellow in Clingendael Institute

La paz es un proceso constructor que sabe entender los nuevos rasgos y retos de la compleja e injusta realidad y de sus violencias. Por ello, más allá del diagnóstico sereno, la paz es un proceso que sabe reconocer y fortalecer a sus actores, respaldando su maduración y articulación. Sin actores que la propicien no puede haber paz. Así, involucrando a los actores que la pueden construir, la paz es un cauce estratégico por el que en diálogo pueden respetarse y caminar los diversos actores y diversas visiones de causas, cambios, dolores, efectos, derechos, propuestas, víctimas... Frente todo ello, sigo agradeciendo y valorando el anuario *Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, pues con su mirada ajustada y profunda, metodológica y estratégica, sigue convirtiéndose en luz para los nuevos retos, actores y tareas nacionales y locales de paz.

Miguel Álvarez Gandara,
Presidente de Serapaz y vicepresidente de la junta de Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC)